



Constitución *de la* República Bolivariana *de* Venezuela



EDICIÓN BILINGÜE
ESPAÑOL - INGLÉS
2025



Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

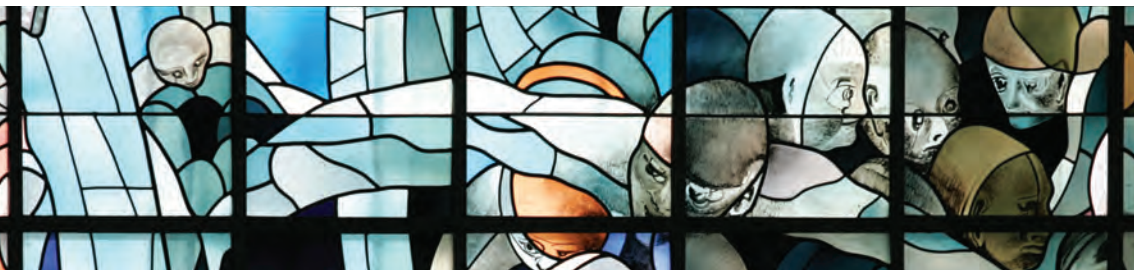
♦♦♦

EDICIÓN BILINGÜE

Español - Inglés

Tribunal Supremo de Justicia

Reedición especial
Fundación Gaceta Judicial
Coordinación de Información Documental
Ediciones y Publicaciones
Caracas, Venezuela
2025





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Junta Directiva

Magistrada
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez
PRESIDENTA

Magistrado
Edgar Gavidia Rodríguez
PRIMER VICEPRESIDENTE

Magistrada
Tania D' Amelio Cardiet
SEGUNDA VICEPRESIDENTA

Magistrada
Elsa Janeth Gómez Moreno

Magistrado
Malaquías Gil Rodríguez

Magistrado
Henry José Timaure Tapia

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Constitucional

Magistrada
Tania D' Amelio Cardiet
PRESIDENTA

Magistrada
Lourdes Benicia Suárez Anderson
VICE-PRESIDENTA

Magistrado
Luis Fernando Damiani Bustillos

Magistrada
Michel Adriana Velásquez Grillet

Magistrada
Janette Trinidad Córdova Castro

Sala Político Administrativa

Magistrado
Malaquías Gil Rodríguez
PRESIDENTE

Magistrado
Juan Carlos Hidalgo Pandares
VICE-PRESIDENTE

Magistrado
Emilio Antonio Ramos González

Sala Electoral

Magistrada
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez
PRESIDENTA

Magistrada
Fanny Beatriz Márquez Cordero
VICE-PRESIDENTA

Magistrado
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta

Sala de Casación Civil

Magistrado
Henry José Timaure Tapia
PRESIDENTE

Magistrado
José Luis Gutiérrez Parra
VICE-PRESIDENTE

Magistrada
Carmen Eneida Alves Navas

Sala de Casación Penal

Magistrada
Elsa Janeth Gómez Moreno
PRESIDENTA

Magistrada
Carmen Marisela Castro Gilly
VICE-PRESIDENTA

Magistrado
Maikel José Moreno Pérez

Sala de Casación Social

Magistrado
Edgar Gavidia Rodríguez
PRESIDENTE

Magistrado
Carlos Alexis Castillo Ascanio
VICE-PRESIDENTE

Magistrado
Elías Rubén Bittar Escalona

KHW2914

C756

2025

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Edición Bilingüe (Español – Inglés). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009 -- Edición revisada y corregida -- Caracas : Tribunal Supremo de Justicia : Fundación Gaceta Judicial, Coordinación de Información Documental, Ediciones y Publicaciones, 2025.

500 p.

ISBN: 978-980-7381-74-1

Depósito Legal: DC2025000758

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009) – Venezuela -- Venezuela. 2. Legislación -- Venezuela. 3. Constituciones -- Venezuela

© República Bolivariana de Venezuela
Tribunal Supremo de Justicia
Fundación Gaceta Judicial
Coordinación de Información Documental,
Ediciones y Publicaciones

Colección *Normativa*
Serie *Leyes*



Mag. Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

ÓRGANO DE TUTELA

Consejo Directivo

Dr. Jesús Emilio Vásquez Quintero

PRESIDENTE

Lcda. Sofimar Milagros Rodríguez Rodríguez

DIRECTORA PRINCIPAL

Lcdo. Renny José Raúl Antonio Peña

DIRECTOR PRINCIPAL

Abg. Jhonny Alfonso Linares García

DIRECTOR SUPLENTE

Abg. Norysbel Josefina Pire Meléndez

DIRECTORA SUPLENTE Y SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Lcdo. Raúl Antonio Noriega Belisario

DIRECTOR SUPLENTE

NOTA PARA ESTA SEGUNDA EDICIÓN

Como es conocido toda traducción implica riesgos y, en los casos de textos literarios, puede decirse en muchas ocasiones que la traducción en sí misma resulta otro libro diferente. Por ello en este caso –la Constitución– puede llegar a ser de extrema importancia, ya que se trata del máximo instrumento legal del país.

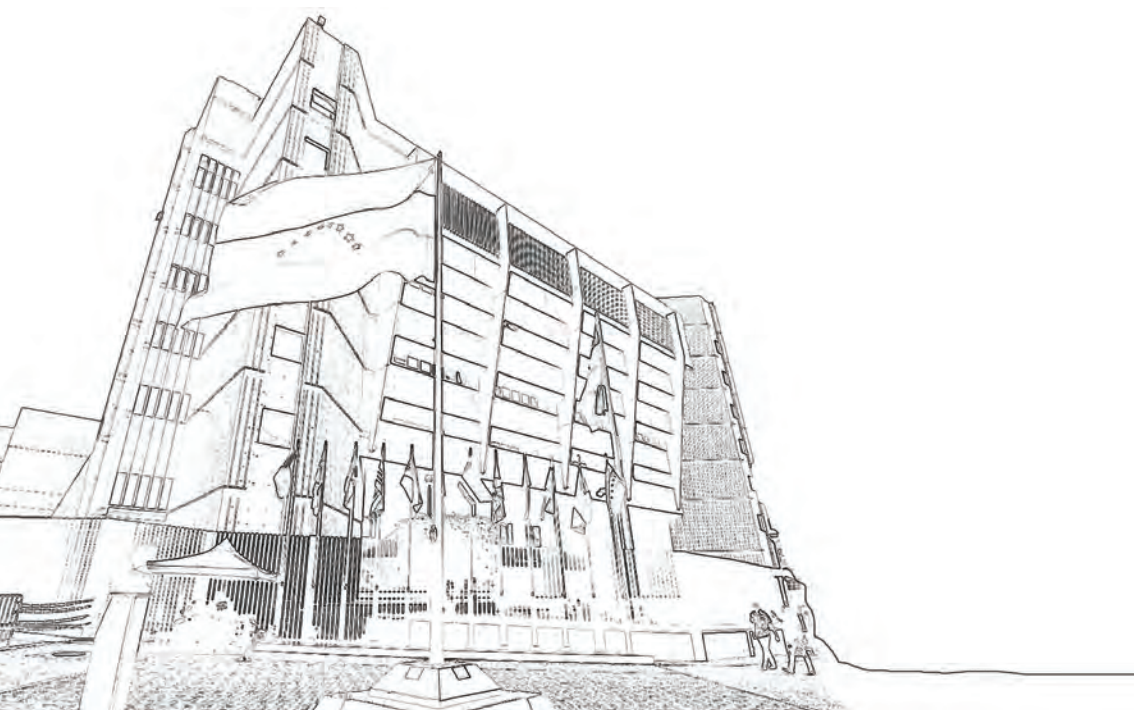
Cambios por razones de traducción de una coma o un término en específico, pueden transformar eventualmente el significado de la norma y producir equívocos en su interpretación. Por ello cobra importancia señalar que el objetivo de traducir el texto legal que aquí se presenta es de mera *información y nunca puede tomárselo como una traducción oficial* con tales efectos. El texto legal aprobado por la Asamblea Nacional es el publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009 y es a ese texto que debe acudir para efectos oficiales (esta fecha corresponde a la última Gaceta Oficial en la que se incluyó la Enmienda número 1). Si bien lo usual es no traducir nombres de ciertas instituciones, en favor de la comprensión de algunos pasajes y disposiciones, se ha traducido toda la frase que las contiene.

Es importante destacar que además de la dificultad de engranar dos idiomas en términos y significados, existen instituciones descritas en los diferentes textos constitucionales que parecieran tener las mismas funciones y representar lo mismo, pero no siempre es así. Por nombrar algún caso, podríamos referirnos al Fiscal General (*Attorney General* o *General Prosecutor*, dependiendo del país), el Procurador General, el Contralor General de la República (*General Comptroller* en ciertos textos constitucionales), ya que suelen confundirse las funciones de algunos de ellos con el cargo del “Abogado de la Nación”, quien representa sus intereses y en consecuencia actúa en su defensa. En nuestro país, Venezuela, el Fiscal General preside el Ministerio Público y es el encargado de llevar causas penales de altos funcionarios, según el propio texto constitucional, pero también el encargado de vigilar la legalidad y protegerla, sin que ello

presente colisión de funciones con los demás altos cargos nacionales. Ello responderá a la propia conformación interna, sistema político de gobierno, etc.

En espera de servir como referencia editorial en este y otros temas en el medio jurídico, es que se produce la inclusión del presente libro en el Fondo Editorial de la Fundación Gaceta Judicial de esta segunda edición bilingüe de la **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**. Con ello se cumple con el objetivo de expandir constantemente los títulos que la alimentan en el marco de sus XXV años.

BARTOLOMÉ ROMERO T.
Editor



Sede del Tribunal Supremo de Justicia

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

**Enmienda N° 1 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela
de fecha 15 de febrero de 2009**

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
N° 5.908 Extraordinario,
de fecha 19 de febrero 2009

Exposición de motivos
de la Constitución
de la República Bolivariana
de Venezuela

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

En nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder constituyente originario otorgado por éste mediante referendo aprobado democráticamente el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa, y en concordancia con el Artículo 1° del Estatuto de Funcionamiento de la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE;

CONSIDERANDO

que el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve el pueblo de Venezuela, mediante referendo constituyente, aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente el día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve,

DECRETA

la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TÍTULO I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El primer Título de la Constitución, referido a los principios fundamentales, consagra la condición libre e independiente de la República Bolivariana de Venezuela; condición permanente e irrenunciable que fundamenta en el ideario de Simón Bolívar, el Libertador, su patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional.

De esta manera se rescata el legado histórico de la generación emancipadora, que en la gesta heroica de la independencia de Venezuela luchó para forjarnos

una patria libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Al mencionar la figura paradigmática de esa revolución inicial, el Libertador Simón Bolívar, se recoge el sentimiento popular que lo distingue como símbolo de unidad nacional y de lucha incesante y abnegada por la libertad, la justicia, la moral pública y el bienestar del pueblo, en virtud de lo cual se establece que la Nación venezolana, organizada en Estado, se denomina República Bolivariana de Venezuela.

Se define la organización juridicopolítica que adopta la Nación venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad.

Los principios de la solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de ese Estado social, sometido al imperio de la Constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho. Estado social de Derecho que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático. Estado social y democrático de Derecho comprometido con el progreso integral que los venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita una calidad de vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de Justicia.

Se corresponde esta definición con una de las principales motivaciones expresadas en el Preámbulo, es decir, el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática. Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad. Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar signados por los principios democráticos y someterse a ellos.

Se establece que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar los fines del Estado. De esta manera, los ciudadanos y las organizaciones sociales tienen el deber y el derecho de concurrir a la

instauración y preservación de esas condiciones mínimas y de esa igualdad de oportunidades, aportando su propio esfuerzo, vigilando y controlando las actividades estatales, concienciando a los demás ciudadanos de la necesaria cooperación recíproca, promoviendo la participación individual y comunitaria en el orden social y estatal, censurando la pasividad, la indiferencia y la falta de solidaridad. Las personas y los grupos sociales han de empeñarse en la realización y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacción de tales fines.

Por todo ello se incorporan al texto constitucional como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político.

En cuanto a la estructura del Estado venezolano, el diseño constitucional consagra un Estado Federal que se define como descentralizado, para así expresar la voluntad de transformar el anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades que requiere nuestra realidad. En todo caso, el régimen federal venezolano se regirá por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que son característicos de un modelo federal cooperativo, en el que las comunidades y autoridades de los distintos niveles politicoterritoriales participan en la formación de las políticas públicas comunes a la Nación, integrándose en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. De esta manera, la acción de gobierno de los municipios, de los estados y del Poder Nacional se armoniza y coordina, para garantizar los fines del Estado venezolano al servicio de la sociedad.

Se modificó el artículo tradicional sobre el idioma oficial al declarar que el idioma oficial de Venezuela es el castellano, pero se reconocen los idiomas de los pueblos indígenas como oficiales en las comunidades donde son lenguas maternas, pudiendo usarse al igual que el castellano.

En las disposiciones fundamentales se consagran los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, según los cuales ella es la norma de mayor jerarquía y alcanza su vigencia a través de esa fuerza normativa o su capacidad de operar en la vida histórica de forma determinante o reguladora. Dichos principios constituyen el fundamento de todos los sistemas constitucionales del mundo y representan la piedra angular de la democracia, de la protección de los derechos fundamentales y de la justicia constitucional.

Con base en lo anterior, todos los órganos que ejercen el Poder Público, sin excepción, están sometidos a los principios y disposiciones consagrados en la Constitución, y por tanto, todos sus actos pueden ser objeto del control jurisdiccional de la constitucionalidad.

TÍTULO II DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y DE LA DIVISIÓN POLÍTICA

Capítulo I Del territorio y demás espacios geográficos

Se realizaron cambios importantes en la definición del espacio geográfico venezolano. En este sentido, se adoptó la expresión más amplia de *espacio geográfico* para sustituir la de *territorio*. En efecto, espacio geográfico alude a los espacios continentales, insulares y marítimos, quedando el territorio como componente del primero de los citados. Sin embargo, no se altera la determinación del espacio geográfico nacional al reiterar la versión tradicional de la Constitución del año 1830 y que se repite hasta la de 1961, es decir, el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela para el 19 de abril de 1810.

No obstante, se agregó la frase *con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad*. Con ello se corrige la omisión del Congreso Constituyente de 1961 con relación a los laudos y arbitrajes determinantes de nuestras fronteras actuales, como son los de los años 1865, 1891, 1899 y 1922; y se establece de una manera categórica que Venezuela no reconoce los laudos viciados de nulidad, como es el caso

del Laudo de París de 1899, que despojó a Venezuela del espacio situado en la margen occidental del Río Esequibo.

Por otra parte, se deslinda conceptualmente el espacio insular como parte de la organización politicoterritorial de Venezuela y como espacio sujeto a la soberanía venezolana. Por tal razón se menciona las islas por sus nombres y se extiende en ámbito de la soberanía hasta las demás islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.

Como una consecuencia de los valores fundamentales que inspiran a la República Bolivariana de Venezuela, se declara expresamente al espacio geográfico venezolano como zona de paz, en virtud de lo cual se prohíbe establecer en él bases militares extranjeras o cualquier instalación de potencia o coalición de potencias que tengan propósitos militares.

Capítulo II

De la división política

Con el fin de organizar políticamente la República se divide el territorio nacional en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales, mientras que el territorio se organiza en Municipios. En este sentido, la Constitución prevé que mediante una ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización politicoadministrativa, se regule la división politicoterritorial de la República.

Por otra parte, se establece la ciudad de Caracas como la capital de la República y asiento de los órganos del Poder Nacional, lo cual no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República.

Destaca en este Capítulo que mediante ley especial se establecerá la unidad politicoterritorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. En todo caso, dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para

alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad, garantizando el carácter democrático y participativo de su gobierno.

TÍTULO III DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES

Capítulo I Disposiciones generales

Inspirada por las principales tendencias que se han desarrollado en derecho comparado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme al cual el Estado garantizará a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los mismos.

Se reconocen como fuentes en la protección de los derechos humanos a la Constitución, a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y a las leyes que los desarrollen. Al respecto, con el objeto de reforzar la protección de los referidos derechos se establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contenidas en la Constitución y en las leyes, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el Poder Público. Por ello, en el caso de que un tratado internacional suscrito y ratificado por Venezuela reconozca y garantice un determinado derecho humano, en forma más amplia y favorable que la Constitución, prevalece en todo caso el instrumento internacional y debe ser aplicado en forma preferente, directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

Se reconocen los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la igualdad. En relación con éste último, se refuerza y amplía la protección constitucional al prohibir no sólo las discriminaciones fundadas en la raza, el sexo o la condición social, sino además, aquellas que, en general, tengan

por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Lo anterior obedece a que en la práctica la dinámica social suele presentar situaciones de discriminación que deben su origen a razones distintas de la raza, el sexo o la condición social.

Por otra parte, la Constitución amplía conceptualmente la protección de los derechos humanos con una marcada influencia *ius naturalista*, al disponer que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Por tal motivo se establece que la falta de ley reglamentaria de esos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Además, a fin de incluir dentro de tal protección a los derechos inherentes a las personas jurídicas, se elimina la distinción que hacía la Constitución de 1961 y que abarcaba únicamente a los derechos inherentes a la persona humana.

Se consagra la garantía de no retroactividad de las leyes y de las disposiciones normativas y se amplía su alcance a fin de que en caso de dudas sobre su vigencia temporal, se aplique la norma que beneficie al reo.

Se mantiene la garantía según la cual todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. La Constitución incluye dentro del supuesto de esta garantía, los derechos humanos garantizados por la Constitución, así como los reconocidos por las leyes, en atención al sistema de fuentes que en esta materia consagra el texto constitucional, y con el objeto de ampliar y reforzar la protección de los derechos humanos.

Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en virtud de los cuales toda persona puede acceder a los órganos de administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus

derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos. A tal efecto, los referidos órganos están representados por las cortes y tribunales que forman parte del Poder Judicial, así como por los demás órganos del sistema de justicia previsto en la Constitución, entre los cuales se encuentran los ciudadanos que participan en la administración de justicia o que ejercen la función jurisdiccional de conformidad con la ley.

Como una de las implicaciones del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en que se constituye a Venezuela por obra de la Constitución, y con el fin de erradicar uno de los principales problemas de la Nación venezolana, en virtud del cual el Poder Judicial se caracterizó por su corrupción, lentitud e ineficacia y, especialmente, por restringir el acceso de la población de escasos recursos a la justicia; la Constitución exige al Estado garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

De esta forma se consagra la justicia gratuita como un derecho humano que encuentra su principal fundamento en los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución y que tiene por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la justicia, sin discriminación alguna. Como una de las consecuencias del referido derecho, la Constitución establece en su Título V Capítulo III, que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios, al tiempo que prevé el servicio de defensa pública.

El amparo se reconoce como una *garantía del derecho constitucional*, cuya finalidad es la tutela judicial reforzada de los derechos humanos, aun de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Al respecto, se dispone que el procedimiento que deberá establecer la ley correspondiente en materia de amparo constitucional, será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, todo ello con el objeto de garantizar su eficacia.

En lo que se refiere al *hábeas corpus* o amparo a la libertad o seguridad personal, se establece una acción popular y se prevé que el detenido sea puesto bajo custodia del tribunal correspondiente de manera inmediata.

Se reconoce por vez primera en el constitucionalismo venezolano, el *hábeas data* o el derecho de las personas de acceso a la información que sobre sí mismas o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley. El *hábeas data* incluye el derecho de las personas de conocer el uso que se haga de tales registros y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente su actualización, rectificación o destrucción, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.

Por otra parte, como una conquista de la lucha por la protección integral de los derechos humanos, la Constitución impone al Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que establece, sin excepción, que las violaciones de tales derechos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por tribunales ordinarios, a fin de excluir tribunales militares o de excepción de cualquier investigación al respecto.

Igualmente, se impone al Estado la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios, todo lo cual constituye una consecuencia del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado reconocido por la Constitución.

Capítulo II

De la nacionalidad y de la ciudadanía

Sección primera: de la nacionalidad

Se mantienen los criterios atributivos de la nacionalidad originaria propios de la tendencia constitucional venezolana, marcada por la presencia del *ius soli* absoluto y del *ius sanguinis*.

En esta materia destaca que siendo la nacionalidad venezolana por nacimiento un derecho inherente a la persona humana, no podrá privarse de ella a quienes, conforme a la Constitución, cumplieren los requisitos para obtenerla.

En cuanto a la nacionalidad derivada o por naturalización, en aras de garantizar el vínculo y compromiso efectivo de los venezolanos por naturalización con la Nación venezolana, con su pueblo, sus costumbres y su destino, se exige que las personas que opten a la carta de naturaleza, posean domicilio con residencia ininterrumpida en el territorio de Venezuela de, por lo menos, diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. Esta exigencia se rebaja a cinco años, en el caso de aquellas personas que tuvieren la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. En todo caso, la expresión *residencia ininterrumpida* a que se refiere el texto constitucional, debe interpretarse en el sentido de que la persona interesada no se haya ausentado del territorio nacional con el ánimo de establecerse permanente y definitivamente en el extranjero. Ello no impide, por tanto, que dicha persona se ausente temporalmente del territorio nacional por razones de turismo, trabajo, estudios u otros de similar naturaleza, siempre que tengan carácter temporal.

Se consagra sin discriminación alguna el derecho del cónyuge extranjero casado con venezolano o venezolana por nacimiento, de obtener la nacionalidad venezolana por naturalización, transcurridos por lo menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio.

Por otra parte, siguiendo las orientaciones de los ordenamientos constitucionales contemporáneos, se admite la doble nacionalidad y el carácter renunciable de la nacionalidad venezolana, todo ello con el objeto de facilitar a la República la suscripción de tratados internacionales en la materia.

Finalmente, con el objeto de completar y darle eficacia a la regulación constitucional se promueve la suscripción de tratados internacionales en materia de nacionalidad con los Estados o países fronterizos y,

especialmente, con España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe.

Sección segunda: de la ciudadanía

Esta Sección, al referirse a la ciudadanía, expresa la condición jurídica o vínculo de una persona con el Estado, que le permite el ejercicio de los derechos políticos. Dicha condición en principio pertenece a los venezolanos y venezolanas no sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política, en las condiciones de edad que establezca la Constitución para el ejercicio de los derechos políticos. No obstante, se otorga potestad electoral activa a los extranjeros que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país y no estén sometidos a interdicción civil o inhabilitación política, para votar en las elecciones parroquiales, municipales y estatales.

En esta materia destaca, además, la ampliación de los derechos políticos de los venezolanos por naturalización con el objeto de integrarlos más estrechamente a la vida y destino del país. Por ello, se les permite el desempeño de cargos públicos hasta ahora reservados constitucionalmente a los venezolanos por nacimiento. Así, los venezolanos por naturalización, si tienen domicilio con residencia ininterrumpida en el país no menor de quince años, podrán desempeñarse como diputados a la Asamblea Nacional, aunque no podrán ejercer la Presidencia o Vicepresidencia de dicho cuerpo; como Ministros, menos en los cargos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas y educación; o como Gobernadores o Alcaldes, excepción hecha de los Estados fronterizos.

Además, se reconoce a los venezolanos por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir siete años de edad y hayan residido permanentemente en él, la posibilidad de gozar los mismos derechos de los venezolanos por nacimiento, en virtud de lo cual podrán acceder a todos los cargos públicos. En todo caso, la *residencia permanente* a que se refiere el texto constitucional en esta materia, debe interpretarse en el sentido de que la persona interesada no se haya ausentado del territorio nacional con el ánimo de establecerse permanente y definitivamente en el extranjero.

Ello no impide, por tanto, que dicha persona se ausente temporalmente del territorio nacional por razones de turismo, trabajo, estudios u otros de similar naturaleza, siempre que tengan carácter temporal.

Capítulo III

De los derechos civiles

En el Capítulo III se recogen y amplían los derechos civiles de las personas, con base en una regulación progresiva que establece normas y principios contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.

Se reafirma el derecho a la vida como derecho fundamental, base para disfrutar y ejercer los demás derechos, comprometiendo al Estado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, como procesados o condenados, cualquiera fuere el motivo, así como la de aquellas personas que estén prestando servicio militar o civil, o sometidos a su autoridad en cualquier otra forma.

Se prohíbe en forma absoluta y sin excepciones, aun en estado de emergencia o de excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. Se establecen mayores garantías para proteger el derecho de las personas a su integridad física, psíquica y moral, así como el debido proceso, el cual se aplicará a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas.

En el marco de la protección a las personas, se prevén los principios que orientará la organización y funciones de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales deberá adecuar su actuación al respeto a la dignidad de las personas y sus derechos humanos, en razón de lo cual el uso de armas y sustancias tóxicas estará sujeto a los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad.

Se garantiza la libertad de expresión sin que sea posible censura alguna. Por ser consustancial con ese derecho, quien lo ejerza asume la plena responsabilidad por todo lo expresado. Así mismo, se reconoce el

derecho a una información veraz, oportuna, imparcial y sin censura. Esta regulación responde a la necesidad de elevar a rango constitucional los parámetros éticos indispensables para el ejercicio del derecho a la información, con el objeto de que los medios de comunicación como parte de su actividad y de la responsabilidad que ella genera, establezcan mecanismos de autoevaluación informativa a los que tenga acceso toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que se considere perjudicada por informaciones emitidas por los medios de comunicación y que tengan relación con ella, a fin de que se revise la veracidad y oportunidad de la información.

El derecho a la información veraz, oportuna, imparcial y sin censura, acogiendo una tendencia presente en derecho comparado, versa sobre hechos que constituyan información y que sean transmitidos por los medios de comunicación, no sobre las opiniones o juicios de valor que los medios de comunicación o periodistas ofrezcan sobre tales hechos.

De igual manera, se garantiza el derecho de los niños y adolescentes a recibir una información adecuada para su desarrollo integral, en virtud de lo cual los medios de comunicación deberán ajustar su actividad y programación a tales fines, con el objeto de permitir un sano y normal desarrollo del proceso educativo y de formación de las futuras generaciones.

Capítulo IV **De los derechos políticos y del referendo popular**

Sección primera: de los derechos políticos

En materia de Derechos Políticos se incluyen modificaciones sustanciales en relación con la Democracia Representativa y de Partidos establecida en la Constitución anterior.

Se inicia el Capítulo con la consagración amplia del derecho a la participación en los asuntos públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, ejercido de manera directa, semidirecta o indirecta. Este derecho no queda circunscrito al derecho al sufragio, ya que es entendido en un sentido amplio, abarcando la participación en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública. Como contrapartida el Estado y la sociedad

deben facilitar la apertura de estos espacios para que la participación ciudadana, así concebida, se pueda materializar.

Esta regulación responde a una sentida aspiración de la sociedad civil organizada que pugna por cambiar la cultura política generada por tantas décadas de paternalismo estatal y del dominio de las cúpulas partidistas que mediatizaron el desarrollo de los valores democráticos. De esta manera, la participación no queda limitada a los procesos electorales, ya que se reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación, formulación y ejecución de las políticas públicas, lo cual redundaría en la superación de los déficits de gobernabilidad que han afectado nuestro sistema político debido a la carencia de sintonía entre el Estado y la sociedad.

Concebir la gestión pública como un proceso en el cual se establece una comunicación fluida entre gobernantes y pueblo, implica modificar la orientación de las relaciones entre el Estado y la sociedad, para devolverle a esta última su legítimo protagonismo. Es precisamente este principio consagrado como derecho, el que orienta este Capítulo referido a los derechos políticos.

Se reconoce el sufragio como un derecho, mas no como un deber, a diferencia de la Constitución de 1961. Se establece el ejercicio del mismo mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La consagración de la personalización del sufragio debe conciliarse con el principio de la representación proporcional, requerido para obtener órganos conformados de manera plural, en representación de las diferentes preferencias electorales del pueblo.

En cuanto a la definición de los electores se da ese carácter a los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad, ampliándose este derecho a los extranjeros que hayan cumplido dicha edad, pero limitado a las elecciones parroquiales, municipales y estatales, exigiéndose en todo caso como condición el que tengan más de diez años de residencia en el país.

En cuanto a las diferentes etapas de los procesos electorales se otorga a los ciudadanos amplias posibilidades de participación superando las restricciones del sistema partidocrático que nos rigió. En este sentido, tanto en la fase de la postulación de candidatos como en el ejercicio de la supervisión y vigilancia del proceso electoral se consagra constitucionalmente la participación por iniciativa propia, de partidos políticos o de otras asociaciones con fines políticos.

El derecho a desempeñar funciones públicas y ejercer cargos de elección popular se les otorga de manera igualitaria a los electores venezolanos y venezolanas, que sepan leer y escribir, con las solas restricciones derivadas del propio texto constitucional o de las condiciones de aptitud exigidas por las leyes, para determinados cargos.

Como una respuesta a las demandas de los venezolanos ante las graves desviaciones del sistema político y a la corrupción desmedida, se incluye la prohibición de optar a cargos de elección popular a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos durante el tiempo en que ejercieron las funciones públicas, así como otros delitos que afecten el patrimonio público.

En el mismo contexto de la anterior disposición, se consagra el derecho al control por parte del pueblo de los representantes electos, el cual abarca la rendición de cuentas públicas, transparentes y periódicas. Tal derecho obliga al representante a cumplir a cabalidad con el programa de gobierno presentado al electorado, así como a mantener una comunicación permanente con el pueblo que lo eligió.

En este capítulo se produce la ruptura con el sistema partidocrático que ocupó un largo espacio en nuestra historia política reciente, al eliminarse la sumisión de la participación democrática a la organización en estructuras partidistas como único vehículo a utilizar. Por el contrario, se consagra el derecho de asociación con fines políticos con amplitud, garantizando la aplicación de principios democráticos en la constitución, organización, funcionamiento e igualdad ante la ley, dado el interés público de las actividades que cumplen las organizaciones con fines políticos. De esta manera, se establece con rango constitucional limitaciones importantes a

la conformación de cúpulas partidistas y a la estructuración vertical de organización política que lejos de fomentar y desarrollar la cultura y los valores propios de la democracia han obstaculizado su profundización.

Se prevé igualmente el control del financiamiento de estas organizaciones, así como los límites de gastos en campañas electorales, y el establecimiento de mecanismos de control para garantizar la licitud de las contribuciones y el manejo pulcro de las mismas.

La Constitución consagra como un derecho político consustancial con la vida democrática, el de la manifestación pacífica y sin armas. Dadas las trágicas y dramáticas experiencias vividas por los venezolanos en el ejercicio de este derecho a expresar su descontento con el ejercicio de las funciones de gobierno, se incluyen prohibiciones que persiguen limitar la acción represiva de los cuerpos policiales y de seguridad. En este sentido, se consagra la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para enfrentar manifestaciones pacíficas.

Igualmente se reconocen y garantizan los derechos de asilo y refugio, como principios reconocidos universalmente.

Sección segunda: del referendo popular

En relación con los medios de participación en los cuales se concretizan los derechos de los ciudadanos a ejercer su soberanía, se consagran las diversas formas de referendo popular a la que se dedica una sección en particular que regula el referendo consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio.

Capítulo V

De los derechos sociales y de las familias

Los derechos sociales contenidos en la Constitución consolidan las demandas sociales, jurídicas, políticas, económicas y culturales de la sociedad en un momento histórico en que los venezolanos y venezolanas se redescubren como actores de la construcción de un nuevo país, inspirado en los saberes populares que le dan una nueva significación al conocimiento sociopolítico y jurídico del nuevo tiempo.

La corresponsabilidad entre sociedad y Estado, el sentido de progresividad de los derechos, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos constituyen una herramienta doctrinaria que define una nueva relación de derechos y obligaciones entre sujetos que participan solidariamente en la construcción de una sociedad democrática, participativa, autogestionaria y protagonista. La equidad de género que transversaliza todo el texto constitucional define la nueva relación que en lo jurídico, en lo familiar, en lo político, en lo socioeconómico y cultural, caracteriza a la nueva sociedad, en el uso y disfrute de las oportunidades. Queda evidenciado a lo largo de todo el texto constitucional el uso del género femenino, expresamente indicado de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) y de diversas organizaciones no gubernamentales, todo lo cual se inscribe dentro del principio de igualdad y no discriminación reconocido por el texto constitucional, con el objeto de evitar dudas o equívocas interpretaciones de la Constitución.

La participación directa de la gente en la toma de decisiones para la solución de sus problemas y los de su comunidad, crea una nueva relación ciudadana que en el ámbito de los derechos sociales, desarrolla la tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado, lo que coloca al legislador y a los órganos que integran el sistema de justicia, en un nuevo espacio de interpretación de la democracia social y del Estado de Derecho y de Justicia.

La pluralidad de las familias, el rescate de la tradición oral de los ancianos y de las ancianas, como patrimonio familiar para una educación cotidiana; la garantía de la autonomía funcional de los seres humanos con discapacidad o necesidades especiales; la ciudadanía progresiva de los niños y de las niñas definidos como prioridad absoluta del Estado; los adolescentes y jóvenes entendidos como sujetos estratégicos para el desarrollo sustentable; el significado del trabajo productivo del ama de casa; el consumo protegido y la seguridad alimentaria; la vivienda como hábitat que humaniza las relaciones familiares y comunitarias; la información como mecanismo que coadyuva a la formación de la cultura ciudadana, son nuevos elementos elevados a rango constitucional que requieren una interpretación acorde con su finalidad, no sujeta a formalismos jurídicos alejados de la realidad social.

Se garantiza para todos la seguridad social, la cual debe responder a los conceptos de solidaridad, universalidad, integralidad, unicidad, participación y eficiencia. La salud, asociada indisolublemente a la calidad de vida y al desarrollo humano, constituye un derecho social fundamental que el Estado garantiza a partir de un sistema sanitario de servicios gratuitos, definido como único, universal, descentralizado y participativo. Asimismo, consecuente con el principio de corresponsabilidad, la Constitución promueve la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas y planes de salud, a fin de lograr un ambiente sano y saludable.

En el campo laboral se reconocen los derechos individuales al trabajo, a la estabilidad y a las vacaciones, así como los derechos colectivos de sindicalización, contratación colectiva y derecho a la huelga por parte de los trabajadores y de las trabajadoras.

Todos estos derechos constituyen la base fundamental del nuevo ordenamiento jurídico en el que la vida, la ética, la moral, la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, los deberes ciudadanos y la seguridad jurídica son valores que concurren en la acción transformadora del Estado, la Nación, el gobierno y la sociedad, en un propósito de realización compartida para producir la gobernabilidad corresponsable, la estabilidad política y la legitimidad jurídica necesarias para el funcionamiento de la sociedad democrática.

Capítulo VI

De los derechos culturales y educativos

A través de artículos específicos transversalizados axiológicamente, en la Constitución quedan expresados los criterios y ejes fundamentales que reconocen y sintetizan los derechos culturales y educativos.

En las primeras disposiciones de este capítulo se garantiza la absoluta libertad en la creación cultural, tanto para la inversión en ella como para su producción y divulgación. Conforme a esta libertad el Estado reconoce el derecho a la propiedad intelectual de la obra creada. Se otorga rango constitucional a la protección, preservación, conservación y restauración

del patrimonio cultural venezolano y, con ello, a la memoria histórica de la Nación, lo cual obliga crear una legislación que consagre la autonomía de la administración cultural. Esa legislación debe estimular a quienes puedan y quieran enriquecer dicho patrimonio, y también debe establecer sanciones o penas a las personas naturales o jurídicas que le infieran daños o perjuicios. Adicionalmente, se enfatiza el principio de igualdad de las culturas y el de la interculturalidad, y se destaca la promoción de las expresiones populares que conforman y modelan cada naturaleza autóctona regional, para luego constituir una entrecruzada sumatoria de creaciones que configuren el conjunto definitorio de la Nación.

Para lograr esos objetivos constitucionales, la legislación correspondiente deberá establecer incentivos y estímulos para quienes promuevan, apoyen, desarrollen o financien, actividades relacionadas con la cultura, tanto en el país como en el exterior.

Se garantiza a los trabajadores culturales su incorporación a un sistema de seguridad social; y se prevé a través de una legislación perentoria la figura del mecenazgo.

El articulado garantiza igualmente, la obligatoriedad de la información cultural, con el objeto de corregir la desigualdad comunicacional que frente a nuestra propia cultura exhiben los medios de comunicación. Por ello se establece el deber de dichos medios de coadyuvar a la difusión de los valores y aportes de los creadores venezolanos.

Las disposiciones siguientes están dedicadas a derechos y definiciones de carácter educativo.

Es innecesario, por reiterativo, exponer motivaciones para justificar el carácter insoslayablemente fundamental y prioritario que tiene la educación para cualquier sociedad. Por consiguiente se proclama la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, y se la declara gratuita y obligatoria, y la asume el Estado como función indeclinable y de servicio público.

De acuerdo con la Constitución, la Educación es plural en su apertura a todas las corrientes del pensamiento universal, como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Debe estar orientada al desarrollo pleno de la personalidad para el disfrute de una existencia digna, que transcurra con una valoración ética del trabajo y con una conciencia de participación ciudadana. El propósito es que cada venezolano se sienta parte de una sociedad democrática, de la cual sea activamente solidario en su transformación hacia un país con una firme identidad geohistórica nacional y, al mismo tiempo, con vocación latinoamericana y universal.

A tales fines, la educación debe ser integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades para acceder a ella; igualdad que incluye a quienes califiquen en condiciones especiales, o estén discapacitados, o que se encuentren privados de su libertad.

Se incluye en el proceso educativo formal el nivel maternal, y se establece con carácter obligatorio hasta el nivel medio diversificado. En las instituciones del Estado se consagra la gratuidad de la educación en todos los niveles hasta el pregrado universitario.

En todo caso, la inversión presupuestaria que para estos fines realice el Estado tendrá carácter prioritario y estará en concordancia con las recomendaciones de la UNESCO en esta área.

Se reconoce el derecho de las personas naturales y jurídicas de fundar y mantener instituciones educativas privadas, previa aceptación del Estado y bajo su estricta inspección y vigilancia. Esa exigencia constitucional responde al hecho de que si bien existen centros de educación privada que con probidad, eficiencia académica y honestidad, han aportado y aportan una invalorable contribución a la formación de venezolanos, lamentablemente, también es verdad que a lo largo del tiempo han proliferado, sin control alguno, deplorables centros educativos cuyo único objetivo es el lucro desmedido, el cual ha generado la violación de la normativa legal y el irrespeto a la dignidad humana, a través de comportamientos ajenos a los nobles propósitos del apostolado educativo y con actuaciones que han defraudado la más hermosa fe y confianza de gran cantidad de estudiantes.

La legislación debe garantizar la dignificación del docente, tanto del que ejerce en las instituciones públicas como en las privadas, consagrando un régimen de remuneración, prestaciones y seguridad sociales que le garanticen niveles de vida acordes con su elevada misión. A los efectos, de su ingreso, ascenso y permanencia en el sistema educativo, los docentes deberán someterse a una rigurosa evaluación que responda a criterios de méritos éticos y académicos, con prescindencia de cualquier injerencia partidista.

Para ser incluidas en los diseños curriculares, se les dio rango constitucional a las materias relativas al ambiente, a lo lingüístico y a lo geohistórico. En efecto, la formación ambiental debe estar presente en todos los niveles del sistema educativo, aun en la educación no formal. La enseñanza de la lengua castellana es obligatoria hasta el ciclo diversificado, tanto en las instituciones públicas como privadas. Esta misma obligatoriedad se establece para las materias patrias, la historia de Venezuela y la geografía de Venezuela, rescatando así su categoría de materias autónomas, ante la imperiosa necesidad de afianzar la identidad nacional. Coadyuvará a lograr este objetivo la enseñanza del ideario bolivariano, igualmente establecida como obligatoria en el artículo 107 de la Constitución.

Se enfatiza la necesidad de incorporar al sistema educativo el manejo de las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de servicios públicos de radios, televisión, redes bibliotecarias e informáticas, con el objeto además, de permitir el acceso universal a la información.

La Constitución delega en la ley la determinación de las profesiones que requieren título y las condiciones que debe cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación. Al respecto, la Disposición Transitoria Decimoquinta dispone que hasta tanto se apruebe la legislación en esa materia, se mantendrá en vigencia el ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de la Constitución.

Por otra parte, la ley deberá garantizar que en las asociaciones gremiales y colegios profesionales se establezcan estructuras organizativas que permitan afiliaciones, gerencias académicas y gestiones electorales más adecuadas a la calidad profesional de sus integrantes y directivos.

Además, por ser inherente a la naturaleza de la universidad, se reconoce la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes y egresados de su comunidad, dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para el beneficio espiritual y material de la Nación. Esa autonomía universitaria implica, en especial, la libertad para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión, así como la inviolabilidad del recinto universitario. En todo caso, la autonomía universitaria debe garantizar una permanente adecuación de la institución al incesante desarrollo del conocimiento.

Como consecuencia de lo anterior, también se dispone que las universidades autónomas se darán sus propias normas de gobierno, funcionamiento y administración, bajo el control y vigilancia que establezca la ley. Por su parte, las universidades nacionales experimentales para alcanzar su autonomía deberán cumplir con los requisitos que establezca la ley.

La ciencia, la tecnología, el conocimiento en general, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información, se declaran de interés público, por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. A tales fines, el Estado creará un sistema nacional de ciencia y tecnología que agrupe, coordine y fomente el desarrollo de la investigación en el país, al cual destinará recursos suficientes. La empresa privada también deberá contribuir con sus recursos al desarrollo de esta actividad.

Uno de los mandatos más significativos de la Constitución en esta materia, es el que obliga al Estado a garantizar el cumplimiento de los principios éticos y legales, en las actividades relacionadas con la investigación científica, humanística y tecnológica, todo lo cual será regulado por la ley.

Siendo el deporte, la educación física y la recreación actividades indispensables de toda persona para su integral desenvolvimiento corporal y espiritual, así como para su incorporación al desarrollo del país, con el objeto de formar una población sana y apta para el estudio y el trabajo, se reconocen tales actividades como un derecho humano,

cuyo libre ejercicio beneficia la calidad de vida individual y colectiva. En consecuencia, su enseñanza y práctica se inscriben dentro del proceso educativo y son materia obligatoria en instituciones públicas y privadas hasta el ciclo diversificado. Los recursos para su promoción y desarrollo estarán garantizados por el Estado como parte de una política de educación y salud pública.

Lo anterior responde, además, a que concibe la recreación no solo como ocio, sino como una actividad individual y colectiva que permite el desarrollo espiritual y la gestación de elevadas formas de conciencia sociocultural.

Finalmente, en esta materia, el Estado garantizará la atención integral de los deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia. Además, con el objeto de garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, el Estado promoverá la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del sector privado, conforme a los mecanismos que prevea la ley, la cual también establecerá incentivos y estímulos a las personas y comunidades que promuevan a los atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el país.

Capítulo VII

De los derechos económicos

En este Capítulo referido a los derechos económicos, se establece el derecho que tienen los consumidores a disponer de bienes y servicios de calidad y a un tratamiento digno y no discriminatorio. En consecuencia, el Estado se obliga a tomar las medidas necesarias para combatir toda práctica que afecte la libre formación de precios, sea ella originada en la morfología del mercado, como los monopolios, o en el abuso de posición dominante.

El derecho de propiedad se garantiza sin ambigüedades, sin obviar las consideraciones de utilidad pública e interés general, en tanto que la acción del Estado, considerada como esencial en la definición de un marco institucional apropiado para el crecimiento y el bienestar, está sometida al imperio de la ley.

Capítulo VIII

De los derechos de los pueblos indígenas

Actualmente habitan en Venezuela, al igual que en el resto del continente americano, pueblos cuya existencia antecede a la llegada de los primeros europeos, así como a la formación de los estados nacionales, razón por la cual se les denomina pueblos indígenas. Sus antepasados ocuparon durante miles de años estas tierras, desarrollando formas de organización social, política y económica, culturas, idiomas y tecnologías muy diferentes entre sí y respecto a las conocidas por los europeos de entonces. Ante la invasión, conquista y colonización europea, los indígenas defendieron heroicamente sus tierras y vidas. Durante más de quinientos años han mantenido su resistencia y lucha por el reconocimiento pleno de su existencia como pueblos, así como del derecho sobre sus tierras, lo cual hoy se materializa con la refundación de la República.

De la misma manera, como consecuencia de esta lucha y de sus particulares condiciones de vulnerabilidad, los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos internacionalmente como derechos específicos y originarios.

Este mismo reconocimiento en la Constitución implica un profundo cambio de perspectiva política y cultural que reorienta la conducción del Estado venezolano, al reconocer su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe.

En el seno de los diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos se han realizado notables esfuerzos en el avance, reconocimiento y profundización de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el ámbito legislativo como en el constitucional. En este sentido, es importante destacar que la mayoría de las constituciones latinoamericanas actuales establecen principios claros sobre los derechos de los pueblos indígenas, como un reconocimiento a la diversidad cultural de América Latina.

En Venezuela también se ha dado un progresivo reconocimiento jurídico de la realidad de la diversidad cultural nacional representada por los

pueblos indígenas venezolanos, tanto legal como jurisdiccionalmente. Así, el Estado venezolano recoge una situación de hecho preexistente, que al mantenerse históricamente, fortalece el sentido de pertenencia nacional, al valorarse el aporte de la indianidad en la formación de la venezolanidad y de sus instituciones sociales básicas.

En este sentido, en el ordenamiento jurídico venezolano existen muchas referencias normativas distintas relativas a la realidad indígena, las cuales incluyen leyes aprobatorias de tratados internacionales en materia de derechos indígenas, así como diferentes leyes orgánicas, ordinarias y especiales así como decretos, resoluciones ministeriales y reglamentos, que regulan diferentes áreas vinculadas a su realidad en el contexto nacional. Igualmente, dentro de las instituciones del Estado existen dependencias específicas para atender los diversos aspectos de la realidad de los pueblos indígenas, dentro de su complejidad. Por su parte, en tiempos recientes, la jurisprudencia venezolana ha desarrollado también el contenido de los derechos humanos de los indígenas, en diferentes sentencias para casos específicos.

Sobre esta base el Capítulo referido a los derechos indígenas reconoce ampliamente la existencia de los pueblos indígenas, sus formas de organización, culturas e idiomas propios, así como sus hábitats y los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son indispensables para garantizar su continuidad biológica y sociocultural, las cuales además son asiento de sus referentes sagrados e históricos. Todo ello implica un profundo cambio en la perspectiva política y jurídica del país.

Se establece que las tierras indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles y que corresponde al Estado conjuntamente con los pueblos indígenas la demarcación de dichas tierras. Una ley especial desarrollará lo específico de tal demarcación a fin de asegurar la propiedad colectiva de las tierras a los pueblos y comunidades indígenas que las habitan.

Se garantiza la integridad de los hábitats indígenas y se consagra el aprovechamiento racional de los recursos naturales allí existentes. Se

reconoce el derecho de las comunidades indígenas a recibir información previa y a ser consultadas sobre actividades de aprovechamiento de los recursos naturales. Los beneficios que corresponden a los pueblos indígenas por concepto de este aprovechamiento por parte del Estado serán de carácter colectivo.

En oposición a las políticas indigenistas que hasta ahora imperaron en el país y que han significado la destrucción y desaparición de sus culturas, se consagra el derecho de cada pueblo indígena a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y preservar sus lugares sagrados y de culto. La valoración del patrimonio cultural y lingüístico de los pueblos indígenas concierne a todos los venezolanos; en consecuencia, el Estado velará por el mantenimiento, continuidad, enriquecimiento y reproducción del mismo.

Dado que toda sociedad posee su propio sistema y procesos de socialización y de endoculturación mediante los cuales educan a sus miembros según sus costumbres y tradiciones, el Estado reconoce y respeta los sistemas educativos de los indígenas y garantiza la atención educativa, mediante la modalidad de un régimen de educación intercultural bilingüe, que combina la educación formal con los sistemas educativos tradicionales indígenas e implica igualmente el uso de las lenguas maternas y el castellano.

Como parte de la valoración del patrimonio cultural indígena, el Estado reconoce las prácticas médicas tradicionales de los pueblos indígenas, las cuales hasta el presente han sido desconocidas y descalificadas. El Estado garantizará a los pueblos indígenas, mediante una perspectiva intercultural que permita la combinación de los dos saberes, la salud integral adaptando los servicios de salud a las especificidades y necesidades culturales de cada uno de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y promover sus prácticas económicas, por lo que no se les podrá imponer planes y proyectos de desarrollo ajenos a sus intereses y necesidades. El Estado asegurará dentro de una perspectiva de desarrollo sustentable, con identidad y

en articulación con la economía nacional, los recursos financieros, la capacitación y la asistencia técnica requerida, así como la participación en la economía del país.

Con el fin de salvaguardar los conocimientos, saberes, prácticas e innovaciones intelectuales y recursos genéticos de los pueblos indígenas, de la apropiación ilegal y el aprovechamiento comercial por parte de personas naturales y jurídicas, el Estado garantiza y protege la propiedad colectiva de los mismos prohibiendo su patentabilidad.

Al garantizarse la participación política de los pueblos indígenas con una representación en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena se consagra una de las principales aspiraciones de los pueblos indígenas, tal como se expresa en las disposiciones transitorias. Ello les permitirá estar presentes en la elaboración de las distintas leyes y reglamentos del país, además de garantizarles su participación directa en las instancias de toma de decisiones de los poderes públicos que integran el Estado.

Los pueblos indígenas forman parte de la sociedad nacional y del pueblo venezolano que se reconoce como único, soberano e indivisible. El uso del término pueblo, tal como lo expresa claramente el texto constitucional, significa el reconocimiento de su identidad específica, de las características sociales, culturales y económicas que les son propias y que los diferencian del resto de la sociedad, por tanto el uso de dicho término no podrá interpretarse en el sentido que se le da en el derecho internacional.

Pero aunado a este Capítulo dedicado a los derechos indígenas, la Constitución consagra otras disposiciones en la materia.

Así, la Constitución establece que las lenguas indígenas tienen un valor primordial en sí mismas por ser el máximo instrumento intelectual de los pueblos que las usan, el más completo inventario de su cultura y la mejor imagen de su vida inmaterial y espiritual.

Por constituir un derecho de los pueblos indígenas y un patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad, además del castellano, los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República. En tal virtud, los idiomas indígenas se emplearán en todos los procesos administrativos y judiciales en que sea necesario.

Por otra parte, se prevé que la legislación municipal establezca la organización del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los municipios con población indígena, tomando en cuenta la organización social y cultural específica de cada municipio indígena, sus autoridades tradicionales, así como el tipo de economía que estas comunidades practiquen, a fin de establecer una administración municipal que reconozca la capacidad de participación indígena en su hábitat y en el marco de su desarrollo sociocultural. Asimismo, se excluyen las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas de la calidad de ejidos.

Por último, la Constitución se refiere al derecho que tienen los pueblos indígenas de seguir practicando sus sistemas normativos internos, para la regulación, sanción y restauración de la paz social. Este derecho a la justicia es un mecanismo de protección a los indígenas venezolanos, que históricamente han vivido en una sociedad que los excluyó y discriminó; en este caso no se trata de códigos o leyes escritas, sino de formas de justicia que han permitido a estos pueblos regularse internamente, enfrentar los conflictos y seguir manteniendo la cohesión colectiva mediante la aplicación de un sistema normativo reparatorio.

Capítulo IX

De los derechos ambientales

En lo que se refiere a los derechos ambientales, la Constitución, además de establecer por vez primera en nuestra historia constitucional un Capítulo especialmente dedicado a los mismos, supera, con una visión sistemática o de totalidad, la concepción del conservacionismo clásico que sólo procuraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes económicos.

En efecto, anteriormente la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una regulación parcial cuyo principal objeto era la conservación de los recursos naturales. Ahora, impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental, todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras.

La Constitución en su preámbulo señala entre los fines que debe promover nuestra sociedad, la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Consecuente con ello, el texto constitucional se caracteriza por desarrollar con la amplitud necesaria, los derechos y deberes ambientales de cada generación, y por reconocer el derecho que ellas tienen a un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Destaca, en este sentido, la necesidad de mantener un eficaz desarrollo de la seguridad ambiental en las fábricas y complejos industriales.

Así, el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; al tiempo que velará por un medio ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, gocen de especial protección. De igual manera, el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo sustentable, la cual deberá contar con la participación ciudadana.

Por otra parte, como una garantía insoslayable para la protección del ambiente se dispone que en todos los contratos que la República celebre, o en los permisos que se otorguen, que afecten recursos naturales, se considerará incluida, aun cuando no estuviere expresa, la obligación de

conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, todo ello en los términos que determine la ley.

Aunado a ello, los principios contenidos en este Capítulo encuentran su transversalización axiológica en el texto constitucional, a través de otras disposiciones y principios que tienen como finalidad el desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable de la Nación. Así, encuentra fundamento constitucional la obligatoriedad de la educación ambiental, las limitaciones a la libertad económica por razones de protección del ambiente, el carácter de bienes de dominio público que se le atribuye a las aguas, la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, la protección del hábitat de los pueblos indígenas, entre otros.

Capítulo X

De los deberes

En este Capítulo, retomando principios de nuestra historia constitucional se consagran los deberes de los venezolanos. El origen de los deberes es la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, publicada en la Gaceta de Caracas el 23 de julio de ese mismo año, en la cual se desarrollaron los derechos y deberes del hombre en sociedad. Luego, en la Constitución Federal de Venezuela de 1811 publicada en la Gaceta de Caracas el 27 de diciembre de ese mismo año, en su parte final se consagraron los deberes del hombre en sociedad conjuntamente con los deberes del cuerpo social, con fundamento en la figura romana del buen padre de familia.

Se consagra el deber de honrar y defender la Patria, independientemente de cualquier tipo de corriente ideológica, como una obligación consustancial con la nacionalidad. Este deber implica no sólo resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad y nuestra integridad territorial, sino además, defender y promover la autodeterminación política, territorial, cultural y social de la Nación. Además, rescatando nuestra historia republicana se extiende ese deber a la promoción y defensa de todo lo que identifica nuestra Nación, como los símbolos patrios y valores culturales.

Como consecuencia del principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, así como del principio de legalidad, se consagra el deber de toda persona de cumplir y acatar el Texto Fundamental, las leyes y demás actos que en ejercicio de sus funciones legítimas dicten los órganos que ejercen el Poder Público.

Promoviendo una sociedad plural, armónica, solidaria, abierta, integrada y comprometida en todos sus ámbitos, se consagra el deber de toda persona de cumplir los requerimientos sociales y participar en la vida política, civil y comunitaria del país. En la búsqueda de estos propósitos se resalta la obligación de promover y defender los derechos humanos siempre con fundamento en la convivencia democrática y en la paz social.

En virtud del principio de solidaridad social, se consagra el deber de toda persona de coadyuvar, en la medida de sus posibilidades, a los gastos públicos.

En armonía con los principios de participación y solidaridad social se consagra el deber de toda persona de prestar servicio civil, militar y electoral, cuando sea necesario para la defensa, preservación y desarrollo de la Nación, o bien para hacer frente a situaciones de calamidad pública.

No obstante, las obligaciones que tiene el Estado conforme a la Constitución y a la ley, se consagra el deber de toda persona de coadyuvar según su capacidad y aptitud, al cumplimiento de los fines que impone el bienestar social general, con base en los principios de solidaridad, responsabilidad social y asistencia humanitaria. Por ello, quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión deberán prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.

TÍTULO IV DEL PODER PÚBLICO

Capítulo I De las disposiciones fundamentales

Sección primera: disposiciones generales

El presente título referente al Poder Público, adquiere especial significación dado que se propone rescatar la legitimidad del Estado y de sus instituciones, recuperando la moral pública y la eficiencia y eficacia de la función administrativa del Estado, características complementarias e indispensables para superar la crisis de credibilidad y de gobernabilidad que se ha instaurado en el país en los últimos tiempos.

En las Disposiciones Generales, en primer lugar se consagra la conocida distribución vertical del Poder Público: Poder Municipal, Estatal y Nacional; colocados en este orden según su cercanía con el ciudadano, sujeto protagónico de este modelo de democracia participativa.

En lo que respecta a la distribución horizontal del Poder Público Nacional se incorporan, además de las funciones tradicionales, la innovación de los denominados Poder Electoral y Poder Ciudadano. La razón de esta novedosa inclusión se entiende en un contexto social y político en el cual se deben dar signos claros del respeto a la independencia y autonomía funcional de la que deben gozar los órganos encargados de desarrollar las funciones respectivas, para facilitar la recuperación de la legitimidad perdida en terrenos tan delicados como el de los procesos electorales, así como el de la función contralora y la defensa de los derechos humanos.

Se consagra, igualmente, una división de las funciones que corresponden a cada rama del Poder Público, tanto en sentido vertical como horizontal. Pero si bien se acepta la especialidad de la tarea asignada a cada una de ellas, se establece un régimen de colaboración entre los órganos que van a desarrollarlas para la mejor consecución de los fines generales del Estado.

Se establece el principio restrictivo de la competencia, según el cual los órganos que ejercen el Poder Público sólo pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente consagradas por la Constitución y la ley.

La usurpación de autoridad, consistente en la invasión del Poder Público por parte de personas que no gocen de la investidura pública, se considera ineficaz y los actos dictados se consideran nulos.

En cuanto a la responsabilidad individual consecuencia del ejercicio del Poder Público, se abarca tanto el abuso de poder, la desviación de poder, así como la violación de la Constitución y la Ley. Esta disposición es una de las que ha adolecido de ineficacia, por lo cual su consagración en esta Constitución implica generar los mecanismos legales para su aplicación efectiva.

Finalmente, en las disposiciones generales, se establece bajo una perspectiva de derecho público moderna la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones.

Sección segunda: de la administración pública

Por definición, la función ejercida por la Administración Pública está sujeta al servicio público o interés general, por ende debe estar al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de distinciones, de privilegios o discriminaciones. En este contexto la aplicación de este contenido implica el cambio de una cultura y de unos hábitos organizacionales que han enturbiado y obstaculizado el ejercicio de esta función del Estado, desviándola hacia la satisfacción de intereses subalternos, con lo cual se ha facilitado la corrupción y la ineficacia e ineficiencia. Es por ello que se precisan los principios que deben fundamentar a la Administración Pública, los cuales no requieren de mayor explicación: honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición

de cuentas y responsabilidad. Principios que expresan con claridad el nuevo camino que deben seguir los funcionarios que ejerzan el Poder Público. Además de estos principios rectores se reitera el sometimiento a la ley y al derecho, es decir, el principio de la legalidad de la actividad administrativa.

Los institutos autónomos son materia de reserva legal. Asimismo están sometidos, conjuntamente con los intereses públicos en entidades, al control estatal según sea desarrollado en la ley.

Se consagra en favor de ciudadanos y ciudadanas, el derecho a la información oportuna y veraz por parte de la Administración Pública. Este derecho adquiere suficiente amplitud y precisión, ya que abarca lo relativo a las actuaciones de las cuales sean parte interesada, así como al conocimiento de las resoluciones definitivas que se dictaren, y acceso a los archivos y registros administrativos, salvo las excepciones legales. Como complemento a esta disposición se establece la prohibición absoluta de la censura a los funcionarios públicos en relación con su deber correlativo al derecho a la información consagrado en esta disposición.

Sección tercera: de la función pública

Como introducción a la regulación establecida en esta Sección conviene resaltar la importancia y significación que la nueva Constitución le otorga a la función pública, en la medida en que la honestidad, la eficiencia y la eficacia de su ejercicio constituyen prioridades indiscutibles dentro de las exigencias que la sociedad venezolana ha manifestado con mensajes precisos y contundentes. Los vicios más enraizados en el sistema político, como el clientelismo, que tanto daño ha causado al pueblo venezolano, están relacionados íntimamente con la falta de líneas claras en torno a lo que debe ser la función pública y a la creación de una política de recursos humanos cónsona con los ideales de la gerencia pública moderna. La gobernabilidad, entendida como la satisfacción plena de las demandas sociales, sólo puede alcanzarse en la medida que se adopten políticas orientadas en este sentido.

Se consagra la creación del Estatuto de la función pública mediante ley, en la cual se regulará lo relativo a la política de recursos humanos aplicable a los funcionarios de la Administración Pública. Se deberá regular el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro y, asimismo, la incorporación de los mismos a la seguridad social. Igualmente se consagrará por vía legal las funciones y requisitos para el ejercicio de los cargos respectivos. Es precisamente en el marco de estas normativas donde deberán ser desarrolladas por la ley, el espacio en el cual se debe garantizar los niveles de idoneidad tanto profesional como ético de las personas que ingresen en la Administración Pública. El principal freno a las conductas contrarias a la legalidad y a la moral pública depende, en buena parte, de las políticas de ingreso, permanencia y ascenso en la carrera administrativa.

Contrario a los hábitos organizacionales generados por el clientelismo político, se establece el deber de los funcionarios o funcionarias públicos de servir al Estado, y por ende, al ciudadano y no a parcialidad alguna. Como complemento se establece que el nombramiento y remoción no podrán vincularse a la afiliación política. Tal aspecto se convierte en punto fundamental de este proceso de refundación del Estado, ya que el mismo depende de una voluntad política firme que convierta en realidad lo que hasta ahora ha sido una fantasía irrealizable. Evidentemente por vía legal y reglamentaria se deben afinar los mecanismos para garantizar el fiel cumplimiento de esta norma. Igualmente se prohíbe a quienes estén al servicio de los municipios, estados, República o demás personas jurídicas estatales de derecho público o privado la celebración de contratos con estas entidades, por sí mismos o por interpósita persona, salvo las excepciones legales.

Se establece como principio general que los cargos de la Administración Pública son de carrera, salvo los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y los obreros, así como otros tipos que indique la Ley. Este aspecto del establecimiento de la carrera administrativa, constituye un pilar necesario para poder sustentar el edificio de una Administración Pública moderna, dinámica y eficiente. La depuración de la función pública, el rescate de la imagen del Estado,

requiere de un compromiso ineludible con la satisfacción de esta exigencia que la sociedad ha expresado reiteradamente.

En este mismo contexto el ingreso a la carrera administrativa será exclusivamente por concurso público que garantice la selección de los mejores, tanto en el aspecto ético como en el de la preparación técnica y profesional. Por ello dicho concurso se sujeta a los principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. En adelante, no se podrá acceder a la carrera administrativa por designaciones o contrataciones que obvien este mecanismo de selección objetivo, ni se podrá adquirir estabilidad por el transcurso del tiempo en el ejercicio de algún cargo de carrera. Sólo el concurso público dará acceso a la carrera administrativa y a la consecuente estabilidad del funcionario.

Igualmente, para el ascenso, se someterá a un sistema de evaluación que reporte una calificación de méritos de los funcionarios públicos en forma periódica. Ello implica una evaluación objetiva de la gestión personal de los funcionarios y un programa de formación y capacitación al cual se deberán someter. De esta forma el ascenso debe encontrarse vinculado a la eficiencia, disciplina y desarrollo de los conocimientos, destrezas y habilidades del funcionario.

De otra parte, la permanencia del funcionario en la carrera administrativa tiene que estar relacionada con un resultado positivo de la evaluación de su desempeño. Esta evaluación debe ser objetiva y periódica. De esta forma se potencia el esfuerzo del funcionario por mejorar su gestión, y en ese sentido gozará de estabilidad, ascenderá y obtendrá mayores beneficios laborales. Por el contrario, si el resultado de la evaluación del desempeño del funcionario es negativa, el funcionario será removido de la función pública.

Tales principios deben ser desarrollados por vía legal de manera de restringir la discrecionalidad en la toma de decisiones relacionadas con estos aspectos, estableciendo las exigencias para poder optar a dichos concursos y así poder ascender en la carrera administrativa. Correlativo a ello deberá avanzarse hacia la conformación de instancias estatales que contribuyan a la formación y actualización permanente del funcionario público.

La ocupación de cargos públicos remunerados requiere como exigencia indispensable la previsión presupuestaria respectiva. Por vía reglamentaria y según la ley, se establecerán las escalas de salarios, pudiendo establecerse los límites razonables a las remuneraciones en las diferentes ramas del Poder Público municipal, estatal o nacional. Igualmente, por ley nacional se establecerá el régimen de jubilaciones y prestaciones a todos los niveles. El objetivo de esta norma es mantener dentro de los parámetros razonables y en el contexto de la situación económica del país los niveles de las remuneraciones de los funcionarios públicos.

Para evitar las irregularidades que se han cometido continuamente en desmedro de la eficiencia y de la eficacia de la Administración Pública, se prohíbe expresamente desempeñar más de un destino público remunerado, salvo las excepciones de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes según la ley. Para darle eficacia a este dispositivo se requiere la existencia de archivos confiables y actualizados que impidan la recurrencia en este vicio que constituye un verdadero fraude al interés colectivo. Igualmente se consagra la prohibición del disfrute de más de una jubilación o pensión, salvo las excepciones legales.

Como exigencia indispensable para la aceptación de cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros se requiere la autorización de la Asamblea Nacional.

Sección cuarta: de los contratos de interés público

En materia de contratos de interés público se mantiene, en general, la regulación constitucional existente, aunque se mejora su redacción. Se prevé, así, como regla general que los contratos de interés público nacional deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No obstante, se establece con carácter preceptivo esta aprobación en los supuestos de contratos de interés público nacional, estatal o municipal si los mismos pretenden celebrarse con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.

Por otra parte, se conserva como regla general el sometimiento de dichos contratos a las leyes y a la jurisdicción venezolana. Sin embargo, por

vía de excepción, en los casos en que la naturaleza del negocio así lo permita, determinadas controversias del contrato podrán someterse a otra jurisdicción.

Sección quinta: de las relaciones internacionales

En la Constitución las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en el ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. En esta sección se establecen los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos, solidaridad entre los pueblos. Además de la defensa de estos principios, la Constitución impone a la República la práctica democrática en la participación y toma de decisiones en el seno de organismos e instituciones internacionales.

Se promueve la integración latinoamericana y caribeña, la cual adquiere carácter constitucional en la búsqueda de la creación de una Comunidad de Naciones. A tales fines, se permite la suscripción y ratificación de tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, en el marco de procesos de integración que tengan carácter supranacional. Como consecuencia de ello, las decisiones que adopten los órganos supranacionales que surjan de los procesos de integración, son de aplicación directa e inmediata en Venezuela.

En todo caso, el reconocimiento y fortalecimiento que la Constitución ofrece a los procesos de integración con carácter supranacional, ha tenido entre otros objetivos, darle un marco constitucional sólido a los procesos de integración de los cuales Venezuela es parte, así como reconocer la validez de todos los tratados que han sido suscritos y ratificados por Venezuela en dicho proceso, y de todas las decisiones o directivas dictadas hasta la entrada en vigencia de la nueva Constitución, por los órganos supranacionales de la Comunidad Andina.

Capítulo II

De la competencia del Poder Público Nacional

En esta Constitución se actualizan las competencias del Poder Nacional, incorporando materias nuevas tales como la determinación de los tipos impositivos o alcúotas de los tributos estatales o municipales; la creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales, así como transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponderá a los municipios; la administración del espectro electromagnético; el régimen general de los servicios públicos domiciliarios; el manejo de la política de fronteras; la legislación en materia de pueblos indígenas y territorios por ellos ocupados; así como la organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones del Estado.

A continuación se incluye una declaración general sobre la valoración del concepto de descentralización, como lineamiento estratégico de la política de desarrollo, no sólo a los fines de la democratización de lo público sino también como elemento decisivo para promover la efectividad y eficiencia de los cometidos estatales.

Capítulo III

Del Poder Público Estatal

Comienza con la caracterización de los estados como entidades autónomas e iguales en lo político, con el atributo de personalidad jurídica plena, haciendo mención expresa del compromiso de mantener la integridad nacional y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, que es la esencia del pacto federal.

Se definen los órganos superiores de las entidades estatales, a saber, el gobernador y el Consejo Legislativo, con las funciones de gobierno y administración el primero, y de legislación y de deliberación política el segundo. Se señalan los requisitos del cargo y el período de duración del mandato del gobernador, además de la obligación de rendición de cuenta ante el Contralor del Estado y la presentación de un informe del mismo ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.

En el caso de la rama legislativa y deliberante de los estados, se define su órgano que es el Consejo Legislativo, su conformación, sus atribuciones y los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo.

Se establece la existencia en cada estado de una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional.

En la distribución de competencias que corresponden a la Constitución se definen en este capítulo la competencia exclusiva de los estados, manteniéndose y ampliándose las previstas en la Ley Orgánica de Descentralización. En cuanto a las competencias concurrentes se adopta la experiencia del Derecho Comparado en materia de descentralización y se asume que las leyes nacionales tienen la naturaleza de leyes bases, en las que se establecen conceptos generales, básicos y orientadores; y las leyes estatales son leyes de desarrollo de esos principios básicos, lo que permitirá mejores condiciones para la delimitación de competencias. Se prevé la creación en cada estado de un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, dejando su organización y funcionamiento a lo que determine la ley.

Se definen los ingresos de los estados dentro de una visión integral de la materia hacendística pública, con especial atención al problema del financiamiento de las autonomías territoriales. Todo ello en un esfuerzo de armonización de las distintas potestades fiscales, para el desarrollo de estados y municipios.

Capítulo IV

Del Poder Público Municipal

Se inicia con una norma de caracterización del Municipio, en la cual se incluye el reconocimiento expreso de la autonomía municipal con la definición del contenido mínimo que corresponde a esa cualidad esencial, así como la garantía jurisdiccional de la misma. Se incorpora una declaración general sobre la participación como elemento consustancial con la naturaleza del gobierno y la administración municipal.

Se estableció la remisión a la legislación de la materia correspondiente al desarrollo de los principios constitucionales relativos a los municipios y demás entidades locales, imponiéndose a tal efecto, la necesidad de partir de la diversidad municipal de modo imperativo y no como una simple orientación al legislador, abarcando no sólo la organización municipal propiamente tal, sino también en lo que respecta a sus competencias y recursos. Se enfatiza la necesidad de que dicha legislación establecerá opciones para la organización de gobierno y administración de los municipios indígenas.

Se ha previsto la posibilidad de que los municipios se asocien en mancomunidades, así como la creación de modalidades asociativas intergubernamentales.

Se prevé la organización de los municipios en distritos metropolitanos mediante ley, lo que permite el diseño de un régimen más auténtico para la organización distrital que no debe quedar constreñido a una forzada reproducción a escala de la organización municipal.

Se propone una habilitación general al legislador para crear condiciones de elegibilidad, prohibiciones y causales de inhibición para la postulación y ejercicio de las funciones de alcaldes y concejales.

Respecto a los ingresos, se consagran y caracterizan en la Constitución los ramos de ingresos, incluyendo aquellos de naturaleza tributaria que corresponden al municipio de manera irrestricta, dejando abierta la posibilidad de que por vía del desarrollo legislativo puedan ser creados otros impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Además del enunciado del sistema de ingresos se consagra que la potestad tributaria de los municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estatal. Asimismo, se establecen que las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes politicoterritoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas.

Se ha incluido una norma que establece la presunción del carácter de ejidos de los terrenos ubicados en el área urbana de los Municipios, sin menoscabo de legítimos y mejores títulos de terceras personas, válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana, dejándoles la excepción para las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas.

Se ha incorporado la creación del Consejo Local de Planificación Pública que tiene por objeto la planificación, coordinación y cooperación en la definición y ejecución de las políticas públicas.

Se incluye una norma que consagra la creación mediante ley, de los mecanismos necesarios para que los estados y municipios formalicen el compromiso de descentralización hacia las comunidades y grupos vecinales, organizando los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad.

Capítulo V

Del Consejo Federal de Gobierno

Como órgano constitucional de carácter interterritorial se crea el Consejo Federal de Gobierno, reflejo en el plano de la organización del Estado de los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y responsabilidad sancionados en el Título I de la Constitución relativo a los Principios Fundamentales. Es, pues, un órgano producto de la fase más avanzada del federalismo, el federalismo cooperativo, superación histórica de lo que ha sido denominado federalismo dual que entendía al Estado como producto de un pacto entre los distintos entes politicoterritoriales los cuales tendrían una esfera de soberanía no delegada a la Unión y, en principio, intangible a la acción del Poder Federal.

Las funciones de este Consejo Federal de Gobierno serán básicamente las de planificar y coordinar horizontalmente las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y la administración del Fondo de Compensación Interterritorial destinado al financiamiento de inversiones públicas con el fin de promover el desarrollo equilibrado de las regiones de menor desarrollo relativo.

En fin, es clara la superación que representa esta figura organizativa con respecto a la Convención de Gobernadores, único mecanismo cooperativo previsto en la Constitución precedente de 1961.

TÍTULO V **DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL**

Capítulo I **Del Poder Legislativo Nacional**

Sección primera: disposiciones generales

El Poder Legislativo Nacional es ejercido por una Asamblea Nacional cuya estructura unicameral responde al propósito de simplificar el procedimiento de formación de las leyes, reducir los costos de funcionamiento del parlamento, erradicar la duplicación de órganos de administración y control y la duplicación de comisiones permanentes, entre otras cosas.

Los diputados que integran la Asamblea Nacional son elegidos, en cada entidad federal, según una base poblacional de uno coma uno por ciento de la población total del país; además, corresponderán tres diputados por cada entidad federal y habrá tres diputados en representación de los pueblos indígenas. El período de duración del mandato es de cinco años, pudiendo ser reelegidos hasta por dos períodos consecutivos como máximo. De acuerdo con lo expuesto, el número de diputados de la Asamblea Nacional sólo aumentará o disminuirá en la misma medida en que aumente o disminuya la población, en una o varias entidades federales.

Con esta forma de integración y con la estructura unicameral del órgano legislativo nacional desaparecen los llamados diputados adicionales; además, en virtud de la eliminación del Senado, desaparece la figura del senador vitalicio.

La representación parlamentaria, de acuerdo con el artículo 186 del texto constitucional, reviste un doble carácter. El diputado es, al mismo tiempo,

representante de la entidad federal y representante popular, lo cual reafirma el artículo 201 al expresar que los diputados son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto.

Ese doble carácter de la representación parlamentaria exige de los candidatos haber residido en la entidad federal en la cual aspiran ser elegidos, por lo menos, durante los cuatro años anteriores a la fecha de la elección. Este requisito de elegibilidad unido a la obligación de la Asamblea Nacional de consultar a los Estados cuando ella trate de materias relativas a los mismos, al derecho de palabra a los Estados en el proceso de formación de las leyes relativas a ellos y la iniciativa legislativa por parte de los Consejos Legislativos de los Estados, son complementos tanto del carácter federal de la representación parlamentaria como del contenido federal del Estado venezolano.

Por otra parte, el texto constitucional consagra los principios de la personalización de las elecciones y el de la representación proporcional, dejando a la ley la tarea de garantizar la presencia de estos principios que constituyen parte sustancial del sistema democrático.

Respecto a las condiciones de inelegibilidad de los diputados, se obliga a la separación absoluta de sus cargos a los aspirantes, por lo menos tres meses antes de las elecciones, en los casos expresamente señalados, sin perjuicio de los que por ley puedan establecerse.

Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo órgano legislativo en un sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario, como el nuestro. Destacan la función legislativa, la función de control político sobre la Administración Pública Nacional y sobre el Gobierno, las autorizaciones y, en particular, los mecanismos de control del órgano legislativo sobre el Poder Ejecutivo a través del voto de censura al Vicepresidente y a los Ministros, cuyo procedimiento es especial y requiere de votación calificada. Otros mecanismos de control son las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones. La Asamblea Nacional podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones para hacerla efectiva. Los funcionarios públicos están obligados a asistir a las comisiones y a suministrar las informaciones y

documentos que éstas requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación incumbe también a los particulares, sin perjuicio de los derechos y garantías que la Constitución consagra. El valor probatorio de los resultados obtenidos en ejercicio de esta función será establecido de conformidad con la ley.

El voto de censura, dado por las tres quintas partes de los diputados, da lugar a la remoción del Vicepresidente o de los Ministros, según sea el caso. En el caso de la remoción del Vicepresidente en tres oportunidades, dentro de un mismo período constitucional, la Constitución faculta al Presidente de la República, como un mecanismo de equilibrio democrático, para disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas dentro de los sesenta días siguientes a la disolución para elegir una nueva legislatura, todo lo cual se hará mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros. No podrá disolverse la Asamblea Nacional en el último año de su período constitucional.

La Asamblea promoverá la organización y la participación ciudadana en los asuntos de su competencia y tendrá iniciativa en materia de leyes, enmienda, reforma y Asamblea Constituyente.

En lo relativo a la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, el número de comisiones queda limitado a quince, aun cuando mediante votación calificada de las dos terceras partes de los diputados se pueda disminuir o aumentar su número. Igualmente se definen las figuras del Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario y un Subsecretario de la Asamblea Nacional, remitiéndose al reglamento las formas de resolver las faltas temporales y absolutas de estos cargos.

La Comisión Delegada se integra con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los Presidentes de las Comisiones Permanentes atendiendo al criterio del conocimiento en una determinada materia que corresponde a sus integrantes.

En cuanto al control sobre los diputados, se busca el ejercicio efectivo y eficiente de la función parlamentaria, al tiempo que obliga a la vinculación

con las entidades federales y el pueblo. El Estado requiere un desarrollo legislativo acorde con los cambios del país y un eficiente control sobre la Administración Pública y el Gobierno. De allí que el ejercicio de la función parlamentaria sea a dedicación exclusiva, salvo las excepciones establecidas. Los diputados están obligados a mantener vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias, informándolos acerca de su gestión y la de la Asamblea; que rindan cuenta anualmente de la gestión y que estén sometidos al referendo revocatorio del mandato, con la consecuencia inmediata, en caso de producirse, de no poder ejercer cargos de elección popular dentro del período siguiente.

Un elemento imprescindible para el logro de lo señalado es asegurarle al diputado una retribución económica que asegure su independencia, sin que su condición de parlamentario implique privilegios personales ni abuso de las prerrogativas garantizadas por la Constitución ni la percepción de beneficios económicos indebidos.

Se consagra la inmunidad parlamentaria como una garantía del ejercicio autónomo de las funciones legislativas respecto de los otros poderes y como garantía para el mejor y efectivo cumplimiento de la función parlamentaria. Sin embargo, la inmunidad sólo está referida al ejercicio de las funciones parlamentarias desde el momento de la proclamación por parte del órgano electoral competente hasta la conclusión del mandato. Su desconocimiento por parte de los funcionarios públicos ocasiona sanciones de naturaleza penal que el legislador deberá establecer en la ley correspondiente.

En cuanto a los presuntos delitos cometidos por los diputados, conocerá el Tribunal Supremo de Justicia en forma privativa, siendo la única autoridad que, previa autorización de la Asamblea Nacional, podrá ordenar la detención o continuar el enjuiciamiento, según sea el caso. En caso de delito flagrante cometido por algún diputado, la autoridad competente pondrá a éste bajo custodia en su residencia y comunicará de manera inmediata el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.

El texto constitucional incorpora un conjunto de cambios en cuanto a la definición de la ley y en cuanto a las leyes orgánicas. La ley es todo

acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador, entendiéndose que para ello deberá seguirse el procedimiento que el propio texto constitucional establece.

Por otra parte, la Constitución establece cinco tipos de leyes orgánicas; las que ella misma denomina como tales, las que se dicten para organizar los poderes públicos, las que se dicten para desarrollar derechos constitucionales, las que sirvan de marco normativo a otras leyes y las que hayan sido calificadas como tales por la Asamblea Nacional, en cuyo caso éstas habrán de ser remitidas a la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, esto con el propósito de evitar el uso indiscriminado de tal denominación.

En cuanto a la iniciativa legislativa se incorporan al texto constitucional tres nuevos elementos de iniciativa, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Consejo Legislativo Estatal, cuando se trate de leyes relativas a los Estados. Se destaca la obligatoriedad de la Asamblea Nacional de discutir los proyectos de ley presentados por iniciativa ciudadana y el sometimiento de dichos proyectos a referendo aprobatorio, cuando no fuere discutido por la Asamblea.

En la etapa de discusión y aprobación de los proyectos de ley, se introduce la obligación de abrir procesos de consulta a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada. Cada proyecto de ley recibirá dos discusiones en el seno de la Asamblea, en días diferentes, no consecutivos. La primera discusión versará sobre la exposición de motivos y la pertinencia del proyecto de ley, leyéndose el articulado en conjunto, mientras que la segunda se realizará artículo por artículo.

Capítulo II

Del Poder Ejecutivo Nacional

La Constitución eleva el período presidencial a seis años debido a la modificación del sistema de controles politicosociales sobre el Ejecutivo Nacional. Y, como una innovación estructuralmente importante, desde el

punto de vista de la legitimidad y responsabilidad del Presidente en el ejercicio del Ejecutivo Nacional, se permite su reelección inmediata por una sola vez para un nuevo período.

Esta nueva regulación constitucional evita la irresponsabilidad política de los Presidentes que caracterizó el período republicano que culmina con la aprobación de la nueva Constitución. De esta manera, quien sea titular de la Presidencia puede ser evaluado políticamente por su gestión en dos oportunidades: la primera, cumplida más de la mitad del período presidencial de seis años, por la solicitud del veinte por ciento o más de los electores para efectuar un referendo revocatorio del mandato; y la segunda, por la postulación del Presidente a la reelección popular para un segundo mandato. En ambos casos, el pueblo determina la suerte del Presidente, confirmando su confianza para que se mantenga en el cargo, o retirándole su apoyo, con la consecuencia de su retiro forzado. En realidad, es un medio de profundización de la democracia mediante dos mecanismos de control social sobre la gestión del Estado que se particularizan en la sujeción del Presidente a la voluntad popular.

Una de las innovaciones más importantes del texto constitucional consiste en la sustancial modificación del sistema de gobierno, al incorporar un diseño de sistema semipresidencial que se puede calificar como flexible.

Este nuevo arreglo institucional se sustenta en dos importantes orientaciones: la primera, la distinción y separación orgánica flexible entre las funciones de jefatura de Estado y de jefatura de gobierno; y la segunda, el establecimiento de una nueva relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a manera de sistema de controles y equilibrios de poder.

La ingeniería constitucional del nuevo sistema de gobierno semipresidencial flexible se sustenta en la creación de la figura del Vicepresidente Ejecutivo. Esta nueva institución, a pesar de su denominación de Vicepresidente, es mucho más que la tradicional figura vicepresidencial que acostumbran los sistemas de gobierno americanos. En propiedad, el Vicepresidente que contempla la Constitución no es el típico cargo que tiene la función de resolver

la sucesión presidencial por la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la República. Más que ello, el Vicepresidente es una institución que comparte con el Presidente el ejercicio de su jefatura de gobierno y responde políticamente por la gestión general del gobierno frente al Parlamento.

Las funciones otorgadas por la Constitución al Vicepresidente de la República son esenciales para el normal desenvolvimiento del Ejecutivo Nacional y de las relaciones entre este y la Asamblea Nacional. La primera de ellas se refiere a la colaboración con el Presidente en la dirección de la acción del Gobierno y, como competencia que le es propia, la coordinación de la Administración Pública Nacional con las instrucciones que le imparta el Presidente. Esta función consagra a la Vicepresidencia en el medio fundamental de apoyo del Presidente y la convierte en una instancia de dirección y coordinación sobre la Administración Pública Nacional que supone, con la competencia de proponer el nombramiento y remoción de los Ministros, una jerarquía directa sobre éstos y sobre las demás autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En tal sentido, la Vicepresidencia es el órgano natural de rectoría del sistema de registro, seguimiento y control de las decisiones presidenciales, se produzcan éstas por cuentas ministeriales o en Consejo de Ministros, y de los sistemas de seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas sectoriales.

La segunda función del Vicepresidente corresponde a sus facultades para dirigir y coordinar el proceso descentralizador; para armonizar los intereses nacionales, estatales y municipales y para garantizar el debido equilibrio en el desarrollo económico social de las regiones. Estas facultades las ejerce el Vicepresidente de la República a través de la Presidencia del Consejo Federal de Gobierno, al cual se adscribe el Fondo de Compensación Interterritorial. La creación de este Fondo conlleva a la transformación del actual Fondo Intergubernamental para la Descentralización. De esta manera, el Vicepresidente es un doble instrumento o instancia para la coordinación, una coordinación horizontal del Gobierno Nacional y otra vertical entre los gobiernos territoriales.

La tercera función consiste en la asesoría que requiere el Presidente de la República como Jefe de Estado, para la formación de las políticas de Estado

de largo alcance en el tiempo. Esta función la ejerce el Vicepresidente al presidir el Consejo de Estado que crea la Constitución. Este Consejo se encuentra, además, integrado por representantes de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y de los gobernadores de los estados, convirtiéndolo en una instancia de confluencia de poderes para el acuerdo de políticas de Estado.

La cuarta función del Vicepresidente es la que lo encarga de las relaciones entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional. Función que convierte al Vicepresidente en el natural vocero del Gobierno ante la Asamblea Nacional.

Son estas funciones, más las atribuciones que el Presidente le puede delegar, las que convierten al Vicepresidente en un órgano fundamental para el funcionamiento del Estado, con poder suficiente para la coordinación interna del Poder Ejecutivo Nacional y la coordinación con los otros Poderes del Estado venezolano. El calificar el sistema presidencial como flexible se debe a que las atribuciones del Vicepresidente serán aún mayores en tanto el Presidente de la República le delegue sus propias atribuciones.

Por esta particular suma de funciones el Vicepresidente, como ejecutor de atribuciones de la jefatura de Gobierno, es sujetado por el control político de la Asamblea Nacional, como corresponde a un sistema de gobierno semipresidencial. Esta relación entre la Asamblea Nacional y el Vicepresidente se ha consagrado para permitir un clima de mayor comunicación entre el Legislativo y el Ejecutivo, que posibilite el acuerdo consensuado de políticas públicas y la colaboración general de los poderes en el cumplimiento de los fines y propósitos del Estado.

Una acción de gobierno que no cuente con cierto aval del Legislativo conllevaría, en algún momento, a la posibilidad de que la Asamblea Nacional aprobara un voto de censura sobre el Vicepresidente, con el cual quedaría automáticamente removido de su cargo. Pero, como equilibrio de este poder de control político de la Asamblea Nacional y para que la remoción constante de vicepresidentes no se convierta en una práctica obstruccionista, la Constitución sabiamente consagra la facultad del

Presidente de convocar a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional cuando ésta remueva por tercera vez un Vicepresidente dentro de un período presidencial de seis años. Esta facultad es de ejercicio discrecional por el Presidente.

Este doble control entre el Legislativo y el Ejecutivo constituye un sistema de equilibrio del poder que permite, además, las salidas institucionales a las crisis políticas o crisis de gobierno, incrementando el nivel de gobernabilidad de la democracia. Así se posibilita un rango de estabilidad politicoinstitucional para la democracia y se evitan las salidas extrainstitucionales.

En cuanto se refiere a la protección de los derechos de la persona humana, la Constitución regula adecuadamente el principio de responsabilidad en el ejercicio del Poder Público, al establecer que la declaración de los estados de excepción no eximen de responsabilidad al Presidente de la República, al Vicepresidente Ejecutivo o a los Ministros.

La sección primera de este Capítulo II es nítida en lo referente a las faltas absolutas o temporales del Presidente de la República. En este sentido, adquiere un rol de particular importancia el Vicepresidente Ejecutivo de la República, al ser el suplente formal del Presidente de la República en las diferentes hipótesis de faltas tanto absolutas como temporales que contempla el texto constitucional.

La Sección Segunda detalla las competencias del Presidente de la República. En este sentido hay aspectos a resaltar que significan una mayor flexibilidad en el manejo de los asuntos públicos y una conducción más operativa de la Administración Pública por parte del Presidente de la República. Así, y siguiendo la tendencia del derecho comparado, se le permite al Presidente fijar el número, denominación, competencia y organización de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica. Con esto se permite agilizar los trámites para hacer efectivas las exigencias de adaptabilidad

de las estructuras administrativas, convirtiéndose el Presidente en el verdadero rector de la Administración Pública Nacional.

Finaliza el Capítulo del Poder Ejecutivo Nacional creando la institución del Consejo de Estado que, en el derecho comparado, como nos lo demuestran las experiencias francesa y colombiana, ha marcado, con estructura y funciones análogas, pauta en la profesionalización del ejercicio del Poder Público. En Venezuela será un órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional que recomendará políticas de interés nacional en aquellos asuntos que el Presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran su opinión.

Queda así estructurado un Poder Ejecutivo Nacional moderno, dinámico, profesional, sujeto a controles políticos y al mismo tiempo generador de dinámicas políticas novedosas. Se trata de un capítulo que abre a Venezuela las puertas de una modificación profunda de sus instituciones políticas.

Capítulo III

Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia

El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado por la Constitución, al implicar fundamentalmente división de los poderes del Estado, imperio de la Constitución y las leyes como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y garantía procesal efectiva de los derechos humanos y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan la potestad constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Constitución y las leyes, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituyen el Poder Judicial y el Sistema de Justicia que se consagra en el Capítulo III del

Título V de la Constitución, configurándolo como uno de los poderes del Estado.

En el referido Capítulo, la Constitución, con fundamento en el principio de soberanía, declara que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Sobre esta base, el Texto Constitucional constituye el sistema de justicia integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario y los abogados autorizados para el ejercicio.

Por otra parte, se incorporan al sistema de justicia, los medios alternativos para la resolución de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el objeto de que el Estado los fomente y promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades, cámaras de comercio y la sociedad civil en general.

Asimismo, siendo que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado aunque sólo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es decir, la ejecución forzosa de las sentencias, la Constitución incorpora al sistema de justicia a los ciudadanos que participan en el ejercicio de la función jurisdiccional integrando jurados o cualquier otro mecanismo que la ley prevea.

Además, como consecuencia del principio y derecho a la justicia gratuita consagrado en el Texto Constitucional, se establece que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni para exigir pago alguno por sus servicios.

El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces será por concursos de oposición públicos, que aseguren la idoneidad, capacidad y probidad de los jueces designados. En tal virtud, todos los cargos de jueces o magistrados de tribunales o cortes, unipersonales o colegiados, distintos al Tribunal Supremo de Justicia, deberán ser designados mediante concurso público de oposición.

Se prevé que la ley regule lo referente a la capacitación y especialización de los jueces con la participación de las universidades, las cuales deberán organizar estudios universitarios al nivel de posgrado en el área de derecho, dirigidas a la especialización en la rama judicial.

La jurisdicción penal militar será integrante del Poder Judicial y sus jueces serán seleccionados por concurso. La competencia de los tribunales militares se limita a la materia estrictamente militar. En todo caso, los delitos comunes, violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, serán procesados y juzgados por los tribunales ordinarios, sin excepción alguna.

Se constituye el Tribunal Supremo de Justicia como el máximo tribunal de la República y rector del Poder Judicial, el cual estará integrado por las Salas Constitucional, Politicoadministrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social.

Los Magistrados del Tribunal Supremo durarán en ejercicio de sus funciones doce años, no pudiendo ser reelectos. A los efectos de su elección se prevé la postulación correspondiente ante el Comité de Postulaciones Judiciales y un procedimiento especial que tiene por objeto una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial de los candidatos. Será en definitiva la Asamblea Nacional la encargada de elegir a los Magistrados.

Corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el Gobierno y Administración del Poder Judicial, así como todo lo relacionado con la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y la elaboración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial.

Capítulo IV

Del Poder Ciudadano

Adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales del Libertador Simón Bolívar, la Constitución rompe con la clásica división de los poderes públicos

y crea los Poderes Ciudadano y Electoral. El primero de ellos se inspira, en parte, en el Poder Moral propuesto por el Libertador en su proyecto de Constitución presentado al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. El Poder Electoral por su parte, encuentra su inspiración en el Proyecto de Constitución que el Libertador redactó para Bolivia en 1826.

El Libertador concibió el Poder Moral como la institución que tendría a su cargo la conciencia nacional, velando por la formación de ciudadanos a fin de que pudiera purificarse “lo que se haya corrompido en la República; que acuse la ingratitude, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos”. Con ello, Simón Bolívar quería fundar una República con base en un pueblo que amara a la patria, a las leyes, a los magistrados, porque esas “son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano”.

El Poder Moral del Libertador tenía entre sus misiones velar por la educación de los ciudadanos, en cuyo proceso se debía sembrar el respeto y el amor a la Constitución y a las instituciones republicanas, sobre la base de que “si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo”.

Inspirada en esas ideas y adaptándolas a nuestro tiempo, la Constitución crea el Poder Ciudadano, el cual se ejercerá por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República.

El Poder Ciudadano es independiente de los demás poderes públicos y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa, para lo cual se les asignará una partida anual variable dentro del presupuesto general del Estado.

En general, los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo la prevención, investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Además, deben velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, por el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la

actividad administrativa del Estado. De igual forma, deben promover en el ámbito de sus competencias, la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo, todo ello conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes.

Recogiendo una institución que nace en los países escandinavos y que ha tenido auge en Europa y en gran parte de América Latina, se crea la Defensoría del Pueblo como órgano del Consejo Moral Republicano que tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo representa la institución del Poder Público más vinculada y cercana a los ciudadanos, cuyas funciones son esenciales para controlar los excesos del poder y garantizar que el sistema democrático no sólo sea una proyección constitucional, sino una forma de vida en sociedad con eficacia y realidad concreta, donde los derechos e intereses de los ciudadanos sean respetados.

Se atribuyen al Defensor del Pueblo las más amplias funciones y competencias en las materias antes señaladas, tales como velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República.

Al Ministerio Público se le atribuyen todas aquellas funciones necesarias para el cumplimiento de los fines que debe gestionar ante la Administración de Justicia, tales como garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.

La Contraloría General de la República, por su parte, será el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, para lo cual le otorga las más amplias competencias. Se prevé un sistema nacional de control fiscal, el cual será desarrollado por la ley.

Capítulo V Del Poder Electoral

Como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, se crea una nueva rama del Poder Público, el Poder Electoral, ejercido por órgano del Consejo Nacional Electoral que tiene por objeto regular el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas que garanticen el advenimiento del nuevo ideal u objetivo democrático. Una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana.

Para dimensionar su contenido es necesario integrar las disposiciones en este Capítulo V del Título V con las establecidas en el Capítulo IV de los derechos políticos y del Referendo Popular perteneciente al Título III del nuevo texto constitucional.

El nuevo esquema conlleva una modificación sustancial en la práctica electoral sobre la cual se edificó el anterior modelo, desde la concepción del sufragio como derecho, hasta la consagración de nuevas formas de participación que trascienden, con creces a la simple formulación de propuestas comiciales. Se expresa esta nueva concepción a través de la implementación de instituciones políticas como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones revisten el carácter de vinculante, entre otros. Son estos, entonces, los novedosos medios que le garantizan al pueblo la participación y protagonismo en el ejercicio de su soberanía.

En tal sentido, resultan trascendentes las formas en que el ciudadano puede participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, pues ella no se limita a la intermediación de los partidos políticos, sino que puede hacerse en forma directa, en perfecta sujeción al concepto de soberanía que en forma expresa prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional.

En general, se atribuye al Poder Electoral la facultad atinente a la constitución, renovación y cancelación de asociaciones con fines

políticos, lo que viene relacionado con el origen o nacimiento de dichas organizaciones al mismo tiempo que con su funcionamiento y desarrollo, el cual se sujeta al estricto respeto de los mecanismos de consulta democrática y participativa consagrados en la Constitución, a los cuales deben igualmente sujetarse los estatutos que regulen la vida de estas instituciones.

Como principios que debe desarrollar y garantizar la legislación en materia electoral se encuentran la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización y la representación proporcional en las elecciones. Estos principios constituyen atributos o cualidades que deben conformar los nuevos sistemas electorales que se adopten y, en tal sentido deben ser asumidos como elementos diferenciadores de los que constituyen las bases de integración de los distintos cargos de elección popular, la que referida fundamentalmente a la Asamblea Nacional está integrada por tres condicionantes, a saber: la base poblacional, la representación federativa de cada entidad y la representación de las minorías, en nuestro caso los pueblos indígenas. Se adopta de esta manera un criterio de integración cerrado, conformado por un número fijo de representantes cuya modificación sólo vendría dada por el incremento de la base poblacional; tal es la interpretación que se deriva de la disposición contenida en el artículo 186, propia de la concepción unicameral que para el Poder Legislativo Nacional preceptúa el texto constitucional, convertido en virtud de tal disposición en un claustro legislativo.

Especial mención, en la consagración de este nuevo Poder, merece por su novedad la integración del Registro Civil y Electoral, cuya organización, dirección y supervisión se atribuye al Poder Electoral; busca esta fórmula la posibilidad de explotar el desarrollo de mecanismos armónicos que permitan la conformación y depuración automática de un registro nacional como base fundamental para garantizar la transparencia de dicha institución.

Así, como rama del Poder Público, el Poder Electoral se rige por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y

participación ciudadana, descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinio, para lo cual se crea un Comité de Postulaciones Electorales integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad, organismo que tendrá a su cargo hacer viables las elecciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral, que en un número de cinco, provienen tres de la sociedad civil, uno de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales y uno del Poder Ciudadano.

Asimismo, el Poder Electoral asume no sólo las funciones que eran ejercidas por el anterior Consejo Nacional Electoral, extendidas o ampliadas a la organización y realización de los actos electorales destinados a la elección de cargos públicos, sino también las atinentes al régimen refrendario, elecciones de sindicatos, gremios profesionales y asociaciones con fines políticos, cuya regulación se remite a la Ley. Igualmente se establece la posibilidad de que el Poder Electoral participe en la organización de procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil, previa solicitud de éstas con miras al desarrollo de vías o mecanismos de autofinanciamiento.

En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos, omisiones, vías de hecho emanados del Poder Electoral, a propósito de los procesos comiciales referidos y a su funcionamiento, el nuevo texto constitucional creó la Jurisdicción Contencioso Electoral, ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

TÍTULO VI DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO

Capítulo I Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía

El Título VI de la Constitución se refiere al sistema socioeconómico. El régimen socioeconómico no se define de forma rígida, no obstante se consagran principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre

competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y solidaridad, fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado, evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, pero sentando las bases de una economía de respeto a la acción individual.

El Estado no está ausente, tiene un papel fundamental como regulador de la economía para asegurar el desarrollo humano integral, defender el ambiente, promover la creación de valor agregado nacional y de fuentes de trabajo, garantizando la seguridad jurídica para fomentar, junto con la iniciativa privada, el desarrollo armónico de la economía nacional y la justa distribución de la riqueza. En suma, se plantea un equilibrio entre Estado y mercado, en razón de que el problema no es mas Estado o menos Estado, sino un mejor Estado y el mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas; ese equilibrio debe prevalecer entre productividad y solidaridad, entre eficiencia económica y justicia social, dando libertad a la iniciativa privada y preservando el interés del colectivo.

El Estado debe orientar las políticas macroeconómicas y sectoriales para promover el crecimiento y el bienestar. Se reconoce como esencial la acción reguladora del Estado para establecer un marco normativo estable que brinde seguridad jurídica a la actividad económica, postulando una economía abierta a las inversiones extranjeras y garantizando que éstas estarán sujetas a las mismas condiciones de la inversión nacional.

Por conveniencia nacional el Estado queda facultado para reservarse determinadas actividades económicas, de manera particular en el sector minero y petrolero. De forma transparente se reconoce que el dominio sobre esas áreas puede hacerse de Acuerdo con el sector privado, dejando claramente establecido que el Estado puede entrar en convenios de asociación con el sector privado para el desarrollo y la explotación de esas actividades. Se le otorga rango constitucional a la nacionalización petrolera, pero al mismo tiempo establece la posibilidad de continuar en convenios de asociación con el sector privado siempre y cuando sean de interés para el país, y no desnaturalice el espíritu, propósito y razón de la nacionalización petrolera.

El Estado se compromete a ejercer acciones prioritarias en algunos sectores económicos para darle dinamismo, sustentabilidad y equidad al desarrollo económico, tales como la actividad agropecuaria, la pequeña y mediana industria, el turismo, el sector de cooperativas y demás formas de la economía popular. La actividad de producción de alimentos queda establecida como esencial para el país, consagrándose el principio de la seguridad alimentaria en función del acceso oportuno y permanente de alimentos por parte de los consumidores.

Capítulo II

Del régimen fiscal y monetario

Otra importante innovación del texto fundamental es la introducción de principios constitucionales dirigidos a establecer como una obligación del Estado velar por la estabilidad macroeconómica, promoviendo un ambiente propicio para el crecimiento y la generación de bienestar para los ciudadanos.

La estabilidad macroeconómica se establece con base en tres principios fundamentales, a saber equilibrio fiscal y un nivel prudente de deuda pública; autonomía del Banco Central en el cumplimiento de sus funciones, con un claro mecanismo de rendición de cuentas y coordinación transparente de las políticas macroeconómicas.

Sección primera: del régimen presupuestario

El principio de equilibrio fiscal obliga que las finanzas públicas estén en orden, y en un plazo razonable de tiempo los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios; ese plazo razonable de tiempo estará definido de acuerdo con la ley, en el plazo del marco plurianual del presupuesto. El equilibrio fiscal además debe ser consistente con un nivel prudente de deuda, aspectos sobre los cuales deberá hacerse legislación específica.

Se establece un límite al endeudamiento de acuerdo con la ley. El Estado debe mantener un nivel prudente de deuda pública acorde con el tamaño

de la economía, la inversión productiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda.

Al establecer una regla de equilibrio presupuestario sostenible se dota a la política económica de un efectivo antídoto contra el endeudamiento público descontrolado. En el marco plurianual del presupuesto, que se fijará por ley, los ingresos ordinarios tienen que ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios, es decir el Estado no puede endeudarse para cubrir el servicio de intereses de la deuda. Esta noción de equilibrio en el marco plurianual implica que es posible tener déficit en uno o dos años y luego corregir el desequilibrio, de forma de compensar déficits o superávits fiscales en el tiempo.

Se definen los plazos, reglas y facultades del Parlamento en la aprobación del presupuesto. En cuanto a los créditos adicionales, se restringe la opción de tal mecanismo a la existencia efectiva de recursos en tesorería, así se logra una disposición sana en el manejo presupuestario para enfrentar situaciones imprevistas, sin introducir perturbaciones en la disciplina fiscal, gracias a la presencia de una regla efectiva de equilibrio presupuestario, la cual es una de las innovaciones más importantes de la Constitución.

Sección segunda: del sistema tributario

Se mantiene que en la Constitución sólo deben estar los principios básicos que definan y regulen el sistema tributario. Este criterio de brevedad y sencillez coincide con recientes Constituciones de América Latina.

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida de la población, y deberá sustentarse para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Se establece que la evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente.

Como disposición transitoria se prevé que dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional dicte

una reforma del Código Orgánico Tributario que contribuya a modernizar la administración tributaria, ampliando las facultades de regulación, control y penalización del fraude fiscal.

Sección tercera: del sistema monetario nacional

Se le da rango constitucional a la autonomía del Banco Central de Venezuela en el ejercicio de sus funciones para alcanzar un objetivo único y exclusivo. Este se precisa como el de estabilizar el nivel de precios para preservar el valor de la moneda. La autonomía del Banco Central implica que la autoridad monetaria debe ser independiente del Gobierno y se prohíbe constitucionalmente toda práctica que obligue al Banco Central a financiar o convalidar políticas fiscales deficitarias. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no podrá emitir dinero sin respaldo.

La autonomía también implica asumir responsabilidades ante la sociedad y exige establecer un mecanismo de rendición de cuentas ante el Poder Nacional, en particular ante la Asamblea Nacional como representación de la voluntad popular. Se establece que el incumplimiento del objetivo, sin causa justificada, dará lugar a la remoción del directorio de acuerdo con la ley. Es decir, todo lo relativo a las causas específicas y mecanismo preciso de remoción, se deja a la legislación correspondiente.

Esto se complementa con la vigilancia y supervisión que deben establecer los organismos e instancias competentes sobre la gestión del Banco Central de Venezuela, como la Contraloría General de la República y el organismo público de supervisión bancaria. La labor de la Contraloría se ceñirá al control posterior y tan sólo de la gestión administrativa, evaluando la legalidad, eficiencia y oportunidad del gasto, referida ésta a la correcta ejecución temporal del mismo en cada ejercicio.

El presupuesto de gastos de operación del Banco Central requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional. Este presupuesto está sólo referido a los gastos operativos, tanto corrientes como de capital, así como a los gastos por acuñación y emisión de especies monetarias, proyectos de inversión y otros gastos administrativos especiales. No se considera sujeto

al Parlamento lo relativo al presupuesto de política monetaria y a las inversiones financieras del Banco Central.

En cuanto a la designación de las autoridades la Constitución remite el mecanismo a la ley, el cual deberá contemplar un procedimiento público de evaluación de los méritos y credenciales de los postulados a dichos cargos. La ley que regule el Banco Central de Venezuela deberá atribuir al Poder Ejecutivo la designación del presidente del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus directores, y establecerá los términos de participación del Poder Legislativo en la ratificación de estas autoridades. Se deja también a la ley, mediante disposición transitoria expresa, los detalles de las funciones, organización, así como algo muy importante: un régimen de incompatibilidades para sus altos funcionarios, para evitar los conflictos de intereses y el manejo de información privilegiada.

Sección cuarta: de la coordinación macroeconómica

Dada la relevancia que tienen en Venezuela los efectos monetarios de la gestión fiscal, se plantea la necesidad de establecer adecuadas reglas que garanticen la coordinación de política macroeconómica, que fijen el marco institucional en que se deben desarrollar políticas específicas.

El principio de coordinación requiere que el Banco Central de Venezuela y el Ministerio encargado de las Finanzas coordinen sus políticas y a través de un programa o acuerdo que defina un curso anunciado con anticipación, consistente con el logro de determinados objetivos. Se establece un mecanismo para la resolución de conflictos entre un Banco Central de Venezuela autónomo y el Fisco, en función de evitar las tradicionales contradicciones entre la política monetaria y la fiscal.

Se plantea un conjunto de reglas básicas de transparencia y coordinación en el cual se desarrollen de manera armónica las políticas fiscal, cambiaria y monetaria, estableciendo que los objetivos y acciones deben ser anunciadas, el compromiso de coordinación entre el Banco Central de Venezuela y el Fisco Nacional y que los responsables de esas políticas deben rendir

cuentas de sus actuaciones, en los términos que fije la ley. Esto no es otra cosa que la introducción de reglas claras para el desarrollo de la actividad económica, como premisa básica para generar y mantener la confianza.

Finalmente, se le otorga rango constitucional al Fondo de Estabilización Macroeconómica para garantizar la estabilidad del presupuesto y conservar, más allá de las contingencias por cambios de gobierno y de las leyes, un dispositivo que permita amortiguar las fluctuaciones de los ingresos fiscales.

TÍTULO VII DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Capítulo I Disposiciones generales

En el Título VII de la Constitución se definen los principios que rigen la seguridad de la Nación, la cual es responsabilidad no sólo del Estado, sino de todos los venezolanos, así como de las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico nacional.

Se crea un Consejo de Defensa de la Nación con el objeto de que sea el máximo órgano administrativo de consulta, para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico, sin perjuicio de las atribuciones que tengan los diferentes órganos del Estado conforme a esta Constitución y las leyes. En tal sentido le corresponde establecer la dirección estratégica de la Nación, para prevenir o minimizar cualquier amenaza. Dicho Consejo estará integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Presidente del Consejo Moral Republicano, y los ministros de los sectores de defensa, la seguridad interior, relaciones exteriores y de planificación.

Se reserva al Estado la posesión y uso de armas de guerra. La Fuerza Armada Nacional, por órgano del Presidente de la República, quien actuará en su

carácter de Comandante en Jefe, reglamentará y controlará, de acuerdo con la ley, todo lo referente a otras armas, municiones y explosivos.

Se faculta al Ejecutivo Nacional para clasificar y divulgar aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación, en los términos que la ley establezca, siempre que ello no signifique una violación del libre ejercicio de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Esta facultad, en todo caso, debe estar sometida a la revisión judicial y no podrá ser un obstáculo de la función que ejercen los tribunales de la República.

Capítulo II

De los principios de seguridad de la Nación

En el Capítulo II de este Título se establecen los principios de seguridad de la Nación, la cual se fundamentará en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional.

Con el objeto de promover el desarrollo de las zonas fronterizas venezolanas, dichas áreas se declaran de atención prioritaria. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras que será regulada por la ley, que permitirá establecer su amplitud, regímenes especiales económicos y sociales, para promover el desarrollo de sus actividades productivas y mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial.

Capítulo III

De la Fuerza Armada Nacional

Para la mejor ejecución de los altos fines que le han sido encomendados por la Constitución, se unifica a las Fuerzas Armadas Nacionales en un cuerpo militar uniforme denominado la Fuerza Armada Nacional, pero manteniendo cada uno de los cuatro componentes integrantes de la institución, sus características y especificidad como Fuerza; siendo esta institución esencialmente profesional, sin militancia política alguna, subordinada a la autoridad civil, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley.

En el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de la Nación y de la Constitución, en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.

La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionarán de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

Se establece como responsabilidad de los órganos que integran la Fuerza Armada Nacional, la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. En todo caso, la Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, considerado éste como el estado en el cual se administra la justicia, se consolidan los valores de libertad, democracia, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia e imperio

de la Constitución y la ley. Todo ello armonizado en un escenario donde predominan y se practican los principios constitucionales y preceptos bolivarianos, en un clima de absoluta participación democrática.

Finalmente, siguiendo una tendencia en derecho comparado con el objeto de no establecer discriminaciones entre los ciudadanos, se permite que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad ejerzan el derecho al sufragio de conformidad con la ley. No obstante, se les mantiene la prohibición de optar a cargo de elección popular, o participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

En materia de ascensos militares, se establecen criterios para lograr la transparencia y objetividad, a través de la publicación del escalafón de méritos periódicamente y la determinación de las plazas vacantes, eliminándose el factor de corrección por ser muy subjetivo. Este nuevo proceso permite ascender cualquier día del año y que el personal conozca su ubicación en el escalafón de méritos. El ascenso será un derecho, si se han cumplido los requisitos necesarios, acabando con la discrecionalidad de las juntas de evaluación, las cuales se limitarán a respetar los resultados de las calificaciones de mérito.

Capítulo IV

De los órganos de seguridad ciudadana

Con el objeto de mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos reconocidos por la Constitución, se le impone al Ejecutivo Nacional la obligación de organizar, de conformidad con la ley, un cuerpo uniformado de policía nacional, un cuerpo de investigaciones científicas, penales y administrativas, un cuerpo de bomberos y de administración de emergencias de carácter civil y una organización de protección civil y administración de desastres.

TÍTULO VIII DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN

Capítulo I De la garantía de esta Constitución

Siguiendo una tendencia presente en España, Francia, Italia, Portugal, Rumania y en algunos países latinoamericanos, cuyas constituciones regulan la justicia constitucional en un título o capítulo distinto del que se refiere al Poder Judicial, la Constitución incluye en el Título VIII un capítulo denominado *De la Garantía de esta Constitución*, que contiene las disposiciones fundamentales sobre la justicia constitucional y consagra las principales competencias que corresponden a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho Capítulo da eficacia a los postulados contenidos en el artículo 7 del Título I, que consagra los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, base sobre la cual descansa la justicia constitucional en el mundo.

En el mencionado Capítulo se describe el sistema venezolano de justicia constitucional y al efecto se indica que, todos los jueces de la República están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en su texto y en las leyes, reafirmandose de esta manera que la justicia constitucional en Venezuela la ejercen todos los tribunales de la República, no sólo mediante el control difuso de la constitucionalidad, sino además, por otros medios, acciones o recursos previstos en la Constitución y en las leyes, como la acción de amparo constitucional, destinada a ofrecer una tutela judicial reforzada de los derechos humanos reconocidos y garantizados expresa o implícitamente en la Constitución.

Como consecuencia de ello, se eleva a rango constitucional una norma presente en nuestra legislación desde 1887, característica de nuestro sistema de justicia constitucional y según la cual, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, serán aplicables en todo caso las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente. En otras palabras,

se consagra el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones normativas.

Al mismo tiempo, se consagra el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de los demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, el cual corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se trasladaron a la Sala Constitucional las competencias que en esta materia tenía la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, con el objeto de especializar el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional y descongestionar de atribuciones a la nueva Sala Plena, para que sólo ejerza las competencias que le son asignadas en el artículo 266, numerales 2 y 3 del texto constitucional, no teniendo en consecuencia, competencia ni atribución alguna en materia constitucional.

La exclusividad de la Sala Constitucional en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, implica que sólo a dicho órgano le corresponde ejercer el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, pero no impide que la propia Constitución o las leyes, le atribuyan otras competencias en materia constitucional.

De esta forma, se esboza el sistema venezolano de justicia constitucional, reafirmandose la coexistencia de los métodos de control concentrado, difuso y extraordinario de la constitucionalidad, los cuales se ejercen a través de la acción popular de inconstitucionalidad, la aplicación preferente de la Constitución respecto a leyes o normas inconstitucionales en un caso concreto, y la acción de amparo.

Ante la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron algunas propuestas con el objeto de crear una Corte o Tribunal Federal Constitucional, en lugar de una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, prevaleció por consenso esta última tesis. Sin embargo, la Constitución en el Capítulo referido a la *Garantía de esta Constitución*, dota a la Sala Constitucional del carácter y de las competencias que

tiene en derecho comparado cualquier Corte o Tribunal Constitucional. Por ello se indica que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación, cualidad y potestades que únicamente posee en Sala Constitucional dado que ésta ejerce con exclusividad el control concentrado de la constitucionalidad.

En efecto, las facultades interpretativas que en tal sentido se otorgan al Tribunal Supremo de Justicia, en consonancia con las características básicas de la justicia constitucional en derecho comparado, sólo pueden ser ejercidas por órgano de la Sala Constitucional, pues a ella le corresponde exclusivamente el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Además, con fundamento en el principio de división de poderes, tales facultades no pueden ejercerse de oficio o mediante *acuerdos*, sino con motivo de una acción popular de inconstitucionalidad, acción de amparo, recurso de interpretación de leyes u otro caso concreto de carácter jurisdiccional cuya competencia esté atribuida a la Sala Constitucional.

En esta materia, se consagra una herramienta indispensable para que la Sala Constitucional pueda garantizar la supremacía y efectividad de las normas constitucionales. Así, se indica que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales serán vinculantes para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, todo ello con el objeto de garantizar la uniforme interpretación y aplicación de tales normas y principios.

En todo caso, la ley orgánica respectiva establecerá los correctivos y las sanciones necesarias para aquellas Salas del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de la República que violen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas o principios establezca la Sala Constitucional. Del mismo modo, la ley orgánica deberá consagrar un mecanismo de carácter extraordinario mediante el cual la Sala Constitucional pueda revisar los actos o sentencias de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus

normas o principios haya previamente fijado la Sala Constitucional, a fin de dar eficacia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución consagrados en el artículo 7, conforme a los cuales todos los órganos que ejercen el poder público, sin excepción, están sujetos a la Constitución.

En definitiva, el carácter vinculante de las interpretaciones de las normas y principios constitucionales será el principal instrumento de la Sala Constitucional para fortalecer la justicia constitucional, darle eficacia al Texto Fundamental y brindar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.

En lo que atañe a las competencias de la Sala Constitucional, el fundamento de aquellas que le atribuye la Constitución y de las que se le asignarán mediante ley, está representado por los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución consagrados en el artículo 7 y en virtud de los cuales, todo acto del Poder Público, sin excepción, debe estar sometido al control constitucional. Por tal razón, a la Sala Constitucional se le atribuye competencia para controlar la constitucionalidad de todos los actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. En todo caso, la ley orgánica respectiva garantizará que ningún órgano del Poder Público quede fuera del control constitucional, estableciendo entre otros aspectos, la competencia de la Sala Constitucional para controlar la constitucionalidad de las actuaciones de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el mecanismo extraordinario que considere más adecuado.

Con base en lo anterior, se atribuye a la Sala Constitucional competencias en ejercicio del control represivo de la constitucionalidad, para declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales, Constituciones y leyes estatales, ordenanzas municipales y demás actos dictados por cualesquiera de los órganos que ejercen el Poder Público, en ejecución directa e inmediata de la Constitución.

En materia de control preventivo, se atribuye a la Sala Constitucional la potestad de verificar la constitucionalidad de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.

En derecho comparado, una de las principales funciones de la justicia constitucional es el control de la constitucionalidad de los acuerdos y tratados internacionales, a través de un control preventivo que se ejerce antes de su ratificación y entrada en vigencia. Particularmente en las constituciones europeas, así como en varias constituciones de países de América Latina, se prevé ese mecanismo con el objeto de que las relaciones entre el derecho internacional público o el derecho comunitario, por una parte, y el derecho interno de cada Estado, por la otra, se presenten con la mayor armonía y uniformidad posible.

Se consideró necesario el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales dado que luego del proceso de conclusión de un tratado internacional, es decir, de su ratificación y entrada en vigencia por las vías previstas en el derecho constitucional y en el derecho internacional público, la eventual y posterior declaración de inconstitucionalidad del mismo o de alguna de sus disposiciones por parte de la Sala Constitucional no podría, en principio, ser opuesta como una justificación para incumplir dicho tratado sin que se comprometiera la responsabilidad internacional de la República.

En todo caso, el objetivo de ese mecanismo de control preventivo, no sólo es que se verifique la constitucionalidad de un acuerdo o tratado internacional sin que se comprometiera la responsabilidad internacional de la República, sino además que, en el caso de que alguna de sus disposiciones resulte inconstitucional, se ratifique con la debida reserva, siempre que se desee su ratificación, o si el mismo no admite reservas, se evalúe la necesidad y conveniencia de ratificarlo luego de una enmienda o reforma de la Constitución en los aspectos que sean necesarios, para lograr así la mayor armonía posible en las relaciones entre el derecho internacional o comunitario y el derecho interno venezolano.

La potestad de activar el control preventivo de los tratados internacionales corresponderá al Presidente de la República o a la Asamblea Nacional, siendo facultativo su ejercicio. Se descartó así la posibilidad de un control preventivo con carácter obligatorio, dado que podría traducirse en un obstáculo para la fluidez y la buena marcha de las relaciones internacionales de la República.

Otra competencia de la Sala Constitucional en materia de control preventivo será la de verificar la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación, conforme al procedimiento establecido en el Título V Capítulo I Sección Cuarta de la Constitución, para el caso del reparo presidencial fundamentado en razones de inconstitucionalidad. En esta materia, la Asamblea Nacional Constituyente consideró inconveniente extender la legitimación para activar el mecanismo de control preventivo a otras personas con determinado interés u órganos del Poder Público distintos al Presidente de la República. Al respecto, se tuvo en cuenta que con posterioridad a la promulgación de una ley, todas las personas tienen a su alcance la acción popular clásica del sistema de justicia constitucional venezolano y, además, la Sala Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho comparado, en virtud del cual puede dictar cualquier medida que fuere necesaria para proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de la Constitución.

Finalmente, en esta materia, conforme al Título V Capítulo I Sección Cuarta de la Constitución, la Sala Constitucional ejercerá el control preventivo de la constitucionalidad del carácter orgánico de una ley que haya sido calificada como tal por la Asamblea Nacional.

Aunado a ello e inspirada nuevamente en una tendencia presente en derecho comparado, la Constitución atribuye a la Sala Constitucional la potestad para decidir sobre la inconstitucionalidad de las omisiones legislativas, mecanismo que ha tenido un auge creciente en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Hungría y, especialmente, Portugal.

La inconstitucionalidad por omisión se produce por la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que impida su eficaz aplicación. Con este mecanismo se persigue evitar situaciones como las que se originaron en el caso del artículo 49 de la Constitución de 1961 y la falta de una legislación sobre amparo constitucional, durante casi treinta años.

En lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, la Sala Constitucional tendrá importantes funciones. En primer lugar, con el objeto de reforzar la protección de los derechos humanos reconocidos y garantizados expresa o implícitamente en la Constitución, se acoge un mecanismo consagrado en alguna Constitución de América Latina, en virtud del cual la Sala Constitucional debe, en todos los casos y aun de oficio, controlar la constitucionalidad de los decretos que declaren estado de excepción. Esta será la única competencia que podrá ejercer de oficio la Sala Constitucional y ello por tratarse de la protección de los derechos humanos, razón por la cual se ha previsto expresamente en el texto constitucional.

Además, con motivo de su creación, de la entrada en vigencia de la Constitución y de la naturaleza esencialmente constitucional de los derechos humanos y de la acción de amparo, la Sala Constitucional podrá asumir las competencias que en materia de amparo constitucional tenían las diferentes Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, en los casos de amparo autónomo contra altas autoridades de rango constitucional, amparo contra decisiones judiciales y apelaciones o consultas en amparo, dado que la Sala Constitucional pasa a ser la Sala del Tribunal Supremo de Justicia con la competencia afín para conocer y decidir tales asuntos.

Por su parte, como consecuencia de lo anterior y dado que sólo la Sala Constitucional será competente para resolver las acciones de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia, la ley orgánica respectiva deberá eliminar la acción cautelar de amparo que se ejerce conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad y que permite a las Salas Políticoadministrativa y Electoral, suspender los efectos de los actos administrativos cuya nulidad les corresponde conocer y decidir. Para ello, la legislación deberá dotar al juez contencioso administrativo de todo el poder cautelar necesario para decretar de oficio o a instancia de parte, cualquier tipo de medida cautelar que fuere necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva de los administrados y el restablecimiento de sus situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso de que se trate, bien sea a través de la suspensión de los efectos del acto administrativo

correspondiente, o a través de órdenes de hacer o no hacer, incluyendo el pago de sumas de dinero, que se impongan a la administración dependiendo del caso concreto.

De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de los administrados y garantizar su derecho de libre acceso a la justicia, la ley orgánica deberá eliminar la carga que tienen los administrados de agotar la vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso administrativo de nulidad, lo cual debe quedar como una opción a elección del interesado, pero no como un requisito de cumplimiento obligatorio. Aunado a ello, la legislación deberá establecer expresamente que en caso de que un acto administrativo estuviere viciado de inconstitucionalidad o de algún vicio que acarree su nulidad absoluta, no operará en modo alguno, el plazo de caducidad para el ejercicio del recurso contencioso administrativo de nulidad. Lo anterior tiene por objeto ofrecer al administrado una protección de sus derechos humanos acorde con el principio de progresividad consagrado en la Constitución, una vez eliminada la acción de amparo cautelar contra actos administrativos.

Por otra parte, consecuente con lo antes expuesto, la ley orgánica respectiva eliminará la acción de amparo cautelar que se ejerce conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas, teniendo en cuenta que en este sentido la Sala Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho comparado, en virtud del cual puede decretar cualquier medida cautelar que fuere necesaria para proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de la Constitución, incluyendo la suspensión de los efectos de la norma cuya nulidad se solicite, únicamente para la situación concreta de los accionantes, partes o terceros que intervinieren en el proceso y mientras dure el juicio de nulidad correspondiente.

La Constitución establece como competencia de la Sala Constitucional resolver las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos que ejercen el Poder Público. Al respecto, destacan dos elementos esenciales; en primer lugar, que se trata de controversias entre cualesquiera de los órganos que la Constitución prevé en la distribución

horizontal o vertical del Poder Público y, en segundo lugar, que deben tratarse de controversias constitucionales, es decir, de aquellas cuya decisión depende del examen, interpretación y aplicación de normas constitucionales, tales como las que se refieren al reparto competencial entre los diferentes órganos del Estado, especialmente, las que distribuyen el poder en los niveles nacional, estatal y municipal.

De esta forma, todas aquellas controversias constitucionales entre la República y alguno de los estados o municipios, es decir, entre el poder central y el descentralizado territorialmente, serán resueltas por la Sala Constitucional dentro del procedimiento que se establecerá en la ley orgánica respectiva. En todo caso, esta atribución tiene por objeto que la Sala Constitucional como garante y máximo defensor de los principios consagrados en el Texto Fundamental ajuste la actuación de los órganos que ejercen el Poder Público, al cauce constitucional.

Finalmente y al margen de su competencia para conocer de acciones de amparo, se atribuye a la Sala Constitucional la competencia para revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad, a través de un mecanismo extraordinario que deberá establecer la ley orgánica que regule la jurisdicción constitucional, sólo con el objeto de garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia del Texto Fundamental y la seguridad jurídica.

Ahora bien, la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni debí entenderse como parte de los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitución, sino, según lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales.

Por ello, no siendo un derecho y teniendo en cuenta que el legislador puede ensayar y errar en forma evolutiva en la búsqueda del mecanismo extraordinario más adecuado, la Asamblea Nacional Constituyente decidió

dejar a la ley orgánica respectiva su desarrollo concreto. Siendo así, la ley orgánica podrá establecer, por ejemplo, un mecanismo extraordinario de revisión de ejercicio discrecional por la Sala Constitucional, tal como el *writ of certiorari* que utiliza la Suprema Corte de los Estados Unidos de América; un mecanismo cuyos rasgos de discrecionalidad no sean absolutos, como el utilizado por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania; o bien, un mecanismo cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia estén preestablecidos en la ley, como el que se puede evidenciar en algunos ejemplos de derecho comparado.

En todo caso, el mecanismo extraordinario de revisión que se deberá establecer por ley orgánica, vinculará por vez primera y dejando a salvo la temprana regulación de la Constitución de 1901, los métodos de control difuso y concentrado de la constitucionalidad que han coexistido en nuestro ordenamiento jurídico por más de cien años, respondiendo con ello a la principal crítica formulada a nuestro sistema de justicia constitucional, que reconocía la coexistencia de los mencionados métodos de control, pero destacaba que entre uno y otro no existía realmente una coordinación, vínculo o conexión que procurara armonizarlos o articularlos para lograr una interpretación uniforme de la Constitución, razón por la cual no podía ser calificado como integral, dado que existían modalidades de control paralelas, establecidas una al lado de la otra, sin conexión entre sí. Por tal razón, la Constitución consagra un sistema mixto e integrado de control de la constitucionalidad, atribuyéndole a la Sala Constitucional la función de coordinar los métodos de control mediante la armonización de la jurisprudencia constitucional y la interpretación uniforme del Texto Fundamental.

Capítulo II

De los estados de excepción

El primero de los preceptos dedicados a esta materia recoge dos principios básicos rectores de los estados de excepción: el de estricta necesidad y el de temporalidad. Se circunscriben tales situaciones jurídicas a aquellas circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de las personas, de la Nación o de las instituciones, y que no puedan ser

afrontadas mediante las facultades ordinarias de los órganos del Poder Público. Se destaca, igualmente, la temporalidad de esas situaciones.

Por otro lado, el precepto menciona los principales derechos que no pueden ser suspendidos o restringidos durante los estados de excepción. Se trata de un listado meramente enunciativo, pues tampoco son susceptibles de suspensión o restricción los derechos señalados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Importa subrayar que entre los derechos intangibles se encuentran las garantías judiciales necesarias para la defensa de los derechos.

El segundo de los preceptos que componen este Capítulo contempla los distintos estados de excepción, estableciendo, de conformidad con el principio de gradualidad, las circunstancias fácticas que pueden justificarlos y su limitación temporal. Se remite a una ley orgánica la regulación de los detalles del régimen de los estados de excepción.

El último de los preceptos de este Capítulo establece, en primer lugar, que el decreto declaratorio del estado de excepción deberá señalar, para preservar la seguridad jurídica, las medidas que podrán tomarse con fundamento en el mismo. En segundo término, dada la trascendencia de la decisión correspondiente, se prevé la intervención de los tres Poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción: en virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para dictar el Decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. Si la Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto correspondiente, éste debe ser remitido a la Comisión Delegada, la cual ejercerá las facultades respectivas.

A lo anterior se suma un control judicial automático atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habrá de

pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del estado de excepción y de lo establecido en el decreto que lo declaró, a menos que la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, haya revocado previamente ese decreto. Por otra parte, se otorga al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional la atribución de revocar el decreto que haya declarado un estado de excepción, al cesar las causas que lo motivaron.

TÍTULO IX DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

La Constitución ha mantenido la clasificación que distingue entre la Enmienda y la Reforma Constitucional, incorporando, a su vez, la facultad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para ser consecuentes con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder constituyente originario. Esto guarda concordancia con lo establecido en la misma Constitución que hace residir la soberanía en el pueblo quien puede ejercerla de manera directa o indirecta.

Se establece una serie de mecanismos a través de los cuales las posibilidades de modificación del texto constitucional sean factibles y accesibles, para evitar el divorcio entre la norma fundamental del sistema jurídico y la realidad social, política, cultural y económica. La contraposición entre una Constitución formal y una Constitución real genera distorsiones que agravan considerablemente las crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema político, al no existir opciones para superarlas. Prueba de ello la encontramos en nuestra experiencia en el marco de una democracia formal y representativa, en la cual las que debían impulsar los cambios constitucionales eran las cúpulas más renuentes a producirlos, lo cual explica el entramamiento y obstaculización de los intentos de reformar la Constitución anterior.

La democracia moderna insertada en un mundo globalizado y condicionada por la dinámica de la vida actual, a su vez determinada por los cambios tecnológicos requiere de una institucionalidad lo suficientemente flexible para poder adaptarse a los cambios que se van generando.

De allí que nuestra Constitución a pesar de tener la rigidez de las constituciones escritas ha de incluir elementos que permitan esa adaptación a la realidad. Uno de esos elementos lo constituye la existencia de un Alto Tribunal que mediante una interpretación de carácter histórico progresivo, fundamentada en la comprensión del momento histórico, permita la mejor aplicación posible del máximo cuerpo normativo a la realidad que le corresponde regir, tal como se prevé en esta Constitución con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Pero, además, debe incluir elementos de flexibilidad en el aspecto más rígido de las constituciones escritas que lo conforman las previsiones relativas a la forma y mecanismos para la modificación de la propia Constitución.

En este sentido, las posibilidades de modificación de la base jurídica del país deben ser amplias y estar efectivamente en manos de una pluralidad de actores políticos y sociales. Una democracia participativa y protagónica no puede construir una rígida y petrificada normativa constitucional. Al contrario, debe dejar abiertas muchas ventanas para que los procesos participativos se desarrollen a plenitud, evitando el divorcio profundo entre la norma y la realidad.

El protagonismo del pueblo en la conducción de su destino debe quedar explícitamente consagrado con especial énfasis en este punto de la reforma constitucional. Un pueblo deseoso de ejercer la soberanía no debe tener que pasar por toda clase de vicisitudes y superar un cúmulo de obstáculos para lograr los cambios que las estructuras jurídicas requieren. Es principio consustancial con este texto constitucional la facilitación de los procesos en los cuales el pueblo se manifiesta para solicitar la modificación de normas constitucionales.

En este contexto se debe entender que el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, lejos de afectar el proceso de refundación de la República y de lograr el objetivo de la profundización democrática, se convierte en herramienta indispensable del protagonismo popular, desterrando el sistema de cónclaves que decidían los destinos del país a espaldas de la sociedad.

En lo que respecta al procedimiento de enmienda, se superan las limitaciones establecidas en la Constitución de 1961, que hacían complicada la consecución de resultados efectivos. En el nuevo texto constitucional se ha previsto una manera más ágil y flexible y se procede a formular una definición de enmienda, entendida como la adición o modificación de artículos del texto, siempre y cuando no se altere la estructura fundamental.

La iniciativa de la reforma se le atribuye a la Asamblea Nacional, por la mayoría de sus miembros; al Presidente de la República en Consejo de Ministros o a los electores o electoras inscritas en el registro electoral en número no menor del quince por ciento. Una vez cumplidos estos requisitos se inicia la tramitación ante la Asamblea Nacional la cual realizará tres discusiones antes de la aprobación del proyecto para lo cual tiene un plazo no mayor de dos años. Para esta aprobación se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de sus miembros. El proyecto aprobado será sometido a referendo dentro de los treinta días siguientes y bastará para su aprobación con un número mayor de votos positivos.

Finalmente, en este Título se consagra expresamente la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional. Esta posibilidad inexistente formalmente en la Constitución de 1961 hubo de ser incorporada por vía de interpretación de la Corte Suprema de Justicia, para hacer posible la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que produjo esta Constitución. En el presente texto constitucional pasa a ser norma vigente, expresiva de la más acertada definición democrática en torno a la soberanía popular.

Dada, firmada y sellada en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, a los treinta días del mes de enero del año 2000. Años 189° de la Independencia y 140° de la Federación.

EL PRESIDENTE,
LUIS MIQUILENA

EL PRIMER VICEPRESIDENTE (E),
ARISTÓBULO ISTÚRIZ

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE,
ARISTÓBULO ISTÚRIZ

LOS CONSTITUYENTES,

CONSTITUYENTES NACIONALES

ALFREDO PEÑA
ALLAN BREWER CARÍAS (AUSENTE)
ANGELA ZAGO
EARLE HERRERA
EDMUNDO CHIRINOS
EUSTOQUIO CONTRERAS
GUILLERMO GARCÍA PONCE
HERMANN ESCARRÁ
JESÚS RAFAEL SULBARÁN
LEOPOLDO PUCHI
LUIS VALLENILLA
MANUEL QUIJADA
MARISABEL DE CHÁVEZ
PABLO MEDINA
PEDRO ORTEGA DÍAZ
REYNA ROMERO GARCÍA
RICARDO COMBELLAS
TAREK WILLIAM SAAB
VINICIO ROMERO MARTÍNEZ

CONSTITUYENTES POR DISTRITO FEDERAL

DESIRÉE SANTOS AMARAL
ELIÉZER REINALDO OTAIZA CASTILLO
ERNESTO ALVARENGA
FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES
JULIO CÉSAR ALVIÁREZ
NICOLÁS MADURO MOROS

SEGUNDO MELÉNDEZ

VLADIMIR VILLEGAS

CONSTITUYENTES POR AMAZONAS

LIBORIO GUARULLA GARRIDO

NELSON SILVA

CONSTITUYENTES POR ANZOÁTEGUI

ÁNGEL RODRÍGUEZ

DAVID DE LIMA SALAS

DAVID FIGUEROA

ELIAS LÓPEZ PORTILLO

GUSTAVO PEREIRA

CONSTITUYENTES POR APURE

CRISTÓBAL JIMÉNEZ

RAFAEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

CONSTITUYENTES POR ARAGUA

ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ

ANTONIO DI GIAMPAOLO BOTTINI

CARLOS TABLANTE

HUMBERTO PRIETO

ÓSCAR FEO

CONSTITUYENTES POR BARINAS

FRANCISCO EFRAÍN VISCONTI OSORIO

JOSÉ LEÓN TAPIA CONTRERAS

CONSTITUYENTES POR BOLÍVAR

ALEJANDRO DE JESÚS SILVA MARCANO

ANTONIO BRICEÑO

DANIEL DÍAZ

LEONEL JIMÉNEZ CARUPE

VICTORIA MATA

CONSTITUYENTES POR CARABOBO

ELIO GÓMEZ GRILLO
MANUEL VADELL GRATEROL
AMÉRICO DÍAZ NÚÑEZ
BLANCANIEVE PORTOCARRERO
DIEGO SALAZAR
FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA
JUAN JOSÉ MARÍN LAYA
ÓSCAR NAVAS TORTOLERO
SAÚL ORTEGA

CONSTITUYENTES POR COJEDES

HAYDÉE DE FRANCO
JUAN BAUTISTA PÉREZ

CONSTITUYENTES POR DELTA AMACURO

CÉSAR PÉREZ MARCANO
RAMÓN ANTONIO YÁNEZ

CONSTITUYENTES POR FALCÓN

JESÚS MONTILLA APONTE
SOL MUSSETT DE PRIMERA
YOEL ACOSTA CHIRINOS

CONSTITUYENTES POR GUÁRICO

ÁNGEL EUGENIO LANDAETA
PEDRO SOLANO PERDOMO
RUBÉN ALFREDO ÁVILA ÁVILA

CONSTITUYENTES POR LARA

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
ENRIQUE PERAZA
HENRI FALCÓN
LENÍN ROMERO
LUIS REYES REYES

MIRNA TERESA VIES DE ÁLVAREZ
REINALDO ROJAS

CONSTITUYENTES POR MÉRIDA

ADÁN CHÁVEZ FRÍAS
FLORENCIO ANTONIO PORRAS ECHEZURÍA
PAUSIDES SEGUNDO REYES GÓMEZ

CONSTITUYENTES POR MIRANDA

ELÍAS JAUA MILANO
FREDDY GUTIÉRREZ
HAYDÉE MACHÍN
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
JOSÉ VICENTE RANGEL ÁVALOS
LUIS GAMARGO
MIGUEL MADRIZ
RAÚL ESTÉ
RODOLFO SANZ
WILLIAM LARA
WILLIAM OJEDA

CONSTITUYENTES POR MONAGAS

JOSÉ GREGORIO BRICEÑO TORREALBA
MARELIS PÉREZ MARCANO
NUMA ROJAS VELÁSQUEZ

CONSTITUYENTES POR NUEVA ESPARTA

ALEXIS NAVARRO ROJAS
VIRGILIO ÁVILA VIVAS

CONSTITUYENTES POR PORTUGUESA

ANTONIA MUÑOZ
MIGUEL A. GARRANCHÁN VELÁSQUEZ
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

CONSTITUYENTES POR SUCRE

JESÚS MOLINA VILLEGAS

JOSÉ LUIS MEZA
LUIS AUGUSTO ACUÑA CEDEÑO

CONSTITUYENTES POR TACHIRA

MARÍA IRIS VÁRELA RANGEL
RONALD BLANCO LA CRUZ
SAMUEL LÓPEZ
TEMÍSTOCLES SALAZAR

CONSTITUYENTES POR TRUJILLO

GERARDO MÁRQUEZ
GILMER VILORIA

CONSTITUYENTES POR VARGAS

ANTONIO RODRÍGUEZ
JAIME BARRIOS

CONSTITUYENTES POR YARACUY

BRAULIO ÁLVAREZ
NÉSTOR LEÓN HEREDIA

CONSTITUYENTES POR ZULIA

ALBERTO URDANETA
ÁTALA URIANA
FROILÁN BARRIOS NIEVES
GASTÓN PARRA LUZARDO
GEOVANY DARÍO FINOL FERNÁNDEZ
JORGE LUIS DURAN CENTENO
LEVY ARRON ALTER VALERO
MARÍA DE QUEIPO
MARIO ISEA BOHÓRQUEZ
RAFAEL COLMENÁREZ
ROBERTO JIMÉNEZ MAGGIOLO
SILVESTRE VILLALOBOS
YLDEFONSO FINOL

CONSTITUYENTES POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

GUILLERMO GUEVARA

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

NOELÍ POCATERRA DE OBERTO

LOS SECRETARIOS,

ELVIS AMOROSO

ALEJANDRO ANDRADE



Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 5.908 Extraordinario, del 19 de febrero de 2009



PREÁMBULO

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente

CONSTITUCIÓN

TÍTULO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1

La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.

Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

Artículo 2

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Artículo 3

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.

Artículo 4

La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

Artículo 5

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Artículo 6

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen, es y será siempre democrático, participativo,

electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Artículo 7

La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.

Artículo 8

La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria.

La ley regulará sus características, significados y usos.

Artículo 9

El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad.

TÍTULO II DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA

Capítulo I Del territorio y demás espacios geográficos

Artículo 10

El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.

Artículo 11

La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores,

históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de bases recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.

El espacio insular de la República comprende el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.

Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley.

Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional.

Artículo 12

Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.

Artículo 13

El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado,

ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias.

Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional.

Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra.

Artículo 14

La ley establecerá un régimen jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la República.

Artículo 15

El Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.

Capítulo II

De la división política

Artículo 16

Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios.

La división políticoterritorial será regulada por ley orgánica, que garantice la autonomía municipal y la descentralización políticoadministrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a un territorio federal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo.

Artículo 17

Las dependencias federales son las islas marítimas no integradas en el territorio de un Estado, así como las islas que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. Su régimen y administración estarán señaladas en la ley.

Artículo 18

La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional.

Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República.

Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno.

TÍTULO III DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 19

El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

Artículo 20

Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social.

Artículo 21

Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.

Artículo 22

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

Artículo 23

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Artículo 24

Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.

Artículo 25

Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Artículo 26

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 27

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona; y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

Artículo 28

Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.

Artículo 29

El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

Artículo 30

El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.

Artículo 31

Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.

Capítulo II De la nacionalidad y de la ciudadanía

Sección primera: de la nacionalidad

Artículo 32

Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

1. Toda persona nacida en el territorio de la República.
2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento.
3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en el territorio de la República o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana.
4. Toda persona nacida en territorio extranjero, de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir dieciocho años de edad establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir veinticinco años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana.

Artículo 33

Son venezolanos y venezolanas por naturalización:

1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. A tal fin, deberán tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de, por lo menos, diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud.
El tiempo de residencia se reducirá a cinco años en el caso de aquellos y aquellas que tuvieron la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe.
2. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanas o venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio.
3. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la

naturalización del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los veintiún años de edad y hayan residido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco años anteriores a dicha declaración.

Artículo 34

La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad.

Artículo 35

Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley.

Artículo 36

Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de dos años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas por naturalización que renuncien a la nacionalidad venezolana podrán recuperarla cumpliendo nuevamente los requisitos exigidos en el artículo 33 de esta Constitución.

Artículo 37

El Estado promoverá la celebración de tratados internacionales en materia de nacionalidad, especialmente con los Estados fronterizos y los señalados en el numeral 1 del artículo 33 de esta Constitución.

Artículo 38

La ley dictará, de conformidad con las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad venezolana, así como con la revocación y nulidad de la naturalización.

*Sección segunda: de la ciudadanía***Artículo 39**

Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía; en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución.

Artículo 40

Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución.

Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoría.

Artículo 41

Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo, o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.

Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Ministros o Ministras; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia

ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley.

Artículo 42

Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

Capítulo III

De los derechos civiles

Artículo 43

El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.

Artículo 44

La libertad personal es inviolable; en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad

de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron.

Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.

3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta.

Artículo 45

Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales; cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley.

Artículo 46

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación.
2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio,

excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley.

4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.

Artículo 47

El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.

Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, sólo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen o hayan de practicarlas.

Artículo 48

Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.

Artículo 49

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.

Artículo 50

Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna.

Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas.

Artículo 51

Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.

Artículo 52

Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.

Artículo 53

Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se registrarán por la ley.

Artículo 54

Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley.

Artículo 55

Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

Artículo 56

Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.

Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación.

Artículo 57

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad.

Artículo 58

La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

Artículo 59

El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.

Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos.

Artículo 60

Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 61

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Capítulo IV**De los Derechos Políticos y del Referendo Popular***Sección primera: de los Derechos Políticos***Artículo 62**

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Artículo 63

El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Artículo 64

Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estatales se hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

Artículo 65

No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.

Artículo 66

Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado.

Artículo 67

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse

con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.

La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización.

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público.

Artículo 68

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

Artículo 69

La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.

Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.

Artículo 70

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de

su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

Sección segunda: del referendo popular

Artículo 71

Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estatal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o un número no menor del diez por ciento del total de inscritos e inscritas en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.

Artículo 72

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o

electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.

La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.

Artículo 73

Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley.

Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 74

Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos o inscritas en

el Registro Civil y Electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.

También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento de los electores y electoras inscritos o inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral.

No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.

No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un periodo constitucional para la misma materia.

Capítulo V

De los derechos sociales y de las familias

Artículo 75

El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.

Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a

la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional.

Artículo 76

La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquél o aquélla no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.

Artículo 77

Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.

Artículo 78

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su

incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 79

Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley.

Artículo 80

El Estado garantizará a los ancianos y las ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

Artículo 81

Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se le reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolanas.

Artículo 82

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción

progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.

El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.

Artículo 83

La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

Artículo 84

Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.

Artículo 85

El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita

cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud.

Artículo 86

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.

Artículo 87

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.

Artículo 88

El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.

Artículo 89

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social.

Artículo 90

La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras.

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas.

Artículo 91

Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.

Artículo 92

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

Artículo 93

La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.

Artículo 94

La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.

Artículo 95

Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.

Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados u obligadas a hacer declaración jurada de bienes.

Artículo 96

Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.

Artículo 97

Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.

Capítulo VI

De los derechos culturales y educativos

Artículo 98

La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Artículo 99

Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación

son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.

Artículo 100

Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley.

Artículo 101

El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y modalidades de estas obligaciones.

Artículo 102

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y

universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley.

Artículo 103

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pre grado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.

Artículo 104

La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.

Artículo 105

La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación.

Artículo 106

Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste.

Artículo 107

La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano.

Artículo 108

Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Artículo 109

El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

Artículo 110

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Artículo 111

Todas las personas tienen derecho al deporte y la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley.

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el país.

Capítulo VII

De los derechos económicos

Artículo 112

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de

su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

Artículo 113

No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tenga por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.

Artículo 114

El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la

cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.

Artículo 115

Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Artículo 116

No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Artículo 117

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.

Artículo 118

Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como la cooperativa, caja de ahorros, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica,

de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.

El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.

Capítulo VIII

De los derechos de los pueblos indígenas

Artículo 119

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la ley.

Artículo 120

El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley.

Artículo 121

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

Artículo 122

Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.

Artículo 123

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral.

Artículo 124

Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

Artículo 125

Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley.

Artículo 126

Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional.

El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional.

Capítulo IX

De los derechos ambientales

Artículo 127

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128

El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

Artículo 129

Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aún cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley.

Capítulo X

De los deberes

Artículo 130

Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y, valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.

Artículo 131

Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.

Artículo 132

Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.

Artículo 133

Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley.

Artículo 134

Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso.

Toda persona tiene el deber de prestar el servicios en las funciones electorales que se les asignen de conformidad con la ley.

Artículo 135

Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los o a las particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.

TÍTULO IV DEL PODER PÚBLICO

Capítulo I De las disposiciones fundamentales

Sección primera: disposiciones generales

Artículo 136

El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

Artículo 137

Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.

Artículo 138

Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.

Artículo 139

El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley.

Artículo 140

El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública.

*Sección segunda: de la administración pública***Artículo 141**

La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Artículo 142

Los institutos autónomos sólo podrán crearse por ley. Tales instituciones, así como los intereses públicos en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, estarán sujetos al control del Estado, en la forma que la ley establezca.

Artículo 143

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.

Sección tercera: de la función pública

Artículo 144

La ley establecerá el Estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, y proveerá su incorporación a la seguridad social.

La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionario públicos y funcionarias públicas para ejercer sus cargos.

Artículo 145

Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por intespósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley.

Artículo 146

Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

El ingreso de los funcionarios públicos y funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión y retiro será de acuerdo con su desempeño.

Artículo 147

Para la ocupación de los cargos públicos de carácter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente.

Las escalas de salarios en la Administración Pública se establecerán reglamentariamente conforme a la ley.

La ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los funcionarios públicos y funcionarias públicas municipales, estatales y nacionales.

La ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estatales y municipales.

Artículo 148

Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal.

Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pensión, salvo los casos expresamente determinados en la ley.

Artículo 149

Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional.

Sección cuarta: de los contratos de interés público

Artículo 150

La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley.

No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estatal o nacional, con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

La ley podrá exigir en los contratos de interés público, determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías.

Artículo 151

En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.

Sección quinta: de las relaciones internacionales

Artículo 152

Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.

Artículo 153

La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones

supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

Artículo 154

Los Tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional.

Artículo 155

En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o ejecución si no fuere improcedente y así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración.

Capítulo II **De la competencia del Poder Público Nacional**

Artículo 156

Es de la competencia del Poder Público Nacional:

1. La política y la actuación internacional de la República.
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la

- ley en todo el territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional.
 4. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras.
 5. Los servicios de identificación.
 6. La policía nacional.
 7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
 8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional.
 9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias.
 10. La organización y régimen del Distrito Capital y de las dependencias federales.
 11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda.
 12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas; de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios; de los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco; y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución o por la ley.
 13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias; para definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales; así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
 14. La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponda a los Municipios, de conformidad con esta Constitución.
 15. El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas.
 16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías; y la conservación, fomento y aprovechamiento

de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país.

El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido.

La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados.

17. El Régimen de metrología legal y control de calidad.
18. Los censos y estadísticas nacionales.
19. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.
20. Las obras públicas de interés nacional.
21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República.
22. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
23. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo y ordenación del territorio.
24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.
25. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
26. El régimen de la navegación y del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura.
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro electromagnético.
29. El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y en especial electricidad, agua potable y gas.
30. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios.
31. La organización y administración nacional de la justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales;

- la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.
33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza.

Artículo 157

La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización.

Artículo 158

La descentralización, como política nacional debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales.

Capítulo III **Del Poder Público Estatal**

Artículo 159

Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República.

Artículo 160

El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un

Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar.

El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.

(Ver Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009)

Artículo 161

Los Gobernadores o Gobernadoras rendirán, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el Contralor o Contralora del Estado y presentarán un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.

Artículo 162

El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes:

1. Legislar sobre las materias de la competencia estatal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
3. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estatales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos períodos consecutivos como máximo. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo.

(Ver Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009)

Artículo 163

Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución y a la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estatales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Dicho órgano actuará bajo la dirección y responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad e independencia, así como la neutralidad en su designación, que será mediante concurso público.

Artículo 164

Es de la competencia exclusiva de los Estados:

1. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución.
2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división políticoterritorial, conforme a esta Constitución y a la ley.
3. La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales.
4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estatales.
5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad con la ley.
6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
7. La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
8. La creación, régimen y organización de los servicios públicos estatales.
9. La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estatales.
10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras

y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.

11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o municipal.

Artículo 165

Las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legislación estará orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.

Los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Público. Los mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídico estatal.

Artículo 166

En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras estadales de los ministerios; y una representación de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales o concejales y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas donde las hubiere. El mismo funcionará y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley.

Artículo 167

Son ingresos de los Estados:

1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.

4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades. En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por ciento del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado. En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste proporcional del situado.
La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participación municipal en el mismo.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asignen por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estatales.
Las leyes que creen o transferan ramos tributarios a favor de los Estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional, no será menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estatales para atender adecuadamente los servicios de su competencia.
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley.

Capítulo IV

Del Poder Público Municipal

Artículo 168

Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:

1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley.

Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con esta Constitución y con la ley.

Artículo 169

La organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados.

La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los municipios con población

indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local.

Artículo 170

Los Municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o con los demás entes públicos territoriales, la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público relativos a materias de su competencia. Por ley se determinarán las normas concernientes a la agrupación de dos o más Municipios en distritos metropolitanos.

Artículo 171

Cuando dos o más Municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como distritos metropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el carácter democrático y participativo del gobierno metropolitano y establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, financiero y de control. También asegurará que en los órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada participación los respectivos Municipios, y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos al distrito metropolitano.

La ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de los distritos metropolitanos atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico y social, situación geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribución de competencias para cada distrito metropolitano tendrá en cuenta esas condiciones.

Artículo 172

El Consejo Legislativo, previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la población afectada, definirá los límites del distrito metropolitano y lo organizará según lo establecido en la ley orgánica nacional, determinando cuáles de las competencias metropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano.

Cuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización.

Artículo 173

El Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones que determine la ley. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen municipal establecerá los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio. Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover la desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos. En ningún caso las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio.

Artículo 174

El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato por una sola vez, para un nuevo periodo.

(Ver Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009)

Artículo 175

La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constitución, en el número y condiciones de elegibilidad que determine la ley.

Artículo 176

Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones

relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República, y será dirigida por el Contralor o Contralora Municipal, designado o designada por el Concejo mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de quien sea designado o designada para el cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley.

Artículo 177

La ley nacional podrá establecer principios, condiciones y requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhabilitación e incompatibilidades para la postulación y ejercicio de las funciones de Alcaldes o Alcaldesas y concejales o concejales.

Artículo 178

Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público.
2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.
3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales.
4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de

- recolección y tratamiento de residuos y protección civil.
5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.
 6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico; alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios.
 7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
 8. Las demás que le atribuya esta Constitución y la ley.

Las actuaciones que corresponden al municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estatales que se definan en la ley conforme a esta Constitución.

Artículo 179

Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.
3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estatales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.

4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estatales.
5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que les sean atribuidas.
6. Los demás que determine la ley.

Artículo 180

La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estatal sobre determinadas materias o actividades.

Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor de los demás entes políticoterritoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados.

Artículo 181

Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas señalen, conforme a esta Constitución y a la legislación que se dicte para desarrollar sus principios.

Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de dueño o dueña, son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. La ley establecerá la conversión en ejidos de otras tierras públicas.

Artículo 182

Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales o concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.

Artículo 183

Los Estados y los Municipios no podrán:

1. Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional.
2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio.
3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él.

Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional.

Artículo 184

La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transferan a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuesta de inversión ante las autoridades estatales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.

4. La participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuente generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estatales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estatales y municipales.
7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.

Capítulo V

Del Consejo Federal de Gobierno

Artículo 185

El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, los Gobernadores o Gobernadoras, un Alcalde o Alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.

El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres Gobernadores o Gobernadoras y tres Alcaldes o Alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación

de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos.

TÍTULO V DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL

Capítulo I Del Poder Legislativo Nacional

Sección primera: disposiciones generales

Artículo 186

La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país.

Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas.

Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.

Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.

Artículo 187

Corresponde a la Asamblea Nacional:

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.
2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta.

3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.
4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.
5. Decretar amnistías.
6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público.
7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.
8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.
9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estatal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados o diputadas, que el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, o del Ministro o Ministra.
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.
12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.
13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.
14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.
15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República, después

de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del Presidente o Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o los rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en pleno.

16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados.
17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.
18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución.
19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes.
21. Organizar su servicio de seguridad interna.
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país.
23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización administrativa.
24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.

Artículo 188

Las condiciones para ser elegido o elegida diputado o diputada a la Asamblea Nacional son:

1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento, o por naturalización con, por lo menos, quince años de residencia en territorio venezolano.
2. Ser mayor de veintiún años de edad.
3. Haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección.

Artículo 189

No podrán ser elegidos o elegidas diputados o diputadas:

1. El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras, el Secretario o Secretaria de la Presidencia de la República, y los Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de los institutos autónomos y empresas del Estado, hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos.
2. Los Gobernadores o Gobernadoras y Secretarios o Secretarías de gobierno de los Estados y autoridades de similar jerarquía del Distrito Capital, hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos.
3. Los funcionarios o funcionarias municipales, estatales o nacionales, de institutos autónomos o empresas del Estado, cuando la elección tenga lugar en la jurisdicción en la cual actúa, salvo si se trata de un cargo accidental, asistencial, docente o académico.

La ley orgánica podrá establecer la inelegibilidad de otros funcionarios o funcionarias.

Artículo 190

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras o directores o directoras de empresas que contraten con personas jurídicas estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas. Durante la votación sobre causas en las cuales surjan conflictos de intereses económicos, los o las integrantes de la Asamblea Nacional que estén involucrados o involucradas en dichos conflictos, deberán abstenerse.

Artículo 191

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva.

Artículo 192

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en

el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos períodos consecutivos como máximo.

(Ver Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009)

Sección segunda: de la organización de la Asamblea Nacional

Artículo 193

La Asamblea Nacional nombrará Comisiones Permanentes, ordinarias y especiales. Las Comisiones Permanentes, en un número no mayor de quince, estarán referidas a los sectores de actividad nacional. Igualmente, podrá crear Comisiones con carácter temporal para investigación y estudio, todo ello de conformidad con su reglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o suprimir Comisiones Permanentes con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

Artículo 194

La Asamblea Nacional elegirá de su seno un Presidente o Presidenta y dos Vicepresidentes o Vicepresidentas, un Secretario o Secretaria y un Subsecretario o Subsecretaria fuera de su seno, por un período de un año. El reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales y absolutas.

Artículo 195

Durante el receso de la Asamblea funcionará la Comisión Delegada integrada por el Presidente o Presidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas y los Presidentes o Presidentas de las Comisiones Permanentes.

Artículo 196

Son atribuciones de la Comisión Delegada:

1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto.
2. Autorizar al Presidente o Presidenta de la República para salir del territorio nacional.
3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar créditos adicionales.
4. Designar Comisiones temporales integradas por miembros de la Asamblea.

5. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a la Asamblea.
6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada.
7. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Sección tercera: de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional

Artículo 197

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos y elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia.

Artículo 198

El diputado o diputada a la Asamblea Nacional, cuyo mandato fuere revocado, no podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período.

Artículo 199

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los reglamentos.

Artículo 200

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y

continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.

Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.

Artículo 201

Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal.

Sección cuarta: de la formación de las leyes

Artículo 202

La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos.

Artículo 203

Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.

Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de leyes orgánicas.

Las leyes que la Asamblea Nacional haya de calificado orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de

diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica, la ley perderá este carácter.

Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y el marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.

Artículo 204

La iniciativa de las leyes corresponde:

1. Al Poder Ejecutivo Nacional.
2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes.
3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres.
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales.
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran.
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral.
7. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral.
8. Al Consejo Legislativo cuando se trate de leyes relativas a los Estados.

Artículo 205

La discusión de los proyectos de ley presentados por los electores y electoras conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguientes al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con la ley.

Artículo 206

Los estados serán consultados por la Asamblea Nacional, a través del Consejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos.

La ley establecerá los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás instituciones de los Estados, por parte del Consejo, en dichas materias.

Artículo 207

Para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta Constitución y en los reglamentos respectivos. Aprobado el proyecto, el Presidente o Presidenta de la Asamblea declarará sancionada la ley.

Artículo 208

En la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado. Aprobado en primera discusión el proyecto será remitido a la Comisión directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado con varias Comisiones Permanentes, se designará una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe.

Las Comisiones que estudian proyectos de ley presentarán el informe correspondiente en un plazo no mayor de treinta días consecutivos.

Artículo 209

Recibido el informe de la Comisión correspondiente, se dará inicio a la segunda discusión del proyecto de ley, la cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobare sin modificaciones, quedará sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se devolverá a la Comisión respectiva para que ésta las incluya en un plazo no mayor de quince días continuos; leída la nueva versión del proyecto de ley en la plenaria de la Asamblea Nacional, ésta decidirá por mayoría de votos lo que fuere procedente respecto a los artículos en que hubiere discrepancia y a los que tuvieren conexión con éstos. Resuelta la discrepancia, la Presidencia declarará sancionada la ley.

Artículo 210

La discusión de los proyectos que quedaren pendientes al término de las sesiones, podrán continuarse en las sesiones siguientes o en sesiones extraordinarias.

Artículo 211

La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial; el o la representante del Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral Republicano; los o las integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un o una representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los o las representantes de la sociedad organizada, en los términos que establezca el reglamento de la Asamblea Nacional.

Artículo 212

Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: “La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta:”.

Artículo 213

Una vez sancionada la ley, se extenderá por duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el Presidente o Presidenta, los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas y el Secretario o Secretaria de la Asamblea Nacional, con la fecha de su aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de la ley será enviado por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional al Presidente o Presidenta de la República a los fines de su promulgación.

Artículo 214

El Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los diez días siguientes a aquél en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, con acuerdo del Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o parte de ella.

La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el Presidente o Presidenta de la República, por mayoría absoluta de los diputados o diputadas presentes y le remitirá la ley para la promulgación.

El Presidente o Presidenta de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los cinco días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones.

Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso.

Artículo 215

La Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 216

Cuando el Presidente o Presidenta de la República no promulgare la ley en los lapsos señalados, el Presidente o Presidenta y los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél o aquella incurriere por su omisión.

Artículo 217

La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional, quedará a la discreción del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República.

Artículo 218

Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.

*Sección quinta: de los procedimientos***Artículo 219**

El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durarán hasta el quince de agosto.

El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el quince de diciembre.

Artículo 220

La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También podrá considerar las que fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes.

Artículo 221

Los requisitos y procedimientos para la instalación y demás sesiones de la Asamblea Nacional, y para el funcionamiento de sus Comisiones, serán determinados por el reglamento.

El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los o las integrantes de la Asamblea Nacional.

Artículo 222

La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control parlamentario,

podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 223

La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce.

Artículo 224

El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los demás poderes públicos. Los jueces o juezas estarán obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban comisión de la Asamblea Nacional o de sus Comisiones.

Capítulo II Del Poder Ejecutivo Nacional

Sección primera: del Presidente o Presidenta de la República

Artículo 225

El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley.

Artículo 226

El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno.

Artículo 227

Para ser elegido Presidente de la República o elegida Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución.

Artículo 228

La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o la candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos.

Artículo 229

No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora, o Alcalde o Alcadesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección.

Artículo 230

El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.

(Ver Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009)

Artículo 231

El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 232

El Presidente o Presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constitución y con la ley.

Artículo 233

Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período.

Artículo 234

Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.

Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Artículo 235

La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente o Presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.

Sección segunda: de las atribuciones del Presidente o Presidenta de la República

Artículo 236

Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.
2. Dirigir la acción del Gobierno.
3. Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva; nombrar y remover los Ministros o Ministras.
4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente.
6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover

sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos.

7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.
9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón.
11. Administrar la Hacienda Pública Nacional.
12. Negociar los empréstitos nacionales.
13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada.
14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y a la ley.
15. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes.
16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley.
17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales.
18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional.
19. Conceder indultos.
20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica.
21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución.
22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.
23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
24. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.

El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.

Los actos del Presidente o Presidenta de la República, con excepción de los señalados en los ordinales 3 y 5, serán refrendados para su validez por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos.

Artículo 237

Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior.

Sección tercera: del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva

Artículo 238

El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es órgano directo y colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la República en su condición de Jefe o jefa del Ejecutivo Nacional.

El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunirá las mismas condiciones exigidas para ser Presidente o Presidenta de la República, y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con éste.

Artículo 239

Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva:

1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la dirección de la acción del Gobierno.
2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones del Presidente o Presidenta de la República.

3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento y la remoción de los Ministros o Ministras.
4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la República, el Consejo de Ministros.
5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional.
6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno.
7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad.
8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República.
9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta de la República.
10. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley.

Artículo 240

La aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por una votación no menor de las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, o de Ministro o Ministra por el resto del período presidencial.

La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución.

La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su período constitucional.

Artículo 241

El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es responsable de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley.

*Sección cuarta: de los Ministros o Ministras y del Consejo de Ministros***Artículo 242**

Los Ministros o Ministras son órganos directos del Presidente o Presidenta de la República, y reunidos o reunidas conjuntamente con éste o ésta y con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, integran el Consejo de Ministros.

El Presidente o Presidenta de la República presidirá las reuniones del Consejo de Ministros, pero podrá autorizar al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva para que las presida cuando no pueda asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deberán ser ratificadas por el Presidente o Presidenta de la República para su validez.

De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y los Ministros o Ministras que hubieren concurrido, salvo aquellos o aquellas que hayan hecho constar su voto adverso o negativo.

Artículo 243

El Presidente o Presidenta de la República podrá nombrar Ministros o Ministras de Estado, los o las cuales, además de participar en el Consejo de Ministros, asesorarán al Presidente o Presidenta de la República y al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en los asuntos que le fueran asignados.

Artículo 244

Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco años, con las excepciones establecidas en esta Constitución.

Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley.

Artículo 245

Los Ministros o Ministras tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones. Podrán tomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto.

Artículo 246

La aprobación de una moción de censura a un Ministro o Ministra por una votación no menor de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de Ministro o Ministra ni de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva por el resto del período presidencial.

*Sección quinta: de la Procuraduría General de la República***Artículo 247**

La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional.

La ley orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento.

Artículo 248

La Procuraduría General de la República estará a cargo y bajo la dirección del Procurador o Procuradora General de la República, con la colaboración de los demás funcionarios o funcionarias que determine su ley orgánica.

Artículo 249

El Procurador o Procuradora General de la República reunirá las mismas condiciones exigidas para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República con la autorización de la Asamblea Nacional.

Artículo 250

El Procurador o Procuradora General de la República asistirá, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de Ministros.

Sección sexta: del Consejo de Estado

Artículo 251

El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial transcendencia y requiera de su opinión.

La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones.

Artículo 252

El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estará conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta de la República; un o una representante designado o designada por la Asamblea Nacional; un o una representante designado o designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gobernador designado o Gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estatales.

Capítulo III

Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia

Sección primera: disposiciones generales

Artículo 253

La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.

Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.

El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y

funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio.

Artículo 254

El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.

Artículo 255

El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o removidas o suspendidos o suspendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.

La ley propenderá a la profesionalización de los jueces o juezas y las universidades colaborarán en este propósito, organizando en los estudios universitarios de derecho la especialización judicial correspondiente.

Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Artículo 256

Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o las magistradas, los jueces o las juezas; los fiscales o las fiscales del Ministerio Público; y los defensores públicos o las defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpósita persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas.

Los jueces o las juezas no podrán asociarse entre sí.

Artículo 257

El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

Artículo 258

La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.

Artículo 259

La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

Artículo 260

Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afectan a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Artículo 261

La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.

La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.

*Sección segunda: del Tribunal Supremo de Justicia***Artículo 262**

El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Políticoadministrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica.

La Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores.

Artículo 263

Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:

1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad.
2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.

Artículo 264

Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará selección definitiva.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional.

Artículo 265

Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.

Artículo 266

Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución.
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefes de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.
4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún estado, municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.
5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.
6. Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.
7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.
8. Conocer del recurso de casación.
9. Las demás que establezca la ley.

La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Políticoadministrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constitución y la ley.

Sección tercera: del gobierno y la administración del Poder Judicial

Artículo 267

Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.

Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales.

Artículo 268

La ley establecerá la autonomía y organización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de defensa pública, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera del defensor o defensora.

Artículo 269

La ley regulará la organización de circuitos judiciales, así como la creación y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial.

Artículo 270

El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 271

En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes.

El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil.

Artículo 272

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas

de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.

Capítulo IV **Del Poder Ciudadano**

Sección primera: disposiciones generales

Artículo 273

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la República.

Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, uno o una de cuyos o cuyas titulares será designado o designada por el Consejo Moral Republicano como su Presidente o Presidenta por períodos de un año, pudiendo ser reelegido o reelegida.

El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable.

Su organización y funcionamiento se establecerá en ley orgánica.

Artículo 274

Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado; e, igualmente,

promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.

Artículo 275

Los o las representantes del Consejo Moral Republicano formularán a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral Republicano podrá imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano presentará un informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito o adscrita el funcionario público o la funcionaria pública, para que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley.

Artículo 276

El Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los o las titulares de los órganos del Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesión plenaria. Así mismo, presentarán los informes que en cualquier momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional.

Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios se publicarán.

Artículo 277

Todos los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezca la ley, a colaborar con carácter preferente y urgente con los o las representantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. Éste podrá solicitarles las declaraciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con carácter confidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciudadano solo podrá suministrar la información contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los procedimientos que establezca la ley.

Artículo 278

El Consejo Moral Republicano promoverá todas aquellas actividades

pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los derechos humanos.

Artículo 279

El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.

Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Sección segunda: de la Defensoría del Pueblo

Artículo 280

La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.

La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quien será designado o designada por un único período de siete años.

Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales del Defensor o Defensora del Pueblo serán cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Artículo 281

Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:

1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento.
2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionado con motivo del funcionamiento de los servicios públicos.
3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con la ley.
4. Instar al Fiscal o la Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos.
5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto de los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos.
6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del

- público consumidor y usuario, de conformidad con la ley.
7. Presentar ante los órganos legislativos municipales, estatales o nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos.
 8. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección.
 9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos.
 10. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos, en virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos.
 11. Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos.
 12. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Artículo 282

El Defensor o Defensora del Pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no podrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 283

La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en los ámbitos municipal, estatal, nacional y especial. Su actividad se regirá por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio.

Sección tercera: del Ministerio Público

Artículo 284

El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones

directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley.

Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal o la Fiscal General de la República será designado o designada para un período de siete años.

Artículo 285

Son atribuciones del Ministerio Público:

1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.
3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.
4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.
5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.
6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la ley.

Artículo 286

La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento del

Ministerio Público en los ámbitos municipal, estatal y nacional y proveerá lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fiscales o las fiscales del Ministerio Público. Asimismo, establecerá las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su función.

Sección cuarta: de la Contraloría General de la República

Artículo 287

La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control.

Artículo 288

La Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la República, quien debe ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo.

El Contralor o Contralora General de la República será designado o designada para un período de siete años.

Artículo 289

Son atribuciones de la Contraloría General de la República:

1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos, en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.
2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley.
3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el

patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.

4. Instar al Fiscal o la Fiscal de la República a que ejerzan las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.
5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.
6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Artículo 290

La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y del sistema nacional de control fiscal.

Artículo 291

La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional es parte integrante del sistema nacional de control. Tendrá a su cargo la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus órganos adscritos, sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloría General de la República. Su organización y funcionamiento lo determinará la ley respectiva y estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la Fuerza Armada Nacional, quien será designado o designada mediante concurso de oposición.

Capítulo V Del Poder Electoral

Artículo 292

El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector; y son organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.

Artículo 293

El Poder Electoral tienen por funciones:

1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que estas susciten o contengan.
2. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente.
3. Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad políticoelectorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas.
4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones.
5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos.
6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios.
7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral.
8. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque estas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y en la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos.
9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos.
10. Las demás que determine la ley.

Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Artículo 294

Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios.

Artículo 295

El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 296

El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno o una por el Poder Ciudadano.

Los o las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal y cada designado o designada por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, serán presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán elegidos o elegidas por separado: los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo.

Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley.

Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 297

La jurisdicción contenciosoelectoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.

Artículo 298

La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma.

TÍTULO VI DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO

Capítulo I Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía

Artículo 299

El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.

Artículo 300

La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades

funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan.

Artículo 301

El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.

Artículo 302

El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

Artículo 303

Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.

Artículo 304

Todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio.

Artículo 305

El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica

del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.

Artículo 306

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Artículo 307

El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar

la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.

Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola. La ley regulará lo conducente a esta materia.

Artículo 308

El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.

Artículo 309

La artesanía e industrias populares típicas de la Nación gozarán de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad, y obtendrán facilidades crediticias para promover su producción y comercialización.

Artículo 310

El turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritaria para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en esta Constitución, el Estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo. El Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional.

Capítulo II

Del régimen fiscal y monetario

Sección primera: del régimen presupuestario

Artículo 311

La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.

El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, para su sanción legal, un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento.

El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud.

Los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.

Artículo 312

La ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública. Las operaciones de crédito público requerirán, para su validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica. La ley especial indicará las modalidades de las operaciones y autorizará los créditos presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto.

La ley especial de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto.

El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley.

Artículo 313

La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto.

Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, la ley especial de endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional hará explícitos los objetivos de largo plazo para la política fiscal, y explicará cómo dichos objetivos serán logrados, de acuerdo con los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal.

Artículo 314

No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada.

Artículo 315

En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de Gobierno, se establecerán de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables para el logro de tales resultados. Éstos se establecerán en términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio.

*Sección segunda: del sistema tributario***Artículo 316**

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.

Artículo 317

No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.

No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente.

En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se establecerá el doble de la pena.

Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos. Esta disposición no

limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución.

La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada por el Presidente o Presidenta de la República, de conformidad con las normas previstas en la ley.

Sección tercera: del sistema monetario nacional

Artículo 318

Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República.

El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales y todas aquellas que establezca la ley.

Artículo 319

El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También

rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirá los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la ley.

El Banco Central de Venezuela estará sujeto al control posterior de la Contraloría General de la República y a la inspección y vigilancia del organismo público de supervisión bancaria, el cual remitirá a la Asamblea Nacional informes de las inspecciones que realice. El presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela requerirá la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances serán objeto de auditoria externa en los términos que fije la ley.

Sección cuarta: de la coordinación macroeconómica

Artículo 320

El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social.

El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.

La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiaria y monetaria; así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo será firmado por el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio responsable de las finanzas, y se

divulgará en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo que las acciones de política sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificarán los resultados esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las características del acuerdo anual de política económica y los mecanismos de rendición de cuentas.

Artículo 321

Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado, en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como principios básicos la eficiencia, la equidad y la no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo.

TÍTULO VII DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 322

La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.

Artículo 323

El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional,

el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones.

Artículo 324

Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

Artículo 325

El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación, en los términos que la ley establezca.

Capítulo II

De los principios de seguridad de la Nación

Artículo 326

La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Artículo 327

La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial.

Capítulo III

De la Fuerza Armada Nacional

Artículo 328

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

Artículo 329

El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley.

Artículo 330

Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

Artículo 331

Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán regulados por la ley respectiva.

Capítulo IV**De los órganos de seguridad ciudadana****Artículo 332**

El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:

1. Un cuerpo uniformado de policía nacional.
2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.
3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil.
4. Una organización de protección civil y administración de desastres.

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna.

La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.

TÍTULO VIII DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN

Capítulo I De la garantía de esta Constitución

Artículo 333

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 334

Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.

Artículo 335

El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

Artículo 336

Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estatales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República, antes de su ratificación.
6. Revisar en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.
7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estatal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Capítulo II

De los estados de excepción

Artículo 337

El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

Artículo 338

Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogables por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Artículo 339

El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

TÍTULO IX DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Capítulo I De las enmiendas

Artículo 340

La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental.

Artículo 341

Las enmiendas a esta Constitución se tramitarán en la forma siguiente:

1. La iniciativa podrá partir del quince por ciento de los ciudadanos inscritos y las ciudadanas inscritas en el Registro Civil y Electoral; o de un treinta por ciento de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.
2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerirá la aprobación de ésta por la mayoría de sus integrantes y

se discutirá, según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de leyes.

3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal.
4. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley relativa al referendo aprobatorio.
5. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente y se publicarán a continuación de esta Constitución sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó.

Capítulo II

De la reforma constitucional

Artículo 342

La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional.

La iniciativa de la reforma de esta Constitución podrán tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; o un número no menor del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral que lo soliciten.

Artículo 343

La iniciativa de Reforma Constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente:

1. El proyecto de reforma constitucional tendrá una primera discusión en el período de sesiones correspondiente a la presentación del mismo.
2. Una segunda discusión por Título o Capítulo, según fuere el caso.
3. Una tercera y última discusión artículo por artículo.
4. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional

- en un plazo no mayor de dos años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma.
5. El proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea Nacional.

Artículo 344

El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción. El referendo se pronunciará en conjunto sobre la reforma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprobará un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la República o un número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 345

Se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.

Artículo 346

El Presidente o Presidenta de la República estará obligado u obligada a promulgar las enmiendas o reformas dentro de los diez días siguientes a su aprobación. Si no lo hiciere, se aplicará lo previsto en esta Constitución.

Capítulo III **De la Asamblea Nacional Constituyente**

Artículo 347

El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 348

La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 349

El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución.

Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.

Artículo 350

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA**Única**

Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS**Primera**

La ley especial sobre el régimen del Distrito Capital, prevista en el

artículo 18 de esta Constitución, será aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y preservará la integridad territorial del Estado Miranda. Mientras se aprueba la ley especial, se mantiene en vigencia el régimen previsto en la Ley Orgánica del Distrito Federal y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Segunda

Mientras se dicta la ley prevista en el artículo 38 de esta Constitución, sobre adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad, se considerarán con domicilio en Venezuela los extranjeros o extranjeras que habiendo ingresado y permanecido legalmente en el territorio nacional, hayan declarado su intención de fijar domicilio en el país, tengan medios lícitos de vida y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante dos años.

Por residencia se entenderá la estadía en el país con ánimo de permanecer en él. Las declaraciones de voluntad previstas en los artículos 32, 33 y 36 de esta Constitución se harán en forma auténtica por la persona interesada cuando sea mayor de edad, o por su representante legal, si no ha cumplido veintiún años.

Tercera

La Asamblea Nacional, dentro de los primeros seis meses siguientes a su instalación, aprobará:

1. Una reforma parcial del Código Penal para incluir el delito de desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 45 de esta Constitución. Mientras no se apruebe esta reforma se aplicará, en lo que sea posible, la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas.
2. Una ley orgánica sobre estados de excepción.
3. Una ley especial para establecer las condiciones y características de un régimen especial para los Municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos, del Estado Apure. Para la elaboración de esta ley, se oirá la opinión del Presidente o Presidenta de la República, de la Fuerza Armada Nacional, de la representación que designe el Estado en

cuestión y demás instituciones involucradas en la problemática fronteriza.

Cuarta

Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará:

1. La legislación sobre la sanción a la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del Código Penal.
2. Una ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, acorde con los términos de esta Constitución y los tratados internacionales sobre la materia ratificados por Venezuela.
3. Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años. Durante este lapso, mientras no entre en vigencia la reforma de la ley seguirá aplicándose de forma transitoria el régimen de la prestación de antigüedad establecido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Asimismo, contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por la República.
4. Una ley orgánica Procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso.
5. La legislación referida al Sistema Judicial, a la Administración Pública Nacional, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral y a la legislación tributaria, de régimen presupuestario y de crédito público.
Una ley orgánica sobre la defensa pública. Hasta tanto se sancione dicha ley, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del

Sistema Judicial estará a cargo del desarrollo y operatividad efectiva del Sistema Autónomo de la Defensa Pública, a los fines de garantizar el derecho a la defensa.

6. Una ley que desarrolle la hacienda pública estatal estableciendo, con apego a los principios y normas de esta Constitución, los tributos que la compongan, los mecanismos de su aplicación y las disposiciones que la regulen.
7. La legislación que desarrolle los principios constitucionales sobre el régimen municipal. De conformidad con ella, los órganos legislativos de los Estados procederán a sancionar los instrumentos normativos que correspondan a la potestad organizadora que tienen asignada con respecto a los Municipios y demás entidades locales y a la división políticoterritorial en cada jurisdicción. Se mantienen los Municipios y parroquias existentes hasta su adecuación al nuevo régimen previsto en dicho ordenamiento.
8. La ley a la cual se ajustará el Banco Central de Venezuela. Dicha ley fijará, entre otros aspectos, el alcance de las funciones y forma de organización del instituto; el funcionamiento, período, forma de elección, remoción, régimen de incompatibilidades y requisitos para la designación de su Presidente o Presidenta y Directores o Directoras; las reglas contables para la constitución de sus reservas y el destino de sus utilidades; la auditoría externa anual de las cuentas y balances, a cargo de firmas especializadas, seleccionadas por el Ejecutivo Nacional; y el control posterior por parte de la Contraloría General de la República en lo que se refiere a la legalidad, sinceridad, oportunidad, eficacia y eficiencia de la gestión administrativa del Banco Central de Venezuela.

La ley establecerá que el Presidente o Presidenta y demás integrantes del Directorio del Banco Central de Venezuela representarán exclusivamente el interés de la Nación, a cuyo efecto fijará un procedimiento público de evaluación de los méritos y credenciales de las personas postuladas a dichos cargos.

La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corresponderá la designación del Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus Directores o Directoras; y establecerá los términos de participación del Poder Legislativo Nacional en la designación y

ratificación de estas autoridades.

9. La ley del cuerpo de policía nacional. En dicha ley se establecerá el mecanismo de integración del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre al cuerpo de policía nacional.

Quinta

En el término no mayor de un año, a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional dictará una reforma del Código Orgánico Tributario que establezca, entre otros aspectos:

1. La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, con el objeto de eliminar ambigüedades.
2. La eliminación de excepciones al principio de no retroactividad de la ley.
3. Ampliar el concepto de renta presunta con el objeto de dotar con mejores instrumentos a la administración tributaria.
4. Eliminar la prescripción legal para delitos tributarios graves, los cuales deben ser tipificados en el Código Orgánico Tributario.
5. La ampliación de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abogados o de abogadas, auditores externos o auditoras externas y otros u otras profesionales que actúen en complicidad para cometer delitos tributarios, incluyendo períodos de inhabilitación en el ejercicio de la profesión.
6. La ampliación de las penas y la severidad de las sanciones contra delitos de evasión fiscal, aumentando los períodos de prescripción.
7. La revisión de atenuantes y agravantes de las sanciones para hacerlas más estrictas.
8. La ampliación de las facultades de la administración tributaria en materia de fiscalización.
9. El incremento del interés moratorio para disuadir la evasión fiscal.
10. La extensión del principio de solidaridad, para permitir que los directores o directoras y asesores o asesoras respondan con sus bienes en caso de convalidar delitos tributarios.
11. La introducción de procedimientos administrativos más expeditos.

Sexta

La Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislará sobre todas las

materias relacionadas con esta Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, educación y fronteras.

Séptima

A los fines previstos en el artículo 125 de esta Constitución, mientras no se apruebe la ley orgánica correspondiente, la elección de los representantes y las representantes indígenas a la Asamblea Nacional, a los Consejos Legislativos y a los Concejos Municipales, se regirá por los siguientes requisitos de postulación y mecanismos:

Todas las comunidades u organizaciones indígenas podrán postular candidatos y candidatas que sean indígenas.

Es requisito indispensable, para ser candidato o candidata, hablar su idioma indígena y cumplir con, al menos, una de las siguientes condiciones:

1. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad.
2. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cultural.
3. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.
4. Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de tres años de funcionamiento.

Se establecerán tres regiones: Occidente, compuesta por los Estados Zulia, Mérida y Trujillo; Sur, compuesta por los Estados Amazonas y Apure; y Oriente, compuesta por los Estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre.

Cada uno de los Estados que componen las regiones elegirá un representante. El Consejo Nacional Electoral declarará electo al candidato o electa a la candidata que hubiere obtenido la mayoría de los votos válidos en su respectiva región o circunscripción.

Los candidatos o las candidatas indígenas estarán en el tarjetón de su respectivo Estado o circunscripción y todos los electores y electoras de ese Estado podrán votarlos o votarlas.

Para los efectos de la representación indígena en los Concejos Legislativos y en los Concejos Municipales de los Estados y Municipios con población indígena, se tomará el censo oficial de 1992 de la Oficina Central de Estadística e Informática.

Las elecciones se realizarán de acuerdo con las normas y requisitos aquí establecidos.

El Consejo Nacional Electoral garantizará, con apoyo de expertos o expertas indigenistas y organizaciones indígenas, el cumplimiento de los requisitos aquí señalados.

Octava

Mientras no se promulguen las nuevas leyes electorales previstas en esta Constitución los procesos electorales serán convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional Electoral.

Para el primer período del Consejo Nacional Electoral, previsto en esta Constitución, todos sus integrantes serán designados o designadas simultáneamente. En la mitad del período, dos de sus integrantes serán renovados o renovadas de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica correspondiente.

Novena

Mientras no se dicten las leyes relativas al Capítulo IV del Título V de esta Constitución, se mantendrán en vigencia las Leyes Orgánicas del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, el o la titular será designado o designada de manera provisoria por la Asamblea Nacional Constituyente. El Defensor o Defensora del Pueblo adelantará lo correspondiente a la estructura organizativa, integración, establecimiento de presupuesto e infraestructura física, tomando como bases las atribuciones que le establece esta Constitución.

Décima

Lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 de esta Constitución sobre la obligación que tienen los Estados de designar un mínimo del cincuenta por ciento del situado constitucional a la inversión, entrará en vigencia a partir del primero de enero del año dos mil uno.

Decimoprimera

Hasta tanto se dicte la legislación nacional relativa al régimen de las tierras baldías, la administración de las mismas continuará siendo ejercida por el Poder Nacional, conforme a la legislación vigente.

Decimosegunda

La demarcación del hábitat indígena a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución.

Decimotercera

Hasta tanto los Estados asuman por ley estatal las competencias referidas en el numeral 7 del artículo 164 de esta Constitución, se mantendrá el régimen vigente.

Decimocuarta

Mientras no se dicte la legislación que desarrolle los principios de esta Constitución sobre el régimen municipal, continuarán plenamente vigentes las ordenanzas y demás instrumentos normativos de los Municipios, relativos a las materias de su competencia y al ámbito fiscal propio, que tienen atribuido conforme al ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de esta Constitución.

Decimoquinta

Hasta tanto se apruebe la legislación a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución, se mantendrá en vigencia el ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de esta Constitución.

Decimosexta

Para el enriquecimiento del acervo histórico de la Nación, el cronista

de la Asamblea Nacional Constituyente coordinará lo necesario para salvaguardar las grabaciones o registros que de las sesiones y actividades de la Asamblea Nacional Constituyente se realizaron en imagen, en sonido; en documentos escritos, digitales, fotográficos o hemerográficos; y en cualquier otra forma de documento elaborado.

Todos estos documentos quedarán bajo la protección del Archivo General de la Nación.

Decimoséptima

El nombre de la República, una vez aprobada esta Constitución será “República Bolivariana de Venezuela”, tal como está previsto en su artículo uno. Es obligación de las autoridades e instituciones, tanto públicas como privadas, que deban expedir registros, títulos o cualquier otro documento, utilizar el nombre de “República Bolivariana de Venezuela”, de manera inmediata.

En trámites rutinarios las dependencias administrativas agotarán el inventario documental de papelería; su renovación se hará progresivamente con la mencionada denominación, en un plazo que no excederá de cinco años.

La circulación de monedas acuñadas y billetes emitidos con el nombre de “República de Venezuela”, estará regulada por la Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela contemplada en la Disposición Transitoria cuarta de esta Constitución, en función de hacer la transición a la denominación “República Bolivariana de Venezuela”.

Decimoctava

A los fines de asegurar la vigencia de los principios establecidos en el artículo 113 de esta Constitución, la Asamblea Nacional dictará una ley que establezca, entre otros aspectos, el organismo de supervisión, control y fiscalización que deba asegurar la efectiva aplicación de estos principios y las disposiciones y demás reglas que los desarrolle.

La persona que presida o dirija este organismo será designada por el voto de la mayoría de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, previo informe favorable de una comisión especial designada de su seno al efecto.

La ley establecerá que los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública y los jueces o juezas llamados o llamadas a conocer y decidir las controversias relacionadas con las materias a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución, observen, con carácter prioritario y excluyente, los principios allí definidos y se abstengan de aplicar cualquier disposición susceptible de generar efectos contrarios a ellos.

La ley establecerá en las concesiones de servicios públicos, la utilidad para el concesionario o concesionaria y el financiamiento de las inversiones estrictamente vinculadas a la prestación del servicio, incluyendo las mejoras y ampliaciones que la autoridad competente considere razonables y apruebe en cada caso.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo.

Aprobada por el pueblo de Venezuela, mediante referendo constituyente, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Año 189º de la Independencia y 140º de la Federación.

EL PRESIDENTE

LUIS MIQUILENA

EL PRIMER VICEPRESIDENTE

ISAÍAS RODRÍGUEZ

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE

ARISTÓBULO ISTÚRIZ

**LOS CONSTITUYENTES,
CONSTITUYENTES NACIONALES**

ALFREDO PEÑA
ALLAN BREWER CARÍAS
ÁNGELA ZAGO
EARLE HERRERA
EDMUNDO CHIRINOS
EUSTOQUIO CONTRERAS
GUILLERMO GARCÍA PONCE
HERMÁN ESCARRÁ
JESÚS RAFAEL SULBARÁN
LEOPOLDO PUCHI
LUIS VALLENILLA
MANUEL QUIJADA
MARISABEL DE CHÁVEZ
PABLO MEDINA
PEDRO ORTEGA DÍAZ
REYNA ROMERO GARCÍA
RICARDO COMBELLAS
TAREK WILLIAM SAAB
VINICIO ROMERO MARTÍNEZ

CONSTITUYENTES POR DISTRITO FEDERAL

DESIRÉE SANTOS AMARAL
ELIÉZER REINALDO OTAIZA CASTILLO
ERNESTO ALVARENGA
FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES
JULIO CÉSAR ALVIÁREZ
NICOLÁS MADURO MOROS
SEGUNDO MELÉNDEZ
VLADIMIR VILLEGAS

CONSTITUYENTES POR AMAZONAS

LIBORIO GUARULLA GARRIDO
NELSON SILVA

CONSTITUYENTES POR ANZOÁTEGUI

ÁNGEL RODRÍGUEZ
DAVID DE LIMA SALAS
DAVID FIGUEROA
ELÍAS LÓPEZ PORTILLO
GUSTAVO PEREIRA

CONSTITUYENTES POR APURE

CRISTÓBAL JIMÉNEZ
RAFAEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

CONSTITUYENTES POR ARAGUA

ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ
ANTONIO DI GIAMPAOLO BOTTINI
CARLOS TABLANTE
HUMBERTO PRIETO
OSCAR FEO

CONSTITUYENTES POR BARINAS

FRANCISCO EFRAÍN VISCONTI OSORIO
JOSÉ LEÓN TAPIA CONTRERAS

CONSTITUYENTES POR BOLÍVAR

ALEJANDRO DE JESÚS SILVA MARCANO
ANTONIO BRICEÑO
DANIEL DÍAZ
LEONEL JIMÉNEZ CARUPE
VICTORIA MATA

CONSTITUYENTES POR CARABOBO

ELIO GÓMEZ GRILLO
MANUEL VADELL GRATEROL
AMÉRICO DÍAZ NÚÑEZ
BLANCANIEVE PORTOCARRERO
DIEGO SALAZAR
FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA
JUAN JOSÉ MARÍN LAYA
OSCAR NAVAS TORTOLERO
SAÚL ORTEGA

CONSTITUYENTES POR COJEDES

HAYDÉE DE FRANCO
JUAN BAUTISTA PÉREZ

CONSTITUYENTES POR DELTA AMACURO

CÉSAR PÉREZ MARCANO
RAMÓN ANTONIO YÁNEZ

CONSTITUYENTES POR FALCÓN

JESÚS MONTILLA APONTE
SOL MUSSETT DE PRIMERA
YOEL ACOSTA CHIRINOS

CONSTITUYENTES POR GUÁRICO

ÁNGEL EUGENIO LANDAETA
PEDRO SOLANO PERDOMO
RUBÉN ALFREDO ÁVILA ÁVILA

CONSTITUYENTES POR LARA

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
ENRIQUE PERAZA
HENRI FALCÓN
LENÍN ROMERO
LUIS REYES REYES
MIRNA TERESA VIES DE ÁLVAREZ
REINALDO ROJAS

CONSTITUYENTES POR MÉRIDA

ADÁN CHÁVEZ FRÍAS
FLORENCIO ANTONIO PORRAS ECHEZURÍA
PAUSIDES SEGUNDO REYES GÓMEZ

CONSTITUYENTES POR MIRANDA

ELÍAS JAUA MILANO
FREDDY GUTIÉRREZ
HAYDÉE MACHÍN
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
JOSÉ VICENTE RANGEL ÁVALOS
LUIS GAMARGO
MIGUEL MADRIZ
RAÚL ESTÉ
RODOLFO SANZ
WILLIAM LARA
WILLIAM OJEDA

CONSTITUYENTES POR MONAGAS

JOSÉ GREGORIO BRICEÑO TORREALBA
MARELIS PÉREZ MARCANO
NUMA ROJAS VELÁSQUEZ

CONSTITUYENTES POR NUEVA ESPARTA

ALEXIS NAVARRO ROJAS
VIRGILIO ÁVILA VIVAS

CONSTITUYENTES POR PORTUGUESA

ANTONIA MUÑOZ
MIGUEL A. GARRANCHÁN VELÁSQUEZ
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

CONSTITUYENTES POR SUCRE

JESÚS MOLINA VILLEGAS
JOSÉ LUIS MEZA
LUIS AUGUSTO ACUÑA CEDEÑO

CONSTITUYENTES POR TÁCHIRA

MARÍA IRIS VARELA RANGEL
RANGEL RONALD BLANCO LA CRUZ
SAMUEL LÓPEZ
TEMÍSTOCLES SALAZAR

CONSTITUYENTES POR TRUJILLO

GERARDO MÁRQUEZ
GILMER VILORIA

CONSTITUYENTES POR VARGAS

ANTONIO RODRÍGUEZ
JAIME BARRIOS

CONSTITUYENTES POR YARACUY

BRAULIO ÁLVAREZ
NÉSTOR LEÓN HEREDIA

CONSTITUYENTES POR ZULIA

ALBERTO URDANETA
ATALA URIANA
FROILÁN BARRIOS NIEVES
GASTÓN PARRA LUZARDO
GEOVANY DARÍO FINOL FERNÁNDEZ
JORGE LUIS DURÁN CENTENO
LEVY ARRON ALTER VALERO
MARÍA DE QUEIPO
MARIO ISEA BOHÓRQUEZ
RAFAEL COLMENÁREZ
ROBERTO JIMÉNEZ MAGGIOLO
SILVESTRE VILLALOBOS
YLDEFONSO FINOL

CONSTITUYENTES POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

GUILLERMO GUEVARA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
NOELÍ POCATERRA DE OBERTO

LOS SECRETARIOS,
ELVIS AMOROSO
ALEJANDRO ANDRADE

Cúmplase,
(L.S.)

LUIS MIQUILENA
**PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE**

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

ENMIENDA N°1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 1.

Se enmienda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la modificación de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, en la forma siguiente:

Artículo 160.

El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar.

El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida.

Artículo 162.

El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes:

1. Legislar sobre las materias de la competencia estatal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
3. Las de más que establezcan esta Constitución y la ley.

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estatales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo.

Artículo 174.

El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida.

Artículo 192.

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.

Artículo 230.

El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida.

Artículo 2.

Imprímase íntegramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y publíquese a continuación de esta Constitución la Enmienda sancionada y anótese al pie de los Artículos 160, 162, 174, 192 y 230 del texto constitucional la referencia de número y fecha de esta Enmienda.

Sancionada por la Asamblea Nacional a los catorce días del mes de enero de dos mil nueve y aprobada por el pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, mediante referendo constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CILIA FLORES

PRIMER VICEPRESIDENTE
SAÚL ORTEGA CAMPOS

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
JOSÉ ALBORNOZ URBANO

LOS CONSTITUYENTES:
AMAZONAS

MONTENEGRO NÚÑEZ JUAN ANTONIO
PALAU PATIÑO DIÓGENES EDGILDO
YGARZA JULIO HARON

ANZOÁTEGUI

TACHINAMO GARCÍA HENRY JOSÉ
ARÓNICA CARREYO EDUARDO
RODRÍGUEZ RAUSEO CARMEN ANTONIA
SÁNCHEZ CHACÓN LUIS EDUARDO
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ HUGO RAFAEL
RODRÍGUEZ GAMBOA ÁNGEL LUIS
HERRERA SILVA EARLE JOSÉ
RODRÍGUEZ LONGART VICENTE JOSÉ

APURE

EL GATRIF MIZHER FAHD
ESPINOZA LEÓN CARLOS ROQUE
GONZÁLEZ WILFREDO
DELGADO CAMEJO RAFAEL ANTONIO
JIMÉNEZ CRISTÓBAL LEOBARDO

ARAGUA

GÓMEZ ABREU EDIS EMILIO
QUERALES RODRÍGUEZ WILLIAM ANTONIO
NIEVES COLMENARES ELEAZAR
FIGUERA GONZÁLEZ OSCAR RAMÓN
AMOROSO ELVIS EDUARDO
GARCÍA ISMAEL CONCEPCIÓN
BASTIDAS MARTÍNEZ PEDRO ANTONIO
DAZA ROY ALBERTO
ESCARRÁ MALAVÉ CARLOS

BARINAS

PÉREZ BETANCOURT WILMER RAFAEL
GUALDRÓN GONZALO JOSÉ
GRATEROL CAMACHO JESÚS ERNESTO

PEÑA GONZÁLEZ GEOVANNI JOSÉ
AZUAJE CORDERO WILMER JOSÉ

BOLÍVAR

GIL BARRIOS RAFAEL DARÍO
MARCANO CASTILLO ÁNGEL BAUTISTA
CABELLO ROJAS DILUVINA DE JESÚS
RÍOS BOLÍVAR RAFAEL ÁNGEL
EL ZABAYAR SAMARA ADEL
SOLÍS SORRENTINO BERKIS CLARET
MOLINA JUAN JOSÉ
MEDINA CARRASCO PASTORA COROMOTO

CARABOBO

MONTILLA ORTEGA CARMEN SARITA
ISRAEL ANTONIO SOTILLO INFANTE
GÓMEZ DENIS OSMAR ENRIQUE
GARGÍA PRADO ORLANDO FEDOR
ÁLVAREZ BRACAMONTE RAÚL JESÚS
AMELIACH ORTA FRANCISCO JOSÉ
GÓMEZ LÓPEZ DOUGLAS EDUARDO
VÁSQUEZ GUZMÁN FERNANDO ANTONIO
V. BRIZUELA LAURA MARÍA

COJEDES

PIRELA SÁNCHEZ HAYDEN OVANDO
PÉREZ JUAN BAUTISTA
SALAZAR ASDRÚBAL COROMOTO
MILANO RODRÍGUEZ JHONNY OWE

DELTA AMACURO

MARCANO RODRÍGUEZ OMAR
TAMARONIS LOA DEL VALLE
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ HENRY JOSÉ
GONZÁLEZ CAMEJO ENRIQUE JOSÉ

DISTRITO CAPITAL

SANTOS AMARAL DESIRÉE
GARCÍA BRAVO REINALDO ALFREDO
MEDINA ROJAS CARLOS ALFREDO
DUGARTE PADRÓN JUAN CARLOS
BLANCO LUIS BELTRÁN
VIVAS VELAZCO DARÍO
SILVA MAGALLANES TIRSO DEL VALLE
LANDER MORENO PEDRO TOMÁS
RÍOS FLOR MARÍA

FALCÓN

MÉNDEZ GONZÁLEZ ANDRÉS ELOY
MANAURE REYES ALEYDYS ARGELIA
DAAL ULISES RAMÓN
BALDAYO LÓPEZ HENRY RAFAEL
EIZAGA RUJANO MARIS NOHEMÍ
CASTELLAR PADILLA ALBERTO EFRAÍN

GUÁRICO

CONTRERAS DÍAZ EUSTOQUIO
MARÍN LAYA JUAN JOSÉ
OROEZA SUÁREZ MARÍA ANTONIA
ROJAS ROJAS MIGUEL RAFAEL

LARA

ESCALONA COLINA JOSÉ RAFAEL
GONZÁLEZ PASTOR PAUCIDES
LUGO RODRÍGUEZ IVÁN JOSÉ
PERAZA ROJAS DENIS ALBERTO
CONTRERAS HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO
URDANETA PEREIRA BRICCIO JOSÉ
MORA JOSÉ DAVID
FERRER GERMÁN DARÍO
CALZADILLA PERAZA JOSÉ SIMÓN

MÉRIDA

BRICEÑO MÉNDEZ MANUEL JOSÉ
CAMACHO ARAUJO OBDULIO JOSÉ
ÁVILA ÁVILA MARÍA ALEJANDRA
RAMÍREZ ROSALES JOSÉ OSCAR
CARMONA RODRÍGUEZ OSMAR
IGLESIAS PINO WILMER ARQUÍMEDES

MIRANDA

RUÍZ ESPINOZA MODESTO ANTONIO
LEONETT CANALES FÉLIX
MONTIEL MEDINA AUGUSTO VLADIMIR
BARRERA MORALES MAIGUALIDA ESTHER
MATUTE GUAYAMO ROMELIA CELESTINA
JIMÉMEZ RODRÍGUEZ TULIO AMADO
ÁLVAREZ GONZÁLEZ JESÚS ALBERTO
CABELLO PALMA GIRARDOT JOSÉ
FIGUEROA CHACÍN SANTANA
DOMÍNGUEZ VALDERRAMA JESÚS ENRIQUE
PÉREZ MARCANO MARELIS JOSEFINA

NUEVA ESPARTA

MILLÁN MARÍN JUAN JOSÉ
GARCÍA HERNÁNDEZ JUAN SALVADOR
MORALES AURORA JOSEFINA
BRAVO QUEVEDO IROSHIMA JENNIFER
ECHEZURÍA RODRÍGUEZ CARLOS FRANCISCO
MACHÍN FERRER HAYDÉE JOSEFINA
GAMARGO LAGONELL LUIS ALFREDO
ÁLVAREZ ALFONSO CARMEN TRINIDAD

MONAGAS

VILLALBA SÁNCHEZ MANUEL ENRIQUE
DÍAZ SALAZAR LUIS ÁNGEL
HERNÁNDEZ CEDEÑO RÉGULO FELIPE
PACHECO OSORIO MARÍA DEL ROSARIO

PORTUGUESA

HERNÁNDEZ PARRA PORFIRIO DE JESÚS
MURGA RIVAS ALFREDO
RODRÍGUEZ GARCÍA JOSÉ ERNESTO
LARA BARRIOS ZARK ALFREDO
TORREALBA OJEDA FRANCISCO ALEJANDRO
GUTIÉRREZ BRICEÑO RICARDO ANTONIO

SUCRE

JIMÉNEZ ÁLVAREZ BERNARDO JOSÉ
GARCÍA FONT HERMES GREGORIO
VALLENILLA MENDOZA YARITZA MARGARIT
RODRÍGUEZ JOSÉ DEL CARMEN
REGNAULT ROJAS JOSÉ RAMÓN
MARCANO GONZÁLEZ ERASMO ARISTALCO

TÁCHIRA

GARCÍA JARPA JULIO FERNANDO
MOGOLLÓN DE GUERRERO SANTA XIOMARA
TASCÓN GUTIÉRREZ LUIS
SANGUINO CÁRDENAS JOSÉ RICARDO
VARELA RANGEL MARÍA IRIS
LUCENA GONZÁLEZ EDGAR DE JESÚS
PACHECO ALVIÁREZ HERNÁN

TRUJILLO

MORENO VILORIA JULIO BERNARDO
PÉREZ CRISTANCHO OSCAR FRANCISCO
MENDOZA J. JUAN JOSÉ
LEAL BRICEÑO ORÉSTEDES JESÚS
GIL RODRÍGUEZ MALAQUIAS

YARACUY

GAMARRA MANZABEL CARLOS ALBERTO
CAPELLA MATEO RICARDO
ÁLVAREZ BRAULIO JOSÉ
SÁEZ BORDONES CARMEN LISETH
SÁNCHEZ LÓPEZ TOMÁS RAFAEL

VARGAS

ESCALONA PRADO SIMÓN ENRIQUE
VERA ROJAS OSWALDO EMILIO
D" AMELIO CARDIET TANIA
DE FREITAS RODRÍGUEZ JOSÉ GUIDO

ZULIA

ORTEGA RÍOS CALIXTO ANTONIO
RÍOS BECERRA EDIS ALFONSO
BRICEÑO DE QUEIPO MARÍA DE LA PAZ
CEDEÑO MÁRQUEZ JENNY ELINA
ISEA BOHORQUEZ MARIO RICARDO
CABELLO LISANDRO JOSÉ SAAB SAAB IMAD
OSORIO LÓPEZ OMAR JESÚS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ LIBES DE JESÚS
QUINTERO VALENCIA ROBERTO ANTONIO
SOUKT RINCÓN RAFIC
PEÑA PINEDA ELISEO RAMÓN
MONTIEL ARCADIO JOSÉ
PALOMARES VERDE ENDER DE JESÚS
LÓPEZ ALMAO FRANCISCO

REPRESENTACIÓN INDÍGENA

POCATERRA DE OBERTO NOELÍ
PÉREZ RAMOS ESTEVAN ARGELIO
POYO CASCANTE JOSÉ AMADOR

La Secretaria

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

VÍCTOR CLARK BOSCÁN

Sub Secretario

Plaza Pérez Bonalde de Catia Parroquia Sucre Municipio Libertador, en Caracas, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil nueve. Años 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,

(L.S.)

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo,
RAMÓN ALONZO CARRIZÁLEZ RENGIFO

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia,
LUIS RAMÓN REYES REYES
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia,
TARECK EL AISSAMI

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
NICOLÁS MADURO MOROS

El Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas,
ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

El Ministro del Poder Popular para la Defensa,
GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio,
WILLIAN ANTONIO CONTRERAS

El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería,
RODOLFO EDUARDO SANZ

La Ministra del Poder Popular para el Turismo,
OLGA CECILIA AZUAJE

El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras,
ELÍAS JAUA MILANO

El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior,
LUIS ACUÑA CEDEÑO

El Ministro del Poder Popular para la Educación,
HÉCTOR NAVARRO

El Ministro del Poder Popular para la Salud,
JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS

El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social,
ROBERTO MANUEL HERNÁNDEZ

El Ministro del Poder Popular para la Infraestructura,
DIOSDADO CABELLO RONDÓN

El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo,
RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

La Ministra del Poder Popular para el Ambiente,
YUVIRÍ ORTEGA LOVERA

El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo,
HAIMAN EL TROUDI

La Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología,
NURIS ORIHUELA GUEVARA

El Ministro del Poder Popular para la Comunicación
y la Información,
JESSE CHACÓN ESCAMILLO

El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal,
PEDRO MOREJÓN CARRILLO

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación,
FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN

El Ministro del Poder Popular para la Cultura,
HÉCTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS

El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat,
FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS

La Ministra del Poder Popular para la Participación
y Protección Social,
ÉRIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA

La Ministra del Poder Popular para el Deporte,
VICTORIA MERCEDES MATA GARCÍA

La Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones
y la Informática,
SOCORRO ELIZABETH HERNÁNDEZ

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas,
NICIA MALDONADO MALDONADO

La Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer,
MARÍA LEÓN

ÍNDICE

NOTA PARA ESTA SEGUNDA EDICIÓN	9
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	17
TÍTULO I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES	17
TÍTULO II DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y DE LA DIVISIÓN POLÍTICA	20
Capítulo I Del territorio y demás espacios geográficos	20
Capítulo II De la división política	21
TÍTULO III DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES	22
Capítulo I Disposiciones generales	22
Capítulo II De la nacionalidad y de la ciudadanía	25
Sección primera: de la nacionalidad	25
Sección segunda: de la ciudadanía	27
Capítulo III De los derechos civiles	28
Capítulo IV De los derechos políticos y del referendo popular	29
Sección primera: de los derechos políticos	29
Sección segunda: del referendo popular	32
Capítulo V De los derechos sociales y de las familias	32
Capítulo VI De los derechos culturales y educativos	34
Capítulo VII De los derechos económicos	39

Capítulo VIII	
De los derechos de los pueblos indígenas _____	40
Capítulo IX	
De los derechos ambientales _____	44
Capítulo X	
De los deberes _____	46
 TÍTULO IV	
DEL PODER PÚBLICO _____	48
Capítulo I	
De las disposiciones fundamentales _____	48
Sección primera: disposiciones generales _____	48
Sección segunda: de la administración pública _____	49
Sección tercera: de la función pública _____	50
Sección cuarta: de los contratos de interés público _____	53
Sección quinta: de las relaciones internacionales _____	54
Capítulo II	
De la competencia del Poder Público Nacional _____	55
Capítulo III	
Del Poder Público Estatal _____	55
Capítulo IV	
Del Poder Público Municipal _____	56
Capítulo V	
Del Consejo Federal de Gobierno _____	58
 TÍTULO V	
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL _____	59
Capítulo I	
Del Poder Legislativo Nacional _____	59
Sección primera: disposiciones generales _____	59
Capítulo II	
Del Poder Ejecutivo Nacional _____	63
Capítulo III	
Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia _____	68
Capítulo IV	
Del Poder Ciudadano _____	70
Capítulo V	
Del Poder Electoral _____	73

TÍTULO VI

DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO	75
----------------------------	----

Capítulo I

Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía	75
---	----

Capítulo II

Del régimen fiscal y monetario	77
Sección primera: del régimen presupuestario	77
Sección segunda: del sistema tributario	78
Sección tercera: del sistema monetario nacional	79
Sección cuarta: de la coordinación macroeconómica	80

TÍTULO VII

DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN	81
------------------------------	----

Capítulo I

Disposiciones generales	81
-------------------------	----

Capítulo II

De los principios de seguridad de la Nación	82
---	----

Capítulo III

De la Fuerza Armada Nacional	83
------------------------------	----

Capítulo IV

De los órganos de seguridad ciudadana	84
---------------------------------------	----

TÍTULO VIII

DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN	85
---------------------------------------	----

Capítulo I

De la garantía de esta Constitución	85
-------------------------------------	----

Capítulo II

De los estados de excepción	94
-----------------------------	----

TÍTULO IX

DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL	96
------------------------------	----

PREÁMBULO	107
-----------	-----

CONSTITUCIÓN	107
--------------	-----

TÍTULO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES	107
--------------------------	-----

TÍTULO II

DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA	109
Capítulo I	109
Del territorio y demás espacios geográficos	109
Capítulo II	112
De la división política	112

TÍTULO III

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES	113
Capítulo I	113
Disposiciones generales	113
Capítulo II	117
De la nacionalidad y de la ciudadanía	117
Sección primera: de la nacionalidad	117
Sección segunda: de la ciudadanía	119
Capítulo III	120
De los derechos civiles	120
Capítulo IV	126
De los Derechos Políticos y del Referendo Popular	126
Sección primera: de los Derechos Políticos	126
Sección segunda: del referendo popular	129
Capítulo V	131
De los derechos sociales y de las familias	131
Capítulo VI	139
De los derechos culturales y educativos	139
Capítulo VII	143
De los derechos económicos	143
Capítulo VIII	146
De los derechos de los pueblos indígenas	146
Capítulo IX	148
De los derechos ambientales	148
Capítulo X	149
De los deberes	149

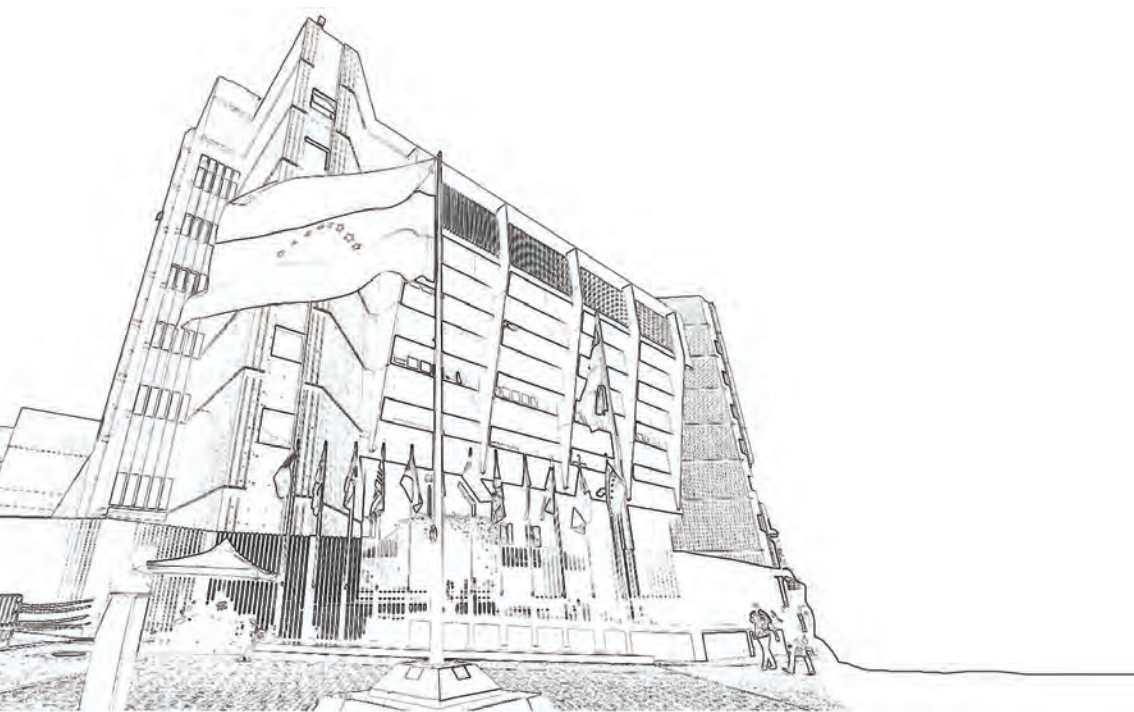
TÍTULO IV	150
-----------	-----

DEL PODER PÚBLICO	150
Capítulo I	150
De las disposiciones fundamentales	150
Sección primera: disposiciones generales	150

Sección segunda: de la administración pública	151
Sección tercera: de la función pública	152
Sección cuarta: de los contratos de interés público	153
Sección quinta: de las relaciones internacionales	154
Capítulo II	155
De la competencia del Poder Público Nacional	155
Capítulo III	158
Del Poder Público Estatal	158
Capítulo IV	163
Del Poder Público Municipal	163
Capítulo V	170
Del Consejo Federal de Gobierno	170
 TÍTULO V	 171
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL	171
Capítulo I	171
Del Poder Legislativo Nacional	171
Sección primera: disposiciones generales	171
Sección segunda: de la organización de la Asamblea Nacional	175
Sección tercera: de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional	176
Sección cuarta: de la formación de las leyes	177
Sección quinta: de los procedimientos	182
Capítulo II	183
Del Poder Ejecutivo Nacional	183
Sección primera: del Presidente o Presidenta de la República	183
Sección segunda: de las atribuciones del Presidente o Presidenta de la República	186
Sección tercera: del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva	188
Sección cuarta: de los Ministros o Ministras y del Consejo de Ministros	190
Sección quinta: de la Procuraduría General de la República	191
Sección sexta: del Consejo de Estado	192
Capítulo III	192
Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia	192
Sección primera: disposiciones generales	192
Sección segunda: del Tribunal Supremo de Justicia	195
Sección tercera: del gobierno y la administración del Poder Judicial	198
Capítulo IV	200
Del Poder Ciudadano	200
Sección primera: disposiciones generales	200

Sección segunda: de la Defensoría del Pueblo	202
Sección tercera: del Ministerio Público	204
Sección cuarta: de la Contraloría General de la República	206
Capítulo V	207
Del Poder Electoral	207
 TÍTULO VI	
DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO	210
Capítulo I	210
Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía	210
Capítulo II	214
Del régimen fiscal y monetario	214
Sección primera: del régimen presupuestario	214
Sección segunda: del sistema tributario	216
Sección tercera: del sistema monetario nacional	217
Sección cuarta: de la coordinación macroeconómica	218
 TÍTULO VII	
DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN	219
Capítulo I	219
Disposiciones generales	219
Capítulo II	220
De los principios de seguridad de la Nación	220
Capítulo III	221
De la Fuerza Armada Nacional	221
Capítulo IV	222
De los órganos de seguridad ciudadana	222
 TÍTULO VIII	
DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN	223
Capítulo I	223
De la garantía de esta Constitución	223
Capítulo II	225
De los estados de excepción	225
 TÍTULO IX	
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL	226
Capítulo I	226

De las enmiendas _____	226
Capítulo II _____	227
De la reforma constitucional _____	227
Capítulo III _____	228
De la Asamblea Nacional Constituyente _____	228
 DISPOSICIÓN DEROGATORIA _____	 229
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS _____	 229
 DISPOSICIÓN FINAL _____	 238
 ENMIENDA N°1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA _____	 244



Seat of the Supreme Court of Justice

Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela

**Amendment N° 1 of the Constitution
of the Bolivarian Republic of Venezuela,
february 15, 2009**

Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela
N° 5.908 Extraordinary, february 19, 2009

*Statement of reasons
of the Constitution
of the Bolivarian Republic
of Venezuela*

THE NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY

In the name and representation of the sovereign people of Venezuela, in the exercise of the original constituent power granted by the people through a referendum democratically approved on the twenty-fifth day of April, nineteen hundred and ninety-nine, to transform the State and create a new legal order that allows for the effective functioning of a social and participatory democracy, and in accordance with Article 1 of the Operational Statute of the NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY;

WHEREAS

on the fifteenth day of December, nineteen hundred and ninety-nine, the people of Venezuela, through a constituent referendum, approved the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, which was proclaimed by the National Constituent Assembly on the twentieth day of December, nineteen hundred and ninety-nine,

DECREEES

the following

STATEMENT OF REASONS OF THE CONSTITUTION OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

TITLE I FUNDAMENTAL PRINCIPLES

The first Title of the Constitution, referring to fundamental principles, enshrines the free and independent status of the Bolivarian Republic of Venezuela; a permanent and inalienable condition that bases its foundation on the ideals of Simón Bolívar, the Liberator, its moral heritage, and the values of liberty, equality, justice, and international peace.

In this manner, the historical legacy of the emancipatory generation is reclaimed, which, in the heroic deed of Venezuela's independence, fought

to forge for us a free, sovereign, and independent homeland from all foreign powers. By mentioning the paradigmatic figure of that initial revolution, the Liberator Simón Bolívar embodies the popular sentiment that distinguishes him as a symbol of national unity and of an incessant and selfless struggle for liberty, justice, public morality, and the well-being of the people, by virtue of which it is established that the Venezuelan Nation, organized as a State, shall be named the Bolivarian Republic of Venezuela.

The legal-political organization adopted by the Venezuelan Nation is defined as a Democratic and Social State of Law and Justice. In accordance with this, the State shall promote the well-being of Venezuelans, creating the necessary conditions for their social and spiritual development, and ensuring equal opportunities so that all citizens may freely develop their personality, direct their destiny, enjoy human rights, and seek their happiness.

The principles of social solidarity and the common good lead to the establishment of this social State, subject to the rule of the Constitution and the law, thereby converting it into a State of Law. A social State of Law that is nourished by the will of the citizens, freely expressed through the means of political and social participation to form the democratic State. A social and democratic State of Law committed to the integral progress that Venezuelans aspire to, with human development that allows for a dignified quality of life, aspects that configure the concept of a State of Justice.

This definition corresponds to one of the principal motivations expressed in the Preamble, that is, the supreme aim of refounding the Republic to establish a democratic society. It is no longer only the State that must be democratic, but also society. If society is democratic, all the elements that comprise it must be marked by democratic principles and be subject to them.

It is established that education and work are the fundamental processes to guarantee the ends of the State. In this manner, citizens and social organizations have the duty and the right to concur in the establishment

and preservation of these minimum conditions and this equality of opportunities, contributing their own effort, overseeing and controlling State activities, raising awareness among other citizens of the necessary reciprocal cooperation, promoting individual and community participation in the social and state order, censuring passivity, indifference, and lack of solidarity. Individuals and social groups shall strive for the realization and exercise of their rights and the fulfillment of their duties, while the State is an instrument for the satisfaction of such ends.

Therefore, the following are incorporated into the constitutional text as supreme values of the State's legal framework and its actions: life, liberty, justice, equality, solidarity, democracy, individual and social responsibility, the preeminence of human rights, public ethics, and political pluralism.

Regarding the structure of the Venezuelan State, the constitutional design enshrines a Federal State that is defined as decentralized, thereby expressing the will to transform the previous centralized State into a true federal model with the specificities required by our reality. In any case, the Venezuelan federal regime shall be governed by the principles of territorial integrity, cooperation, solidarity, concurrence, and co-responsibility, which are characteristic of a cooperative federal model, in which the communities and authorities of the different political-territorial levels participate in the formation of public policies common to the Nation, integrating into a sphere of shared governance for the exercise of concurrent powers. In this way, the governmental action of the municipalities, the states, and the National Power is harmonized and coordinated to guarantee the ends of the Venezuelan State in service of society.

The traditional article regarding the official language was modified by declaring that the official language of Venezuela is Spanish. However, the languages of indigenous peoples are recognized as official within the communities where they are mother tongues, and may be used equally with Spanish.

In the fundamental provisions, the principles of supremacy and normative force of the Constitution are enshrined, according to which it is the highest-

ranking norm and achieves its validity through this normative force or its capacity to operate decisively or in a regulatory manner in historical life. These principles constitute the foundation of all constitutional systems worldwide and represent the cornerstone of democracy, the protection of fundamental rights, and constitutional justice.

Based on the foregoing, all bodies exercising Public Power, without exception, are subject to the principles and provisions enshrined in the Constitution, and therefore, all their acts may be subject to jurisdictional review of their constitutionality.

TITLE II **OF THE GEOGRAPHIC SPACE AND POLITICAL DIVISION**

Chapter I **Of the Territory and other Geographic Spaces**

Significant changes were made in the definition of Venezuelan geographic space. In this regard, the broader expression of geographic space was adopted to replace that of territory. Indeed, geographic space alludes to continental, insular, and maritime spaces, with territory remaining as a component of the former. However, the determination of the national geographic space is not altered, as the traditional version of the 1830 Constitution, repeated until that of 1961, is reiterated, that is, the one corresponding to the Captaincy General of Venezuela as of April 19, 1810.

Notwithstanding the foregoing, the phrase “with the modifications resulting from treaties and arbitration awards not vitiated by nullity” was added. This corrects the omission of the Constituent Congress of 1961 regarding the awards and arbitrations that determined our current borders, such as those of 1865, 1891, 1899, and 1922; and it categorically establishes that Venezuela does not recognize awards vitiated by nullity, as is the case of the 1899 Paris Award that dispossessed Venezuela of the territory located on the western bank of the Essequibo River.

Furthermore, the insular space is conceptually delimited as part of the political-territorial organization of Venezuela and as a space subject to Venezuelan sovereignty. For this reason, the islands are mentioned by their names, and the scope of sovereignty extends to other islands, islets, keys, and banks located or emerging within the territorial sea, covering the continental shelf, or within the limits of the exclusive economic zone.

As a consequence of the fundamental values that inspire the Bolivarian Republic of Venezuela, the Venezuelan geographic space is expressly declared a zone of peace, by virtue of which the establishment therein of foreign military bases or any installation of a power or coalition of powers with military purposes is prohibited.

Chapter II

On Political Division

For the purpose of politically organizing the Republic, the national territory is divided into that of the States, that of the Capital District, that of the federal dependencies, and that of the federal territories, while the territory is organized into Municipalities. In this regard, the Constitution provides that an organic law guaranteeing municipal autonomy and political-administrative decentralization shall regulate the political-territorial division of the Republic.

Furthermore, the city of Caracas is established as the capital of the Republic and the seat of the organs of National Power, which does not prevent the exercise of National Power in other places of the Republic.

It is highlighted in this Chapter that a special law shall establish the political-territorial unity of the city of Caracas, integrating into a two-tiered municipal government system the Municipalities of the Capital District and the corresponding ones of the Miranda State. In any case, said law shall establish its organization, government, administration, competence, and resources, to achieve the harmonious and integral development of the city, guaranteeing the democratic and participatory nature of its government.

Title III

On Human Rights and Guarantees, and on Duties

Chapter I

General Provisions

Inspired by the main trends that have developed in comparative law and in international human rights treaties, the Constitution expressly recognizes the principle of progressivity in the protection of such rights, according to which the State shall guarantee to every natural or legal person, without any discrimination, the respect, enjoyment, and unrenounceable, indivisible, and interdependent exercise thereof.

The Constitution, the international treaties signed and ratified by the Republic in this matter, and the laws that develop them are recognized as sources for the protection of human rights. In this regard, with the aim of reinforcing the protection of the aforementioned rights, it is established that international treaties, pacts, and conventions on this matter, signed and ratified by Venezuela, prevail in the domestic legal order to the extent that they contain more favorable norms regarding the enjoyment and exercise of human rights than those contained in the Constitution and the laws, their provisions being of direct and immediate application by the courts of the Republic and other organs exercising Public Power. Therefore, in the event that an international treaty signed and ratified by Venezuela recognizes and guarantees a specific human right in a broader and more favorable manner than the Constitution, the international instrument shall prevail in all cases and must be applied preferentially, directly, and immediately by the courts and other organs of the State.

The rights to the free development of personality and to equality are recognized. In relation to the latter, constitutional protection is reinforced and broadened by prohibiting not only discrimination based on race, sex, or social condition, but also those that, in general, have the object or result of annulling or diminishing the recognition, enjoyment, or exercise, under conditions of equality, of the rights and freedoms of every person. The foregoing is due to the fact that in practice, social dynamics often present

situations of discrimination that originate from reasons other than race, sex, or social condition.

Furthermore, the Constitution conceptually broadens the protection of human rights with a marked natural law influence, by stipulating that the enumeration of rights and guarantees contained in the Constitution and in international human rights instruments shall not be understood as a denial of others that, being inherent to the person, are not expressly mentioned therein. For this reason, it is established that the lack of a regulatory law for these rights shall not diminish their exercise. In addition, in order to include within such protection the rights inherent to legal persons, the distinction made by the 1961 Constitution, which covered only the rights inherent to the human person, is eliminated.

The guarantee of non-retroactivity of laws and normative provisions is enshrined, and its scope is broadened so that in case of doubts about their temporal validity, the norm that benefits the accused shall be applied. The guarantee according to which any act issued in the exercise of Public Power that violates or diminishes the rights guaranteed by the Constitution and the law is null and void is maintained; and the public officials who order or execute it shall incur criminal, civil, and administrative liability, as the case may be, without superior orders serving as an excuse. The Constitution includes within the scope of this guarantee the human rights guaranteed by the Constitution, as well as those recognized by the laws, in consideration of the system of sources that the constitutional text enshrines in this matter, and with the aim of broadening and reinforcing the protection of human rights.

The rights of access to justice and effective judicial protection are recognized, by virtue of which every person may access the organs of the administration of justice to obtain effective judicial protection of their rights and interests, including collective or diffuse ones. To this effect, the aforementioned organs are represented by the courts and tribunals that form part of the Judicial Branch, as well as by the other organs of the justice system provided for in the Constitution, among which are the citizens who participate in the administration of justice or who exercise jurisdictional functions in accordance with the law.

As one of the implications of the democratic and social State of Law and Justice in which Venezuela is constituted by virtue of the Constitution, and with the aim of eradicating one of the main problems of the Venezuelan Nation, in virtue of which the Judicial Branch was characterized by its corruption, slowness, and inefficiency, and especially by restricting access to justice for the population with limited resources; the Constitution mandates the State to guarantee free, accessible, impartial, suitable, transparent, autonomous, independent, accountable, equitable, and expeditious justice, without undue delays, unnecessary formalities, or redundant procedural steps.

In this manner, free justice is enshrined as a human right whose primary basis lies in the rights to equality and effective judicial protection recognized by the Constitution, and whose purpose is to allow free access to justice for all persons, without any discrimination. As one of the consequences of the aforementioned right, the Constitution establishes in its Title V, Chapter III, that the Judicial Branch is not empowered to establish fees, tariffs, or demand any payment for its services, while also providing for the public defender service.

Amparo¹ is recognized as a constitutional right and guarantee, the purpose of which is the reinforced judicial protection of human rights, even those inherent to the human person that are not expressly mentioned in the Constitution or in international human rights instruments. In this regard, it is stipulated that the procedure to be established by the corresponding law on constitutional amparo shall be oral, public, brief, free of charge, and not subject to formality, all to guarantee its effectiveness.

With regard to *habeas corpus* or amparo for personal liberty or security, a popular action is established, and it is provided that the detainee shall be placed under the custody of the corresponding court immediately.

1 Constitutional protecting action. Legal mechanisms within a country's legal system that are designed to protect fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution.

For the first time in Venezuelan constitutionalism, *habeas data*, or the right of persons to access information about themselves or their property contained in official or private records, is recognized, with the exceptions established by law. *Habeas data* includes the right of persons to know the use made of such records and their purpose, and to request before the competent court their updating, rectification, or destruction if they are erroneous or illegitimately affect their rights.

Furthermore, as a conquest of the struggle for the comprehensive protection of human rights, the Constitution imposes on the State the obligation to legally investigate and punish crimes against human rights committed by its authorities, while establishing, without exception, that violations of such rights and crimes against humanity shall be investigated and tried by ordinary courts, in order to exclude military or special tribunals from any investigation in this regard.

Likewise, the State is obligated to provide full compensation to the victims of human rights violations attributable to it, or to their legal successors, including the payment of damages, all of which constitutes a consequence of the principle of the State's patrimonial responsibility recognized by the Constitution.

Chapter II On Nationality and Citizenship

Section One: On Nationality

The attributive criteria of original nationality, characteristic of the Venezuelan constitutional tendency marked by the presence of *ius soli* and *ius sanguinis*, are maintained.

In this matter, it is noteworthy that since Venezuelan nationality by birth is an inherent right of the human person, those who, in accordance with the Constitution, meet the requirements to obtain it shall not be deprived of it.

Regarding derivative nationality or naturalization, to guarantee the effective bond and commitment of naturalized Venezuelans to the Venezuelan Nation, its people, customs, and destiny, it is required that persons opting for a naturalization certificate possess uninterrupted domicile with residence in the territory of Venezuela for at least ten years immediately preceding the date of the respective application. This requirement is reduced to five years in the case of persons who hold the original nationality of Spain, Portugal, Italy, Latin American and Caribbean countries.

In any case, the expression “uninterrupted residence” referred to in the constitutional text must be interpreted to mean that the interested person has not been absent from the national territory with the intention of establishing themselves permanently and definitively abroad. This does not prevent, therefore, such a person from being temporarily absent from the national territory for reasons of tourism, work, studies, or others of a similar nature, provided that they are temporary.

The right of a foreign spouse married to a Venezuelan by birth to obtain Venezuelan nationality by naturalization after at least five years from the date of marriage is enshrined without any discrimination.

Furthermore, following the guidelines of contemporary constitutional systems, dual nationality and the renounceable nature of Venezuelan nationality are permitted, all in order to facilitate the Republic’s signing of international treaties in this matter.

Finally, in order to complete and give effect to the constitutional regulation, the signing of international treaties on nationality with bordering states or countries, and especially with Spain, Portugal, Italy, Latin American and Caribbean countries, is promoted.

Section Two: On Citizenship

This Section, when referring to citizenship, expresses the legal status or bond of a person with the State, which allows them to exercise political rights. This status in principle belongs to Venezuelan men and women

not subject to civil interdiction or political disqualification, under the age conditions established by the Constitution for the exercise of political rights. However, active electoral power is granted to foreigners who have reached eighteen years of age, with more than ten years of residence in the country and who are not subject to civil interdiction or political disqualification, to vote in parish, municipal, and state elections.

In this matter, the expansion of the political rights of naturalized Venezuelans is also noteworthy, with the aim of integrating them more closely into the life and destiny of the country. Therefore, they are permitted to hold public office until now constitutionally reserved for Venezuelans by birth. Thus, naturalized Venezuelans, if they have uninterrupted domicile with residence in the country for no less than fifteen years, may serve as deputies in the National Assembly, although they may not hold the Presidency or Vice-Presidency of said body; as Ministers, except in positions related to national security, finance, energy and mines, and education; or as Governors or Mayors, with the exception of border states.

In addition, naturalized Venezuelans who entered the country before the age of seven and have resided permanently in it are recognized the possibility of enjoying the same rights as the Venezuelans by birth, by virtue of which they may have access to all public offices. In any case, the permanent residency referred to in the constitutional text on this matter must be interpreted to mean that the interested person has not been absent from the national territory with the intention of establishing themselves permanently and definitively abroad. This does not prevent, therefore, said person from being temporarily absent from the national territory for reasons of tourism, work, studies, or others of a similar nature, provided that they are temporary in nature.

Chapter III On Civil Rights

Chapter III gathers and expands the civil rights of individuals, based on progressive regulation that establishes norms and principles contained in

international treaties signed and ratified by the Republic in matters of human rights.

The right to life is reaffirmed as a fundamental right, the basis for enjoying and exercising other rights, committing the State to protect the life of persons deprived of their liberty, such as those being prosecuted or convicted, whatever the reason, as well as that of persons who are performing military or civil service, or subject to its authority in any other way.

The enforced disappearance of persons is absolutely and without exceptions prohibited, even in a state of emergency or exception or restriction of guarantees, whether to practice, permit, or tolerate it. Greater guarantees are established to protect the right of persons to their physical, mental, and moral integrity, as well as due process, which shall apply to all types of judicial and administrative proceedings.

Within the framework of the protection of persons, the principles that will guide the organization and functions of the State security forces are foreseen, which must adapt their actions to respect for the dignity of persons and their human rights, by virtue of which the use of weapons and toxic substances shall be subject to the principles of necessity, convenience, opportunity, and proportionality.

Freedom of expression is guaranteed without any possibility of censorship. As it is inherent to this right, whoever exercises it assumes full responsibility for everything expressed. Likewise, the right to truthful, timely, impartial, and uncensored information is recognized. This regulation responds to the need to elevate to constitutional rank the indispensable ethical parameters for the exercise of the right to information, so that the media, as part of their activity and the responsibility it generates, establish mechanisms for informative self-evaluation to which any person, natural or legal, public or private, who considers themselves harmed by information issued by the media and related to them, has access, in order to review the veracity and timeliness of the information.

The right to truthful, timely, impartial, and uncensored information, adopting a trend present in comparative law, concerns facts that constitute information and that are transmitted by the media, not opinions or value judgments that the media or journalists offer about such facts.

Similarly, the right of children and adolescents to receive information appropriate for their comprehensive development is guaranteed, by virtue of which the media must adjust their activity and programming to such ends, in order to allow a healthy and normal development of the educational and formative process of future generations.

Chapter IV **On Political Rights and the Popular Referendum**

Section One: On Political Rights

In the area of Political Rights, substantial modifications are included in relation to the Representative and Party-based Democracy established in the previous Constitution.

The Chapter begins with the broad enshrinement of the right to participate in public affairs of all citizens, exercised directly, semi-directly, or indirectly. This right is not limited to the right to vote, as it is understood in a broad sense, encompassing participation in the process of formation, execution, and control of public management. As a counterpart, the State and society must facilitate the opening of these spaces so that citizen participation, conceived in this way, can materialize.

This regulation responds to a deeply felt aspiration of organized civil society that strives to change the political culture generated by so many decades of state paternalism and the dominance of party elites that mediated the development of democratic values. In this way, participation is not limited to electoral processes, as the need for the intervention of the people in the processes of formation, formulation, and execution of public policies is recognized, which would result in overcoming the governance deficits that have affected our political system due to the lack of harmony between the State and society.

Conceiving public management as a process in which fluid communication is established between rulers and the people implies modifying the orientation of relations between the State and society, to return to the latter its legitimate protagonism. It is precisely this principle, enshrined as a right that guides this Chapter referring to political rights.

Suffrage is recognized as a right, but not as a duty, unlike the 1961 Constitution. Its exercise is established through free, universal, direct, and secret ballots. The enshrinement of the personalization of suffrage must be reconciled with the principle of proportional representation, required to obtain bodies formed in a plural manner, representing the different electoral preferences of the people.

Regarding the definition of voters, this status is given to Venezuelan men and women who have reached eighteen years of age, extending this right to foreigners who have reached said age, but limited to parish, municipal, and state elections, requiring in all cases as a condition that they have more than ten years of residence in the country.

Regarding the different stages of the electoral processes, broad possibilities for citizen participation are granted, overcoming the restrictions of the party-based system that governed us. In this sense, both in the candidate nomination phase and in the exercise of supervision and oversight of the electoral process, participation by own initiative, by political parties, or by other associations with political purposes is constitutionally enshrined.

The right to hold public office and exercise popularly elected positions is granted equally to Venezuelan male and female voters who know how to read and write, with the sole restrictions derived from the constitutional text itself or from the conditions of aptitude required by law for certain positions.

As a response to the demands of Venezuelans in the face of the serious deviations of the political system and rampant corruption, the prohibition of running for popularly elected positions is included for those persons who have been convicted of crimes committed during the time in which

who exercised public functions, as well as other offenses affecting public assets.

Within the same context of the preceding provision, the right of the people to oversee elected representatives is enshrined, which encompasses the rendering of public, transparent, and periodic accounts. This right obligates the representative to fully comply with the government program presented to the electorate, as well as to maintain ongoing communication with the people who elected them.

This chapter marks a break with the ‘partidocratic’ system that occupied a lengthy period in our recent political history, by eliminating the subjection of democratic participation to organization within partisan structures as the sole vehicle for its exercise. On the contrary, the right of association for political purposes is broadly enshrined, guaranteeing the application of democratic principles in the constitution, organization, functioning, and equality before the law, given the public interest of the activities carried out by organizations with political aims. In this manner, significant constitutional limitations are established on the formation of partisan elites and the vertical structuring of political organizations that, far from fostering and developing the culture and values inherent to democracy, have hindered its deepening.

The control of the financing of these organizations is also foreseen, as well as the limits on campaign expenditures, and the establishment of control mechanisms to guarantee the legality of contributions and their scrupulous management.

The Constitution enshrines, as a political right inherent to democratic life, that of peaceful and unarmed demonstration. Given the tragic and dramatic experiences lived by Venezuelans in the exercise of this right to express their discontent with the performance of government functions, prohibitions are included that aim to limit the repressive action of police and security forces. In this regard, the prohibition of the use of firearms and toxic substances to confront peaceful demonstrations is enshrined.

Likewise, the rights of asylum and refuge are recognized and guaranteed, as universally recognized principles.

Section Two: On the Popular Referendum

In relation to the means of participation through which citizens' rights to exercise their sovereignty are realized, the various forms of popular referendum are enshrined, to which a particular section is dedicated that regulates the consultative, recall, approval, and abrogative referendums.

Chapter V On Social Rights and Families

The social rights contained in the Constitution consolidate the social, legal, political, economic, and cultural demands of society at a historical moment in which Venezuelan men and women rediscover themselves as actors in the construction of a new country, inspired by popular knowledge that gives new meaning to the socio-political and legal understanding of the new era.

The co-responsibility between society and the State, the sense of progressivity of rights, and the indivisibility and interdependence of human rights constitute a doctrinal tool that defines a new relationship of rights and obligations between subjects who participate in solidarity in the construction of a democratic, participatory, self-managing, and protagonistic society. Gender equity, which permeates the entire constitutional text, defines the new relationship that, in the legal, familial, political, socioeconomic, and cultural spheres, characterizes the new society in the use and enjoyment of opportunities. The use of the feminine gender is evident throughout the constitutional text, expressly indicated in accordance with the recommendations of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and various non-governmental organizations, all of which falls within the principle of equality and non-discrimination recognized by the constitutional text, with the aim of avoiding doubts or ambiguous interpretations of the Constitution.

The direct participation of the people in decision-making for the solution of their problems and those of their community creates a new citizen relationship that, in the realm of social rights, develops the solidarity-based triad between society, family, and the State, which places the legislator and the organs that make up the justice system in a new space for the interpretation of social democracy and the Rule of Law and Justice.

The plurality of families; the recovery of the oral tradition of elderly men and women as family heritage for daily education; the guarantee of the functional autonomy of human beings with disabilities or special needs; the progressive citizenship of children, defined as an absolute priority of the State; adolescents and young people understood as strategic subjects for sustainable development; the significance of the productive work of the housewife; protected consumption and food security; housing as a habitat that humanizes family and community relations; and information as a mechanism that contributes to the formation of civic culture, are new elements elevated to constitutional rank that require an interpretation consistent with their purpose, not subject to legal formalisms detached from social reality.

Social security is guaranteed for all, which must respond to the concepts of solidarity, universality, comprehensiveness, unity, participation, and efficiency. Health, indissolubly associated with quality of life and human development, constitutes a fundamental social right that the State guarantees through a free service health system, defined as unified, universal, decentralized, and participatory. Likewise, consistent with the principle of co-responsibility, the Constitution promotes citizen participation in the formulation and execution of health policies and plans, in order to achieve a healthy and wholesome environment.

In the labor field, individual rights to work, stability, and vacation are recognized, as well as the collective rights of unionization, collective bargaining, and the right to strike for male and female workers.

All these rights constitute the fundamental basis of the new legal order in which life, ethics, morality, freedom, justice, dignity, equality, solidarity,

commitment, civic duties, and legal certainty are values that converge in the transformative action of the State, the Nation, the government, and society, in a purpose of shared realization to produce the co-responsible governance, political stability, and legal legitimacy necessary for the functioning of democratic society.

Chapter VI

On Cultural and Educational Rights

Through specific articles axiologically integrated, the fundamental criteria and axes that recognize and synthesize cultural and educational rights are expressed in the Constitution.

In the initial provisions of this chapter, absolute freedom in cultural creation is guaranteed, both for investment in it and for its production and dissemination. In accordance with this freedom, the State recognizes the right to intellectual property of the created work. Constitutional rank is granted to the protection, preservation, conservation, and restoration of Venezuelan cultural heritage and, with it, to the historical memory of the Nation, which obligates the creation of legislation that enshrines the autonomy of cultural administration. This legislation must encourage those who can and wish to enrich said heritage, and must also establish sanctions or penalties for natural or legal persons who inflict damage or harm upon it.

Additionally, the principle of equality of cultures and interculturality is emphasized, and the promotion of popular expressions that shape and model each regional autochthonous nature is highlighted, to then constitute an interwoven sum of creations that form the defining whole of the Nation.

To achieve these constitutional objectives, the corresponding legislation must establish incentives and stimuli for those who promote, support, develop, or finance activities related to culture, both domestically and abroad.

The incorporation of cultural workers into a social security system is guaranteed; and the figure of patronage is foreseen through peremptory legislation.

The articles also guarantee the mandatory nature of cultural information, with the aim of correcting the communicational inequality that the media exhibits in relation to our own culture. For this reason, the duty of said media to contribute to the dissemination of the values and contributions of Venezuelan creators is established.

The following provisions are dedicated to educational rights and definitions.

It is unnecessary, due to its reiterative nature, to expound on the motivations justifying the undeniably fundamental and priority status of education for any society. Consequently, education is proclaimed as a human right and as a constitutive duty of the most essential root of democracy, and it is declared free and compulsory, and the State assumes it as an inalienable function and a public service.

In accordance with the Constitution, Education is plural in its openness to all currents of universal thought, as an instrument of scientific, humanistic, and technological knowledge. It must be oriented towards the full development of personality for the enjoyment of a dignified existence, which unfolds with an ethical valuation of work and with an awareness of citizen participation. The purpose is that every Venezuelan feels part of a democratic society, of which they are actively supportive in its transformation towards a country with a firm national geohistorical identity and, at the same time, with a Latin American and universal vocation.

To such ends, education must be comprehensive, of quality, permanent, under equal conditions and opportunities for access to it; equality that includes those who qualify under special conditions, or are disabled, or who are deprived of their liberty.

The nursery level is included in the formal educational process, and it is established as compulsory up to the diversified secondary level. In State institutions, the free provision of education at all levels up to undergraduate university is enshrined.

In any case, the budgetary investment made by the State for these purposes shall have priority status and shall be in accordance with UNESCO recommendations in this area.

The right of natural and legal persons to found and maintain private educational institutions is recognized, subject to prior acceptance by the State and under its strict inspection and oversight. This constitutional requirement responds to the fact that while there are private education centers that, with probity, academic efficiency, and honesty, have made and continue to make an invaluable contribution to the formation of Venezuelans, regrettably, it is also true that over time, deplorable educational centers whose sole objective is excessive profit have proliferated without any control, which has generated the violation of legal regulations and disrespect for human dignity, through behaviors alien to the noble purposes of the educational apostolate and with actions that have defrauded the most beautiful faith and trust of a large number of students.

Legislation must guarantee the dignification of teachers, both those working in public and private institutions, enshrining a system of remuneration, benefits, and social security that guarantees living standards commensurate with their elevated mission. For the purposes of their entry, promotion, and permanence in the educational system, teachers must undergo a rigorous evaluation that responds to criteria of ethical and academic merit, without any partisan interference.

To be included in curricular designs, constitutional status was given to subjects related to the environment, linguistics, and geohistory. Indeed, environmental education must be present at all levels of the educational system, even in non-formal education. The teaching of the Spanish language is compulsory up to the diversified cycle, both in public and private institutions. This same obligation is established for national subjects, the history of Venezuela, and the geography of Venezuela, thus rescuing their category as autonomous subjects, given the imperative need to strengthen national identity. The teaching of the Bolivarian ideology, also established as compulsory in Article 107 of the Constitution, will contribute to achieving this objective.

The need to incorporate the management of technological innovations and the development of public radio, television, library, and information networks into the educational system is emphasized, with the aim, furthermore, of allowing universal access to information.

The Constitution delegates to the law the determination of the professions that require a degree and the conditions that must be met to practice them, including professional association membership. In this regard, the Fifteenth Transitory Provision stipulates that until legislation on this matter is approved, the legal order applicable before the enactment of the Constitution shall remain in force.

Furthermore, the law must guarantee that organizational structures are established in professional associations and colleges that allow for affiliations, academic management, and electoral processes more appropriate to the professional quality of their members and directors.

In addition, because it is inherent to the nature of the university, university autonomy is recognized as a principle and hierarchy that allows professors, students, and graduates of its community to dedicate themselves to the pursuit of knowledge through scientific, humanistic, and technological research, for the spiritual and material benefit of the Nation. This university autonomy implies, in particular, the freedom to plan, organize, elaborate, and update research, teaching, and extension programs, as well as the inviolability of the university premises. In any case, university autonomy must guarantee a permanent adaptation of the institution to the incessant development of knowledge.

As a consequence of the foregoing, it is also stipulated that autonomous universities shall adopt their own rules of governance, operation, and administration, under the control and supervision established by law. For their part, national experimental universities, to achieve their autonomy, must meet the requirements established by law.

Science, technology, knowledge in general, innovation and its applications, and information services are declared to be of public interest,

as they are fundamental instruments for the economic, social, and political development of the country, as well as for national security and sovereignty. To this end, the State shall create a national system of science and technology that groups, coordinates, and promotes the development of research in the country, to which it shall allocate sufficient resources. Private companies must also contribute their resources to the development of this activity. One of the most significant mandates of the Constitution in this area is the one that obliges the State to guarantee compliance with ethical and legal principles in activities related to scientific, humanistic, and technological research, all of which shall be regulated by law.

Being that sports, physical education, and recreation are indispensable activities for every person for their integral physical and spiritual development, as well as for their incorporation into the development of the country, with the aim of forming a healthy population fit for study and work, such activities are recognized as a human right, the free exercise of which benefits individual and collective quality of life. Consequently, their teaching and practice are inscribed within the educational process and are compulsory subjects in public and private institutions up to the diversified secondary cycle. The resources for their promotion and development shall be guaranteed by the State as part of a public education and health policy.

The foregoing also responds to the fact that recreation is conceived not only as leisure but as an individual and collective activity that allows for spiritual development and the gestation of elevated forms of sociocultural awareness.

Finally, in this matter, the State will guarantee comprehensive care for athletes without any discrimination, as well as support for high-performance sports. Furthermore, in order to ensure the effectiveness of the constitutional postulates, the State will promote the evaluation and regulation of sports entities in the public and private sectors, according to the mechanisms provided by law, which will also establish incentives and stimuli for individuals and communities that promote athletes and develop or finance sports plans, programs, and activities in the country.

Chapter VII Of Economic Rights

In this Chapter regarding economic rights, the right of consumers to access quality goods and services and to receive dignified and non-discriminatory treatment is established. Consequently, the State is obliged to take the necessary measures to combat any practice that affects the free formation of prices, whether it originates from the market's morphology, such as monopolies, or from the abuse of a dominant position.

The right to property is guaranteed unambiguously, without overlooking considerations of public utility and general interest, while the action of the State, considered essential in defining an appropriate institutional framework for growth and well-being, is subject to the rule of law.

Chapter VIII Of the Rights of Indigenous Peoples

Currently, in Venezuela, as well as in the rest of the American continent, there are peoples whose existence predates the arrival of the first Europeans, as well as the formation of national states, which is why they are called indigenous peoples. Their ancestors occupied these lands for thousands of years, developing forms of social, political, and economic organization, cultures, languages, and technologies that were very different from each other and from those known to the Europeans of that time. In the face of European invasion, conquest, and colonization, the indigenous people heroically defended their lands and lives. For more than five hundred years, they have maintained their resistance and struggle for the full recognition of their existence as peoples, as well as their right to their lands, which today materializes with the refoundation of the Republic.

In the same way, as a consequence of this struggle and their particular conditions of vulnerability, the rights of indigenous peoples have been internationally recognized as specific and original rights.

This same recognition in the Constitution implies a profound change in political and cultural perspective that reorients the governance of the

Venezuelan state, by acknowledging its multiethnic, multicultural, and multilingual character.

Within the various Latin American legal systems, notable efforts have been made to advance, recognize, and deepen the rights of indigenous peoples, both in the legislative and constitutional spheres. In this regard, it is important to highlight that the majority of current Latin American constitutions establish clear principles regarding the rights of indigenous peoples, as a recognition of the cultural diversity of Latin America.

In Venezuela, there has also been a progressive legal recognition of the reality of the national cultural diversity represented by the Venezuelan indigenous peoples, both legally and jurisdictionally. Thus, the Venezuelan state acknowledges a preexisting factual situation, which, by being historically maintained, strengthens the sense of national belonging, valuing the contribution of indigenous culture in the formation of Venezuelan identity and its basic social institutions.

In this sense, the Venezuelan legal framework contains many different normative references related to the indigenous reality, which include laws approving international treaties on indigenous rights, as well as various organic, ordinary, and special laws, decrees, ministerial resolutions, and regulations that govern different areas linked to their reality in the national context. Likewise, within the institutions of the State, there are specific departments to address the various aspects of the reality of indigenous peoples, within their complexity. For its part, in recent times, Venezuelan jurisprudence has also developed the content of indigenous human rights in various rulings for specific cases.

On this basis, the Chapter referred to indigenous rights widely recognizes the existence of indigenous peoples, their forms of organization, their own cultures and languages, as well as their habitats and original rights over the lands they ancestrally and traditionally occupy, which are indispensable to guarantee their biological and sociocultural continuity, and which are also the seat of their sacred and historical references. All of this implies a profound change in the political and legal perspective of the country.

It is established that indigenous lands are inalienable, imprescriptible, unseizable, and untransferable, and that the demarcation of these lands corresponds to the State in conjunction with the indigenous peoples. A special law will develop the specifics of such demarcation in order to ensure the collective ownership of the lands to the indigenous peoples and communities that inhabit them.

The integrity of indigenous habitats is guaranteed, and the rational use of the natural resources present there is enshrined. The right of indigenous communities to receive prior information and to be consulted about activities involving the use of natural resources is recognized. The benefits that correspond to indigenous peoples from this utilization by the State will be of a collective nature.

In opposition to the indigenist policies that have prevailed in the country until now and that have led to the destruction and disappearance of their cultures, the right of each indigenous people to maintain and develop their ethnic and cultural identity, worldview, values, spirituality, and to preserve their sacred and worship places is enshrined. The appreciation of the cultural and linguistic heritage of indigenous peoples concerns all Venezuelans; consequently, the State will ensure its maintenance, continuity, enrichment, and reproduction.

Since every society has its own system and processes of socialization and enculturation through which they educate their members according to their customs and traditions, the State recognizes and respects the educational systems of indigenous peoples and guarantees educational attention through the modality of a bilingual intercultural education regime, which combines formal education with traditional indigenous educational systems and also involves the use of native languages and Spanish.

As part of the valuation of indigenous cultural heritage, the State recognizes the traditional medical practices of indigenous peoples, which until now have been unknown and discredited. The State will guarantee to indigenous peoples, through an intercultural perspective that allows

for the combination of both forms of knowledge, comprehensive health by adapting health services to the specificities and cultural needs of each indigenous people.

Indigenous peoples have the right to maintain and promote their economic practices, so they cannot be imposed with development plans and projects that are foreign to their interests and needs. The State will ensure, within a perspective of sustainable development, with identity and in coordination with the national economy, the necessary financial resources, training, and technical assistance, as well as participation in the country's economy.

In order to safeguard the knowledge, wisdom, practices, intellectual innovations, and genetic resources of indigenous peoples from illegal appropriation and commercial exploitation by natural and legal persons, the State guarantees and protects their collective property by prohibiting its patentability.

By guaranteeing the political participation of indigenous peoples with representation in the National Assembly and in the deliberative bodies of federal and local entities with indigenous populations, one of the main aspirations of indigenous peoples is enshrined, as expressed in the transitional provisions. This will allow them to be present in the drafting of various laws and regulations of the country, in addition to guaranteeing their direct participation in the decision-making bodies of the public powers that make up the State.

Indigenous peoples are part of the national society and the Venezuelan people, which is recognized as unique, sovereign, and indivisible. The use of the term "people," as clearly expressed in the constitutional text, means the recognition of their specific identity, the social, cultural, and economic characteristics that are unique to them and that differentiate them from the rest of society. Therefore, the use of this term cannot be interpreted in the sense given to it in international law.

In addition to this Chapter dedicated to indigenous rights, the Constitution enshrines other provisions on the matter.

Thus, the Constitution establishes that indigenous languages have a primordial value in themselves for being the highest intellectual instrument of the peoples who use them, the most complete inventory of their culture, and the best image of their immaterial and spiritual life.

As they constitute a right of indigenous peoples and a cultural heritage of the Nation and humanity, in addition to Spanish, indigenous languages are also officially used by indigenous peoples and must be respected throughout the territory of the Republic. In such virtue, indigenous languages will be used in all administrative and judicial processes where necessary.

On the other hand, it is expected that municipal legislation will establish the organization of the government and local administration regime that will correspond to municipalities with an indigenous population, taking into account the specific social and cultural organization of each indigenous municipality, their traditional authorities, as well as the type of economy practiced by these communities, in order to establish a municipal administration that recognizes the capacity for indigenous participation in their habitat and within the framework of their sociocultural development. Likewise, the lands corresponding to indigenous communities and peoples are excluded from the status of ejidos.

Finally, the Constitution refers to the right of indigenous peoples to continue practicing their internal normative systems for the regulation, sanction, and restoration of social peace. This right to justice is a mechanism of protection for Venezuelan indigenous peoples, who have historically lived in a society that excluded and discriminated against them; in this case, it is not about written codes or laws, but about forms of justice that have allowed these peoples to self-regulate, face conflicts, and continue maintaining collective cohesion through the application of a restorative normative system.

Chapter IX

Of Environmental Rights

Regarding environmental rights, the Constitution, in addition to establishing for the first time in our constitutional history a Chapter

specifically dedicated to them, surpasses, with a systematic or holistic vision, the conception of classical conservationism that only sought the protection of natural resources as part of economic goods.

Indeed, previously the legal protection of the environment was characterized by partial regulation whose main objective was the conservation of natural resources. Now, driven by a necessity and a global trend, constitutional postulates demand that regulations in this area respond to broad-reaching environmental policies that align with the parameters contained in international environmental treaties, all with the aim of ensuring an ecologically, socially, and economically sustainable development, where the use of resources by current generations does not compromise the heritage of future ones.

The Constitution in its preamble states that among the goals our society must promote is the protection of ecological balance and environmental legal goods as a common and inalienable heritage of humanity. Consequently, the constitutional text is characterized by developing, with the necessary breadth, the environmental rights and duties of each generation, and by recognizing their right to a safe, healthy, and ecologically balanced environment. It highlights, in this sense, the need to maintain an effective development of environmental safety in factories and industrial complexes.

Thus, the State, with the aim of ensuring ecologically, socially, and economically sustainable development, will protect the environment, biological diversity, genetic resources, ecological processes, national parks, natural monuments, and other areas of special ecological importance; while ensuring a pollution-free environment, where the air, water, soils, coasts, climate, ozone layer, and living species enjoy special protection. Likewise, the State will develop a land-use policy that meets the demands of sustainable development, which must include citizen participation.

On the other hand, as an unavoidable guarantee for environmental protection, it is stipulated that in all contracts entered into by the Republic, or in the permits granted, affecting natural resources, the obligation to maintain ecological balance, to allow access to technology and its transfer

under mutually agreed conditions, and to restore the environment to its natural state if it is altered, will be considered included even if not expressly stated, all in the terms determined by law.

In addition, the principles contained in this Chapter find their axiological integration in the constitutional text, through other provisions and principles aimed at the ecologically, socially, and economically sustainable development of the Nation. Thus, the constitutional basis for the obligation of environmental education, the limitations on economic freedom for environmental protection reasons, the designation of water as public domain goods, sustainable agriculture as a strategic basis for comprehensive rural development, the protection of indigenous peoples' habitats, among others, is found.

Chapter X

Of Duties

In this Chapter, by revisiting principles from our constitutional history, the duties of Venezuelans are enshrined. The origin of duties is the Declaration of the Rights of the People of 1811, published in the *Gaceta de Caracas* on July 23 of that same year, in which the rights and duties of man in society were developed. Then, in the Federal Constitution of Venezuela of 1811 published in the *Gaceta de Caracas* on December 27 of that same year, the duties of man in society were enshrined in its final section, along with the duties of the social body, based on the Roman figure of the good father of the family.çThe duty to honor and defend the Homeland is enshrined, regardless of any ideological current, as an obligation inherent to nationality. This duty implies not only safeguarding and protecting sovereignty, nationality, and our territorial integrity, but also defending and promoting the political, territorial, cultural, and social self-determination of the Nation. Furthermore, by rescuing our republican history, this duty extends to the promotion and defense of everything that identifies our Nation, such as national symbols and cultural values.

As a consequence of the principle of supremacy and normative force of the Constitution, as well as the principle of legality, the duty of every person

to comply with and respect the Fundamental Text, the laws, and other acts issued by the organs exercising Public Power in the exercise of their legitimate functions is enshrined.

Promoting a pluralistic, harmonious, supportive, open, integrated, and committed society in all its aspects, the duty of every person to fulfill social requirements and participate in the political, civil, and community life of the country is enshrined. In the pursuit of these goals, the obligation to promote and defend human rights is emphasized, always based on democratic coexistence and social peace.

By virtue of the principle of social solidarity, the duty of every person to contribute, to the extent of their abilities, to public expenses is enshrined.

In harmony with the principles of participation and social solidarity, the duty of every person to provide civil, military, and electoral service is enshrined, when necessary for the defense, preservation, and development of the Nation, or to address situations of public calamity.

However, the obligations that the State has according to the Constitution and the law, the duty of every person to contribute according to their capacity and ability, to the fulfillment of the goals imposed by general social welfare, based on the principles of solidarity, social responsibility, and humanitarian assistance, are enshrined. Therefore, those who aspire to practice any profession must serve the community for the time, place, and under the conditions determined by the law.

TITLE IV OF THE PUBLIC POWER

Chapter I Of the Fundamental Provisions

Section One: General Provisions

The present title regarding Public Power acquires special significance as it aims to rescue the legitimacy of the State and its institutions, recovering public morality and the efficiency and effectiveness of the State's administrative function, complementary and indispensable characteristics to overcome the crisis of credibility and governability that has been established in the country in recent times.

In the General Provisions, the well-known vertical distribution of Public Power is enshrined first: Municipal, State, and National Power; placed in this order according to their proximity to the citizen, the protagonist of this model of participatory democracy.

Regarding the horizontal distribution of National Public Power, in addition to the traditional functions, the innovation of the so-called Electoral Power and Citizen Power is incorporated. The reason for this novel inclusion is understood in a social and political context in which clear signs of respect for the independence and functional autonomy that the bodies responsible for carrying out the respective functions must enjoy should be given, to facilitate the recovery of the lost legitimacy in such delicate areas as electoral processes, as well as the oversight function and the defense of human rights.

A division of the functions corresponding to each branch of the Public Power is likewise established, both in a vertical and horizontal sense. Nevertheless, while the specialization of the task assigned to each of them is accepted, a regime of collaboration is established among the organs that will carry them out for the better achievement of the general goals of the State.

The principle of restrictive competence is established, according to which the organs exercising Public Power can only perform those functions expressly granted to them by the Constitution and the law.

The usurpation of authority, consisting of the invasion of Public Power by individuals who do not hold public office, is considered ineffective and the acts carried out are deemed null.

Regarding individual responsibility because of the exercise of Public Power, it encompasses both the abuse of power, the deviation of power, as well as the violation of the Constitution and the Law. This provision is one that has suffered from ineffectiveness, which is why its inclusion in this Constitution implies the creation of legal mechanisms for its effective implementation.

Finally, in the general provisions, it is established from a modern public law perspective the direct obligation of the State to be financially liable for damages suffered by individuals to any of their goods and rights, as long as the injury is attributable to the normal or abnormal functioning of public services and any public, administrative, judicial, legislative, civic, or electoral activities of public entities or even private individuals exercising such functions.

Section Two: On Public Administration

By definition, the function exercised by the Public Administration is subject to public service or the general interest, therefore it must serve the citizens without any type of distinctions, privileges, or discriminations. In this context, the application of this content implies changing a culture and organizational habits that have clouded and obstructed the exercise of this State function, diverting it towards the satisfaction of subordinate interests, thereby facilitating corruption and ineffectiveness and inefficiency. That is why the principles that should underpin Public Administration are needed, which do not require further explanation: honesty, participation, promptness, effectiveness, efficiency, transparency, accountability, and responsibility. Principles that clearly express the new path that public

officials must follow in exercising Public Power. In addition to these guiding principles, the subordination to the law and the right is reiterated, that is, the principle of the legality of administrative activity.

The autonomous institutes are subject to legal reservation. They are also subject, along with public interests in entities, to state control as developed in the law.

It is enshrined in favor of citizens the right to timely and truthful information from the Public Administration. This right acquires sufficient breadth and precision, as it encompasses matters related to the actions in which they are interested parties, as well as the knowledge of the final resolutions issued, and access to administrative files and records, except for legal exceptions. As a complement to this provision, an absolute prohibition of censorship on public officials is established in relation to their duty corresponding to the right to information enshrined in this provision.

Section Three: On Public Service

As an introduction to the regulation established in this Section, it is important to highlight the significance and meaning that the new Constitution grants to the public function, inasmuch as the honesty, efficiency, and effectiveness of its exercise constitute indisputable priorities within the demands that Venezuelan society has expressed with precise and forceful messages. The most deeply rooted vices in the political system, such as clientelism, which has caused so much harm to the Venezuelan people, are closely related to the lack of clear guidelines regarding what the public function should be and the creation of a human resources policy in line with the ideals of modern public management. Governability, understood as the full satisfaction of social demands, can only be achieved to the extent that policies oriented in this direction are adopted.

The creation of the Public Service Statute is established by law, which will regulate matters related to the human resources policy applicable to Public Administration officials. The entry, promotion, transfer, suspension, and retirement, as well as their incorporation into social security, must

be regulated. Similarly, the functions and requirements for the exercise of the respective positions will also be legally established. It is precisely within the framework of these regulations where the law should develop the space in which the levels of suitability, both professional and ethical, of the individuals entering the Public Administration must be guaranteed. The main deterrent to conduct contrary to legality and public morality largely depends on the policies of entry, permanence, and promotion in the administrative career.

Contrary to the organizational habits generated by political patronage, the duty of public officials is established to serve the State, and therefore the citizen, and not any political faction. As a complement, it is established that appointments and removals cannot be linked to political affiliation. Such an aspect becomes a fundamental point of this process of state refoundation, as it depends on a firm political will that turns into reality what has until now been an unachievable fantasy. Evidently, through legal and regulatory means, mechanisms must be fine-tuned to ensure the faithful compliance with this norm. Likewise, those who are in the service of municipalities, states, the Republic, or other public or private legal entities of public law are prohibited from entering into contracts with these entities, either directly or through an intermediary, except for legal exceptions.

It is established as a general principle that positions in the Public Administration are career positions, except for elected positions, those of free appointment and removal, contracted workers, and laborers, as well as other types indicated by the Law. This aspect of establishing the civil service career constitutes a necessary pillar to support the structure of a modern, dynamic, and efficient Public Administration. The purification of the public service, the rescue of the State's image, requires an unavoidable commitment to meeting this demand that society has repeatedly expressed.

In this same context, entry into the administrative career will be exclusively through a public competition that guarantees the selection of the best, both in terms of ethics and technical and professional preparation. Therefore, this competition is subject to the principles of honesty, suitability, and efficiency. From now on, access to the administrative career will not be

possible through appointments or contracts that bypass this objective selection mechanism, nor will stability be acquired by the mere passage of time in the exercise of any career position. Only the public competition will grant access to the administrative career and the consequent stability of the official.

Likewise, for promotion, a system of evaluation will be implemented that periodically reports a merit rating of public officials. This implies an objective evaluation of the personal management of the officials and a training and development program to which they must submit. In this way, promotion must be linked to the efficiency, discipline, and development of the knowledge, skills, and abilities of the official.

On the other hand, the permanence of the official in the administrative career must be related to a positive result of the evaluation of their performance. This evaluation must be objective and periodic. In this way, the official's effort to improve their performance is enhanced, and in that sense, they will enjoy stability, be promoted, and obtain greater work benefits. On the contrary, if the result of the official's performance evaluation is negative, the official will be removed from public service.

Such principles must be developed legally to restrict discretion in decision-making related to these aspects, establishing the requirements to qualify for such competitions and thus be able to advance in the administrative career. In parallel, progress must be made towards the establishment of state bodies that contribute to the ongoing training and updating of public officials.

The occupation of paid public positions requires the indispensable condition of the respective budgetary provision. By regulatory means and according to the law, salary scales will be established, and reasonable limits on remuneration may be set for the different branches of municipal, state, or national public power. Likewise, a national law will establish the retirement and benefits regime at all levels. The objective of this regulation is to maintain the levels of public officials' remuneration within reasonable parameters and in the context of the country's economic situation.

To avoid the irregularities that have been continuously committed to the detriment of the efficiency and effectiveness of the Public Administration, it is expressly prohibited to hold more than one paid public position, except for the exceptions of academic, incidental, assistive, or teaching positions as per the law. To make this provision effective, the existence of reliable and updated records is required to prevent the recurrence of this vice, which constitutes a true fraud against the collective interest. Similarly, the prohibition on receiving more than one retirement or pension is enshrined, except for legal exceptions.

As an indispensable requirement for the acceptance of positions, honors, or rewards from foreign governments, the authorization of the National Assembly is required.

Section Four: On Public Interest Contracts

In the matter of public interest contracts, the existing constitutional regulation is generally maintained, although its wording is improved. It is thus provided, as a general rule, that national public interest contracts must be approved by the National Assembly in cases determined by law. However, this approval is established as mandatory in the case of contracts of national, state, or municipal public interest if they are intended to be entered into with foreign states or official entities or with companies not domiciled in Venezuela.

On the other hand, it is generally maintained that these contracts are subject to Venezuelan laws and jurisdiction. However, as an exception, in cases where the nature of the business allows it, certain contract disputes may be submitted to another jurisdiction.

Section Five: International Relations

In the Constitution, the Republic's international relations respond to the purposes of the State in the exercise of sovereignty and the interests of the people. In this section, the principles of independence, equality among

states, self-determination and non-intervention, peaceful resolution of international conflicts, cooperation, respect for human rights, and solidarity among peoples are established. In addition to the defense of these principles, the Constitution imposes on the Republic the democratic practice of participation and decision-making within international organizations and institutions.

Latin American and Caribbean integration is promoted, which acquires constitutional character in the pursuit of creating a Community of Nations. To such ends; the signing and ratification of international treaties, bilateral or multilateral, are permitted within the framework of integration processes that have a supranational character. As a consequence of this, the decisions made by the supranational bodies that emerge from the integration processes are directly and immediately applicable in Venezuela.

In any case, the recognition and strengthening that the Constitution offers to integration processes with a supranational character have had, among other objectives, to provide a solid constitutional framework to the integration processes of which Venezuela is a part, as well as to recognize the validity of all treaties that have been signed and ratified by Venezuela in that process, and of all decisions or directives issued until the entry into force of the new Constitution, by the supranational organs of the Andean Community.

Chapter II

Of the Competence of the National Public Power

In this Constitution, the competencies of the National Power are updated, incorporating new matters such as the determination of tax rates or rates of state or municipal taxes; the creation and organization of territorial taxes or on rural properties, as well as real estate transactions, whose collection and control will correspond to the municipalities; the administration of the electromagnetic spectrum; the general regime of domestic public services; the management of border policy; legislation on indigenous peoples and the territories they occupy; as well as the organization and functioning of the organs of the National Public Power and other organs and institutions of the State.

The following includes a general statement on the appreciation of the concept of decentralization, as a strategic guideline of development policy, not only for the purposes of democratizing the public sphere but also as a decisive element to promote the effectiveness and efficiency of state tasks.

Chapter III

Of the State Public Power

It begins with the characterization of the states as autonomous entities equal in the political sphere, endowed with full legal personality, explicitly mentioning the commitment to maintain national integrity and to uphold and enforce the Constitution and the laws of the Republic, which is the essence of the federal pact.

The superior organs of the state entities are defined, namely, the governor and the Legislative Council, with the former having functions of governance and administration, and the latter having functions of legislation and political deliberation. The requirements for the position and the term duration of the governor's mandate are specified, in addition to the obligation to report to the State Comptroller and to present a report to the Legislative Council and the Council for Planning and Coordination of Public Policies.

In the case of the legislative and deliberative branch of the states, its body, which is the Legislative Council, its composition, its powers, and the requirements to be a member of the Legislative Council are defined.

The existence of an Office of the Comptroller is established in each State, which will enjoy organic and functional autonomy.

In the distribution of powers corresponding to the Constitution, this chapter defines the exclusive competence of the states, maintaining and expanding those provided for in the Organic Law of Decentralization. Regarding concurrent competencies, the experience of Comparative Law in the field of decentralization is adopted, and it is assumed that national laws have the nature of framework laws, in which general, basic, and guiding concepts are established; and state laws are laws that develop those

basic principles, which will allow for better conditions for the delimitation of competencies. The creation of a Council for Planning and Coordination of Public Policies is anticipated in each state, leaving its organization and functioning to be determined by law.

The revenues of the states are defined within a comprehensive view of public finance, with special attention to the problem of financing territorial autonomies. All of this in an effort to harmonize the various fiscal powers, for the development of states and municipalities.

Chapter IV **Of the Municipal Public Power**

It begins with a characterization norm of the Municipality, which includes the express recognition of municipal autonomy with the definition of the minimum content corresponding to that essential quality, as well as its jurisdictional guarantee. A general statement on participation is included as an essential element of the nature of municipal government and administration.

The referral to legislation was established for the matter corresponding to the development of constitutional principles related to municipalities and other local entities, imposing the need to start from municipal diversity in an imperative manner and not merely as a simple orientation to the legislator, covering not only the municipal organization itself but also regarding their competencies and resources. It is emphasized that such legislation will establish options for the governance and administration of indigenous municipalities.

The possibility for municipalities to associate in federations has been foreseen, as well as the creation of intergovernmental associative modalities.

The organization of municipalities into metropolitan districts is provided for by law, which allows for the design of a more authentic regime for district organization that should not be constrained to a forced reproduction on a larger scale of municipal organization.

A general authorization is proposed for the legislator to create eligibility conditions, prohibitions, and grounds for disqualification for the nomination and exercise of the functions of mayors and councilors.

Regarding revenues, the branches of income are enshrined and characterized in the Constitution, including those of a tax nature that correspond to the municipality unconditionally, leaving open the possibility that through legislative development, other taxes, fees, and special contributions may be created.

In addition to the statement of the revenue system, it is established that the tax authority of the municipalities is distinct and autonomous from the regulatory powers that this Constitution assigns to the National or State Power. Likewise, it is established that the immunities against the taxing power of the municipalities in favor of other political-territorial entities extend only to the state legal entities created by them, but not to concessionaires or other contractors.

A regulation has been included that establishes the presumption of ejido status for lands located in the urban area of the Municipalities, without prejudice to the legitimate and lesser titles of third parties, validly constituted. Similarly, wastelands located in the urban area are constituted as ejidos, with the exception for lands corresponding to indigenous communities and peoples.

The creation of the Local Public Planning Council has been incorporated, which aims at the planning, coordination, and cooperation in the definition and execution of public policies.

A provision is included that enshrines the creation by law of the necessary mechanisms for states and municipalities to formalize their commitment to decentralization towards communities and neighborhood groups, organizing the services they manage upon demonstration of their capacity.

Chapter V

Of the Federal Government Council

As a constitutional organ of an inter-territorial nature, the Federal Council of Government is created, reflecting in the realm of state organization the principles of territorial integrity, cooperation, solidarity, concurrency, and responsibility, sanctioned in Title I of the Constitution relating to the Fundamental Principles. It is, therefore, an organ resulting from the most advanced phase of federalism, cooperative federalism, a historical advancement of what has been termed dual federalism, which understood the State as a product of a pact between the various political-territorial entities that would have a sphere of sovereignty not delegated to the Union and, in principle, intangible to the action of the Federal Power.

The functions of this Federal Government Council will basically be to plan and horizontally coordinate policies and actions for the development of the decentralization process and the administration of the Interterritorial Compensation Fund aimed at financing public investments in order to promote balanced development of the regions with relatively lower development.

In short, the advancement represented by this organizational figure compared to the Governors' Convention, the only cooperative mechanism provided in the previous 1961 Constitution, is clear.

TITLE V

OF THE ORGANIZATION OF NATIONAL PUBLIC POWER

Chapter I

Of the National Legislative Power

Section One: General Provisions

The National Legislative Power is exercised by a National Assembly whose unicameral structure aims to simplify the law-making process; reduce the operational costs of the parliament, eradicate the duplication

of administrative and control bodies, and the duplication of permanent commissions, among other things.

The deputies who make up the National Assembly are elected, in each federal entity, based on a population ratio of one point one percent of the total population of the country; additionally, there will be three deputies for each federal entity and three deputies representing the indigenous peoples. The term of office is five years, and they can be re-elected for a maximum of two consecutive terms. According to the above, the number of deputies in the National Assembly will only increase or decrease in the same proportion as the population increases or decreases in one or more federal entities.

With this form of integration and the unicameral structure of the national legislative body, the so-called additional deputies disappear; moreover, with the elimination of the Senate, the figure of the lifetime senator also disappears.

Parliamentary representation, according to Article 186 of the constitutional text, has a dual character. The deputy is, at the same time, a representative of the federal entity and a popular representative, which is reaffirmed by Article 201 stating that deputies are representatives of the people and the States as a whole.

This dual nature of parliamentary representation requires candidates to have resided in the federal entity in which they aspire to be elected for at least the four years preceding the election date. This eligibility requirement, combined with the obligation of the National Assembly to consult the States when it deals with matters related to them, the right of the States to speak in the process of forming laws related to them, and the legislative initiative by the State Legislative Councils, are complements to both the federal character of parliamentary representation and the federal content of the Venezuelan State.

On the other hand, the constitutional text enshrines the principles of personalized elections and proportional representation, leaving it to the law

to ensure the presence of these principles, which constitute a substantial part of the democratic system.

Regarding the conditions of ineligibility for deputies, candidates are required to completely separate from their positions at least three months before the elections, in the expressly specified cases, without prejudice to those that may be established by law.

The powers of the National Assembly are those typical of any legislative body in a semi-presidential or semi-parliamentary system of government, like ours. The legislative function, the function of political control over the National Public Administration and the Government, the authorizations, and, in particular, the mechanisms of control of the legislative body over the Executive Power through the vote of censure against the Vice President and the Ministers, whose procedure is special and requires a qualified vote, stand out. Other control mechanisms are interpellations, investigations, questions, authorizations, and approvals. The National Assembly may declare the political responsibility of public officials and request the Citizen Power to take actions to enforce it. Public officials are obliged to attend the committees and provide the information and documents they require to fulfill their functions. This obligation also applies to individuals, without prejudice to the rights and guarantees enshrined in the Constitution. The evidentiary value of the results obtained in the exercise of this function shall be established in accordance with the law.

The vote of censure, given by three-fifths of the deputies, leads to the removal of the Vice President or the Ministers, as the case may be. In the case of the removal of the Vice President, on three occasions within the same constitutional period, the Constitution empowers the President of the Republic, as a mechanism of democratic balance, to dissolve the National Assembly and call for early elections within sixty days following the dissolution to elect a new legislature, all of which will be done through a Decree approved by the Council of Ministers. The National Assembly cannot be dissolved in the last year of its constitutional term.

The Assembly will promote the organization and citizen participation in matters within its competence and will have the initiative in legislation, amendment, reform, and Constituent Assembly.

Regarding the organization and functioning of the National Assembly, the number of committees is limited to fifteen, although it can be decreased or increased by a qualified vote of two-thirds of the deputies. Similarly, the roles of the President, two Vice Presidents, a Secretary, and a Deputy Secretary of the National Assembly are defined, with the regulations outlining the procedures for addressing temporary and permanent absences from these positions.

The Delegated Committee is composed of the Board of Directors of the National Assembly and the Presidents of the Permanent Committees, based on the criterion of expertise in a specific subject that corresponds to its members.

Regarding the control over the deputies, the aim is the effective and efficient exercise of the parliamentary function, while also ensuring the connection with federal entities and the people. The State requires legislative development in line with the country's changes and efficient control over the Public Administration and the Government. Hence, the exercise of the parliamentary function is on an exclusive basis, except for the established exceptions. Deputies are required to maintain a permanent connection with their constituents, addressing their opinions and suggestions, informing them about their management and that of the Assembly; they must report annually on their management and be subject to a recall referendum, with the immediate consequence, in case it occurs, of being unable to hold popular elected positions in the following period.

An essential element for achieving the aforementioned is to ensure the deputy an economic compensation that guarantees their independence, without their status as a parliamentarian implying personal privileges, abuse of the prerogatives guaranteed by the Constitution, or the perception of undue economic benefits.

Parliamentary immunity is enshrined as a guarantee of the autonomous exercise of legislative functions in relation to the other powers and as a guarantee for the better and more effective fulfillment of the parliamentary function. However, immunity only pertains to the exercise of parliamentary functions from the moment of proclamation by the competent electoral body until the conclusion of the mandate. Its disregard by public officials results in criminal penalties that the legislator must establish in the corresponding law.

Regarding the alleged crimes committed by the deputies, the Supreme Court of Justice will exclusively handle the case, being the only authority that, with prior authorization from the National Assembly, can order the detention or continue the prosecution, as the case may be. In the case of a flagrant crime committed by any deputy, the competent authority will place them under custody at their residence and immediately report the incident to the Supreme Court of Justice.

The constitutional text incorporates a set of changes regarding the definition of the law and regarding organic laws. The law is any act sanctioned by the National Assembly as a legislative body, understanding that for this, the procedure established by the constitutional text itself must be followed.

On the other hand, the Constitution establishes five types of organic laws: those it itself designates as such, those enacted to organize public powers, those enacted to develop constitutional rights, those that serve as a normative framework for other laws, and those that have been classified as such by the National Assembly. In the latter case, these must be referred to the Constitutional Chamber of the Supreme Court to rule on the constitutionality of their organic nature, in order to avoid the indiscriminate use of such designation.

Regarding legislative initiative, three new elements of initiative are incorporated into the constitutional text: the Citizen Power, the Electoral Power, and the State Legislative Council, when it comes to laws related to the States. It is emphasized that the National Assembly is obligated to discuss the bills presented by citizen initiative and that these projects must

be submitted to an approving referendum if they are not discussed by the Assembly.

In the stage of discussion and approval of bills, the obligation to open consultation processes to other state organs, citizens, and organized society is introduced. Each bill will receive two discussions within the Assembly, on different, non-consecutive days. The first discussion will focus on the statement of reasons and the relevance of the bill, reading the text as a whole, while the second will be conducted article by article.

Chapter II

Of the National Executive Power

The Constitution extends the presidential term to six years due to the modification of the system of political and social controls over the National Executive. And, as a structurally important innovation, from the standpoint of the legitimacy and responsibility of the President in the exercise of the National Executive, immediate re-election for a new term is allowed only once.

This new constitutional regulation avoids the political irresponsibility of the Presidents that characterized the republican period, which culminated with the approval of the new Constitution. In this way, whoever holds the Presidency can be politically evaluated for their management on two occasions: the first, after more than half of the six-year presidential term, by the request of twenty percent or more of the voters to hold a recall referendum; and the second, by the President's candidacy for popular re-election for a second term. In both cases, the people determine the fate of the President, confirming their trust for him to remain in office, or withdrawing their support, resulting in his forced removal. In reality, it is a means of deepening democracy through two mechanisms of social control over the management of the State, which are characterized by the subjugation of the President to the popular will.

One of the most important innovations of the constitutional text consists of the substantial modification of the system of government, by

incorporating a design of a semi-presidential system that can be classified as flexible.

This new institutional arrangement is based on two important orientations: the first, the distinction and flexible organic separation between the functions of head of state and head of government; and the second, the establishment of a new relationship between the Legislative Power and the Executive Power as a system of checks and balances.

The constitutional engineering of the new flexible semi-presidential system of government is based on the creation of the figure of the Executive Vice President. This new institution, despite its designation as Vice President, is much more than the traditional vice-presidential figure found in American systems of government. In essence, the Vice President contemplated by the Constitution is not the typical position that has the function of resolving the presidential succession due to the temporary or absolute absence of the President of the Republic. More than that, the Vice President is an institution that shares with the President the exercise of their role as head of government and is politically accountable for the overall management of the government before Parliament.

The functions granted by the Constitution to the Vice President of the Republic are essential for the normal functioning of the National Executive and the relations between it and the National Assembly. The first of these refers to collaboration with the President in directing the actions of the Government and, as a competence that is uniquely theirs, the coordination of the National Public Administration with the instructions given by the President. This function establishes the Vice Presidency as the fundamental support for the President and turns it into an instance of direction and coordination over the National Public Administration, which, with the competence to propose the appointment and removal of Ministers, implies a direct hierarchy over them and over the other authorities of the National Executive Power. In this sense, the Vice Presidency is the natural governing body of the system for recording, monitoring, and controlling presidential decisions, whether these are made through ministerial accounts or in the Council of Ministers, and of the systems for monitoring, evaluating, and controlling sectoral public policies.

The second function of the Vice President corresponds to their powers to direct and coordinate the decentralization process; to harmonize national, state, and municipal interests; and to ensure the proper balance in the socio-economic development of the regions. These powers are exercised by the Vice President of the Republic through the Presidency of the Federal Council of Government, to which the Interterritorial Compensation Fund is attached. The creation of this Fund entails the transformation of the current Intergovernmental Fund for Decentralization. In this way, the Vice President serves as a dual instrument or instance for coordination, one horizontal coordination of the National Government and another vertical coordination among territorial governments.

The third function consists of the advisory role required by the President of the Republic as Head of State, for the formation of long-term state policies. This function is carried out by the Vice President, who presides over the Council of State that creates the Constitution. This Council is also composed of representatives from the National Assembly, the Supreme Court of Justice, and the governors of the states, making it an instance of convergence of Powers for the agreement on State policies.

The fourth function of the Vice President is to handle the relations between the National Executive and the National Assembly. Function that makes the Vice President the natural spokesperson of the Government before the National Assembly.

It is these functions, along with the powers that the President can delegate to him, that make the Vice President a fundamental organ for the functioning of the State, with sufficient power for the internal coordination of the National Executive Power and coordination with the other branches of the Venezuelan State. The classification of the presidential system as flexible is due to the fact that the Vice President's powers will be even greater as the President of the Republic delegates their own powers to them.

Due to this particular combination of functions, the Vice President, as executor of the powers of the head of government, is subject to the political control of the National Assembly, as is appropriate in a semi-presidential

system of government. This relationship between the National Assembly and the Vice President has been established to allow for a climate of greater communication between the Legislative and Executive branches, enabling the consensual agreement on public policies and the general collaboration of the Powers in fulfilling the goals and purposes of the State.

A government action that lacks certain legislative approval would eventually lead to the possibility of the National Assembly passing a vote of censure against the Vice President, who would then be automatically removed from office. However,, as a balance to this political control power of the National Assembly and to prevent the constant removal of Vice Presidents from becoming an obstructive practice, the Constitution wisely enshrines the President's authority to call for early elections of the National Assembly when it removes a Vice President for the third time within a six-year presidential term. This power is exercised at the President's discretion.

This dual control between the Legislative and the Executive constitutes a system of power balance that also allows for institutional solutions to political or government crises, increasing the level of governability of democracy. This enables a range of political-institutional stability for democracy and prevents extra institutional exits.

As far as the protection of human rights is concerned, the Constitution adequately regulates the principle of accountability in the exercise of Public Power, by establishing that the declaration of states of emergency does not exempt the President of the Republic, the Executive Vice President, or the Ministers from responsibility.

The first section of this Chapter II is clear regarding the absolute or temporary absences of the President of the Republic. In this sense, the Executive Vice President of the Republic assumes a particularly important role, as the formal substitute for the President of the Republic in the various scenarios of both absolute and temporary absences contemplated by the constitutional text.

Section Two details the competencies of the President of the Republic. In this sense, there are aspects to highlight that signify greater flexibility in the management of public affairs and a more operational conduct of the Public Administration by the President of the Republic. Thus, following the trend of comparative law, the President is allowed to set the number, designation, competence, and organization of the ministries and other agencies of the National Public Administration, as well as the organization and functioning of the Council of Ministers, within the principles and guidelines outlined by the corresponding organic law. With this, the procedures are expedited to make the demands for adaptability of the administrative structures effective, with the President becoming the true head of the National Public Administration.

The Chapter of the National Executive Power concludes by creating the institution of the Council of State, which, in comparative law, as demonstrated by the French and Colombian experiences, has set a precedent in the professionalization of the exercise of Public Power with analogous structure and functions. In Venezuela, it will be a superior advisory body of the Government and the National Public Administration that will recommend national interest policies on those matters that the President of the Republic recognizes as of special significance and require his opinion.

Thus, a modern, dynamic, professional National Executive Power is structured, subject to political controls and at the same time generating new political dynamics. It is a chapter that opens the doors to Venezuela for a profound modification of its political institutions.

Chapter III

Of the Judiciary and the Justice System

The democratic and social State of Law and Justice enshrined in the Constitution, fundamentally involving the separation of powers of the State, the supremacy of the Constitution and the laws as an expression of popular sovereignty, the subjection of all public powers to the Constitution and the rest of the legal system, and the effective procedural guarantee of

human rights and public freedoms, requires the existence of bodies that, institutionally characterized by their independence, have the constitutional power to execute and apply impartially the norms that express the popular will, subject all public powers to the compliance with the Constitution and the laws, control the legality of administrative actions, and offer all individuals effective protection in the exercise of their rights and legitimate interests.

The set of organs that perform that function constitute the Judiciary and the Justice System, which are enshrined in Chapter III of Title V of the Constitution, establishing it as one of the branches of government.

In the referred Chapter, the Constitution, based on the principle of sovereignty, declares that the power to administer justice emanates from the citizens and is imparted in the name of the Republic and by authority of the law.

On this basis, the constitutional text constitutes the justice system integrated by the Supreme Court of Justice, the other courts determined by law, the Public Ministry, the Public Defender's Office, the criminal investigation bodies, the judicial auxiliaries and officials, the penitentiary system, and the lawyers authorized to practice.

On the other hand, alternative means for the resolution of disputes, such as arbitration, mediation, and conciliation, are incorporated into the justice system, all with the aim of having the State promote and encourage them without prejudice to the activities that academies, universities, chambers of commerce, and civil society in general may develop in this regard.

Likewise, since the administration of justice is not the exclusive monopoly of the State, although only the State can exercise the coercive guardianship of rights, that is, the forced execution of sentences, the Constitution incorporates citizens into the justice system who participate in the exercise of the jurisdictional function by integrating juries or any other mechanism provided by law.

Moreover, as a consequence of the principle and right to free justice enshrined in the constitutional text, it is established that the Judiciary is not authorized to set fees, tariffs, or to demand any payment for its services.

Entry into the judicial career and the promotion of judges will be through public competitive examinations, ensuring the suitability, capability, and integrity of the appointed judges. In such virtue, all positions of judges or magistrates of tribunals or courts, whether individual or collegiate, other than the Supreme Court of Justice, must be appointed through a public competitive examination.

It is expected that the law will regulate the training and specialization of judges with the participation of universities, which will have to organize university studies at the postgraduate level in the field of law, aimed at specialization in the judicial branch.

Military criminal jurisdiction will be part of the Judiciary, and its judges will be selected through a competitive process. The jurisdiction of military courts is limited to strictly military matters. In any case, common crimes, human rights violations, or crimes against humanity will be prosecuted and judged by ordinary courts, without exception.

The Supreme Court of Justice is established as the highest court of the Republic and the governing body of the Judicial Power, which will be composed of the Constitutional, Administrative-Political, Electoral, Civil Cassation, Criminal Cassation, and Social Cassation Chambers.

The Magistrates of the Supreme Court will serve in their functions for twelve years and cannot be re-elected. For the purposes of their election, the corresponding nomination before the Judicial Nominations Committee and a special procedure aimed at a public, objective, transparent, and impartial selection and election of the candidates are provided. It will ultimately be the National Assembly that is responsible for electing the Magistrates.

It will correspond to the Supreme Court of Justice; through the Executive Directorate of the Judiciary, the Government and Administration of the

Judicial Power, as well as everything related to the inspection and oversight of the courts of the Republic and the preparation and execution of the Judicial Power budget.

Chapter IV **Of Citizen Power**

Adapting to our time the immortal ideas of the Liberator Simón Bolívar, the Constitution breaks with the classic division of public powers and creates the Citizen and Electoral Powers. The first of them is inspired, in part, by the Moral Power proposed by the Liberator in his Draft Constitution presented to the Congress of Angostura on February 15, 1819. The Electoral Power, for its part, finds its inspiration in the Draft Constitution that the Liberator drafted for Bolivia in 1826.

The Liberator conceived the Moral Power as the institution responsible for the national conscience, overseeing the formation of citizens so that “what has been corrupted in the Republic could be purified; that it would denounce ingratitude, selfishness, the coldness of love for the homeland, idleness, and the negligence of the citizens.” With this, Simón Bolívar wanted to establish a Republic based on a people who loved their homeland, the laws, and the magistrates, because those “are the noble passions that must exclusively absorb the soul of a republican.”

The Moral Power of the Liberator had among its missions to oversee the education of citizens, in which process respect and love for the Constitution and republican institutions should be instilled, based on the principle that “if there is no sacred respect for the homeland, for the laws, and for the authorities, society is a confusion, an abyss.”

Inspired by those ideas and adapting them to our time, the Constitution creates the Citizen Power, which will be exercised by the Republican Moral Council composed of the Ombudsman, the Attorney General of the Republic, and the Comptroller General of the Republic.

The Citizen Power is independent from the other public powers, and its organs enjoy functional, financial, and administrative autonomy. For this purpose, they will be assigned a variable annual allocation within the general state budget.

In general, the bodies that exercise Citizen Power are responsible for the prevention, investigation, and sanction of acts that violate public ethics and administrative morality. Additionally, they must ensure good management and legality in the use of public assets, as well as the compliance and application of the principle of legality in all administrative activities of the State. Similarly, they must promote within their competencies, education as a process of creating citizenship, as well as solidarity, freedom, democracy, social responsibility, and work, all in accordance with the Constitution and the laws.

Drawing from an institution that originated in Scandinavian countries and has gained prominence in Europe and much of Latin America, the Ombudsman is created as an organ of the Republican Moral Council, responsible for the promotion, defense, and oversight of the rights and guarantees established in the Constitution and in international human rights treaties, as well as the legitimate, collective, or diffuse interests of citizens. The Ombudsman represents the public power institution most linked and closest to the citizens, whose functions are essential to control the excesses of power and ensure that the democratic system is not only a constitutional projection but also a way of life in society with effectiveness and concrete reality, where the rights and interests of the citizens are respected.

The Ombudsman is assigned the broadest functions and competencies in the aforementioned matters, such as ensuring the effective respect and guarantee of human rights enshrined in this Constitution and in the international human rights treaties, conventions, and agreements ratified by the Republic.

The Public Ministry is assigned all those functions necessary for the fulfillment of the purposes it must manage before the Administration of

Justice, such as ensuring the respect for constitutional rights and guarantees in judicial processes, ensuring the speed and proper functioning of the administration of justice, the prior hearing, and due process.

The General Comptroller's Office of the Republic, for its part, will be the body responsible for the control, oversight, and auditing of public revenues, expenditures, and assets, as well as the operations related to them, for which it is granted the broadest powers. A national system of fiscal control is anticipated, which will be developed by law.

Chapter V Of the Electoral Power

As an expression of the qualitative leap that the transition from representative democracy to participatory and protagonist democracy entails, a new branch of Public Power is created, the Electoral Power, exercised by the National Electoral Council, which aims to regulate the establishment of the bases, mechanisms, and systems that guarantee the advent of the new democratic ideal or objective. A new electoral culture grounded in citizen participation.

To dimension its content, it is necessary to integrate the provisions in this Chapter V of Title V with those established in Chapter IV of Political Rights and the Popular Referendum belonging to Title III of the new constitutional text.

The new scheme entails a substantial modification in the electoral practice on which the previous model was built, from the conception of suffrage as a right to the establishment of new forms of participation that far exceed the simple formulation of electoral proposals. This new conception is expressed through the implementation of political institutions such as the election of public officials, the referendum, the popular consultation, the recall of mandate, the legislative, constitutional, and constituent initiative; the open council and the Assemblies of citizens, whose decisions are binding, among others. These are, then, the innovative means that guarantee the people's participation and prominence in the exercise of their sovereignty.

In this sense, the ways in which citizens can participate in the formation, execution, and control of public management are of great importance, as it is not limited to the mediation of political parties, but can be done directly, in perfect adherence to the concept of sovereignty explicitly provided for in Article 5 of the new constitutional text.

In general, the Electoral Power is granted the authority related to the constitution, renewal, and cancellation of associations with political purposes, which is linked to the origin or birth of such organizations as well as their functioning and development. This is subject to the strict adherence to the mechanisms of democratic and participatory consultation enshrined in the Constitution, to which the statutes regulating the life of these institutions must also adhere.

The principles that electoral legislation must develop and guarantee, are equality, reliability, impartiality, transparency, and efficiency of electoral processes, as well as the application of personalization and proportional representation in elections. These principles constitute attributes or qualities that must shape the new electoral systems to be adopted and, in this sense, must be embraced as distinguishing elements that form the bases of integration for the various positions of popular election. The latter, primarily referring to the National Assembly, is composed of three conditions, namely: the population base, the federal representation of each entity, and the representation of minorities, in our case, the indigenous peoples. In this way, a closed integration criterion is adopted, formed by a fixed number of representatives whose modification would only occur with an increase in the population base; such is the interpretation derived from the provision contained in Article 186, characteristic of the unicameral conception that the constitutional text prescribes for the National Legislative Power, transformed by virtue of the provision into a legislative chamber.

Special mention, in the establishment of this new power, is deserved for the novelty of the integration of the Civil and Electoral Registry, whose organization, direction, and supervision are attributed to the Electoral Power; this formula seeks the possibility of exploiting the development

of harmonious mechanisms that allow the formation and automatic purification of a national registry as a fundamental basis to guarantee the transparency of said institution.

Thus, as a branch of the Public Power, the Electoral Power is governed by the principles of organic independence, functional and budgetary autonomy, depoliticization of electoral bodies, impartiality and citizen participation, decentralization of electoral administration, transparency and promptness of the voting and counting process. To this end, an Electoral Nominations Committee is created, composed of representatives from different sectors of society, an entity responsible for making the elections of the members of the National Electoral Council feasible. Out of a total of five members, three come from civil society, one from the Faculties of Legal and Political Sciences of the National Universities, and one from the Citizen Power.

Likewise, the Electoral Power assumes not only the functions previously exercised by the former National Electoral Council, extended or expanded to the organization and conduct of electoral acts aimed at the election of public officeholders, but also those related to the referendum regime, elections of unions, professional guilds, and associations with political purposes, whose regulation is referred to the Law. Similarly, the possibility is established for the Electoral Power to participate in the organization of electoral processes of other civil society organizations, upon their request, with a view to developing self-financing pathways or mechanisms.

In this regard, and in consideration of the necessary jurisdictional control of the acts, omissions, and de facto actions emanating from the Electoral Power, concerning the referred electoral processes and its functioning, the new constitutional text created the Electoral Contentious Jurisdiction, exercised by the Electoral Chamber of the Supreme Court of Justice.

TITLE VI OF THE SOCIOECONOMIC SYSTEM

Chapter I Of the Socioeconomic Regime and the Function of the State in the Economy

Title VI of the Constitution refers to the socioeconomic system. The socioeconomic regime is not defined rigidly; however, it enshrines principles of social justice, efficiency, democracy, free competition and initiative, environmental protection, productivity, and solidarity, free from any ideological dogmatism regarding the already surpassed dispute over the roles of the market and the State, avoiding an extreme and exclusionary view of the social contents of any economic system, while laying the foundations for an economy that respects individual action.

The State is not absent; it plays a fundamental role as a regulator of the economy to ensure comprehensive human development, defend the environment, promote the creation of national added value and sources of employment, guaranteeing legal security to foster, alongside private initiative, the harmonious development of the national economy and the fair distribution of wealth. In summary, a balance between the State and the market is proposed because the issue is not more State or less State, but a better State, and the market is not an end in itself, but a means to satisfy collective needs; that balance should prevail between productivity and solidarity, between economic efficiency and social justice, granting freedom to private initiative while preserving the collective interest.

The State must guide macroeconomic and sectoral policies to promote growth and well-being. The regulatory action of the State is recognized as essential to establish a stable normative framework that provides legal certainty to economic activity, advocating for an economy open to foreign investments and guaranteeing that these will be subject to the same conditions as national investment.

For national convenience, the State is authorized to reserve certain economic activities, particularly in the mining and oil sectors. It is transparently recognized that the control over those areas can be done in accordance with the private sector, clearly establishing that the State can enter into partnership agreements with the private sector for the development and exploitation of those activities. Petroleum nationalization is granted constitutional status, but at the same time, it establishes the possibility of continuing partnership agreements with the private sector as long as they are in the country's interest and do not distort the spirit, purpose, and reason for petroleum nationalization.

The State commits to taking priority actions in certain economic sectors to give dynamism, sustainability, and equity to economic development, such as agricultural activities, small and medium-sized industries, tourism, the cooperative sector, and other forms of the popular economy. The activity of food production is established as essential for the country, enshrining the principle of food security based on the timely and permanent access to food for consumers.

Chapter II

Of the Fiscal and Monetary Regime

Another important innovation of the Fundamental Text is the introduction of constitutional principles aimed at establishing the obligation of the State to ensure macroeconomic stability, promoting an environment conducive to growth and the generation of well-being for citizens.

Macroeconomic stability is established based on three fundamental principles, namely: fiscal balance and a prudent level of public debt; autonomy of the Central Bank in fulfilling its functions, with a clear accountability mechanism and transparent coordination of macroeconomic policies.

Section One: The Budgetary Regime

The principle of fiscal balance requires that public finances be in order, and within a reasonable period of time, ordinary revenues be sufficient to cover

ordinary expenses; that reasonable period of time will be defined according to the law, within the timeframe of the multiannual budget framework. Fiscal balance must also be consistent with a prudent level of debt, aspects on which specific legislation must be enacted.

A limit on borrowing is established according to the law. The State must maintain a prudent level of public debt in line with the size of the economy, productive investment, and the capacity to generate income to cover the debt service.

By establishing a rule of sustainable budgetary balance, economic policy is provided with an effective antidote against uncontrolled public debt. In the multi-year framework of the budget, which will be set by law, ordinary revenues must be sufficient to cover ordinary expenses, meaning the State cannot incur debt to cover the interest service on the debt. This notion of balance in the multi-year framework implies that it is possible to have deficits in one or two years and then correct the imbalance, to offset fiscal deficits or surpluses over time.

The deadlines, rules, and powers of Parliament in the approval of the budget are defined. Regarding additional credits, the option of such a mechanism is restricted to the actual existence of treasury resources, thus achieving a sound disposition in budget management to address unforeseen situations without introducing disturbances in fiscal discipline, thanks to the presence of an effective budget balance rule, which is one of the most important innovations of the Constitution.

Section Two: The Tax System

It is maintained that the Constitution should only contain the basic principles that define and regulate the tax system. This criterion of brevity and simplicity aligns with recent Constitutions of Latin America.

The tax system will seek the fair distribution of public burdens according to the economic capacity of the taxpayer, adhering to the principle of progressivity, as well as the protection of the national economy and

the improvement of the population's standard of living, and it must be supported by an efficient system for tax collection. It is established that tax evasion, without prejudice to other penalties established by law, may be punished criminally.

As a transitional provision, it is anticipated that within two years following the entry into force of this Constitution, the National Assembly will enact a reform of the Organic Tax Code that will contribute to modernizing the tax administration, expanding the powers of regulation, control, and penalization of tax fraud.

Section Three: Of the National Monetary System

The autonomy of the Central Bank of Venezuela is given constitutional rank in the exercise of its functions to achieve a unique and exclusive objective. This is specified as stabilizing the price level to preserve the value of the currency. The autonomy of the Central Bank implies that the monetary authority must be independent of the Government, and any practice that obliges the Central Bank to finance or validate deficit fiscal policies is constitutionally prohibited. In the exercise of its functions, the Central Bank of Venezuela will not be able to issue money without backing.

Autonomy also implies assuming responsibilities before society and requires establishing a mechanism for accountability before the National Power, particularly before the National Assembly as a representation of the popular will. It is established that the failure to meet the objective, without justified cause, will result in the removal of the board in accordance with the law. Everything related to the specific causes and precise mechanism of removal is left to the corresponding legislation.

This is complemented by the oversight and supervision that competent agencies and instances must establish over the management of the Central Bank of Venezuela, such as the General Comptroller of the Republic and the public banking supervision agency. The work of the Comptroller's Office will be limited to subsequent control and only of the administrative management, evaluating the legality, efficiency, and timeliness of the

expenditure, with the latter referring to the correct temporal execution of the same in each fiscal year.

The Central Bank's operating expenses budget will require the approval of the National Assembly. This budget only refers to operational expenses, both current and capital, as well as expenses for the minting and issuance of monetary species, investment projects, and other special administrative expenses. It is not subject to Parliament the matters related to the monetary policy budget and the financial investments of the Central Bank.

Regarding the appointment of the authorities, the Constitution refers the mechanism to the law, which must include a public procedure for evaluating the merits and credentials of the candidates for these positions. The law regulating the Central Bank of Venezuela must assign the Executive Branch the appointment of the president of the Central Bank of Venezuela and, at least, half of its directors, and establish the terms of participation of the Legislative Branch in the ratification of these authorities. It is also left to the law, through an express transitional provision, the details of the functions, organization, as well as something very important: a regime of incompatibilities for its high-ranking officials, to avoid conflicts of interest and the handling of privileged information.

Section Four: On Macroeconomic Coordination

Given the relevance of the monetary effects of fiscal management in Venezuela, there is a need to establish appropriate rules that ensure the coordination of macroeconomic policy, which set the institutional framework in which specific policies should be developed.

The principle of coordination requires that the Central Bank of Venezuela and the Ministry in charge of Finance coordinate their policies through a program or agreement that defines a pre-announced course, consistent with the achievement of certain objectives. A mechanism is established for resolving conflicts between an autonomous Central Bank of Venezuela and the Treasury, in order to avoid the traditional contradictions between monetary and fiscal policy.

A set of basic rules of transparency and coordination is proposed in which fiscal, exchange rate, and monetary policies are developed harmoniously, establishing that objectives and actions must be announced, the commitment to coordination between the Central Bank of Venezuela and the National Treasury, and that those responsible for these policies must be held accountable for their actions, in the terms set by law. This is nothing more than the introduction of clear rules for the development of economic activity, as a basic premise to generate and maintain trust.

Finally, the Macroeconomic Stabilization Fund is granted constitutional rank to guarantee budget stability and to preserve, beyond the contingencies of government and legal changes, a mechanism that allows for cushioning fluctuations in fiscal revenues.

TITLE VII OF NATIONAL SECURITY

Chapter I General Provisions

In Title VII of the Constitution, the principles that govern the security of the Nation are defined, which is the responsibility not only of the State but also of all Venezuelans, as well as natural or legal persons who are within the national geographic space.

A National Defense Council is created with the purpose of being the highest administrative consultative body for the planning and advising of the Public Power on matters related to the comprehensive defense of the Nation, its sovereignty, and the integrity of its geographical space, without prejudice to the powers of the different State organs in accordance with this Constitution and the laws. In this sense, it is responsible for establishing the strategic direction of the Nation, to prevent or minimize any threat. Said Council will be composed of the President of the Republic, the Vice President of the Republic, the President of the National Assembly, the President of the Supreme Court of Justice, and the President of the Republican Moral Council, as well

as the ministers of the defense, internal security, foreign relations, and planning sectors.

The possession and use of war weapons are reserved for the State. The National Armed Forces, through the President of the Republic, who will act in his capacity as Commander-in-Chief, will regulate and control, in accordance with the law, everything related to other weapons, ammunition, and explosives.

The National Executive is empowered to classify and disclose those matters directly related to the planning and execution of operations concerning the security of the Nation, under the terms established by law, provided that this does not constitute a violation of the free exercise of the rights and guarantees recognized by the Constitution. This authority, in any case, must be subject to judicial review and cannot obstruct the function exercised by the courts of the Republic.

Chapter II

Of the Principles of National Security

In Chapter II of this Title, the principles of national security are established, which will be based on the shared responsibility between the State and civil society to fulfill the principles of independence, democracy, equality, peace, freedom, justice, solidarity, environmental promotion and conservation, and the affirmation of human rights, as well as the progressive satisfaction of the individual and collective needs of Venezuelans, based on sustainable and productive development with full coverage for the national community.

In order to promote the development of Venezuelan border areas, these areas are declared as a priority. To that end, a border security zone is established, which will be regulated by law, allowing for the determination of its extent, special economic and social regimes, to promote the development of its productive activities and improve the living conditions of its inhabitants, expressly protecting national parks, the habitat of indigenous peoples settled there, and other areas under special administration.

Chapter III

Of the National Armed Forces

For the better execution of the high purposes entrusted to it by the Constitution, the National Armed Forces are unified into a uniform military body called the National Armed Force, while maintaining the characteristics and specificity of each of the four components of the institution as a Force; this institution being essentially professional, without any political affiliation, subordinate to civil authority, organized by the State to guarantee the independence and sovereignty of the Nation and ensure the integrity of the geographical space, through military defense, cooperation in maintaining internal order, and active participation in national development, in accordance with this Constitution and the law.

In the performance of its duties, the National Armed Forces are at the exclusive service of the Nation and the Constitution, and in no case to any person or political faction. Its fundamental pillars are discipline, obedience, and subordination in accordance with the Constitution and the laws.

The National Armed Forces are composed of the Army, Navy, Air Force, and National Guard, which will operate integrally within the framework of their competence to fulfill their mission, with their own comprehensive social security regime, as established by their respective organic law.

It is established as the responsibility of the bodies that make up the National Armed Forces to plan, execute, and control the military operations required to ensure the defense of the Nation. In any case, the National Guard will cooperate in the development of these operations and will have as its basic responsibility the conduct of the operations required for maintaining the internal order of the country, considered as the state in which justice is administered, the values of freedom, democracy, independence, peace, solidarity, common good, territorial integrity, coexistence, and the supremacy of the Constitution and the law are consolidated. All of this harmonized in a scenario where constitutional principles and Bolivarian precepts prevail and are practiced, in an atmosphere of absolute democratic participation.

Finally, following a trend in comparative law with the aim of not establishing discrimination among citizens, members of the National Armed Forces in active duty are allowed to exercise their right to vote in accordance with the law. However, they are still prohibited from running for elected office or participating in acts of propaganda, militancy, or political campaigning.

In terms of military promotions, criteria are established to achieve transparency and objectivity through the periodic publication of the merit ranking and the determination of vacant positions, eliminating the correction factor due to its subjectivity. This new process allows for promotions any day of the year and enables personnel to know their position in the merit ranking. The promotion will be a right, if the necessary requirements have been met, ending the discretion of the evaluation boards, which will be limited to respecting the results of the merit evaluations.

Chapter IV

Of the Citizen Security Agencies

In order to maintain and restore public order, protect citizens, homes, and families, support the decisions of the competent authorities, and ensure the peaceful enjoyment of the guarantees and rights recognized by the Constitution, the National Executive is obliged to organize, in accordance with the law, a uniformed national police force, a body for scientific, criminal, and administrative investigations, a fire department and civil emergency management, and a civil protection and disaster management organization.

TITLE VIII

OF THE PROTECTION OF THIS CONSTITUTION

Chapter I

Of the Guarantee of this Constitution

Following a trend present in Spain, France, Italy, Portugal, Romania, and some Latin American countries, whose constitutions regulate

constitutional justice in a title or chapter distinct from that referring to the Judiciary, the Constitution includes in Title VIII a Chapter called On the Guarantee of this Constitution, which contains the fundamental provisions on constitutional justice and enshrines the main competencies corresponding to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Said Chapter gives effect to the postulates contained in Article 7 of Title I, which enshrines the principles of supremacy and normative force of the Constitution, the foundation upon which constitutional justice rests in the world.

In the aforementioned Chapter, the Venezuelan constitutional justice system is described, and it is indicated that all judges of the Republic are obliged to ensure the integrity of the Constitution within the scope of their competencies and in accordance with its text and the laws. This reaffirms that constitutional justice in Venezuela is exercised by all the courts of the Republic, not only through the diffuse control of constitutionality but also through other means, actions, or resources provided for in the Constitution and the laws, such as the constitutional amparo action, aimed at offering reinforced judicial protection of the human rights recognized and guaranteed explicitly or implicitly in the Constitution.

As a consequence of this, a norm present in our legislation since 1887 is elevated to constitutional rank, characteristic of our constitutional justice system, and according to which, in case of incompatibility between the Constitution and a law or another legal norm, the constitutional provisions shall apply in all cases, with the courts being responsible in any case, even *ex officio*, to decide what is appropriate. In other words, the diffuse control of the constitutionality of laws and normative provisions is enshrined.

At the same time, the concentrated control of the constitutionality of laws and other acts of the organs exercising Public Power, issued in direct and immediate execution of the Constitution, is established, which corresponds exclusively to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Consequently, the competencies that the defunct Supreme Court of Justice in Full had in this matter were transferred to the Constitutional Chamber, with the aim of specializing the body that

exercises constitutional jurisdiction and relieving the new Full Chamber of its attributions, so that it only exercises the competencies assigned to it in Article 266, paragraphs 2 and 3 of the constitutional text, having no competence or attribution in constitutional matters.

The exclusivity of the Constitutional Chamber in the exercise of constitutional jurisdiction implies that only this body is responsible for exercising concentrated control over the constitutionality of laws and other acts of the organs that exercise Public Power issued in direct and immediate execution of the Constitution, but it does not prevent the Constitution itself or the laws from assigning it other competencies in constitutional matters.

In this way, the Venezuelan system of constitutional justice is outlined, reaffirming the coexistence of concentrated, diffuse, and extraordinary methods of constitutionality control, which are exercised through the popular action of unconstitutionality, the preferential application of the Constitution regarding unconstitutional laws or norms in a specific case, and the amparo action.

Before the National Constituent Assembly, some proposals were presented with the aim of creating a Federal Constitutional Court or Tribunal, instead of a Constitutional Chamber in the Supreme Court of Justice. However, this latter thesis prevailed by consensus. However, the Constitution in the Chapter referred to the Guarantee of this Constitution, endows the Constitutional Chamber with the character and competencies that any Constitutional Court or Tribunal has in comparative law. Therefore, it is stated that the Supreme Court of Justice will guarantee the supremacy and effectiveness of constitutional norms and principles; it will be the highest and final interpreter of the Constitution and will ensure its uniform interpretation and application, a quality and powers that it exclusively possesses in the Constitutional Chamber, given that this Chamber exercises concentrated control of constitutionality.

Indeed, the interpretative powers granted to the Supreme Court of Justice in this regard, in line with the basic characteristics of constitutional justice

in comparative law, can only be exercised by the Constitutional Chamber, as it is exclusively responsible for the exercise of constitutional jurisdiction. Moreover, based on the principle of separation of powers, such powers cannot be exercised *ex officio* or through agreements, but rather in the context of a popular action of unconstitutionality, *amparo* action, request for interpretation of laws, or another specific case of a jurisdictional nature assigned to the Constitutional Chamber.

In this matter, an indispensable tool is enshrined so that the Constitutional Chamber can guarantee the supremacy and effectiveness of constitutional norms. Thus, it is indicated that the interpretations established by the Constitutional Chamber regarding the content or scope of constitutional norms and principles will be binding for the other Chambers of the Supreme Court of Justice and other courts of the Republic, all with the aim of ensuring the uniform interpretation and application of such norms and principles.

In any case, the respective organic law will establish the necessary corrective measures and sanctions for those Chambers of the Supreme Court of Justice and courts of the Republic that violate the Constitution or the interpretations of its norms or principles established by the Constitutional Chamber. Similarly, the organic law must establish an extraordinary mechanism through which the Constitutional Chamber can review the acts or rulings of the other Chambers of the Supreme Court of Justice that contravene the Constitution or the interpretations of its norms or principles previously set by the Constitutional Chamber, in order to give effect to the principles of supremacy and normative force of the Constitution enshrined in Article 7, according to which all organs exercising public power, without exception, are subject to the Constitution.

Ultimately, the binding nature of the interpretations of constitutional norms and principles will be the main instrument of the Constitutional Chamber to strengthen constitutional justice, give efficacy to the Fundamental Text, and provide greater legal certainty to citizens.

Regarding the competencies of the Constitutional Chamber, the basis for those attributed to it by the Constitution and those that will be assigned

to it by law, is represented by the principles of supremacy and normative force of the Constitution enshrined in Article 7, and by virtue of which, every act of the Public Power, without exception, must be subject to constitutional control. For this reason, the Constitutional Chamber is granted the authority to control the constitutionality of all acts of the organs exercising Public Power issued in direct and immediate execution of the Constitution or that have the rank of law. In any case, the respective organic law will guarantee that no organ of the Public Power is beyond constitutional control, establishing, among other aspects, the competence of the Constitutional Chamber to control the constitutionality of the actions of the other Chambers of the Supreme Court of Justice, through the extraordinary mechanism it deems most appropriate.

Based on the above, the Constitutional Chamber is attributed powers in the exercise of repressive constitutional control, to declare the total or partial nullity of national laws, Constitutions and state laws, municipal ordinances, and other acts issued by any of the organs exercising Public Power, in direct and immediate execution of the Constitution.

In terms of preventive control, the Constitutional Chamber is granted the authority to verify the constitutionality of international treaties signed by the Republic before their ratification.

In comparative law, one of the main functions of constitutional justice is the control of the constitutionality of international agreements and treaties, through a preventive control exercised before their ratification and entry into force. Particularly in European constitutions, as well as in several constitutions of Latin American countries, this mechanism is provided to ensure that the relationships between public international law or community law, on one hand, and the internal law of each State, on the other, are presented with the greatest possible harmony and uniformity.

Preventive control of the constitutionality of international treaties was deemed necessary since, after the conclusion process of an international treaty, that is, its ratification and entry into force through the means provided in constitutional law and public international law, the eventual

and subsequent declaration of unconstitutionality of the treaty or any of its provisions by the Constitutional Chamber could not, in principle, be used as a justification to breach the treaty without compromising the international responsibility of the Republic.

In any case, the objective of that preventive control mechanism is not only to verify the constitutionality of an international agreement or treaty without compromising the international responsibility of the Republic, but also, in the event that any of its provisions are found to be unconstitutional, to ratify it with the appropriate reservation, provided that its ratification is desired, or if it does not allow for reservations, to evaluate the necessity and convenience of ratifying it after an amendment or reform of the Constitution, in the necessary aspects, in order to achieve the greatest possible harmony between international or community law and Venezuelan domestic law.

The authority to activate the preventive control of international treaties will correspond to the President of the Republic or the National Assembly, with its exercise being optional. The possibility of mandatory preventive control was thus ruled out, as it could translate into an obstacle to the smooth and proper conduct of the Republic's international relations.

Another competence of the Constitutional Chamber in terms of preventive control will be to verify the constitutionality of laws before their promulgation, in accordance with the procedure established in Title V Chapter I Section Four of the Constitution, for the case of the presidential objection based on reasons of unconstitutionality. In this matter, the Constituent National Assembly deemed it inappropriate to extend the standing to activate the preventive control mechanism to other persons with a specific interest or public power bodies other than the President of the Republic. In this regard, it was taken into account that after the promulgation of a law, all individuals have access to the classic popular action of the Venezuelan constitutional justice system, and furthermore, the Constitutional Chamber has the precautionary power inherent to any Constitutional Court or Tribunal in comparative law, by virtue of which it can issue any measure necessary to protect human rights and guarantee the integrity of the Constitution.

Finally, in this matter, in accordance with Title V Chapter I Section Four of the Constitution, the Constitutional Chamber will exercise preventive control of the constitutionality of the organic nature of a law that has been classified as such by the National Assembly.

In addition to this and inspired once again by a trend present in comparative law, the Constitution grants the Constitutional Chamber the authority to decide on the unconstitutionality of legislative omissions, a mechanism that has been gaining traction in countries such as Argentina, Brazil, Costa Rica, Hungary, and especially Portugal.

The unconstitutionality by omission occurs due to the lack of development by the Legislative Power, for an excessively long period, of those constitutional norms that require mandatory and specific development, in such a way that it prevents their effective application. With this mechanism, the aim is to avoid situations like those that arose in the case of Article 49 of the 1961 Constitution and the lack of legislation on constitutional protection for almost thirty years.

Regarding the protection of human rights, the Constitutional Chamber will have important functions. First, in order to strengthen the protection of human rights recognized and guaranteed explicitly or implicitly in the Constitution, a mechanism enshrined in some Latin American Constitutions is adopted, whereby the Constitutional Chamber must, in all cases and even *ex officio*, control the constitutionality of the decrees that declare a state of emergency. This will be the only competence that the Constitutional Chamber can exercise *ex officio*, and this is due to the protection of human rights, which is why it has been expressly provided for in the constitutional text.

Furthermore, due to its creation, the entry into force of the Constitution, and the essentially constitutional nature of human rights and the *amparo* action, the Constitutional Chamber will be able to assume the competencies in constitutional *amparo* that the different Chambers of the former Supreme Court of Justice had, in cases of autonomous *amparo* against high-ranking constitutional authorities,

amparo against judicial decisions, and appeals or consultations in amparo, given that the Constitutional Chamber becomes the Chamber of the Supreme Court of Justice with the relevant competence to know and decide such matters.

For its part, as a consequence of the above and given that only the Constitutional Chamber will be competent to resolve amparo actions in the Supreme Court of Justice, the respective organic law must eliminate the precautionary amparo action that is exercised jointly with the contentious administrative nullity appeal and that allows the Political-Administrative and Electoral Chambers to suspend the effects of the administrative acts whose nullity they are responsible for knowing and deciding. To that end, the legislation must empower the administrative contentious judge with all the necessary precautionary powers to decree *ex officio* or at the request of a party, any type of precautionary measure that may be necessary to guarantee the effective judicial protection of the administered and the restoration of their infringed legal situations while the process in question lasts, either through the suspension of the effects of the corresponding administrative act, or through orders to do or not to do, including the payment of sums of money, which may be imposed on the administration depending on the specific case.

Similarly, and in order to make effective the judicial protection of the administered and guarantee their right to free access to justice, the organic law must eliminate the burden on the administered to exhaust the administrative route before filing the administrative contentious nullity appeal, which should remain an option at the discretion of the interested party, but not as a mandatory requirement. In addition, the legislation must expressly establish that in the event an administrative act is tainted by unconstitutionality or any defect that leads to its absolute nullity, the expiration period for filing the administrative contentious nullity appeal will not apply in any way. The above aims to offer the administered a protection of their human rights in accordance with the principle of progressivity enshrined in the Constitution, once the precautionary amparo action against administrative acts has been eliminated.

On the other hand, consistent with the aforementioned, the respective organic law will eliminate the precautionary amparo action that is exercised jointly with the popular action of unconstitutionality against laws and normative provisions, considering that in this regard, the Constitutional Chamber has the precautionary power inherent to any Constitutional Court or Tribunal in comparative law, by virtue of which it can decree any precautionary measure necessary to protect human rights and guarantee the integrity of the Constitution, including the suspension of the effects of the norm whose annulment is requested, solely for the specific situation of the plaintiffs, parties, or third parties involved in the process and while the corresponding annulment trial lasts.

The Constitution establishes as the competence of the Constitutional Chamber to resolve constitutional controversies that arise between any of the organs exercising Public Power. In this regard, two essential elements stand out; first, that they involve controversies between any of the organs that the Constitution provides for in the horizontal or vertical distribution of Public Power, and second, that they must be constitutional controversies, meaning those whose resolution depends on the examination, interpretation, and application of constitutional norms, such as those related to the distribution of powers among the different organs of the State, especially those that distribute power at the national, state, and municipal levels.

In this way, all constitutional controversies between the Republic and any of the states or municipalities, that is, between the central power and the territorially decentralized power, will be resolved by the Constitutional Chamber within the procedure that will be established in the respective organic law. In any case, this attribution aims for the Constitutional Chamber, as the guarantor and highest defender of the principles enshrined in the Fundamental Text, to align the actions of the organs exercising Public Power with the constitutional framework.

Finally, and aside from its competence to hear amparo actions, the Constitutional Chamber is granted the competence to review definitively firm decisions issued by the Republic's courts in matters of constitutional

amparo and diffuse control of constitutionality, through an extraordinary mechanism that must be established by the organic law regulating constitutional jurisdiction, solely with the aim of ensuring uniformity in the interpretation of constitutional norms and principles, the effectiveness of the Fundamental Text, and legal certainty.

Now, the aforementioned competence of the Constitutional Chamber cannot and should not be understood as part of the rights to defense, effective judicial protection, and constitutional protection enshrined in the Constitution, but rather, as explained, as an extraordinary review mechanism whose sole purpose is to provide uniformity in the interpretation of constitutional norms and principles.

Therefore, since it is not a right and considering that the legislator can experiment and make mistakes in an evolutionary manner in the search for the most suitable extraordinary mechanism, the National Constituent Assembly decided to leave its concrete development to the respective organic law. Thus, the organic law could establish, for example, an extraordinary review mechanism with discretionary exercise by the Constitutional Chamber, similar to the writ of certiorari used by the Supreme Court of the United States of America; a mechanism whose discretionary features are not absolute, like the one used by the Federal Constitutional Court of Germany; or a mechanism whose admissibility and appropriateness requirements are pre-established in the law, as can be seen in some examples of comparative law.

In any case, the extraordinary mechanism of review that shall be established by organic law shall link for the first time, and without prejudice to the early regulation of the Constitution of 1901, the methods of diffuse and concentrated control of constitutionality that have coexisted in our legal system for more than one hundred years, thereby responding to the main criticism leveled at our constitutional justice system, which acknowledged the coexistence of the aforementioned methods of control but highlighted that there was no real coordination, link, or connection between one and the other that sought to harmonize or articulate them to achieve a uniform interpretation of the Constitution, for which reason it could

not be qualified as comprehensive, given that there were parallel control modalities, established side by side, without any connection between them. For this reason, the Constitution enshrines a mixed and integrated system of constitutional control, attributing to the Constitutional Chamber the function of coordinating the control methods through the harmonization of constitutional jurisprudence and the uniform interpretation of the Fundamental Text.

Chapter II

On States of Exception

The first of the precepts dedicated to this matter incorporates two basic guiding principles of states of exception: that of strict necessity and that of temporality. Such legal situations are circumscribed to those extraordinary circumstances that seriously affect the security of persons, the Nation, or the institutions, and that cannot be addressed through the ordinary powers of the organs of Public Power. The temporality of these situations is also emphasized.

On the other hand, the precept mentions the main rights that cannot be suspended or restricted during states of exception. This is a merely enumerative list, as the rights indicated in Articles 4.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights and 27.2 of the American Convention on Human Rights are also not susceptible to suspension or restriction. It is important to underscore that among the irrevocable rights are the judicial guarantees necessary for the defense of rights.

The second of the precepts that make up this Chapter contemplates the different states of exception, establishing, in accordance with the principle of gradualism, the factual circumstances that may justify them and their temporal limitation. The regulation of the details of the regime of states of exception is referred to an organic law.

The last of the precepts of this Chapter establishes, firstly, that the decree declaring a state of exception must indicate, in order to preserve legal certainty, the measures that may be taken on the basis thereof. Secondly,

given the significance of the corresponding decision, the intervention of the three classical Powers in the declaration of states of exception is foreseen: by virtue of the urgency that characterizes them, the President of the Republic, in the Council of Ministers, is empowered to issue the respective Decree, but its referral to the National Assembly is prescribed, which, as the deliberative and representative instance par excellence of popular sovereignty, may revoke it if it deems that the invoked circumstances do not justify the declaration of a state of exception or if it considers that the measures foreseen to address it are excessive. If the National Assembly is in recess when the corresponding decree is issued, it must be referred to the Delegated Committee, which shall exercise the respective powers.

To the foregoing is added an automatic judicial review attributed to the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice, which shall rule on the constitutionality or unconstitutionality of the state of exception and the provisions of the decree that declared it, unless the National Assembly, or the Delegated Committee, has previously revoked that decree. Furthermore, the National Executive and the National Assembly are granted the power to revoke the decree that declared a state of exception, upon the cessation of the causes that motivated it.

TITLE IX ON CONSTITUTIONAL AMENDMENT

The Constitution has maintained the classification that distinguishes between Constitutional Amendment and Constitutional Reform, incorporating, in turn, the power to convene a National Constituent Assembly, to be consistent with the idea that the people are the legitimate repository of original constituent power. This is in accordance with the provisions of the Constitution itself, which establishes that sovereignty resides in the people, who may exercise it directly or indirectly.

A series of mechanisms are established through which the possibilities of modifying the constitutional text are feasible and accessible, to avoid the divorce between the fundamental norm of the legal system and the social, political, cultural, and economic reality. The contradiction between

a formal Constitution and a real Constitution generates distortions that considerably aggravate the crises of governability and legitimacy of the political system, due to the lack of options to overcome them. Proof of this can be found in our experience within the framework of a formal and representative democracy, in which those who should have promoted constitutional changes were the most reluctant elites to produce them, which explains the deadlock and obstruction of attempts to reform the previous Constitution.

Modern democracy, inserted in a globalized world and conditioned by the dynamics of current life, in turn determined by technological changes, requires an institutional framework sufficiently flexible to adapt to the changes that are generated.

Hence, our Constitution, despite having the rigidity of written constitutions, must include elements that allow for this adaptation to reality. One of these elements is the existence of a High Court which, through an interpretation of a historical progressive nature, based on the understanding of the historical moment, allows for the best possible application of the supreme normative body to the reality it is meant to govern; as foreseen in this Constitution with the creation of the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice.

However, it must also include elements of flexibility in the most rigid aspect of written constitutions, which is comprised of the provisions relating to the form and mechanisms for the modification of the Constitution itself.

In this regard, the possibilities of modifying the legal basis of the country must be broad and effectively in the hands of a plurality of political and social actors. A participatory and protagonistic democracy cannot construct a rigid and petrified constitutional norm. On the contrary, it must leave many windows open for participatory processes to develop fully, avoiding the profound divorce between the norm and reality.

The leading role of the people in directing their own destiny must be explicitly enshrined, with special emphasis on this point of the

constitutional reform. A people desirous of exercising sovereignty should not have to undergo all sorts of vicissitudes and overcome a multitude of obstacles to achieve the changes that the legal structures require. The facilitation of processes in which the people manifest themselves to request the modification of constitutional norms is a principle inherent to this constitutional text.

In this context, it must be understood that the exercise of sovereignty by the people, far from affecting the refounding process of the Republic and achieving the objective of deepening democracy, becomes an indispensable tool of popular protagonism, banishing the system of conclaves that decided the country's destiny behind the backs of society.

With respect to the amendment procedure, the limitations established in the 1961 Constitution, which made the achievement of effective results complicated, are overcome. In the new constitutional text, a more agile and flexible manner has been foreseen, and a definition of amendment is formulated, understood as the addition or modification of articles of the text, provided that the fundamental structure is not altered.

The initiative for the reform is attributed to the National Assembly, by a majority of its members; to the President of the Republic in the Council of Ministers; or to registered voters in a number no less than fifteen percent. Once these requirements are met, the process is initiated before the National Assembly, which will hold three discussions before the approval of the project, for which it has a term no longer than two years. A qualified majority of two-thirds of its members is required for this approval. The approved project will be submitted to a referendum within the following thirty days, and a majority of positive votes will suffice for its approval.

Finally, in this Title, the National Constituent Assembly is expressly enshrined, a fundamental instrument to guarantee the people of Venezuela the open possibility of substantially modifying the State and creating a new legal order, creating a new constitutional text. This possibility, formally non-existent in the 1961 Constitution, had to be incorporated through the interpretation of the Supreme Court of Justice to make possible the

convocation of the National Constituent Assembly that produced this Constitution. In the present constitutional text, it becomes a current norm, expressive of the most accurate democratic definition regarding popular sovereignty.

Given, signed, and sealed in Ciudad Bolívar, State of Bolivar, on the thirtieth day of January of the year two thousand. Years 189th of Independence and 140th of the Federation.



Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela

Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela
Nº 5.908 Extraordinary, february 19, 2009



PREAMBLE

The People of Venezuela, exercising their powers of creation and invoking the protection of God, the historic example of our Liberator Simon Bolivar and the heroism and sacrifice of our aboriginal ancestors and the forerunners and founders of a free and sovereign nation; to the supreme end of refounding the Republic to establish a democratic, participatory and “protagonistic,” multiethnic and multicultural society in a just, federal and decentralized State that strengthens the values of freedom, independence, peace, solidarity, the common good, the nation’s territorial integrity, comity and the rule of law for this and future generations; guarantees the right to life, work, culture, education, social justice and equality, without discrimination or subordination of any kind; promotes peaceful cooperation among nations and furthers and strengthens Latin American integration in accordance with the principle of nonintervention and self-determination of peoples, the universal and indivisible guarantee of human rights, the democratization of international society, nuclear disarmament, ecological balance and environmental juridical rights as the common and inalienable heritage of humanity, exercising their originary power represented by the National Constituent Assembly, by means of their freely cast vote and in a democratic referendum, hereby ordain the following:

CONSTITUTION

TITLE I

FUNDAMENTAL PRINCIPLES

Article 1

The Bolivarian Republic of Venezuela is irrevocably free and independent and bases its moral property and values of freedom, equality, justice and international peace on the doctrine of Simón Bolívar, The Liberator.

Independence, liberty, sovereignty, immunity, territorial integrity and national self-determination are rights of the Nation that cannot be waived.

Article 2

Venezuela constitutes itself as a Democratic and Social State of Law and Justice that holds as superior values of its legal order and actions those of life, liberty, justice, equality, solidarity, democracy, social responsibility and, in general, the preeminence of human rights, ethics and political pluralism.

Article 3

The essential purposes of the State are the protection and development of the individual and respect for his/her dignity, the democratic exercise of the will of the people, the building of a just and peace-loving society, the furtherance of the prosperity and well-being of the people and the guaranteeing of the fulfillment of the principles, rights and duties recognized by and established in this Constitution.

Education and work are the fundamental processes for achieving those purposes.

Article 4

The Bolivarian Republic of Venezuela is a decentralized Federal State on the terms set forth in this Constitution and is governed by the principles of territorial integrity, cooperation, solidarity, concurrence and shared responsibility.

Article 5

Sovereignty resides untransferably in the people, who exercise it directly in the manner provided for in this Constitution and in the law, and indirectly, by suffrage, through the organs exercising the powers of Government.

The organs of the State emanate from and are subject to the sovereignty of the people.

Article 6

The government of the Bolivarian Republic of Venezuela and of the

political entities comprising the same is and shall always be democratic, participatory, elective, decentralized, alternate, responsible and pluralist, with revocable mandates.

Article 7

The Constitution is the supreme law and the foundation of the legal order. All persons and organs that exercise the powers of Government are subject to this Constitution.

Article 8

The national flag with its yellow, blue and red stripes, the National Anthem “Gloria al bravo pueblo” (Glory to the Brave People), and the coat of arms of the Republic are the national emblems.

The law shall regulate their characteristics, meaning and use.

Article 9

Spanish is the official language. The use of native languages also has official status for indigenous peoples, and they must be respected throughout the territory of the Republic as constituting part of the cultural heritage of the Nation and humanity.

TITLE II

GEOGRAPHICAL SPACES AND POLITICAL DIVISION

Chapter I

Territory and Other Geographical Spaces

Article 10

The territory and other geographical spaces of the Republic are those that belonged to the Captaincy General of Venezuela before the political transformation begun on April 19, 1810, as amended by virtue of the treaties and arbitration awards that have not been vitiated with nullity.

Article 11

The full sovereignty of the Republic is exercised in the continental and

insular spaces, lake and river spaces, territorial sea, historic and vital inland sea areas, and those lying within such straight baselines as have been adopted or come to be adopted by the Republic; the seabed and under the seabed of the aforementioned; the continental, insular and maritime airspace and the resources located therein, including genetic resources, migratory species, derived products and any intangible components that may be present within the aforementioned spaces because of natural causes.

The insular space of the Republic includes the archipelagos of Los Monjes, Las Aves, Los Roques and La Orchila and the islands of La Tortuga and La Blanquilla, Los Hermanos Archipelago, the islands of Margarita, Cubagua and Coche, Los Frailes Archipelago, La Sola Island, Los Testigos Archipelago, Patos Island and Aves Island, as well as the islands, islets, keys and banks located in, or emerging in the future from, the territorial sea covering the continental shelf or lying within the limits of the exclusive economic zone.

As to the aquatic spaces consisting of the contiguous maritime zone, the continental shelf and the exclusive economic zone, the Republic exercises exclusive rights of sovereignty and jurisdiction on such terms, to such extent and subject to such conditions as may be determined by international public law and the law.

The Republic has rights in outer space and in those areas that are or may be the Common Property of Humanity, on such terms, to such extent and subject to such conditions as may be determined by public international agreements and by national legislation.

Article 12

Mineral and hydrocarbon deposits of any nature that exist within the territory of the nation, beneath the territorial seabed, within the exclusive economic zone and on the continental shelf belong to the Republic are public property and, therefore, inalienable and imprescriptible. The seacoasts are public property.

Article 13

The territory of the nation may never be assigned, transferred, leased or in any manner whatsoever conveyed, even temporarily or partially, to foreign States or other international legal persons.

The geographical space of Venezuela is an area of peace. No foreign military bases or facilities having purposes that are in any way military may be established within such space by any power or coalition of powers.

Foreign States or other international legal persons may acquire real property only for the quarters of their diplomatic or consular delegations, within such area as may be determined and subject to guarantees of reciprocity, with such limitations as may be established by law. In such cases, national sovereignty shall always remain intact.

There shall be no conveyance of title to vacant land existing within the federal dependencies and on islands in rivers and lakes, and the right to use the same may only be granted in a manner that does not involve, directly or indirectly, the transfer of title to the land.

Article 14

The law shall establish a special legal regime for those territories that, by the freely adopted decision of their inhabitants and with the approval of the National Assembly, come to be incorporated into the territory of the Republic.

Article 15

The State has the obligation to establish an overall policy in land, insular and maritime border areas, preserving territorial integrity, sovereignty, security, defense, national identity, diversity and the environment, in accordance with cultural, economic and social development and integration. Taking into account the inherent nature of each border region through special financial allocations, an “organic law” on borders shall determine the obligations and objectives of this responsibility.

Chapter II

Political Division

Article 16

For purposes of the political organization of the Republic, the territory of the nation is divided into the territories of the States, the Capital District, the federal dependencies and the federal territories. The territory is organized into Municipalities.

The political division of the territory shall be regulated by an “organic law” that shall guarantee municipal autonomy and administrative-political decentralization. Such law may provide for the creation of federal territories in certain areas within the States, the taking effect of which shall be subject to the holding of a referendum to approve the same in the State concerned. By special law, a federal territory may be given the status of a State, being allocated all or part of the territorial area concerned.

Article 17

Federal dependencies are the maritime islands that are not incorporated into the territory of a State, as well as any island that may form or appear in the territorial sea or in the sea covering the continental shelf. Their regime and administration shall be determined by law.

Article 18

The city of Caracas is the capital of the Republic and the seat of the organs of National Government.

The provisions of this article shall not prevent the exercise of the powers of National Government elsewhere in the Republic.

A special law shall establish the territorial and political unit of the city of Caracas, which shall incorporate the Municipalities of the Capital District and those of the Miranda State into a two-tier system of municipal government. Said law shall establish the organization, government, administration, sphere of competence and resources of the city, with a view to achieving its harmonious overall development. In any case, the law shall guarantee the democratic and participatory character of its government.

TITLE III DUTIES AND HUMAN RIGHTS AND GUARANTEES

Chapter I General Provisions

Article 19

The State shall guarantee to every individual, in accordance with the principle of progressiveness and without discrimination of any kind, not renounceable, indivisible and interdependent enjoyment and exercise of human rights. Respecting and guaranteeing these rights is obligatory for the organs of Government, in accordance with this Constitution, the human rights treaties signed and ratified by the Republic and any laws implementing the same.

Article 20

Everyone has the right to freely develop their own personality, subject only to the limitations arising from the rights of others and public and social order.

Article 21

All persons are equal before the law and, consequently:

1. No discrimination based on race, sex, creed or social standing shall be permitted, nor, in general, any discrimination with the intent or effect of nullifying or encroaching upon the recognition, enjoyment or exercise, on equal terms, of the rights and liberties of every individual.
2. The law shall guarantee legal and administrative conditions so that equality before the law is real and effective; shall adopt affirmative measures for the benefit of any persons or groups that may be discriminated against, marginalized or vulnerable; shall protect in particular those persons who, because of any of the aforementioned circumstances, are in a manifestly weak position; and shall punish those who abuse or mistreat such persons.
3. People shall only be officially addressed as Citizens, except for diplomatic forms.

4. No titles of nobility or hereditary distinctions shall be recognized.

Article 22

The recitation of rights and guarantees contained in this Constitution and in international instruments concerning human rights are not to be understood as negating others that, being inherent to the individual, are not expressly mentioned in such recitation and instruments. The absence of a law regulating these rights shall not adversely affect the exercise thereof.

Article 23

The treaties, pacts and conventions relating to human rights executed and ratified by Venezuela have constitutional ranking and prevail over internal legislation, insofar as they contain provisions concerning the enjoyment and exercise of such rights that are more favorable than those established in this Constitution and in the laws of the Republic, and shall be immediately and directly applied by the courts and other organs of Government.

Article 24

No legislative provision shall have retroactive effect, except when it imposes a lesser penalty. Procedural laws shall apply from the moment they go into effect, even to proceedings already in progress; however, in criminal proceedings, evidence already admitted shall be weighed in accordance with the laws that were in effect when the evidence was admitted, insofar as this benefits the defendant.

When there are doubts, the rule of law that is most beneficial to the defendant shall apply.

Article 25

Any act issued in exercising the powers of Government that violates or encroaches upon the rights guaranteed by this Constitution and by law is null and void; and public officials who order or implement said act shall incur criminal, civil and administrative liability, as applicable in each case, with no defense on grounds of having followed the orders of a superior.

Article 26

All persons are entitled to access to the organs responsible for administering justice for the purpose of enforcing their rights and interests, including those of a collective or diffuse nature; to the effective protection of the aforementioned rights and interests; and to obtain, promptly, the corresponding decision.

The State shall guarantee justice that is free of charge, accessible, impartial, suitable, transparent, autonomous, independent, responsible, fair and expeditious, without undue delays, superfluous formalities or useless reinstating.

Article 27

All persons are entitled to be protected by the courts in the enjoyment and exercise of constitutional rights and guarantees, including even those inherent individual rights not expressly mentioned in this Constitution or in international instruments concerning human rights.

Proceedings in an action for the protection of constitutional rights shall be oral, public, brief, free of charge and not subject to formalities; and the competent judge shall have the power to restore immediately the legal situation infringed upon or the closest possible equivalent thereto. All days shall be court days for holding such proceedings, and the court shall give actions for the protection of constitutional rights priority over any other matters.

An action for the protection of liberty or safety may be brought by any person; and the physical custody of the detainee shall be transferred immediately to the court, without delay.

The exercise of this right may not be affected in any way by the declaration of a state of exception or the restriction of constitutional guarantees.

Article 28

All persons are entitled to have access to the information and data concerning them or their possessions that are contained in official or private records,

with such exceptions as may be established by law, as well as to know what use is being made of the same and the purpose thereof, and to petition the competent court to have those records updated, corrected or destroyed should they be erroneous or unlawfully affect the petitioner's rights. Also, they may have access to documents of any nature containing information of interest to communities or group of persons. The foregoing is without prejudice to the confidentiality of sources from which journalists obtain information and the confidentiality of information of other professions as may be determined by law.

Article 29

The State shall be obliged to investigate and legally punish human rights offenses committed by its authorities.

Actions to punish crimes against humanity, serious violations of human rights and war crimes shall not be subject to a statute of limitations. Human rights violations and crimes against humanity shall be investigated and tried by ordinary courts. These crimes are excluded from any benefit that might render the offenders immune from punishment, including pardon and amnesty.

Article 30

The State shall have the obligation to make full reparation to the victims of human rights violations imputable to it, or to their legal successors, including payment of damages.

The State shall adopt the necessary legislative and other measures to implement the indemnities provided for under this article.

The State shall protect the victims of ordinary crimes and endeavor to ensure that the guilty parties make reparation for the damage caused.

Article 31

All persons have the right, on the terms established by the human rights treaties, pacts and conventions ratified by the Republic, to address petitions and complaints to the international organs created for such purpose, in

order to ask for protection of their human rights.

The State shall adopt, in accordance with the procedures established in this Constitution and in the law, such measures as may be necessary to enforce the decisions emanating from the international organs as stipulated in this article.

Chapter II

Nationality and Citizenship

Section One: Nationality

Article 32

Venezuelans by birth are:

1. Any person who was born within the territory of the Republic.
2. Any person who was born in a foreign territory and is the child of a father and mother who are both Venezuelans by birth.
3. Any person who was born in a foreign territory and is the child of a father or a mother who is Venezuelan by birth, provided he/she establishes residence within the territory of the Republic or declares his/her intention to claim Venezuelan nationality.
4. Any person who was born in a foreign territory and is the child of a father or a mother who is Venezuelan by naturalization, provided that, prior to reaching the age of 18, he/she establishes his/her residence within the territory of the Republic and, before reaching the age of 25, declares his/her intention to claim Venezuelan nationality.

Article 33

Venezuelans by naturalization are:

1. Foreign nationals who obtain naturalization papers. To that end, they must have a domicile in Venezuela with uninterrupted residence of at least ten years immediately preceding the application date.
The period of residence shall be reduced to five years in the case of foreign nationals whose original nationality is that of Spain, Portugal, Italy or a Latin American or Caribbean country.

2. Foreign nationals who marry Venezuelans from the time they declare their wish to be Venezuelans by naturalization, after at least five years have elapsed since the date of marriage.
3. Minors of foreign nationality on the date of the naturalization of their father or mother, whoever exercises the legal custody of such minors, provided they declare their intention of adopting Venezuelan nationality before reaching the age of 21 and have resided in Venezuela, without interruption, during the five years preceding said declaration.

Article 34

Venezuelan nationality is not lost upon electing or acquiring another nationality.

Article 35

Venezuelans by birth may not be deprived of their nationality. Venezuelan nationality by naturalization can be revoked only by a judgment handed down by a court in accordance with law.

Article 36

Venezuelan nationality may be renounced. A person who renounces Venezuelan nationality by birth may regain it if he/she establishes a domicile within the territory of the Republic for a period of no less than two years and expresses his/her intention to regain Venezuelan nationality. Naturalized Venezuelans who renounce Venezuelan nationality may regain it by, once again, meeting the requirements prescribed under Article 33 hereof.

Article 37

The State shall promote the execution of international treaties relating to nationality, especially with bordering countries and those indicated in Article 33, Section 1 hereof.

Article 38

The law shall determine the substantive and procedural rules relating to the acquisition, election, renunciation and recovery of Venezuelan nationality, as well as to the revocation and annulment of naturalization, in compliance with the foregoing provisions.

*Section Two: Citizenship***Article 39**

Venezuelans who are not subject to political disqualification or civil interdiction and meet the age requirements provided for in this Constitution exercise citizenship and, therefore, have political rights and duties in accordance with this Constitution.

Article 40

Political rights are reserved to Venezuelans, with the exceptions established in this Constitution.

Naturalized Venezuelans who have entered the country before the age of seven years and have resided permanently in Venezuela until reaching legal age enjoy the same rights as Venezuelans by birth.

Article 41

Only Venezuelans by birth who have no other nationality may hold the offices of President of the Republic, Executive Vice President, President and Vice President of the National Assembly, Justices of the Supreme Tribunal of Justice, President of the National Electoral Council, Attorney General of the Republic, Comptroller General of the Republic, Prosecutor General of the Republic, Ombudsperson, Ministers with responsibilities relating to the security of the Nation, finance, energy and mining or education; Governors and Mayors of border States and Municipalities and offices contemplated under the Organic Statute of the National Armed Force.

In order to hold the position of member of the National Assembly, Minister or Governor or Mayor of non-border States and Municipalities, naturalized Venezuelans must have a domicile in Venezuela, with at least 15 years' permanent residence, and meet the capability requirements provided for by law.

Article 42

Anyone who loses or renounces nationality loses citizenship. The exercise of citizenship or any political rights can be suspended only by final decision handed down by a court in those cases provided for by law.

Chapter III

Civil Rights

Article 43

The right to life is inviolable. No law may provide for the death penalty, nor authority apply such penalty. The State shall protect the life of persons who are deprived of liberty, serving in the armed forces or the civilian services or are otherwise subject to its authority.

Article 44

Personal liberty is inviolable, therefore:

1. No person can be arrested or detained except by virtue of a court order, unless such person is caught in flagrante delicto. In this case, such person shall be brought before a judge within 48 hours of his/her arrest. He/she shall remain free during trial, except for reasons determined by law and assessed by the judge on a case-by-case basis. The setting of bail required by law for the release of a detainee shall not be subject to tax of any kind.
2. Any person under arrest has the right to communicate immediately with members of his/her family, an attorney or any other person in whom he/she reposes trust; and such persons, in turn, have the right to be informed where the detainee is being held, to be notified immediately of the reasons for the arrest and to have a written record entered into the case file concerning the physical and mental condition of the detainee, filed either by themselves or with the assistance of specialists. The competent authorities shall keep a public record of every arrest made, which shall include the identity of the person arrested, the place, time and circumstances of the arrest and the officers who made it. In the case of the arrest of foreign nationals, consular notification provided for in international treaties shall also be observed.
3. The penalty cannot extend beyond the person of the convicted individual. No one shall be sentenced to perpetual or humiliating penalties. Penalties consisting of deprivation of liberty shall not exceed 30 years.
4. Any authority taking measures involving deprivation of liberty must identify himself/herself.

5. No person shall remain under arrest after a release order has been issued by the competent authority or once his/her sentence has been served.

Article 45

The public authorities, whether military or civilian, are prohibited from effecting, permitting or tolerating the forced disappearance of persons, even during a state of emergency, exception or restriction of guarantees. A public official who receives an order or instruction to carry out such forced disappearance has the obligation not to obey it and to report it to the competent authorities. The master minds, perpetrators and accomplices of and accessories to crimes of forced disappearance of persons, as well as any attempt to commit such crimes, shall be punished in accordance with law.

Article 46

Everyone is entitled to have their physical, mental and moral integrity respected; in consequence:

1. No person can be subjected to penalties, tortures or cruel, inhuman or degrading treatment. Every victim of torture or cruel, inhumane or degrading treatment effected or tolerated by agents of the State is entitled to rehabilitation.
2. Any person deprived of liberty shall be treated with the respect due to the inherent dignity of the human being.
3. No person shall be subjected, without his/her freely given consent, to scientific experiments or medical or laboratory examinations, except when such person's life is in danger or in any other circumstances as may be determined by law.
4. Any public official who, by reason of his/her official position, inflicts mistreatment or physical or mental suffering on any person, or instigates or tolerates such treatment, shall be punished in accordance with law.

Article 47

A person's home and any private premises are inviolable. They may not be forcibly entered except by court order, to prevent the commission of a

crime or carry out the decisions handed down by the courts in accordance with law, respecting human dignity in all cases.

Any health inspections carried out in accordance with law may be performed only after notice from the officials who order them or have to carry them out has been served.

Article 48

The secrecy and inviolability of private communications in all forms are guaranteed. The same may not be interfered with except by order of a competent court, with observance of the provisions of law and preserving the secrecy of private matters unrelated to the proceedings in question.

Article 49

Due process shall apply to all judicial and administrative actions; in consequence:

1. Legal assistance and defense are inviolable rights at all stages and levels during the investigation and proceedings. Everyone has the right to be notified of the charges for which they are being investigated, to have access to the evidence and to have sufficient time and adequate means to conduct their defense. Any evidence obtained in violation of due process shall be null and void. Any person declared guilty shall have the right to appeal the decision, except in the cases established in this Constitution and by law.
2. A person shall be presumed innocent until proved otherwise.
3. Everyone has the right to be heard in proceedings of any kind with all due guarantees and within the reasonable period of time legally determined beforehand by a competent, independent and impartial court. Anyone who does not speak Spanish or is unable to communicate verbally is entitled to an interpreter.
4. Everyone has the right to be tried by their natural judges in courts having ordinary or special jurisdiction, with the guarantees established in this Constitution and by law. No one shall be put on trial without knowing the identity of the party judging him/her or be tried by exceptional courts or commissions created for such purpose.

5. No one may be required to confess guilt or testify against himself/herself or his/her spouse or partner, or any relative within the fourth degree of consanguinity or the second degree of affinity.
A confession shall be valid only if given without coercion of any kind.
6. No one may be punished for acts or omissions not defined under preexisting laws as a crime, offense or infraction.
7. No one may be placed on trial based on the same facts for which such person has been judged previously.
8. Every person may request from the State the restoration or remediation of a legal situation adversely affected by unjustified judicial errors, delays or omissions. The foregoing is without prejudice to the right of the individual to seek to hold the magistrate or judge personally liable, and to the right of the State to take action against the latter.

Article 50

Everyone may transit the territory of the Nation freely by any means, change their domicile and residence, leave and return to the Republic, move their goods and belongings within the country and to bring their goods into or take them out of the country, subject only to such limitations as may be prescribed by law. In cases involving the granting of a road concession, the law shall provide for the circumstances in which an alternate route must be guaranteed. Venezuelans can enter the country without the need for authorization of any kind.

The penalty of banishment from national territory may not be established against Venezuelans by any act of Government.

Article 51

Everyone has the right to petition or make representations before any authority or public official concerning matters within the competence of the latter and to obtain a timely and adequate response. Whoever violates this right shall be punished in accordance with law, including the possibility of dismissal from office.

Article 52

Everyone has the right to assemble for lawful purposes, in accordance with law. The State shall be obligated to facilitate the exercise of this right.

Article 53

Everyone has the right to meet publicly or privately, without obtaining permission beforehand, for lawful purposes and without weapons. Meetings in public places shall be regulated by law.

Article 54

No person may be subjected to slavery or servitude. Trafficking in persons, especially in women, children and adolescents, in any form, shall be subject to the penalties prescribed by law.

Article 55

Everyone is entitled to protection by the State, through the citizen safety entities regulated by law, from situations that constitute a vulnerability of or a threat or risk to the physical integrity of individuals, their property, the enjoyment of their rights or fulfillment of their duties.

Participation by citizens in programs for purposes of prevention, citizen safety and emergency management shall be regulated by a special law.

The State's security corps shall respect the human dignity and rights of all persons. The use of weapons or toxic substances by police and security officers shall be limited by the principles of necessity, convenience, opportuneness and proportionality in accordance with law.

Article 56

Everyone has the right to their own name, to the surnames of their father and mother, and to know the identity of the latter. The State guarantees the right to investigate parentage.

Everyone has the right to be registered free of charge with the Civil Registry Office after birth, and to obtain public documents that prove their biological identity, in accordance with law. Such documents shall not contain any mention classifying the parental relationship.

Article 57

Everyone has the right to freely express their thoughts, ideas or opinions orally, in writing or by any other form of expression, and to use for such purpose any means of communication and dissemination, and no censorship shall be established. Anyone making use of this right assumes full responsibility for everything expressed. Anonymity, war propaganda, discriminatory messages or those promoting religious intolerance are not permitted.

Censorship restricting the ability of public officials to report on matters for which they are responsible is prohibited.

Article 58

Communications are free and plural and involve the duties and responsibilities indicated by law. Everyone has the right to timely, truthful and impartial information, without censorship, in accordance with the principles of this Constitution, as well as to the right to reply and corrections when they are directly affected by inaccurate or offensive information. Children and adolescents have the right to receive adequate information for their overall development.

Article 59

The State shall guarantee freedom of cult and religion. Everyone has the right to profess their religious faith and cults and to express their beliefs in private or in public, by teaching and other practices, provided such beliefs are not contrary to morality, good customs and public order. The autonomy and independence of churches and religious denominations are likewise guaranteed, subject only to such limitations as may derive from this Constitution and the law. A father and mother are entitled to have their sons and daughters receive religious education in accordance with their convictions.

No one may invoke religious beliefs or discipline as a means of evading compliance with the law or preventing another person from exercising his/her rights.

Article 60

Everyone is entitled to protection of their honor, private life, intimacy, self-image, confidentiality and reputation.

The law shall restrict the use of electronic information in order to guarantee the personal and family intimacy and honor of citizens and the full exercise of their rights.

Article 61

Everyone has the right to freedom of conscience and to express it, unless practicing said freedom of conscience affects their personality or constitutes a criminal offense. Conscientious objection may not be invoked in order to evade compliance with the law or prevent others from complying with the law or exercising their rights.

Chapter IV**Political Rights and Popular Referenda***Section One: Political Rights***Article 62**

All citizens have the right to participate freely in public affairs, either directly or through their elected representatives.

The participation of the people in forming, carrying out and controlling the management of public policy is the necessary means of achieving the protagonism that will ensure their complete development, both as individuals and collectively. It is the obligation of the State and the duty of society to facilitate the creation of optimum conditions for putting this into practice.

Article 63

Suffrage is a right. It shall be exercised through free, universal, direct and secret elections. The law shall guarantee the principle of personalization of suffrage and proportional representation.

Article 64

All Venezuelans who have reached the age of 18 and are not subject to civil interdiction or political disqualification are qualified to vote.

In parish, municipal and state elections, the right to vote shall be extended to foreign nationals who have reached the age of 18 and have resided in Venezuela for more than ten years, subject to the limitations established in this Constitution and by law, and provided they are not subject to civil interdiction or political disqualification.

Article 65

Persons who have been convicted of crimes committed while holding office or other offenses against public property shall be ineligible to run for any office filled by popular vote for such period as may be prescribed by law after serving their sentences, depending on the seriousness of the offense.

Article 66

Voters have the right to obtain from their public representatives, transparent and periodic accounting for their office, in accordance with the program offered.

Article 67

All citizens have the right to associate for political purposes, through democratic methods of organization, operation and direction. Their governing organs and candidates for offices filled by popular vote shall be selected by internal elections with the participation of their members. No financing of associations for political purposes with State funds shall be permitted.

The law shall regulate matters relating to the financing of and private contributions to organizations for political purposes and the oversight mechanisms to guarantee propriety as to the sources and handling of such funds. The law shall also regulate political and election campaigns, their duration and spending limits with a view pursuing their democratization.

Citizens acting on their own initiative and associations for political purposes are entitled to participate in the electoral process, putting forward candidates. The financing of political propaganda and election campaign advertising shall be regulated by law. The authorities of associations for political purposes may not enter into contracts with entities in the public sector.

Article 68

Citizens have the right to demonstrate peacefully and without weapons, subject only to such requirements as may be established by law.

The use of firearms and toxic substances to control peaceful demonstrations is prohibited. The law shall regulate the actions of police and security forces in maintaining law and order.

Article 69

The Bolivarian Republic of Venezuela recognizes and guarantees the right of asylum and refuge. The extradition of Venezuelans is prohibited.

Article 70

Means of participation and protagonism by the people in the exercise of their sovereignty in political affairs include: voting to fill public offices, referenda, popular consultations, recalls of mandate, legislative, constitutional and constituent initiatives, open forums and meetings of citizens whose decisions shall be binding, among others; and in social and economic affairs: citizen service entities, self-management, co-management, cooperatives in all their forms, including those of a financial nature, savings funds, community enterprises, and other forms of association guided by the values of mutual cooperation and solidarity.

The law shall establish conditions for the effective functioning of the means of participation provided for under this article.

Section Two: Popular Referenda

Article 71

Matters of special national importance may be submitted to a consultative referendum on the initiative of the President of the Republic, taken at a

meeting of the Cabinet; by resolution of the National Assembly, passed by a majority vote; or at the request of a number of voters constituting no fewer than ten percent of all voters registered on the Civil and Electoral Registry.

Matters of special importance for the states, municipalities and parishes may also be submitted to a consultative referendum. The initiative shall be taken by the Parish Council, Municipal Council or Legislative Council, by a two-thirds vote of its members; by the Mayor or the State Governor; or by a number of voters constituting no fewer than ten percent of the total number of voters registered in the pertinent electoral district.

Article 72

All posts of magistrate and other offices filled by popular vote are revocable.

Once half of the term of office for which an official has been elected has elapsed, a number of voters constituting no fewer than twenty percent of the voters registered in the pertinent electoral district may petition for the calling of a referendum to revoke his/her mandate.

When a number of voters equal to or greater than the number of those who elected the official vote in favor of recall, provided that a number of voters equal to or greater than twenty-five percent of the total number of registered voters has taken part in the referendum, the official's mandate shall be deemed revoked and immediate action shall be taken to fill the permanent vacancy in accordance with the provisions contained in this Constitution and in the law.

The recall of mandate for collegiate bodies shall be conducted in accordance with the law.

During the term for which the official was elected, only one petition to recall his/her mandate may be filed.

Article 73

Bills under discussion by the National Assembly shall be submitted to referendum when at least two-thirds of the members of the Assembly so

decide. If the referendum ends in an affirmative vote of approval, provided that twenty-five percent of the voters registered on the Civil and Electoral Registry has taken part, the bill in question shall be enacted into law.

Any international agreement, convention or treaty that might compromise national sovereignty or transfer competences to supranational organs may be submitted to referendum on the initiative of the President of the Republic, taken at a meeting of the Cabinet; by a two-thirds vote of the members of the Assembly; or by fifteen percent of the voters registered on the Civil and Electoral Registry.

Article 74

Statutes whose abrogation is requested on the initiative of a number of voters constituting no fewer than ten percent of the voters registered on the Civil and Electoral Registry or by the President of the Republic taken at a meeting of the Cabinet shall be submitted to referendum for their abrogation, in whole or in part.

Decrees with the force of law issued by the President of the Republic, making use of the authority prescribed under Article 236, Section 8 hereof may also be submitted to an abrogative referendum when this is requested by a number of voters constituting no fewer than five percent of the total number of voters registered on the Civil and Electoral Registry.

In order for the abrogative referendum to be valid, the participation of no fewer than forty percent of the total number of voters registered on the Civil and Electoral Registry shall be indispensable.

Budget laws may not be submitted to an abrogative referendum, nor may those establishing or modifying taxes, laws on public credit, laws on amnesty, those that protect, guarantee and implement human rights nor those that ratify international treaties.

There may not be more than one abrogative referendum on the same matter during the same constitutional term.

Chapter V

Social and Family Rights

Article 75

The State shall protect the family as a natural association in society and as the fundamental space for the overall development of persons. Family relationships are based on equality of rights and duties, solidarity, common effort, mutual understanding and reciprocal respect among family members. The State shall guarantee protection for the mother, father or other person acting as the head of a household.

Children and adolescents have the right to live, be raised and develop in the bosom of their original family. When this is impossible or contrary to their best interests, they shall have the right to a substitute family, in accordance with law. Adoption has effects similar to those of filiation, and is established in all cases for the benefit of the adoptee, in accordance with law. International adoption shall be subordinated to domestic adoption.

Article 76

Motherhood and fatherhood are fully protected, whatever the marital status of the mother or father. Couples have the right to decide freely and responsibly how many children they wish to conceive and are entitled to have access to the information and means necessary to guarantee the exercise of this right. The State shall guarantee overall assistance and protection for motherhood, in general from the moment of conception, throughout pregnancy, delivery and the puerperal period, and shall guarantee full family planning services based on ethical and scientific values.

The father and mother have the shared and non-renounceable obligation of raising, training, educating, maintaining and caring for their children, and the latter have the duty to provide the former with care when they are unable to care for themselves. The law shall establish the necessary and proper measures to guarantee the enforceability of the obligation to provide alimony.

Article 77

Marriage between a man and a woman, based on the free consent and

absolute equality of rights and obligations of the spouses, is protected. A stable *de facto* union between a man and a woman that meets the requirements established by law shall have the same effects as marriage.

Article 78

Children and adolescents are full legal persons and shall be protected by specialized legislation, organs and courts, which shall respect, guarantee and implement the contents of this Constitution, the Convention on the Rights of the Child and such other international treaties on this matter as the Republic may have executed and ratified. The State, families and society shall guarantee full protection as an absolute priority, to which end account shall be taken of their best interests in actions and decisions concerning them. The State shall promote their progressive incorporation into active citizenship and shall create a national system to govern the overall protection of children and adolescents.

Article 79

Young people have the right and the duty to be active participants in the development process. The State, with the solidary participation of families and society, shall create opportunities to stimulate their productive transition into adult life and, in particular, for training for and access to their first job, in accordance with law.

Article 80

The State shall guarantee senior citizens the full exercise of their rights and guarantees. The State, with the solidary participation of families and society, is obligated to respect their human dignity and autonomy and shall guarantee them full care and the social security benefits that will raise and guarantee their quality of life. Pension and retirement benefits granted through the social security system may not be less than the urban minimum wage. Senior citizens shall be guaranteed the right to a suitable job, should they indicate their desire to work and are capable of doing so.

Article 81

Anyone with a disability or special needs has the right to the full and autonomous exercise of his/her abilities and to his/her integration into the

family and the community. The State, with the solidary participation of families and society, shall guarantee them respect for their human dignity, equality of opportunity and satisfactory working conditions and shall promote their education, training and access to employment appropriate to their condition, in accordance with law. It is recognized that deaf or dumb persons have the right to express themselves and communicate through Venezuelan sign language.

Article 82

Everyone has the right to adequate, safe, comfortable and hygienic housing, with essential basic services, including a habitat such as humanizes family, neighborhood and community relations. The progressive satisfaction of this right is the shared responsibility of citizens and the State in all areas.

The State shall give priority to families and shall guarantee the means so that they, and especially those with meager resources, can have access to social policies and credit for the construction, purchase or enlargement of dwellings.

Article 83

Health is a fundamental social right, an obligation of the State, which shall guarantee it as part of the right to life. The State shall promote and develop policies aimed at improving the quality of life, collective well-being and access to services. Everyone is entitled to health protection and also has the duty to actively participate in the furtherance and defense of the same and to comply with such health and hygiene measures as the law may establish, in accordance with international conventions and treaties signed and ratified by the Republic.

Article 84

In order to guarantee the right to health, the State shall create, exercise guidance over and administer a national public health system that crosses sector boundaries, is decentralized and participatory in nature, is integrated with the social security system and governed by the principles of gratuity, universality, completeness, equity, social integration and solidarity. The public health system shall give priority to promoting health

and preventing disease, guaranteeing opportune treatment and quality rehabilitation. Public health assets and services are property of the State and may not be privatized. The organized community has the right and the duty to participate in decision-making concerning specific policy planning, implementation and control at public health institutions.

Article 85

Financing the public health system is an obligation of the State; said financing shall comprise fiscal resources, mandatory social security contributions and any other sources of financing provided for by law. The State shall guarantee a health budget such as to permit the attainment of health policy objectives. In coordination with universities and research centers, a national policy for the training of professionals and technicians and a domestic industry for producing health care supplies shall be promoted and developed. The State shall regulate public and private health care institutions.

Article 86

Everyone is entitled to social security as a nonprofit public service that guarantees health and protection in contingencies arising from maternity, fatherhood, illness, invalidity, catastrophic illness, disability, special needs, occupational risks, loss of employment, unemployment, old age, widowhood, orphanhood, housing, burdens deriving from family life, and any other social welfare circumstances. The State has the obligation to ensure the efficacy of this right, creating a universal and complete social security system, with solidary, unitary, efficient and participatory financing from direct and indirect contributions. Inability to contribute shall not be grounds for excluding persons from the system's protection. Social security financial resources may not be used for other purposes. The mandatory contributions made by workers to cover medical and health care services and other social security benefits may be administered only for social purposes, under the guidance of the State. Any net remaining balances of capital allocated to health, education and social security shall be accumulated for them to be distributed and contributed to those services. The social security system shall be ruled by a special "organic law."

Article 87

Everyone has the right and the duty to work. The State shall guarantee the adoption of the necessary measures so that every person is able to obtain productive work that will provide him/her with a decent and decorous living and guarantee him/her the full exercise of this right. It is an objective of the State to promote employment. Measures tending to guarantee the exercise of the labor rights of self-employed persons shall be adopted by law. Freedom to work shall be subject only to such restrictions as the law may establish.

All employers shall guarantee their workers adequate safety, health and environmental conditions on the job. The State shall adopt such measures and create such institutions as to make it possible to control and promote these conditions.

Article 88

The State shall guarantee the equality and equitable treatment of men and women in exercising the right to work. The State shall recognize household work as an economic activity that creates added value and produces wealth and social well-being. Housewives are entitled to social security in accordance with law.

Article 89

Work is a social fact and shall enjoy the protection of the State. The law shall make the necessary provisions for improving the material, moral and intellectual conditions of workers. In order to fulfill this duty of the State, the following principles are established:

1. No law may establish provisions that affect the intangibility and progressive nature of labor rights and benefits. In labor relations, reality shall prevail over forms or appearances.
2. Labor rights are not renounceable. Any action, agreement or convention involving a waiver of or encroachment upon these rights is null and void. Concessions and settlements are possible only at the end of the employment relationship, in accordance with the requirements established by law.

3. When there are doubts concerning the application or presence of several rules or concerning the interpretation of a particular rule, the rule most favorable to the worker shall be applied. The rule adopted shall be applied in its entirety.
4. Any measure or act on the part of an employer in violation of this Constitution is null and void, and of no effect.
5. All types of discrimination because of political reasons, age, race, creed, gender or any other characteristic is prohibited.
6. Work by adolescents at tasks that may affect their overall development is prohibited. The State shall protect them against any economic and social exploitation.

Article 90

Working hours shall not exceed eight hours per day or 44 hours per week.

here permitted by law, night work shall not exceed seven hours per day or 35 hours per week. No employer may require employees to work overtime. An effort shall be made to progressively reduce working hours in the interests of society and in such sphere as may be determined; and appropriate provisions shall be adopted to make better use of free time for the benefit of the physical, spiritual and cultural development of workers.

Workers are entitled to weekly time off and vacations paid on the same terms as for days actually worked.

Article 91

Every worker has the right to a wage that is sufficient to enable him/her to live decently and cover his/her basic material, social and intellectual needs and those of his/her family. The payment of an equal wage for equal work is guaranteed; and the share of the profits of a business enterprise to which workers are entitled shall be determined. Wages are not subject to garnishment and shall be paid periodically and promptly in legal tender, with the exception of the food allowance, in accordance with law.

The State shall guarantee workers in both the public and private sectors a minimum vital wage, which shall be adjusted each year, taking the cost of

a basic market basket as one of the references. The form and procedure to be followed shall be established by law.

Article 92

All workers are entitled to benefits to compensate them for length of service and protect them in the event of termination of employment. Wages and longevity and severance benefits are labor obligations due and payable immediately. Any delay in payment of the same shall bear interest, which constitutes a debt of value and shall enjoy the same privileges and guarantees as the principal debt.

Article 93

The law shall guarantee stable employment and make such provisions as are appropriate to restrict any form of unjustified dismissal. Dismissals contrary to this Constitution are null and void.

Article 94

The liability of the natural or juristic person for whose benefit services are provided through an intermediary or contractor shall be determined by law, without prejudice to the joint and several liability of the latter. The State shall establish, through the competent organ, the liability to which employers in general are subject in the event of simulation or fraud for the purpose of distorting, disregarding or impeding the application of labor legislation.

Article 95

Workers, without distinction of any kind and without need for authorization in advance, have the right to freely establish such labor union organizations as they deem appropriate for the best protection of their rights and interests, as well as the right to join or not to join the same, in accordance with law. These organizations are not subject to administrative intervention, suspension or dissolution. Workers are protected against any act of discrimination or interference contrary to the exercise of this right. The promoters and the members of the boards of directors of labor union organizations shall enjoy immunity from dismissal from their employment for the period and on the terms required for them to carry out their functions.

For purposes of the exercise of labor union democracy, the bylaws and regulations of labor union organizations shall provide for the alternation of boards of directors and representatives by universal, direct and secret suffrage. Labor union representatives and members of their boards of directors who abuse the benefits deriving from labor union rights for their personal gain or benefit shall be punished in accordance with law. The board members of labor union organizations shall be required to file a sworn statement of assets.

Article 96

All employees in both the public and private sectors have the right to voluntary collective bargaining and to enter into collective employment agreements, subject only to such requirements as may be established by law. The State shall guarantee this process and establish appropriate provisions to encourage collective relations and the settlement of labor disputes. Collective employment agreements shall cover all workers who are active as of the time they are signed and those hired thereafter.

Article 97

All workers in the public and private sectors have the right to strike, subject to such conditions as may be established by law.

Chapter VI

Cultural and Educational Rights

Article 98

Cultural creation is free. This freedom includes the right to invest in, produce and disseminate the creative, scientific, technological and humanistic work, as well as legal protection of the author's rights in his/her works. The State shall recognize and protect intellectual property rights in scientific, literary and artistic works, inventions, innovations, trade names, patents, trademarks and slogans, in accordance with the conditions and exceptions established by law and the international treaties on this matter executed and ratified by the Republic.

Article 99

Cultural values are an asset of the Venezuelan people that may not be

renounced and a fundamental right that the State shall encourage and guarantee, making efforts to provide the necessary conditions, legal instruments, means and funding. The autonomy of the public administration of culture is recognized, on such terms as may be established by law. The State shall guarantee the protection and preservation, enrichment, conservation and restoration of the tangible and intangible cultural heritage and historic memories of the Nation. The assets constituting the cultural heritage of the Nation are inalienable and are not subject to distraint or to statute of limitations. Penalties and sanctions for damage caused to these assets shall be provided for by law.

Article 100

The folk cultures comprising the national identity of Venezuela enjoy special attention, with recognition of and respect for interculturality under the principle of equality of cultures. The law shall provide for incentives and inducements for persons, institutions and communities that promote, support, develop or finance cultural plans, programs and activities within the country and Venezuelan culture abroad. The State shall guarantee cultural workers' inclusion in the social security system, which shall permit them to live decently, recognizing the idiosyncrasies of cultural work, in accordance with law.

Article 101

The State shall guarantee the issuance, receiving and circulation of cultural information. The communications media have the duty to assist in the dissemination of the values of folk traditions and the work of the country's artists, writers, composers, moviemakers, scientists and other creators of culture. The television media shall include subtitles and sign language translation for persons with hearing problems. The law shall establish the terms of these obligations and how they are to be met.

Article 102

Education is a human right and a fundamental social duty; it is democratic, free of charge and compulsory. The State shall assume responsibility for it as an undecidable function of the utmost interest, at all levels and in all modes, and as an instrument of scientific, humanistic and technological

knowledge at the service of society. Education is a public service and is founded on respect for all currents of thought, for the purpose of developing the creative potential of every human being and the full exercise of his/her personality in a democratic society based on the work ethic value and on active, conscious and solidary participation in the processes of social transformation inherent in the values that are part of national identity, and with a Latin American and universal vision. The State, with the participation of families and society, shall promote the process of citizen education in accordance with the principles contained in this Constitution and in the law.

Article 103

Everyone has the right to a full, quality, ongoing education on equal conditions and with equal opportunities, subject only to such limitations as derive from their aptitudes, vocation and aspirations. Education is compulsory at all levels from preprimary to the diversified secondary level. Education offered at State institutions is free of charge up to university undergraduate level. To this end, the State shall make a priority investment in accordance with recommendations of the United Nations. The State shall create and maintain institutions and services sufficiently equipped to ensure admission to, continuance in, and completion of education within the education system. The law shall guarantee equal attention for persons with disabilities or special needs and for persons who have been deprived of liberty or who lack the basic conditions in order to be admitted to and continue in the education system.

The contributions of private individuals to public education programs at the secondary and university levels shall be tax deductible in accordance with the pertinent law.

Article 104

Persons of recognized good moral character and proven academic qualifications shall be placed in charge of education. The State shall encourage them to keep permanently up to date and shall guarantee stability in the practice of the teaching profession, whether in public or private institutions, in accordance with this Constitution and the law,

with working conditions and a standard of living commensurate with the importance of their lofty mission. Admission to, promotion within and continuation in the education system shall be provided for by law and shall conform to evaluation criteria based on merit, to the exclusion of any partisan or other nonacademic interference.

Article 105

The law shall determine those professions that require a degree and conditions that must be met in order to practice them, including membership of a professional organization.

Article 106

All natural or juristic persons, subject to demonstration of their ability and provided they meet at all times the ethical, academic, scientific, financial, infrastructure and any other requirements that may be established by law, may found and maintain private educational institutions under the strict inspection and vigilance of the State, with the prior approval of the latter.

Article 107

Environmental education is compulsory at all levels of the education system and in all its modes, as is informal citizen education. Spanish language, Venezuelan geography and history and the principles of Bolivarian thought shall be compulsory courses at public and private institutions up to the diversified cycle level.

Article 108

The communications media, both public and private, shall contribute to citizen education. The State shall guarantee public radio and television services and library and computer networks with a view to permitting universal access to information. Educational establishments must incorporate knowledge and application of new technologies and the resulting innovations, in accordance with such requirements as may be established by law.

Article 109

The State shall recognize the autonomy of universities as a principle and

status that allows teachers, students and graduates to devote themselves to the search for knowledge through scientific, humanistic and technological research, for the spiritual and material benefit of the Nation. Autonomous universities shall adopt their own rules for their governance and operation and the efficient management of their assets, under such control and oversight as the law may establish. The autonomy of universities in planning, organizing, preparing and updating research, teaching and extension programs is established. The inviolability of the university campus is established. Experimental national universities shall attain their autonomy in accordance with law.

Article 110

The State shall recognize science, technology, knowledge, innovation and their applications and necessary information services as being in the public interest, given that they are fundamental instruments for the country's economic, social and political development, as well as for national security and sovereignty. To promote and develop these activities, the State shall allocate sufficient resources and create a national science and technology system in accordance with law. The private sector shall contribute resources to these activities. The State shall guarantee compliance with the ethical and legal principles that are to govern scientific, humanistic and technological research activities. The manners and means of fulfilling this guarantee shall be determined by law.

Article 111

Everyone has a right to sports and recreation as activities that benefit the quality of life of the individual and the collectivity. The State shall consider sports and recreation as an education and public health policy and guarantee the resources for the furtherance thereof. Physical education and sports play a fundamental role in the overall education of children and adolescents. Instruction in the same is compulsory at all levels of public and private education up to the diversified cycle, with such exceptions as may be established by law. The State shall guarantee full attention to athletes without discrimination of any kind, as well as support for high-level competitive sports and the evaluation and regulation of sports organizations in both the public and private sectors, in accordance with law.

The law shall make provision for incentives and inducements for persons, institutions and communities that promote athletes and develop or finance sports plans, programs and activities in the country.

Chapter VII Economic Rights

Article 112

Everyone may freely engage in the economic activity of their choice, subject only to the limitations provided for in this Constitution and those established by law for reasons of human development, security, health, protection of the environment or other reasons in the social interest. The State shall promote private enterprise, guaranteeing the creation and fair distribution of wealth, as well as the production of goods and services that meet the needs of the population, freedom of work, enterprise, commerce and industry, without prejudice to the power of the State to issue measures to plan, efficiently organize and regulate the economy and promote the overall development of the country.

Article 113

Monopolies shall not be permitted. Any act, activity, conduct or agreement of private individuals that is intended to establish a monopoly or that, owing to its actual effects, leads to the existence of a monopoly, regardless of the intentions of the persons involved and whatever form it actually takes, is hereby declared contrary to the fundamental principles of this Constitution. Also contrary to such principles is abuse of a position of dominance that a private individual, a group of individuals or a business enterprise or group of enterprises acquires or has acquired in a given market of goods or services, regardless of the cause that determined such position of dominance, as well as in the event of a concentration of demand. In all the aforementioned cases, the State shall adopt such measures as are necessary to avoid the harmful and restrictive effects of the monopoly and abuse of the position of dominance and concentration of demand, with the purpose of protecting consumers and producers and ensuring the existence of genuine conditions of competition in the economy.

In the case of the exploitation of natural resources that are the property of the Nation or the provision of services of a public nature, on an

exclusive basis or otherwise, the State may grant concessions for a given period of time, always ensuring the existence of adequate consideration or compensation commensurate with the public interest.

Article 114

Economic crime, profiteering, hoarding, usury, the formation of cartels and other related offenses shall be severely punished in accordance with law.

Article 115

The right to property is guaranteed. Everyone has the right to the use, enjoyment, usufruct and disposal of their property. Property shall be subject to such contributions, restrictions and obligations as may be established by law for purposes of public benefit or the general interest. Only for purposes of public benefit or social interest by final judgment, with timely payment of fair compensation, may the expropriation of any kind of property be declared.

Article 116

Confiscation of property shall not be ordered or carried out, except in the cases permitted by this Constitution. As an exception, the property of natural or juristic persons, Venezuelans or foreign nationals, who are responsible for crimes committed against public property may be subject to confiscation, as may be the property of those who have illicitly enriched themselves under cover of Government, and property deriving from business, financial or any other activities connected with unlawful trafficking in psychotropic and narcotic substances.

Article 117

Everyone shall be entitled to have available quality goods and services, as well as adequate and non-misleading information concerning the contents and characteristics of the products and services they consume, to freedom of choice and to fair and dignified treatment. The necessary mechanisms to guarantee these rights, the standards of quality and quantity for goods and services, consumer protection procedures, compensation for damages caused and the corresponding penalties for the violation of these rights shall be established by law.

Article 118

The right of workers and the community to set up associations of a social

and participatory nature such as cooperatives, savings funds, mutual funds and other forms of association is recognized. These associations may engage in any kind of economic activity in accordance with the law. The law shall recognize the specificities of these organizations, especially those relating to the cooperative act, associated work and the generation of collective benefits.

The State shall promote and protect these associations intended to improve the popular alternative economy.

Chapter VIII

Rights of Indigenous Peoples

Article 119

The State shall recognize the existence of indigenous peoples and communities, their social, political and economic organization, their cultures, practices and customs, languages and religions, as well as their habitat and originary rights to the lands they ancestrally and traditionally occupy, and which are necessary to carry on and guarantee their way of life. It shall be the responsibility of the National Executive, with the participation of the indigenous peoples, to demarcate their lands and to guarantee the right to collective ownership thereof; said lands shall be inalienable, not subject to statute of limitations or distraint, and nontransferable, in accordance with this Constitution and the law.

Article 120

Exploitation by the State of the natural resources in indigenous habitats shall be carried out without harming the cultural, social and economic integrity of such habitats and, likewise, is subject to prior information being given to and consultation with the indigenous communities concerned. Profits from such exploitation by the indigenous peoples are subject to this Constitution and the law.

Article 121

Indigenous peoples have the right to maintain and develop their ethnic and cultural identity, world view, values, spirituality and holy places and places of cult. The State shall promote the appreciation and dissemination

of the cultural manifestations of indigenous peoples, who have the right to their own education and an intercultural and bilingual education system, taking into account their special social and cultural characteristics, values and traditions.

Article 122

Indigenous peoples have the right to a full health system that takes into consideration their practices and cultures. The State shall recognize their traditional medicine and supplementary forms of therapy, subject to principles of bioethics.

Article 123

Indigenous peoples have the right to maintain and promote their own economic practices based on reciprocity, solidarity and barter, their traditional productive activities, their participation in the national economy and to define their priorities. Indigenous peoples have the right to professional training services and to participate in the preparation, implementation and management of specific training programs and technical and financial assistance services that will strengthen their economic activities within the framework of sustainable local development. The State shall guarantee workers belonging to indigenous peoples the enjoyment of the rights granted under labor legislation.

Article 124

Collective intellectual property rights in the knowledge, technologies and innovations of indigenous peoples are guaranteed and protected. Any activity relating to genetic resources and the knowledge associated with the same shall pursue collective benefits. Registration of patents on this ancestral knowledge and these resources is prohibited.

Article 125

Indigenous peoples have the right to political participation. The State shall guarantee indigenous representation in the National Assembly and the deliberating bodies of federal and local entities with an indigenous population, in accordance with law.

Article 126

Indigenous peoples, as cultures with ancestral roots, are part of the Nation, the State and the Venezuelan people, which is one, sovereign and indivisible. In accordance with this Constitution, they have the duty to safeguard the integrity and sovereignty of the Nation.

The term people in this Constitution shall in no way be interpreted in the sense it is given in international law.

Chapter IX Environmental Rights

Article 127

It is the right and duty of each generation to protect and maintain the environment for its own benefit and that of the world of the future. Everyone has the right, individually and collectively, to enjoy a safe, healthful and ecologically balanced life and environment. The State shall protect the environment, biological diversity, genetic resources, ecological processes, national parks and natural monuments, and other areas of particular ecological importance. The genome of a living being shall not be patentable, and the law relating to the principles of bioethics shall regulate this matter.

It is a fundamental duty of the State, with the active participation of society, to ensure that the population develops in a pollution-free environment in which the air, water, soil, coasts, climate, ozone layer and living species receive special protection, in accordance with law.

Article 128

The State shall develop a zoning policy taking into account ecological, geographic, demographic, social, cultural, economic and political realities, in accordance with the premises of sustainable development, including information, consultation and citizen participation. An “organic law” shall implement the principles and criteria for this zoning.

Article 129

Any activities capable of generating damage to ecosystems must be

preceded by environmental and sociocultural impact studies. The State shall prevent toxic and hazardous wastes from entering the country, as well as the manufacture and use of nuclear, chemical and biological weapons. A special law shall regulate the use, handling, transportation and storage of toxic and hazardous substances.

Contracts into which the Republic enters with natural or juristic persons, Venezuelans or foreign nationals, or any permits granted that affect natural resources, shall be deemed to include, even if not expressly stated, the obligation to preserve the ecological balance, to permit access to and the transfer of technology on mutually agreed terms, and to restore the environment to its natural state if the latter is altered, on such terms as may be established by law.

Chapter X

Duties

Article 130

Venezuelans have the duty to honor and defend their native land, its emblems and cultural values and to guard and protect the sovereignty, nationhood, territorial integrity, self-determination and interests of the Nation.

Article 131

Everyone has the duty to comply with and observe this Constitution and the laws and other official acts promulgated by the organs of Government in the exercise of their functions.

Article 132

Everyone has the duty to fulfill their social responsibilities and to participate solidarily in the political, civic and community life of the country, promoting and protecting human rights as the basis of democratic coexistence and social peace.

Article 133

Everyone has the duty to contribute to public expenditures by paying such taxes, assessments and contributions as may be established by law.

Article 134

Everyone, in accordance with law, has the duty to perform such civilian or military service as may be necessary for the defense, preservation and development of the country, or to deal with situations involving a public calamity. No one shall be subjected to forcible recruitment.

Everyone has the duty render their services to perform the electoral functions assigned to them by law.

Article 135

The obligations incumbent upon the State in accordance with this Constitution and the law, in fulfillment of the purposes of the general well-being of society, do not preclude the obligations that, by virtue of solidarity, social responsibility and humanitarian assistance, are incumbent upon private individuals according to their capacities. The law shall make appropriate provisions to compel the fulfillment of these obligations in cases where such compulsion is necessary. Those aspiring to practice any profession have a duty to perform community service for such period, in such place and on such terms as may be provided for by law.

TITLE IV GOVERNMENT

Chapter I Fundamental Provisions

Section One: General Provisions

Article 136

Government is divided up into Municipal Government, State Government and National Government. National Government is divided up into the Legislative, Executive, Judicial, Citizen and Electoral Branches.

Each of the Branches of Government has its own functions, but the organs charged with exercising the same shall cooperate with one another in attaining the ends of the State.

Article 137

This Constitution and the law define the authorities of the organs that exercise powers of Government, and the activities engaged in by such organs shall be subject to the same.

Article 138

Any usurped authority is of no effect, and its acts are null and void.

Article 139

The exercise of powers of Government gives rise to individual liability for abuse or misapplication of power, or for violation of this Constitution or the law.

Article 140

The State shall be materially liable for any damages suffered by private individuals to any of their property or rights, provided the harm is imputable to the functioning of Public Administration.

*Section Two: Public Administration***Article 141**

Public Administration is at the service of the citizen and is based on the principles of honesty, participation, expeditiousness, efficacy, efficiency, transparency, accountability and responsibility in the performance of public functions, being fully subject to the law.

Article 142

Autonomous institutions may be created only by law. Such institutions, as well as public interests in corporations or entities of any nature, shall be subject to State control in such form as may be established by law.

Article 143

Citizens have the right to be informed by Public Administration, in a timely and truthful manner, of the status of proceedings in which they have a direct interest, and to be apprised of any final decisions adopted in the matter. Likewise, they have access to administrative files and records, without prejudice to the limits acceptable in a democratic society in

matters relating to internal and external security, criminal investigation and the intimacy of private life, in accordance with law regulating the matter of classification of documents with contents that are confidential or secret. Censorship of public officials reporting on matters for which they are responsible shall not be permitted.

Section Three: Public Functions

Article 144

The Statute applicable to public functions shall be established by law, with rules on the entry, promotion, transfers, suspension and termination of Public Administration employees and shall provide for their incorporation into the social security system.

The functions and requirements that are to be met by public employees in the exercise of their official duties shall be determined by law.

Article 145

Public officials or employees serve the State and not any partisan interest. Their appointment and removal shall not be determined based on political affiliation or orientation. A person who is in the service of the Municipalities, the States, the Republic, or any other public-law juristic persons or state-owned juristic persons governed by private law may not enter into a contract of any kind with them, either directly or through a third party, or as representative of another, with such exceptions as may be established by law.

Article 146

Positions in the organs of Public Administration are to be filled by career personnel. Exceptions are elected positions, positions whose holders may be freely appointed and removed, positions filled by contract personnel, laborers in the service of Public Administration and any positions determined by law.

Entry of public officials to fill career positions shall be by public competition based on principles of honesty, suitability and efficiency. Promotion shall

be governed by scientific methods based on the merit system, and transfer, suspension and termination shall depend on performance.

Article 147

In order for paid public positions to be filled, it is necessary that the respective compensation be provided for in the pertinent budget.

Public Administration salary scales shall be established by regulation, in accordance with law.

The pertinent “organic law” may establish reasonable limits on the remuneration earned by municipal, state and national public officials.

A national law shall establish the retirement and pension system for national, state and municipal public officials.

Article 148

No one may hold more than one paid public position at a time, except in the case of academic, temporary, care-giving or teaching positions, as determined by law. Acceptance of a second position not included among the exceptions stated in this article shall imply resignation from the first, except in the case of substitutes, as long as they do not permanently replace the regular incumbent.

No one may enjoy more than one pension or set of retirement benefits, except in the cases expressly determined by law.

Article 149

Public officials may not accept employment, honors or rewards from foreign governments without authorization from the National Assembly.

*Section Four: Contracts in the Public Interest***Article 150**

Entering into contracts in the national public interest shall require the approval of the National Assembly in such cases as the law may determine.

No contract in the municipal, state or national public interest may be entered into with foreign States or official entities or with companies not domiciled in Venezuela, or transferred to any of the same, without the approval of the National Assembly.

In public-interest contracts, the law may demand certain conditions as to nationality, domicile or other matters, or require special guarantees.

Article 151

In public interest contracts, unless inapplicable by reason of the nature of such contracts, a clause shall be deemed included, even if not expressly stated, whereby any doubts and disputes that may raise concerning such contracts and that cannot be settled amicably by the contracting parties, shall be decided by the competent courts of the Republic, in accordance with its laws, and shall not on any grounds or for any reason give rise to foreign claims.

Section Five: International Relations

Article 152

The international relations of the Republic serve the ends of the State with regard to the exercise of sovereignty and the interests of the people; they are governed by the principles of independence, equality between States, free self-determination and nonintervention in their internal affairs, the pacific settlement of international conflicts, cooperation, respect for human rights and solidarity among peoples in the struggle for their emancipation and the well-being of humanity. The Republic shall uphold the firmest and most resolute defense of these principles and democratic practices in all international organs and institutions.

Article 153

The Republic shall promote and encourage Latin American and Caribbean integration in the interests of advancing toward the creation of a community of nations, defending the region's economic, social, cultural, political and environmental interests. The Republic may sign international treaties that unite and coordinate efforts to promote the common development of our nations and that ensure the well-being of their peoples and the collective security of their inhabitants.

To these ends, the Republic may assign, through treaties, the exercise of the necessary competences to carry out these integration processes to supranational organizations. In its policies of integration and union with Latin America and the Caribbean, the Republic shall give privileged status to relations with Ibero-American countries, striving to make this a common policy throughout our Latin America. Provisions adopted within the framework of integration agreements shall be regarded as an integral part of the existing legal order, with direct preferential application over domestic legislation.

Article 154

Treaties executed by the Republic must be approved by the National Assembly prior to their ratification by the President of the Republic, with the exception of those that seek to perform or perfect pre-existing obligations of the Republic, apply principles expressly recognized by the Republic, perform ordinary acts in international relations or exercise powers expressly vested in the National Executive by law.

Article 155

In the international agreements, treaties and conventions executed by the Republic, a clause shall be inserted whereby the parties undertake to settle by peaceful means recognized under international law or agreed upon in advance between them, where this is the case, any disputes that may arise between them in connection with their interpretation or implementation, if not inappropriate and if permitted by the procedure to be followed in executing said treaties, agreements or conventions.

Chapter II

Spheres of Competence of National Government

Article 156

The spheres of competence of National Government are:

1. The international policy and actions of the Republic.
2. The defense and supreme vigilance of the general interests of the Republic, maintaining law and order and the proper enforcement of

- the law throughout the national territory.
3. The national flag, national coat of arms, national anthem, national holidays, and national decorations and honors.
 4. Naturalization, admission, extradition and expulsion of foreign nationals.
 5. Identification services.
 6. The national police.
 7. National security, defense and development.
 8. The organization of and regime for the National Armed Force.
 9. The regime for risk and emergency management.
 10. The organization of and regime for the Capital District and the federal dependencies.
 11. Regulation of the central banking system, the monetary system, the foreign exchange system, the financial and capital market system and the issuing and minting of currency.
 12. The creation, organization, collection, administration and control of taxes on income, inheritances, donations and other related areas, capital, production, added value, hydrocarbons and mines; duties on the importing and exporting of products and services; taxes on the consumption of liquor, alcohol and other products containing alcohol, cigarettes and other tobacco products; and any other taxes, assessments and revenues not expressly assigned by this Constitution or the law to the States and Municipalities.
 13. Legislation to guarantee the coordination and harmonization of the different tax authorities; to define principles, parameters and limitations, especially for purposes of determining the rates or aliquot parts for the taxes of the States and Municipalities; and to create specific funds that will ensure inter-territorial solidarity.
 14. The creation and organization of land taxes or taxes on rural properties and on real estate transactions, the collection and oversight of which is the responsibility of the Municipalities, in accordance with this Constitution.
 15. The regime for foreign trade and the organization of and the regime for customs.
 16. The regime for and management of mines and hydrocarbons; the regime for vacant land; and the conservation, development and

exploitation of forests, soils, waters and other elements of the country's natural wealth.

The National Executive may not grant mining concessions for an indefinite period of time.

The law shall establish a system of special appropriations for the benefit of States within whose territory the assets mentioned in this section are located, without prejudice to the possibility of also establishing special appropriations for the benefit of other States.

17. The system of legal weights and measures and quality control.
18. National censuses and statistics.
19. The establishing, coordination and unification of technical standards and procedures for engineering, architectural and city planning projects, and city planning/zoning legislation.
20. Public works in the national interest.
21. The macroeconomic, financial and fiscal policies of the Republic.
22. The regime for and organization of the social security system.
23. National policy and legislation in the fields of shipping, health, housing, food safety, the environment, waters, tourism and zoning.
24. National education and health policies and services.
25. National policies for agricultural, livestock, fishery and forestry production.
26. The regime for national shipping and air, overland, ocean, river and lake transportation, and for ports, airports and their infrastructure.
27. The national highway and railway systems.
28. The general regime for postal and telecommunications services, as well as the regime for and management of the electromagnetic spectrum.
29. The general regime for residential public utility services, in particular electricity, potable water and gas.
30. Management of border policy with an overall vision of the country such as to permit a Venezuelan presence and the maintenance of territory and sovereignty in these areas.
31. The organization and administration of justice at the national level, the Office of Public Prosecutions and the Office of the Ombudsperson.
32. Legislation in matters of constitutional guarantees, rights and duties; civil, mercantile, penal, penitentiary, procedural and private international legislation; election legislation; legislation on

expropriation for public purposes or in the interests of society; public credit legislation; legislation on intellectual, artistic and industrial property; on the cultural and archaeological heritage; on agriculture; on immigration and population; on indigenous peoples and the territories they occupy; on labor, welfare and social security; on animal and plant hygiene; on notary and public registry offices; on banks and insurance; on lotteries, racetracks and betting in general; on the organization and functioning of the organs of National Government and other organs and institutions of the State at the national level; and, in general, on all matters of national competence.

33. Any other matters that this Constitution may assign to National Government or that, owing to their nature or type, fall within its sphere of competence.

Article 157

The National Assembly, by a majority vote of its members, may delegate to the Municipalities or States certain matters falling within the jurisdiction of National Government in order to promote decentralization.

Article 158

Decentralization, as a national policy, must develop democracy, bringing power closer to the people and creating optimum conditions both for the exercise of democracy and for the effective and efficient performance of the tasks of the State.

Chapter III **State Government**

Article 159

The States are politically equal and autonomous entities with full legal status and are obligated to maintain the independence, sovereignty and integrity of the nation and to comply with and enforce this Constitution and the laws of the Republic.

Article 160

A Governor is in charge of the government and administration of each

State. To be Governor, it is a requirement to be Venezuelan, over the age of 25, and a layperson.

The Governor shall be elected for a term of four years by a majority vote. The Governor may be re-elected for an additional term immediately and only once.

Article 161

Governors shall render a yearly public accounting for their office to the State Comptroller and shall submit a report on the same to the Legislative Council and the Public Policy Planning and Coordination Council.

Article 162

The powers of the Legislative Branch shall be exercised in each State by a Legislative Council consisting of no more than fifteen and no fewer than seven members, who shall proportionally represent the population of the State and the Municipalities. The Legislative Council shall have the following powers:

1. To legislate matters within the sphere of competence of the State.
2. To pass the State's Budget Law.
3. Any other powers vested in it by this Constitution and the law.

The requirements for being a member of the Legislative Council, the obligation to render a yearly accounting and immunity within the territorial jurisdiction shall be governed by the rules established by this Constitution for deputies of the National Assembly, insofar as applicable. State legislators shall be elected for a four-year term, being eligible for re-election for two consecutive terms maximum. The organization and functioning of the Legislative Council shall be regulated by the national law.

Article 163

Each State shall have a Comptroller's Office, which shall enjoy organizational and operational autonomy. The State's Comptroller's Office shall exercise, in accordance with this Constitution and the law, control, oversight and auditing authority of the State's revenues, expenditures and

assets, without prejudice to the scope of the functions of the Office of the Comptroller General of the Republic. This body shall act under the direction and responsibility of a Comptroller, whose qualifications to serve in this position shall be determined by law, which will guarantee his/her suitability and independence, as well as the neutrality of his/her appointment, which shall be by means of a public examination.

Article 164

The following fall within the exclusive competence of the States:

1. Promulgating their Constitution to organize the public authorities, in accordance with the provisions of this Constitution.
2. Organization of their Municipalities and other local entities and the territorial and political divisions between them, in accordance with this Constitution and the law.
3. Management of their assets and investment and management of their resources, including those deriving from transfers, subsidies or special appropriations from National Government and those assigned to them as a share of national tax revenues.
4. Organization, collection, control and administration of their own taxes, in accordance with provisions of national and state laws.
5. The regime for and exploitation of non-metallic minerals that are not reserved to National Government, as well as salt deposits and oyster beds, and the management of vacant lands within their jurisdiction, in accordance with law.
6. Organization of the police and determining the branches of this service to be assigned to municipal jurisdiction, in accordance with applicable national legislation.
7. Creation, organization, collection, control and management of stamped paper and revenue stamps.
8. Creation and organization of and regime for the States' public services.
9. Construction, preservation, management and exploitation of overland travel routes within the States.
10. Conservation, management and exploitation of national expressways and highways, as well as ports and airports in commercial use, in coordination with the National Executive.

11. Any matters not placed, in accordance with this Constitution, under national or municipal jurisdiction.

Article 165

Matters involving concurrent competences shall be regulated by “base laws” (leyes de bases) enacted by National Government and implementation laws passed by the States. This legislation shall be guided by the principles of interdependence, coordination, cooperation, shared responsibility and subsidiarity.

The States shall decentralize and transfer to the Municipalities such state services and competences that the Municipalities are capable of exercising, as well as the management of associated resources, in areas in which concurrent competences between these two levels of Government exist. The transfer mechanisms shall be regulated by the legal system of the State concerned.

Article 166

In each state, a Public Policy Planning and Coordination Council shall be created, chaired by the Governor and having as members the Mayors, the state directors of the ministries and representatives of the legislators elected by the State to the National Assembly, as well as representatives of the Legislative Council, the municipal councilors and organized communities, including indigenous communities where they exist. This Council shall function and be organized as determined by law.

Article 167

Revenues of the States are:

1. Those deriving from their property and the management of their assets.
2. Charges for the use of their goods and services, fines and penalties, and any charges allocated to them.
3. Proceeds from the sale of revenue stamps and the like.
4. The resources to which they are entitled by virtue of constitutional revenue sharing (situado constitucional). The revenue share is

equivalent to up to twenty percent of total ordinary revenues as estimated annually by the National Treasury, which is to be distributed among the States and the Capital District as follows: thirty percent of the aforementioned percentage in equal shares, and the remaining seventy percent in proportion to the population of each of such entities.

During each fiscal year, the States must invest at least fifty percent of the amount to which they are entitled by way of revenue sharing. During each fiscal year, the Municipalities of each State shall be entitled to at least twenty percent of the revenue share and of all other ordinary revenues of the State in question.

In the event of changes in the revenues of the National Treasury that require an adjustment to the National Budget, the constitutional revenue share shall be adjusted in the same proportion.

The law shall establish principles, rules and procedures with a view to guaranteeing the proper and efficient use of the resources from the constitutional revenue share and the share of the Municipalities therein.

5. Any other taxes, charges and special contributions that may be allocated to them by national law for the purpose of helping to develop the States' treasuries.

Laws creating or transferring tax revenues to the States may offset these allocations by means of modifications to the revenue categories indicated in this article, for the purpose of preserving inter-territorial equity. The percentage of estimated ordinary national revenues allocated to constitutional revenue sharing shall be no less than fifteen percent of estimated ordinary revenues, taking into account the financial position and sustainability of the National Treasury, without reducing the ability of the States' administrative authorities to provide adequately for the services for which they are responsible.

6. Resources from the Inter-territorial Compensation Fund and from any other transfer, subsidy or special appropriation, as well as those allocated to them as a share of national tax revenues, in accordance with the pertinent law.

Chapter IV

Municipal Government

Article 168

Municipalities constitute the primary political unit in the organization of the nation and enjoy legal personality and autonomy within the limits prescribed by this Constitution and the law. Municipal autonomy includes:

1. Election of municipal authorities.
2. Management of affairs within the scope of the Municipality's competence.
3. Creation, collection and investment of the Municipality's revenues.

The actions of a Municipality within the scope of its competence shall be carried out by incorporating citizen participation into the process of defining and managing public affairs and monitoring and evaluating the results achieved, in an effective, sufficient and timely manner, in accordance with law.

The acts of Municipalities may be contested only before the competent courts, in accordance with this Constitution and the law.

Article 169

The organization of Municipalities and other local entities shall be governed by this Constitution, by the rules established by national "organic laws" to implement constitutional principles, and by such provisions of law as may be enacted by the States in accordance with the former.

Legislation enacted to implement constitutional principles relating to Municipalities and other local entities shall establish various regimes for their organization, governance and administration, including, with regard to determining their competences and resources, taking into account conditions relating to population, economic development, ability to generate their own tax revenues, geographic location, historical and cultural elements and other relevant factors. In particular, such legislation shall establish the options for organizing the regime of local administration and government that shall be adopted by Municipalities with indigenous

populations. In any case, the municipal structure shall be democratic and consistent with the inherent nature of local government.

Article 170

Municipalities may unite in commonwealths or agree among themselves, or with other public territorial entities, on the creation of types of intergovernmental associations for purposes in the public interest relating to matters within their sphere of competence. The rules concerning the grouping of two or more Municipalities into districts shall be determined by law.

Article 171

When two or more Municipalities belonging to the same federal entity have economic, social and physical relations that give the group the characteristics of a metropolitan area, they may organize themselves as metropolitan districts. The organic statute enacted for this purpose shall guarantee the democratic and participatory character of the metropolitan government and shall establish its functional competences, as well as its tax, financial and control regime. It shall also ensure that the Municipalities have adequate participation in the entities of the metropolitan government and shall indicate the manner in which the popular consultations that are to decide upon affiliation of the Municipalities with the metropolitan district shall be called.

The law may establish various regimes for the organization, governance and administration of metropolitan districts, taking into account conditions relating to population, economic and social development, and other factors of importance. In all cases, the delegation of competences for each metropolitan district shall take into account these conditions.

Article 172

The Legislative Council, after a favorable decision obtained by popular consultation of the affected population, shall define the boundaries of the metropolitan district and shall organize it in accordance with the provisions of the national organic statute, determining which metropolitan competences are to be assumed by the organs of government of the metropolitan district in question.

When the Municipalities wishing to form a metropolitan district belong to different federal entities, the creation and organization of the same shall be the responsibility of the National Assembly.

Article 173

A Municipality may create parishes on such terms as may be determined by law. The legislation enacted to implement constitutional principles relating to the organization of Municipalities shall establish the premises and conditions for the creation of other local entities within the territory of the Municipality, as well as the resources that shall be available to them, depending on the functions assigned to them, including their share in the Municipality's own revenues. Their creation shall take into account neighborhood or community initiative for the purpose of promoting decentralization of the administration of the Municipality, citizen participation and the provision of better public services. In no event shall parishes be assumed to be the only possible divisions, or to be required divisions, of a Municipality's territory.

Article 174

The government and administration of a municipality shall be the responsibility of the Mayor, who shall also be the head of civil government. In order to be a Mayor, it is a requirement to be Venezuelan, over the age of 25 and a layperson. The Mayor shall be elected for a term of four years by majority vote, and may be re-elected, immediately and once only, for an additional term.

Article 175

The legislative function in a Municipality shall be the responsibility of the Council, made up of council members elected in the manner established in this Constitution, in such number and on such terms of eligibility as may be determined by law.

Article 176

The control, oversight and auditing of municipal revenues, expenditures and property, as well as transactions relating to the same, shall be the responsibility of the Municipal Comptroller's Office, without prejudice to

the scope of the powers of the Office of the Comptroller General of the Republic, and the office shall be directed by the Municipal Comptroller, designated by the Council by means of a public examination that guarantees the suitability and capability of the person designated to hold this office, on the terms established by law.

Article 177

Principles, residency requirements and conditions, prohibitions, grounds for disqualification and conflicts of interest for the candidacy and exercise of the functions of mayors and councilpersons may be established by national law.

Article 178

Falling within the sphere of competence of the Municipality are the governance and administration of its interests and the management of the matters assigned to it by this Constitution and national laws as regards local affairs, in particular the planning and promotion of economic and social development, equipping and provision of residential public utility services, the implementation of the tenancy policy based on criteria of equity, justice and social interest content, in accordance with the delegation of authority provided for in the law governing the matter, the promotion of participation, and the improvement, in general, of living conditions in the community, in the following areas:

1. Territorial zoning and city planning; historic heritage; social housing; local tourism; parks and gardens; public squares; beach resorts and other recreational areas; civil architecture, nomenclature and public ornaments.
2. Urban roadways; circulation and ordering of vehicular and pedestrian traffic on municipal thoroughfares; urban public passenger transportation services.
3. Public spectacles and commercial advertising, insofar as they concern specific municipal interests and purposes.
4. Protection of the environment and cooperation with environmental sanitation efforts; urban and household sanitation, including cleaning, waste collection and treatment, and civil protection services.

5. Salubriousness and primary health care; services for the protection of infants and children, adolescents and senior citizens; pre-school education; family services to integrate the disabled into the development of the community; cultural and sports activities and facilities; prevention and protection services; surveillance and control of property; and activities relating to matters within the Municipality's spheres of competence.
6. Potable water, electricity and domestic gas services; sewer system, channeling and disposal of wastewater; cemeteries and funeral services.
7. Conciliation courts, neighborhood prevention and protection and municipal police services, in accordance with applicable national legislation.
8. Any other matters that may be vested in the Municipalities by this Constitution and by law.

The actions that Municipalities have the power to take in matters falling within their sphere of competence are without prejudice to national spheres of competence and those of the States as defined by law in accordance with this Constitution.

Article 179

Municipalities shall have the following revenues:

1. Those deriving from their assets, including the proceeds from their common lands and other property.
2. Charges for the use of their goods or services; administrative charges for licenses or authorizations; taxes on economic activities in the areas of industry, commerce, services or similar, with the limitations established in this Constitution; taxes on urban real property, vehicles, public spectacles, games and lawful gambling; advertising and commercial publicity; and, the special tax on increased property values generated by changes in use or intensity of exploitation from which they benefit because of zoning plans.
3. The rural territorial tax or tax on rural estates; their share of the tax on improvements and other national or state taxes, in accordance with the laws creating such taxes.

4. Those deriving from constitutional revenue sharing and other national or state transfers or subsidies.
5. The proceeds from fines and penalties imposed within the scope of their competences and others delegated to them.
6. Such others as may be determined by law.

Article 180

The power of taxation that is vested in Municipalities is different from and independent of the regulatory powers over certain matters or activities conferred by this Constitution or the laws on National Government or the State Governments.

Immunities from the Municipalities' power of taxation in favor of other political-territorial entities apply only to state juristic persons created by such entities and not to concession holders or other parties entering into contracts with the administrative arm of the National or State Governments.

Article 181

Common lands are inalienable and imprescriptible. Title to them may be conveyed only subject to compliance with the formalities provided for in municipal ordinances and under the circumstances provided for therein, in accordance with this Constitution and such laws as may be promulgated to implement the principles contained herein.

Ownerless land located within the urban area of towns in a municipality is common land, without prejudice to the legitimate and validly constituted rights of third parties. Vacant land located within the urban area is also common land. Land pertaining to indigenous communities and peoples shall be exempt from this provision. The law shall establish the conversion of other public land into common land.

Article 182

The Local Public Planning Council is hereby created, presided over by the Mayor and consisting of councilpersons, chairpersons of parish councils and representatives of neighborhood organizations and other organized

social groups, in accordance with such provisions as may be established by law.

Article 183

States and Municipalities may not:

1. Create customs authorities or import, export or transit duties on domestic or foreign goods, or on other revenue sources falling within national jurisdiction.
2. Tax consumer goods before they are marketed within their territory.
3. Prohibit the consumption of goods produced outside their territory or tax them differently from those produced within their territory.

States and Municipalities may only tax agriculture, livestock, fishing and forestry activities at the times, in the manner and to the extent permitted by national laws.

Article 184

The law shall create open and flexible mechanisms to cause the States and Municipalities to decentralize and transfer to communities and organized neighborhood groups services that the latter manage, upon their having demonstrated their ability to provide them, promoting:

1. The transfer of services in the areas of health, education, housing, sports, culture, social programs, the environment, maintenance of industrial areas, maintenance and upkeep of urban areas, neighborhood prevention and protection, construction of works and provision of public services. To this end, they may enter into agreements, whose content shall be guided by the principles of interdependence, coordination, cooperation and shared responsibility.
2. Participation by communities and citizens, through neighborhood associations and nongovernmental organizations, in the formulation of investment proposals for presentation before the state and municipal authorities in charge of preparing the respective investment plans, as well as participation in the execution, evaluation and control of works, social programs and public services within their jurisdiction.

3. Participation in economic processes, stimulating manifestations of the social economy such as cooperatives, saving funds, mutual funds and other forms of association.
4. Participation by workers and communities in the running of public sector business enterprises through self-management and co-management mechanisms.
5. Creation of community service enterprises, organizations and cooperatives as mechanisms for generating employment and social well-being, providing for their permanent existence through the design of policies in which they participate.
6. Creation of new decentralized organs at the parish, community and neighborhood levels and in the slums, with a view to guaranteeing the principle of shared responsibility in the public administration of local and state governments and to developing processes of self-management and co-management in the administration and control of state and municipal public services.
7. Participation by communities in activities to establish closer ties with penal institutions and ties between the latter and the general population.

Chapter V

Federal Council of Government

Article 185

The Federal Council of Government is the organ charged with planning and coordinating policies and actions to develop the process of decentralization and transfer of competences from National Government to the States and Municipalities. It shall be chaired by the Executive Vice President and consist of the Ministers, the Governors, one Mayor from each State and representatives of organized society, in accordance with the law.

The Federal Council of Government shall have a Secretariat made up of the Executive Vice President, two Ministers, three Governors and three Mayors. The Interterritorial Compensation Fund shall come under the authority of the Federal Council of Government, its purpose being the financing of public investments with a view to promoting the balanced development of the regions, cooperation and complementarity among

the development policies and initiatives of the various territorial public entities, and to supporting, in particular, the provision of essential works and services in regions and communities with relatively lower levels of development. The Federal Council of Government shall discuss and approve annually the resources to be allocated to the Interterritorial Compensation Fund and the priority investment areas to which these resources are to be applied, based on regional imbalances.

TITLE V **ORGANIZATION OF NATIONAL GOVERNMENT**

Chapter I **National Legislative Branch**

Section One: General Provisions

Article 186

The National Assembly shall consist of deputies elected in each of the federal entities by universal, direct, personalized and secret ballot with proportional representation, using a constituency base of one point one percent of the country's total population. Each federal entity shall also elect three additional deputies.

The indigenous peoples of the Bolivarian Republic of Venezuela shall elect three deputies in accordance with the provisions established in the election law, respecting their traditions and customs. Each deputy shall have an alternate elected during the same process.

Article 187

The responsibilities of the National Assembly shall be to:

1. Legislate in matters of national competence and on the functioning of the various branches of National Government.
2. Propose amendments to and revisions of this Constitution, on the terms established herein.
3. Exercise control functions over the Government and the National

- Public Administration, on the terms established in this Constitution and by law. Evidence obtained during the exercise of this function shall have probative value on such terms as may be established by law.
4. Organize and promote citizen participation in matters within its competence.
 5. Order amnesties.
 6. Discuss and approve the national budget and any bill relating to the system of taxation and to public credit.
 7. Authorize appropriations in addition to the budget.
 8. Approve the general guidelines for the national economic and social development plan, which shall be submitted by the National Executive during the third quarter of the first year of each constitutional term.
 9. Authorize the National Executive to enter into contracts in the national interest, in the cases established by law; authorize contracts in the municipal, state and national public interest, with foreign States or official entities or with companies not domiciled in Venezuela.
 10. Vote on resolutions of censure against the Executive Vice President and Ministers. A censure motion may only be debated two days after being submitted to the Assembly, which may decide by a three-fifths vote whether the censure shall bring about the removal from office of the Executive Vice President or Minister.
 11. Authorize the operation of Venezuelan military missions abroad or foreign military missions within the country.
 12. Authorize the National Executive to dispose of nonpublic real property owned by the Nation, with such exceptions as may be established by law.
 13. Authorize public officials to accept positions, honors or rewards from foreign governments.
 14. Authorize the appointment of the Attorney General of the Republic and the Heads of Permanent Diplomatic Missions.
 15. Confer the honors of the National Pantheon on illustrious Venezuelans who have rendered eminent services to the Republic, after 25 years have elapsed since their death. This decision may be made upon a recommendation from the President of the Republic, two-thirds of the State Governors or all the rectors of the national universities.
 16. Ensure that the interests and autonomy of the States are upheld.

17. Authorize the departure of the President of the Republic from the territory of the Nation, when such absence is to last longer than five consecutive days.
18. Approve by law any international treaties or agreements entered into by the National Executive, with the exceptions set forth in this Constitution.
19. Enact its internal rules and apply such sanctions as may be provided for thereunder.
20. Pass on the qualifications of its members and consider their resignation. The temporary separation of a deputy from office may only be decided by a two-thirds vote of the deputies present.
21. Organize its internal security service.
22. Pass and implement its budget of expenditures, taking into account the country's financial limitations.
23. Implement resolutions concerning its administrative organization and functioning.
24. Any other matters indicated in this Constitution or by law.

Article 188

To be elected to the office of deputy of the National Assembly, a person must:

1. Be Venezuelan by birth or by naturalization with at least 15 years' residence in Venezuelan territory.
2. Be over 21 years of age.
3. Have resided in the entity in question for four consecutive years prior to the date of election.

Article 189

The following may not be elected as deputies:

1. The President of the Republic, the Executive Vice President, Ministers, the Secretary of the Office of the President of the Republic and the Chairpersons and Directors of autonomous institutes and state-owned enterprises, until three months after permanently leaving such offices.
2. Governors and government secretaries of the States or the Capital

- District, until three months after permanently leaving such offices.
3. Municipal, state or national government officials or officials of autonomous institutes or state-owned enterprises, when the election takes place in the jurisdiction in which such officials serve, except in the cases of temporary, care-providing, teaching or academic positions.

The pertinent “organic law” may provide for the ineligibility of other officials.

Article 190

Deputies of the National Assembly may not be proprietors, administrators or directors of business enterprises that enter into contracts with state juristic persons nor may they engage in private lucrative business with such entities. When matters involving financial conflicts of interest are put to the vote, those members of the National Assembly who are involved in such conflicts of interest shall be required to abstain from voting.

Article 191

Deputies of the National Assembly may not accept or hold public employment positions without giving up their investiture, except for teaching, academic, temporary and care-giving positions, and provided such employment is not full-time.

Article 192

Deputies of the National Assembly shall hold office for a term of five years, with the possibility of being re-elected for a maximum of two additional terms.

Section Two: Organization of the National Assembly

Article 193

The National Assembly shall appoint ordinary and special Standing Committees. The Standing Committees, which shall be no more than 15 in number, shall relate to sectors of national activity. The National Assembly may also create Committees of a temporary nature for purposes of research and study, all of the foregoing in accordance with its rules. The

National Assembly may create or abolish Standing Committees by the favorable vote of two-thirds of its members.

Article 194

The National Assembly shall elect from among its members one President and two Vice Presidents, as well as one Secretary and an Undersecretary, who shall not be members of the Assembly, for a term of one year. The rules shall establish the mechanisms for filling temporary and permanent vacancies.

Article 195

While the Assembly is in recess, a Delegated Committee consisting of the President, the Vice Presidents and the Chairpersons of the Standing Committees shall be in session.

Article 196

The following are powers of the Delegated Committee:

1. To call the National Assembly into extraordinary session, when the importance of any matter so demands.
2. To authorize the President of the Republic to leave the territory of Venezuela.
3. To authorize the National Executive to order additional appropriations.
4. To designate temporary Committees consisting of members of the Assembly.
5. To carry out investigation functions ascribed to the Assembly.
6. By a two-thirds vote of its members, to authorize the National Executive to create, modify or suspend public services in the event of a proven emergency.
7. Any other powers established by this Constitution or by law.

Section Three: Deputies of the National Assembly

Article 197

Deputies of the National Assembly are obligated to work on a full-time basis for the benefit of the people's interests, and to stay in constant contact

with their constituents, heeding their opinions and suggestions and keeping them informed with regard to their individual activities and those of the Assembly. They shall render an annual accounting of their activities to the voters in the constituency from which they were elected, and shall be subject to recall by referendum as provided for in this Constitution and the applicable law.

Article 198

A Deputy of the National Assembly who is recalled may not run for any public elective office in the following term.

Article 199

Deputies of the National Assembly are not liable for votes and opinions expressed in the performance of their official functions. They shall be answerable to voters and to the legislative body only as provided for under this Constitution and the rules.

Article 200

Deputies of the National Assembly shall enjoy immunity in the exercise of their functions from the time of their installation until the end of their term or resignation. The Supreme Tribunal of Justice shall have exclusive competence to hear any alleged crimes committed by members of the National Assembly, it being the only authority with the power, subject to authorization in advance from the National Assembly, to order their arrest and prosecution. In the case of a flagrant offense committed by a legislator, the competent authority shall place such legislator under house arrest and immediately notify the Supreme Tribunal of Justice of the arrest.

Public officials who violate the immunity of members of the National Assembly shall incur criminal liability and shall be punished in accordance with law.

Article 201

Deputies are representatives of the people and of the States taken together; they are not subject to mandates or instructions, only to their own consciences. Their vote in the National Assembly is personal.

*Section Four: Passage of Laws***Article 202**

The law is an act sanctioned by the National Assembly as a legislature. Laws that contain a systematic set of norms regulating a particular field may also be referred to as codes.

Article 203

“Organic laws” are those designated as such by this Constitution, those enacted to organize branches of government (organic statutes) or to implement constitutional rights, and those that serve as a normative framework for other laws.

Any bill for the enactment of an “organic law,” except in the case of those this Constitution defines as such, must first be admitted by the National Assembly by a two-thirds vote of the members present, before the debate of the bill commences. This qualifying vote shall also apply to the process of amending “organic laws.”

Laws defined by the National Assembly as “organic laws” shall be sent, prior to promulgation, to the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice for a ruling on the constitutionality of their organic status. The Constitutional Chamber shall reach a decision within ten days of receipt of the communication. If the Constitutional Chamber rules that the law is not organic, the law shall lose its organic status.

Enabling laws are those enacted by a three-fifths vote of the members of the National Assembly to establish the guidelines, purposes and framework for matters that are being delegated to the President of the Republic, with the rank and force of a law. Enabling laws must set the period for the exercise thereof.

Article 204

The initiative for introducing legislation belongs to:

1. The National Executive Branch.
2. The Delegated Committee and the Standing Committees.

3. Members of the National Assembly, at least three in number.
4. The Supreme Tribunal of Justice, in the case of laws relating to judicial procedures and organization.
5. The Citizen Branch, in the case of laws relating to the organs comprising that branch.
6. The Electoral Branch, in the case of laws relating to electoral matters.
7. The voters, in a number equivalent to no less than zero point one percent of voters registered with the Civil and Electoral Registry.
8. The State Legislative Council, in the case of laws relating to the States.

Article 205

The discussion of bills submitted by voters in accordance with the provisions of the preceding article shall be initiated no later than the ordinary legislative session following the session during which the bill was introduced. If debate does not begin within said period, the bill shall be submitted for approval by referendum in accordance with law.

Article 206

The States shall be consulted by the National Assembly, through the State Legislative Council, when legislation on matters relating to them is being considered. The law shall establish mechanisms for the consultation of civil society and other institutions by the Council with respect to such matters.

Article 207

To be enacted into law, every bill shall be debated twice, on different days, following the rules established in this Constitution and the pertinent regulations. Once the bill is approved, the President of the National Assembly shall declare the law enacted.

Article 208

During the first debate, the statement of legislative intent shall be considered and the objectives, scope and viability of the same shall be evaluated in order to determine the appropriateness of the law, and the articles shall be discussed. Upon approval at the first debate, the bill shall be sent to the Committee directly concerned with the subject matter of the

law. If the bill relates to several Standing Committees, a mixed committee shall be designated to conduct a study and prepare a report.

Committees studying bills shall report the bill out within no more than 30 consecutive days.

Article 209

Once the bill has been reported out of committee, the second debate on the bill shall begin, and shall be conducted article by article. If the bill is approved without amendment, it shall be enacted into law. However, if amended, it shall be returned to the Committee concerned for it to include the amendments within a period of no more than 15 consecutive days; once the new version of the bill has been read at a plenary session of the National Assembly, the Assembly shall decide as appropriate, by majority vote, on any articles where a discrepancy exists and on any other articles relating thereto. Once the discrepancy has been resolved, the President shall declare the bill enacted into law.

Article 210

Debate on bills still pending at the end of a legislative session may be continued during the next ordinary session or during a special session.

Article 211

During the process of debating and approving bills, the National Assembly or Standing Committees shall consult the other organs of the State, the citizenry and organized society to hear their opinion about the same. The following shall have the right to speak during debates on bills: the Ministers, as representatives of the Executive Branch; such justice of the Supreme Tribunal of Justice as the latter may designate, to represent the Judicial Branch; a representative of the Citizen Branch designated by the Republican Ethics Council; the members of the Electoral Branch; the States, through a representative designated by the State Legislative Council; and representatives of organized society, on such terms as may be established by the rules of the National Assembly.

Article 212

The text of laws shall be preceded by the following phrase: “The National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela hereby decrees”

Article 213

Once the law has been enacted, it shall be issued in duplicate with the final language as approved during the debates. Both copies shall be signed by the President, the two Vice Presidents and the Secretary of the National Assembly, with the date of final approval. One of the copies of the law shall be sent by the President of the National Assembly to the President of the Republic for purposes of promulgation.

Article 214

The President of the Republic shall promulgate the law within ten days of the date on which he/she receives it. During this period the President may, in agreement with the Cabinet, request the National Assembly, by means of a statement of grounds, to amend any of the provisions of the law or rescind the approval of part or all of it.

The National Assembly shall decide by majority vote of the deputies present on the matters raised by the President of the Republic and shall send the law back to him/her for promulgation.

The President of the Republic must proceed to promulgate the law within five days of receipt, without the possibility of new observations.

When the President of the Republic considers that the law or any of its articles is unconstitutional, he/she shall request a ruling from the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice within the ten-day period allowed the President for promulgating the law. The Supreme Tribunal of Justice shall reach a decision within 15 days of receipt of the communication from the President of the Republic. If the Tribunal declines to rule the provisions referred to unconstitutional or fails to reach a decision within the aforementioned period, the President of the Republic shall promulgate the law within five days of the Tribunal’s decision or the expiration of such term.

Article 215

The law shall be promulgated upon its publication, with the official approval “Let it be executed,” in the Official Gazette of the Republic.

Article 216

When the President of the Republic fails to promulgate the law within the lapses of time indicated above, the President and the two Vice Presidents of the National Assembly shall proceed to promulgate it, without prejudice to such liability as the President of the Republic may incur by reason of his/her omission.

Article 217

The point at which the approving law of an international treaty, agreement or convention must be promulgated shall be left to the discretion of the National Executive, in accordance with international practices and the convenience of the Republic.

Article 218

Laws are repealed by other laws and are abrogated by referendum, subject to the exceptions established in this Constitution. Laws may be amended in whole or in part. A law that is amended in part shall be published in a single text that incorporates the amendments passed.

*Section Five: Procedures***Article 219**

The first ordinary legislative session of the National Assembly shall commence, without advance notice, on January 5 each year or on the first subsequent day possible, and shall continue until August 15.

The second session shall commence on September 15 or the first subsequent day possible, and shall end on December 15.

Article 220

The National Assembly shall meet in special sessions to take up the matters contained in the notice of the meeting and any related matters. A special session may also consider any matters declared urgent by a majority vote of its members.

Article 221

The requirements and procedures for the opening and other sessions of the National Assembly and for the functioning of its Committees shall be determined by the rules.

In no case may a quorum be less than the absolute majority of the members of the National Assembly.

Article 222

The National Assembly may exercise its control function by means of the following mechanisms: parliamentary questions, investigations, questions, authorizations and parliamentary approvals, as provided for in this Constitution and by law, and any other mechanism that may be established by laws and their associated regulations. In exercising parliamentary control, the National Assembly may make a finding of political liability on the part of public officials and call on the Citizen Branch to initiate the appropriate action to enforce such liability.

Article 223

The Assembly or its Committees may conduct such investigations as they deem appropriate in matters within their competence, in accordance with the rules.

All public officials are obligated, subject to the penalties established by law, to appear before such Committees and provide them with any information and documents they may require in order to carry out their functions.

Private citizens are also subject to this obligation, without prejudice to the rights and guarantees recognized by this Constitution.

Article 224

The exercise of the power of investigation does not affect the powers of other public authorities. Judges shall be obligated to take evidence as commissioned by National Assembly and its Committees.

Chapter II

National Executive Branch

Section One: President of the Republic

Article 225

The powers of the Executive Branch are exercised by the President of the Republic, the Executive Vice President, the Ministers and other officials as determined by this Constitution and by law.

Article 226

The President of the Republic is the Head of State and of the National Executive, in which latter capacity he/she directs the action of the government.

Article 227

In order to be elected President of the Republic, it is necessary to be Venezuelan by birth, hold no other nationality, be more than 30 years of age, be a layperson and not be subject to any conviction by final judgment, and also meet other requirements prescribed in this Constitution.

Article 228

The election of the President of the Republic shall be by universal suffrage via direct and secret ballot, in accordance with law. The candidate who has received a majority of the valid votes cast shall be proclaimed elected.

Article 229

A person holding the office of Executive Vice President, Minister, Governor or Mayor as of the date of his/her postulation or at any time between such date and that of the presidential election may not be elected to the office of President of the Republic.

Article 230

The presidential term is six years. The President of the Republic may be re-elected, immediately and once only, for an additional term.

Article 231

The candidate elected shall take office as President of the Republic on

January 10 of the first year of his/her constitutional term, by taking an oath before the National Assembly. If, for any supervening reason, the person elected President of the Republic cannot be sworn in before the National Assembly, he/she shall take the oath of office before the Supreme Tribunal of Justice.

Article 232

The President of the Republic is responsible for his/her acts and for fulfilling the obligations inherent to his/her office.

He/she is obligated to seek the guarantee of the rights and liberties of Venezuelans, as well as the independence, integrity, territorial sovereignty and defense of the Republic. The declaration of states of exception does not modify the principle of the President of the Republic's responsibility nor that of the Executive Vice President or the Ministers, in accordance with this Constitution and the law.

Article 233

The President of the Republic shall become permanently unavailable to serve by reason of any of the following events: death; resignation; removal from office by decision of the Supreme Tribunal of Justice; permanent physical or mental disability certified by a medical board designated by the Supreme Tribunal of Justice and with the approval of the National Assembly; abandonment of office, duly declared by the National Assembly; and recall by popular vote.

When an elected President becomes permanently unavailable to serve prior to his/her inauguration, a new election by universal suffrage and direct, secret ballot shall be held within the subsequent 30 consecutive days. Pending election and inauguration of the new President, the President of the National Assembly shall take charge of the Presidency of the Republic.

If the President of the Republic becomes permanently unavailable to serve during the first four years of the constitutional term of office, a new election by universal suffrage and direct, secret ballot shall be held within the subsequent 30 consecutive days. Pending election and inauguration

of the new President, the Executive Vice President shall take charge of the Presidency of the Republic.

In the cases described above, the new President shall complete the current constitutional term of office.

If the President becomes permanently unavailable to serve during the last two years of his/her constitutional term of office, the Executive Vice President shall assume the Presidency of the Republic until such term is completed.

Article 234

A President of the Republic who becomes temporarily unavailable to serve shall be replaced by the Executive Vice President for a period of up to 90 days, which may be extended by resolution of the National Assembly for an additional 90 days.

If the temporary unavailability continues for more than 90 consecutive days, the National Assembly shall decide by a majority vote of its members whether the unavailability to serve should be considered permanent.

Article 235

The absence of the President of the Republic from the territory of Venezuela requires authorization from the National Assembly or the Delegated Committee, when such absence continues for a period exceeding five consecutive days.

Section Two: The powers of the President of the Republic

Article 236

The following are powers and duties of the President of the Republic:

1. To comply with and enforce this Constitution and the law.
2. To direct the activity of the Government.
3. To appoint and remove the Executive Vice President and the Ministers.
4. To direct the international relations of the Republic and sign and ratify international treaties, agreements or conventions.

5. To direct the National Armed Force in his/her capacity as Commander-in-Chief; exercise supreme hierarchical authority over the same and establish its contingent.
6. To exercise supreme command over the National Armed Force, promote its officers at the rank of coronel or naval captain and above, and appoint them to the positions exclusively reserved to them.
7. To declare states of exception and order the restriction of guarantees in the cases provided for in this Constitution.
8. To issue executive orders having the force of law, subject to prior authorization by an enabling act.
9. To call special sessions of the National Assembly.
10. To issue regulations for the application of laws, in whole or in part, without altering the spirit, purpose and *raison d'être* of the laws.
11. To administer the National Public Treasury.
12. To negotiate national loans.
13. To order supplementary appropriations in addition to the budget, subject to prior authorization from the National Assembly or the Delegated Committee.
14. To enter into contracts in the national interest, subject to this Constitution and the law.
15. To designate, subject to prior authorization from the National Assembly or the Delegated Committee, the Attorney General of the Republic and the heads of the permanent diplomatic missions.
16. To designate and remove those officials whose appointment he/she is empowered to make by this Constitution and the law.
17. To address reports or special messages to the National Assembly, either in person or through the Executive Vice President.
18. To formulate the National Development Plan and, subject to prior approval from the National Assembly, direct the implementation of the same.
19. To grant pardons.
20. To determine the number, organization and competence of the ministries and other bodies comprising the National Public Administration, as well as the organization and functioning of the Cabinet, within the principles and guidelines set forth in the pertinent organic statute.

21. To dissolve the National Assembly in the case established in this Constitution.
22. To call referenda in the cases provided for in this Constitution.
23. To call and preside over meetings of the National Defense Council.
24. Any others vested in the President by this Constitution and the law.

The President of the Republic shall exercise, during a meeting of the Cabinet, the powers indicated under items (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (18), (20), (21) and (22) above, and any others that may be conferred upon him/her by law to be exercised in the same manner.

In order to be valid, the acts of the President of the Republic, with the exception of those indicated under items (3) and (5), shall be countersigned by the Executive Vice President and the Minister or Ministers concerned.

Article 237

Annually, within the first ten days following the opening session of the National Assembly, in ordinary session, the President of the Republic shall personally give a message to the Assembly in which he/she shall render account of the political, economic, social and administrative aspects of his/her administration during the past year.

Section Three: Executive Vice President

Article 238

The Executive Vice President is a direct subordinate of the President of the Republic and his/her closest collaborator in his/her capacity as Head of the National Executive.

The Executive Vice President shall meet the same requirements prescribed for eligibility for the office of President of the Republic and may not be related to the latter by either blood or marriage.

Article 239

The following are powers of the Executive Vice President:

1. To cooperate with the President of the Republic in directing the actions of the Government.
2. To coordinate the National Public Administration in accordance with President of the Republic's instructions.
3. To propose to the President of the Republic the appointment and removal of Ministers.
4. To preside over the Cabinet, subject to prior authorization from the President of the Republic.
5. To coordinate relations between the National Executive and the National Assembly.
6. To preside over the Federal Council of Government.
7. To appoint and remove, in accordance with law, those national government officials for whose designation no other authority has been made responsible.
8. To replace the President of the Republic when the latter is temporarily unavailable to serve.
9. To exercise such powers as may be delegated to him/her by the President of the Republic.
10. Any other powers assigned to him/her by this Constitution and the law.

Article 240

Passage of a motion to censure the Executive Vice President, by vote of no less than two-thirds of the members of the National Assembly, brings about his/her removal from office. The removed official may not serve as Executive Vice President or as a Minister for the remainder of the current presidential term of office

The third removal of an Executive Vice President during the same presidential term of office as a consequence of motions of censure authorizes the President of the Republic to dissolve the National Assembly. The dissolution order includes the calling of elections to form a new legislature within 60 days of the dissolution of the old.

The Assembly may not be dissolved during the final year of its constitutional term of office.

Article 241

The Executive Vice President is accountable for his/her acts, in accordance with this Constitution and the law.

*Section Four: Ministers and the Cabinet***Article 242**

Ministers are direct subordinates of the President of the Republic and, when assembled together with the latter and with the Executive Vice President, they comprise the Cabinet.

The President of the Republic shall preside over meetings of the Cabinet, but he/she may authorize the Executive Vice President to preside over them when he/she is unable to attend. In order to be valid, decisions made must be ratified by the President of the Republic.

The Executive Vice President and the Ministers who took part are jointly and severally accountable for decisions of the Cabinet, with the exception of those who placed on record their adverse or negative vote.

Article 243

The President of the Republic may appoint Ministers of State, who, in addition to participating in the Cabinet, shall advise the President of the Republic and the Executive Vice President on the matters assigned to them.

Article 244

To be a Minister, the person is required to hold Venezuelan nationality and be more than 25 years of age, with the exceptions established in this Constitution.

Ministers are responsible for their actions in accordance with this Constitution and the law, and shall submit to the National Assembly, within the first 60 days of each year, a sufficient and explanatory annual report on the stewardship of their office during the past year, in accordance with the law.

Article 245

Ministers have the right to speak before the National Assembly and its Committees. They have the right to take part in debates in the National Assembly, without the right to vote.

Article 246

The approval of a vote of censure against a Minister by at least a three-fifths vote of the members present in the National Assembly shall result in the Minister's removal from office. The removed official may not serve as a Minister or Executive Vice President for the remainder of the presidential term.

*Section Five: Attorney General of the Republic***Article 247**

The Office of the Attorney General of the Republic advises, defends and represents, in and out of court, the property interests of the Republic, and shall be consulted for purposes of approval of contracts in the national public interest.

The pertinent organic statute shall determine the organization, competence and functioning of this office.

Article 248

The Office of the Attorney General of the Republic shall be in the charge and under the direction of the Attorney General of the Republic, with the assistance of other officials as determined by the pertinent organic statute.

Article 249

The Attorney General of the Republic shall meet the same conditions required in order to serve as a justice of the Supreme Tribunal of Justice. He/she shall be appointed by the President of the Republic, with the authorization of the National Assembly.

Article 250

The Attorney General of the Republic shall attend and have the right to speak at meetings of the Cabinet.

Section Six: Council of State

Article 251

The Council of State is the highest consultative organ of the Government and the National Public Administration. The purview of the Council shall be to make policy recommendations in the national interest with regard to matters recognized by the President of the Republic as being of particular importance and requiring the Council's opinion. The pertinent law shall determine its functions and powers.

Article 252

The Council of State shall be presided over by the Executive Vice President and, besides, have five members designated by the President of the Republic; one representative designated by the National Assembly; one representative designated by the Supreme Tribunal of Justice; and one State Governor designated by all the State Governors jointly.

Chapter III

Judicial Branch and Justice System

Section One: General Provisions

Article 253

The power to administer justice emanates from the citizens and is exercised in the name of the Republic by authority of law.

The organs of the Judicial Branch are responsible for dealing with the cases and matters within their competence through such procedures as may be determined by the laws and for carrying out their judgments or causing them to be carried out.

The justice system consists of the Supreme Tribunal of Justice, such other courts as may be determined by law, the Office of Public Prosecutions, the Ombudsperson's Office, criminal investigation entities, justice officials and assistants, the penitentiary system, alternative means of justice, citizens participating in the administration of justice in accordance with law, and attorneys at law admitted to practice.

Article 254

The Judicial Branch is autonomous, and the Supreme Tribunal of Justice shall enjoy operational, financial and administrative autonomy. To this end, the general budget of the State shall allocate to the justice system a variable annual amount equivalent to no less than two percent of the ordinary national budget for it to function effectively; such amount may not be reduced or modified without prior authorization from the National Assembly. The Judicial Branch is not authorized to establish charges or tariffs or to demand any payment for its services.

Article 255

Appointment to a judicial position and the promotion of judges shall be carried out by means of public examinations that ensure the suitability and excellence of the participants, with selection by the juries of the judicial circuits, in such manner and on such terms as may be established by law. The appointment and swearing in of judges shall be the responsibility of the Supreme Tribunal of Justice. Citizen participation in the process of selecting and designating judges shall be guaranteed by law. Judges may only be removed or suspended from office through the procedures expressly provided for by law.

Measures shall be taken by law to promote the professionalization of judges, and the universities shall cooperate to this end, organizing their law syllabuses to include specialized studies in judicial practice.

Judges are personally liable, on such terms as may be determined by law, for unjustified errors, delays or omissions, for substantial failure to observe the rules of procedure, for denial of justice, for partiality and for the criminal offenses of bribery and prevarication in office.

Article 256

In order to guarantee impartiality and independence in the exercise of their functions, magistrates, judges, prosecutors in the Office of Public Prosecutions and public defenders, from the date of their appointment until they leave office, may not, except by exercising their right to vote, engage in partisan political, professional association, labor union or similar

activism; or engage in private activities for profit that are incompatible with their functions, either directly or through a third party; or perform any other public functions, with the exception of educational activities.

Judges may not form associations among themselves.

Article 257

Procedure is a fundamental instrument for the administration of justice. Procedural laws shall establish the simplification, uniformity and efficiency of legal formalities and adopt brief, oral and public procedures. Justice shall not be sacrificed because of the omission of nonessential formalities.

Article 258

The system of conciliation courts in communities shall be organized by law. Justices of peace shall be elected by universal suffrage, directly and by secret ballot, in accordance with law.

The law shall encourage arbitration, conciliation, mediation and any other alternative means for settling disputes.

Article 259

Jurisdiction over administrative litigation proceedings shall be vested in the Supreme Tribunal of Justice and such other courts as may be determined by law. Organs with jurisdiction in the field of administrative litigation are competent to nullify general or individual administrative acts contrary to law, including cases of misapplication of power; to order the payment of sums of money and reparation for damages for whose causation the Administration is responsible; to deal with claims arising from the provision of public services; and to rule as necessary to restore the legal position of parties harmed by administrative actions.

Article 260

The legitimate authorities of the indigenous peoples may apply, within their habitat, levels of administration of justice based on their ancestral traditions and that affect only their members, in accordance with their own rules and proceedings, provided they are not contrary to this Constitution,

the law and public order. The manner in which this special jurisdiction is to be coordinated with the national judicial system shall be determined by law.

Article 261

Military criminal jurisdiction is an integral part of the Judicial Branch, and its judges shall be selected by competitive examination. Its sphere of competence, organization and modes of operation shall be governed by the accusatory system and in accordance with the “Organic” Code of Military Justice. The commission of common crimes, human rights violations and crimes against humanity shall be judged by the courts of ordinary jurisdiction. The jurisdiction of military courts is limited to offenses of a military nature.

Insofar as not provided for in this Constitution, special jurisdictions and the competence, organization and functioning of the courts shall be regulated by law.

Section Two: Supreme Tribunal of Justice

Article 262

The Supreme Tribunal of Justice shall sit in plenary session and in the Constitutional, Political-Administrative, Electoral, Civil Appeal, Criminal Appeal, and Social Appeal Chambers, whose composition and competences shall be determined by the pertinent organic statute.

The Social Chamber shall encompass matters relating to appeals involving agrarian matters, labor matters and minors.

Article 263

To be a justice of the Supreme Tribunal of Justice, a person must:

1. Have Venezuelan nationality by birth and hold no other nationality.
2. Be recognized as an honorable citizen.
3. Be a jurist of recognized competence; enjoy a good reputation; have a minimum of 15 years' experience practicing law and have

a post-graduate degree in law or have at least 15 years' experience as a university professor of law, having obtained the rank of full professor; or be or have been a superior court judge in the specialty of the chamber for which he/she is a candidate and have been a sitting judge for at least 15 years, and have gained recognized prestige in the performance of his/her duties.

4. Any other requirements established by law.

Article 264

The justices of the Supreme Tribunal of Justice shall be elected for a single term of 12 years. The election procedure shall be determined by law. In all cases, candidates may be proposed to the Judicial Nominations Committee either on their own initiative or by organizations involved in the field of law. After hearing the opinion of the community, the Committee shall draw up a short list to be submitted to the Citizen Branch, which shall draw up a second short list to be submitted to the National Assembly, which shall make the final selection.

Citizens may file objections to any of the candidates, for cause, with the Judicial Nominations Committee or the National Assembly.

Article 265

Justices of the Supreme Tribunal of Justice may be removed by the National Assembly by a two-thirds majority of its members, after granting the interested party a hearing in cases involving serious misconduct already characterized as such by the Citizen Branch, on such terms as may be established by law.

Article 266

The following are powers of the Supreme Tribunal of Justice:

1. To exercise constitutional jurisdiction in accordance with Title VIII hereof.
2. To rule as to whether or not there are grounds for impeaching the President of the Republic or whomever may be acting in that capacity and, if it so rules, to retain competence of the proceedings, subject to

- the prior approval of the National Assembly, until the final judgment.
3. To rule as to whether or not there are grounds for impeaching the Executive Vice President of the Republic; members of the National Assembly or the Supreme Tribunal of Justice itself; Ministers; the Attorney General; the Prosecutor General; the Comptroller General of the Republic; the Ombudsperson; Governors; officers, generals and admirals of the National Armed Force; and the heads of the Republic's diplomatic missions; and, if it so rules, to remit the records to the Prosecutor or the Prosecutor General of the Republic or whomever is acting in that capacity, where appropriate; and if the offense charged is a common crime, the Supreme Tribunal of Justice shall retain competence of the matter until a final judgment is handed down.
 4. To settle any administrative disputes that may arise between the Republic, a State, a Municipality or other public entity, when the other party is also one of those same entities, except in the case of a dispute between Municipalities belonging to the same State, in which case competence may be vested by law in another court.
 5. To declare null and void, in whole or in part, regulations and other general or individual administrative actions of the National Executive, when there is cause.
 6. To take jurisdiction of requests for interpretation with regard to the content and scope of legal texts, on the terms provided for by law.
 7. To decide competence conflicts between courts, whether ordinary or special, when there is no higher or common court shared by both in the hierarchical order.
 8. To take jurisdiction of appeals of annulment.
 9. Such other powers as may be established by law.

The powers indicated under paragraph (1) shall be exercised by the Constitutional Chamber; those indicated under paragraphs (2) and (3), in Plenary Session; and those indicated under (4) and (5), by the Political-Administrative Chamber. The remaining powers shall be exercised by the various Chambers as provided for under this Constitution and by law.

*Section Three: Governance and Administration of the Judicial Branch***Article 267**

The Supreme Tribunal of Justice is responsible for the direction, governance and administration of the Judicial Branch and the inspection and oversight of the courts of the Republic and the Public Defenders' Offices. The Supreme Tribunal is also responsible for preparing and implementing its own budget and that of the Judicial Branch.

Jurisdiction over judicial discipline shall be vested in such disciplinary courts as may be determined by law.

The disciplinary system for magistrates and judges shall be based on the Venezuelan Judge's Code of Ethics to be promulgated by the National Assembly. Disciplinary proceedings shall be public, oral and brief, in accordance with due process and on such terms and conditions as may be established by law.

In order to exercise these powers, the Supreme Tribunal in plenary session shall create an Executive Department of the Judiciary, with its regional offices.

Article 268

The autonomy and organization, functioning, discipline and fitness of the public defender service shall be provided for by law, with the purpose of ensuring the efficiency of the service and guaranteeing career benefits for public defenders.

Article 269

The organization of judicial circuits and the creation and competences of regional courts and tribunals shall be regulated by law in order to promote the administrative and jurisdictional decentralization of the Judicial Branch.

Article 270

The Judicial Nominations Committee is a body charged with advising the

Judicial Branch on the selection of candidates for designation as justices of the Supreme Tribunal of Justice. In addition, it shall advise the judicial electoral colleges on the election of judges with disciplinary jurisdiction. The Judicial Nominations Committee shall be made up of representatives of the various sectors of society, in accordance with such provisions as may be established by law.

Article 271

The extradition of foreign nationals responsible for money laundering, drug or international organized crime offenses, crimes against the public property of other States or crimes against human rights may in no case be denied. Judicial proceedings for the purpose of punishing offenses against human rights or public property, or drug trafficking shall not be barred by the statute of limitations. Likewise, subject to court order, assets derived from activities relating to offenses against public property and drug trafficking offenses shall be confiscated.

Proceedings pertaining to the aforementioned offenses shall be public, oral and brief, with respect for due process, the competent judicial authorities being authorized to order the necessary preventive precautionary measures against assets belonging to the defendant or third parties acting for him/her, for the purposes of guaranteeing their possible civil liability.

Article 272

The State shall guarantee a penitentiary system such as to ensure the rehabilitation of inmates and respect for their human rights. To this end, penitentiary establishments shall have areas for work, study, sports and recreation; shall operate under the direction of professional penologists with university-level academic qualifications; and shall be run by a decentralized administration under state or municipal governments; they may be subject to privatization arrangements. In such establishments, an open regimen shall generally be preferred, as shall the model of custodial agricultural colonies. In all cases the preference shall be for applying formulas for serving sentences without restriction of freedom over measures that restrict freedom. The State shall create the essential institutions to provide post-penitentiary assistance for the reinsertion of the former inmate into society

and shall cause an autonomous penitentiary institution with technical personnel only to be created.

Chapter IV Citizen Branch

Section One: General Provisions

Article 273

The powers of the Citizen Branch of Government are

Article 273

The powers of the Citizen Branch of Government are exercised by the Republican Ethics Council, consisting of the Ombudsperson, the Prosecutor General and the Comptroller General of the Republic.

The organs of the Citizen Branch are the Ombudsperson's Office, the Office of Public Prosecutions and the Office of the Comptroller General of the Republic, one of whose heads shall be designated by the Republican Ethics Council as its Chairman for a one-year term of office, with the possibility of re-election.

The Citizen Branch is independent and its organs enjoy operational, financial and administrative autonomy. To this end, it shall be allocated a variable annual budget appropriation from the general State budget.

Its organization and operation shall be established by organic statute.

Article 274

The organs exercising the powers of the Citizen Branch are responsible for, in accordance with this Constitution and with the law, preventing, investigating and punishing actions that undermine public ethics and administrative morals; ensuring sound management and legality in the use of public property and compliance with and application of the principle of legality in all of the State's administrative activities; and, also, for promoting education as a process that creates citizenship, as well as solidarity, freedom, democracy, social responsibility and work.

Article 275

The representatives of the Republican Ethics Council shall issue to the authorities or officials of the National Public Administration warnings as to breaches in the fulfillment of their legal duties. If these warnings are not heeded, the Republican Ethics Council may impose the penalties established by law. In the event of contempt, the Chairperson of the Republican Ethics Council shall submit a report to the organ or agency to which the public official concerned is attached for it to take the pertinent corrective action in the case, without prejudice to such penalties as may be applicable in accordance with the law.

Article 276

The Chairperson of the Republican Ethics Council and the heads of the organs comprising the Citizen Branch shall submit an annual report before the National Assembly in plenary session. They shall likewise submit reports whenever asked to do so by the National Assembly.

Both the regular and the special reports shall be published.

Article 277

All officials of the National Public Administration are obligated, subject to such penalties as may be established by law, to cooperate on an urgent priority basis with representatives of the Republican Ethics Council in connection with their investigations. The Council may ask them for such statements and documents as it may deem necessary in order to perform its functions, including documents that may have been classified or catalogued as confidential or secret in accordance with law. In any event, the Citizen Branch may only release information contained in confidential or secret documents through such procedures as may be established by law.

Article 278

The Republican Ethics Council shall promote all types of teaching activities designed to contribute to the understanding and study of this Constitution; love for the native land; civic and democratic virtues; the transcendental values of the Republic; and observance of and respect for human rights.

Article 279

The Republican Ethics Council shall convene a Citizen Branch Nominations Evaluation Committee, which shall be made up of a group of representatives from various sectors of society. Said Committee shall conduct public proceedings resulting in the obtaining of a list of three candidates for each organ of the Citizen Branch, which shall be submitted to the National Assembly for its consideration. The National Assembly, by a two-thirds vote of its members, shall select the member of the organ of the Citizen Branch under consideration within a period of no more than 30 calendar days. If the National Assembly has not reached an agreement by the end of this period, the Electoral Branch shall submit the list of three candidates to popular referendum.

If the Citizen Branch Nominations Evaluation Committee has not been convened, the National Assembly shall proceed, within such time limit as may be determined by law, to designate the member of the organ of the Citizen Branch in question.

Members of the Citizen Branch shall be removed by the National Assembly, following upon a prior ruling by the Supreme Tribunal of Justice, in accordance with the procedure established by law.

*Section Two: Ombudsperson's Office***Article 280**

The Ombudsperson's Office is responsible for the furtherance, defense and oversight of the rights and guarantees established under this Constitution and international treaties on human rights, in addition to the legitimate collective and diffuse interest of the citizens.

The Ombudsperson's Office shall act under the direction and responsibility of the Ombudsperson, who shall be designated to serve for a single seven-year term.

The Ombudsperson must be Venezuelan by birth and hold no other nationality, be over 30 years of age, have manifest and proven competence

in the field of human rights and meet such requirements as to honesty, ethics and morality as may be established by law. If the Ombudsperson is temporarily or permanently unavailable to serve, the vacancy shall be filled in accordance with the applicable provisions of the law.

Article 281

The following are functions of the Ombudsperson:

1. To ensure that the human rights recognized in this Constitution and in the international treaties, agreements and conventions on human rights ratified by the Republic are effectively respected and guaranteed, investigating either on his/her own initiative or at the request of a party any denouncement of which he/she becomes aware.
2. To ensure the proper functioning of public services; protect and defend the legitimate collective and diffuse rights and interests of persons against arbitrary acts, misapplications of power and errors committed in the provision of such public services, filing, when appropriate, the necessary actions to demand that the State compensate persons for damages caused them in connection with the functioning of such public services.
3. To file actions on the grounds of unconstitutionality, actions for the protection of constitutional rights, habeas corpus, habeas data and any other actions or motions necessary in order to carry out the functions indicated in the previous paragraph, where proper in accordance with law.
4. To urge the Prosecutor or the Prosecutor General of the Republic to pursue any appropriate actions or motions against public officials responsible for violation of or encroachment upon human rights.
5. To ask the Republican Ethics Council to take the appropriate measures with regard to public officials responsible for the violation of or encroachment upon human rights.
6. To ask the competent authority to apply appropriate corrective and punitive measures in cases involving the violation of the rights of consumers and users, in accordance with law.
7. To submit to municipal, state or national legislative bodies bills or other initiatives for the progressive protection of human rights.

8. To ensure the rights of indigenous peoples and take such action as may be necessary to guarantee and effectively protect such rights.
9. To visit and inspect the agencies and establishments of State entities for the purpose of guaranteeing the protection of human rights.
10. To submit before the appropriate organs the necessary recommendations and observations for the effective protection of human rights, to which end it shall establish mechanisms for remaining in constant communication with national and international public and private bodies for the protection and defense of human rights.
11. To promote and implement policies for the dissemination of information about and effective protection of human rights.
12. Such other functions as may be established by this Constitution and by law.

Article 282

The Ombudsperson shall enjoy immunity in the exercise of his/her functions and, therefore, may not be persecuted, arrested or prosecuted for acts relating to the performance of said functions. In any such case, exclusive competence shall be vested in the Supreme Tribunal of Justice.

Article 283

Matters relating to the organization and functioning of the Ombudsperson's Office at the municipal, state, national, and special levels shall be determined by law. The activities of this Office shall be governed by the principles of gratuitous service, accessibility, dispatch, freedom from formalities, and proceeding on own initiative.

Section Three: Office of Public Prosecutions

Article 284

The Office of Public Prosecutions shall be under the direction and responsibility of the Prosecutor General of the Republic, who shall perform his/her functions directly, with the assistance of such officials as may be determined by law.

To be Prosecutor General of the Republic, a person must meet the same eligibility requirements that apply to justices of the Supreme Tribunal of

Justice. The Prosecutor General of the Republic shall be designated for a seven-year term.

Article 285

The following are functions of the Office of Public Prosecutions:

1. In judicial proceedings, to guarantee respect for constitutional rights and guarantees, as well as for international treaties, agreements and conventions signed by the Republic.
2. To guarantee the celerity and efficiency of the judicial process, the right to prior trial and due process.
3. To order and direct the criminal investigation of the perpetration of punishable acts with a view to establishing that the same were committed, with all circumstances that may be relevant to determining the identity and establishing the responsibility of the perpetrators and other participants, as well as securing custody of the objects actively and passively involved in the perpetration of the offense.
4. To conduct on behalf of the State criminal prosecutions in those cases in which no initiative on the part of a party is required in order to initiate or continue such prosecution, with the exceptions established by law.
5. To file any appropriate actions to hold liable public officials who have incurred civil, labor, military, criminal, administrative or disciplinary liability in the course of their official duties.
6. Any other functions established by this Constitution and by law.

These functions do not compromise the exercise of any rights or actions to which private parties or other public officials are entitled in accordance with this Constitution and the law.

Article 286

The law shall determine matters relating to the organization and functioning of the Office of Public Prosecutions at the municipal, state and national levels and provide the appropriate measures to ensure the suitability, probity and stable tenure of the attorneys of the Office of Public Prosecutions. It shall also establish the rules to guarantee the exercise of these functions by career personnel.

*Section Four: Office of the Comptroller General of the Republic***Article 287**

The Office of the Comptroller General of the Republic is the organ that controls, oversees and audits revenues, expenditures, public and national property and transactions relating to the same. It enjoys operational, administrative and organizational autonomy and focuses its activities on functions relating to the inspection of organs and entities under its oversight.

Article 288

The Office of the Comptroller General of the Republic shall be under the direction and responsibility of the Comptroller General of the Republic, who must be Venezuelan by birth and hold no other nationality, be over 30 years of age and have proven ability and experience for exercising the position.

The Comptroller General of the Republic shall be designated for a seven-year term.

Article 289

The following are functions of the Comptroller General of the Republic:

1. To control, oversee and audit public revenues, expenditures and property, as well as transactions relating to the same, without prejudice to the functions vested in other organs in the case of the States and Municipalities, in accordance with law.
2. To control the public debt, without prejudice to the functions vested in other organs in the case of the States and Municipalities, in accordance with law.
3. To inspect and audit the public sector organs, entities and juristic persons subject to his/her control, conduct audits, order the opening of investigations into irregularities against public property, as well as to order measures, raise objections and apply administrative penalties as appropriate, in accordance with law.
4. To call upon the Prosecutor General of the Republic to file the

appropriate legal actions with regard to offenses and crimes committed against public property of which he/she becomes aware in the course of performing his/her official functions.

5. To exercise operating control and evaluate compliance with and the results of the public policies and decisions of the public sector organs, entities and juristic persons subject to his/her control relating to their revenues, expenditures and property.
6. Any other functions that may be established by this Constitution and by law.

Article 290

Matters relating to the organization and functioning of the Office of the Comptroller General of the Republic and the national tax control system shall be determined by law.

Article 291

The Office of the Comptroller General of the Armed Force is an integral part of the national control system. It shall be in charge of the oversight, control and auditing of public revenues, expenditures and property allocated to the National Armed Force and its establishments, without prejudice to the scope and competence of the Office of the Comptroller General of the Republic. Its organization and functioning shall be determined by the pertinent law and shall be under the direction and responsibility of the Comptroller General of the National Armed Force, who shall be designated by means of a competitive examination.

Chapter V

Electoral Branch

Article 292

The powers of the Electoral Branch are exercised by the National Electoral Council as the governing body. The National Electoral Council's subordinate organs are the National Elections Board, the Civil and Electoral Registry Commission and the Political Participation and Financing Commission, with organization and functioning as established under the pertinent organic statute.

Article 293

The following are functions of the Electoral Branch:

1. To regulate election laws and resolve any doubts and vacuums raised by or contained in such laws.
2. To prepare its budget, concerning which it shall handle directly with the National Assembly and which it shall manage autonomously.
3. To issue binding directives on matters of political and electoral advertising and financing, and impose penalties when such directives are not complied with.
4. To declare elections null and void, either in whole or in part.
5. Organization, administration, direction and oversight of all acts relating to elections to fill public offices by popular vote, as well as referenda.
6. To organize elections for labor unions, professional associations and organizations for political purposes on the terms indicated by law. The Electoral Branch may also organize electoral processes for other organizations of civil society, either at their request or by order of the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice. The corporations, entities and organizations referred to herein shall cover the costs of their election processes.
7. To maintain, organize, direct and supervise the Civil and Electoral Registry.
8. To organize the registration and enrollment of organizations for political purposes and ensure that such organizations comply with the provisions governing their regime established in the Constitution and the law. In particular, the Electoral Branch shall decide on applications for the founding, renewal and cancellation of organizations for political purposes, the determination of their lawful authorities and their provisional names, colors and symbols.
9. To control, regulate and investigate the funds raised to finance organizations for political purposes.
10. Such other functions as may be determined by law.

The organs of the Electoral Branch shall guarantee the equality, reliability, impartiality, transparency and efficiency of electoral processes, as well

as implementation of the personalization of the vote and proportional representation.

Article 294

The organs of the Electoral Branch are governed by the principles of organic independence, functional and budgetary autonomy, separation of the electoral bodies from political parties, impartiality and citizen participation, as well as decentralization of electoral administration, transparency and expeditiousness of the voting process and tallying of votes.

Article 295

The Election Nominations Committee for candidates to membership on the National Electoral Council shall be made up of representatives of the different sectors of society, as provided for by law.

Article 296

The National Electoral Council shall consist of five members having no ties to organizations for political purposes; three of these shall be nominated by civil society, one by the national universities' schools of law and political science, and one by the Citizen Branch.

The three members nominated by civil society shall have six alternates, in ordinal sequence, and each of the members designated by the universities and the Citizen Branch shall have, respectively, two alternates. The National Elections Board, the Civil and Electoral Registry Commission and the Political Participation and Financing Commission shall each be presided over by a member nominated by civil society. The members of the National Electoral Council shall hold office for seven years and shall be elected separately: the three nominated by civil society at the beginning of each term of office of the National Assembly, and the other two halfway through such term of office.

The members of the National Electoral Council shall be designated by a two-thirds vote of the members of the National Assembly. The members of the National Electoral Council shall choose their President from among themselves, in accordance with the law.

The members of the National Electoral Council shall be removed by the National Assembly, upon a prior ruling of the Supreme Tribunal of Justice.

Article 297

Jurisdiction over electoral litigation proceedings shall be exercised by the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice and any other courts as may be established by law.

Article 298

The law regulating electoral processes may not be modified in any form during the period between the day of the elections and the preceding six months.

TITLE VI SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Chapter I Socio-economic Order and the Function of the State in the Economy

Article 299

The socio-economic system of the Bolivarian Republic of Venezuela is based on the principles of social justice, democracy, efficiency, free competition, protection of the environment, productivity and solidarity for the purposes of ensuring overall human development and a dignified and useful existence for the community. The State, jointly with private enterprise, shall promote the harmonious development of the national economy for the purpose of generating sources of employment and a high rate of domestic added value, raising the population's standard of living and strengthening the economic sovereignty of the country, guaranteeing legal certainty and solid, dynamic, sustainable, continuing and equitable growth of the economy to achieve a just distribution of wealth through participatory democratic strategic planning with open consultation.

Article 300

National laws shall establish the conditions for the creation of functionally

decentralized entities to carry out social or entrepreneurial activities, with a view to ensuring the reasonable economic and social productivity of the public resources invested in such activities.

Article 301

The State reserves to itself the use of trade policy to protect the economic activities of public and private domestic enterprises. Business enterprises, entities or persons of foreign nationality may not be granted more advantageous regimes than those established for Venezuelan nationals. Foreign investment is subject to the same conditions as domestic investment.

Article 302

The State reserves to itself, through the pertinent “organic law,” and for reasons of national expediency, the petroleum industry and other industries, operations and goods and services that are in the public interest and of a strategic nature. The State shall promote the domestic manufacture of raw materials deriving from the exploitation of nonrenewable natural resources, with a view to assimilating, creating and inventing technologies, generating employment and economic growth, and creating wealth and well-being for the people.

Article 303

For reasons of economic and political sovereignty and national strategy, the State shall retain all shares in *Petróleos de Venezuela, S.A.* or the entity created to manage the petroleum industry, with the exception of shares in subsidiaries, strategic joint ventures, business enterprises and any other venture established or that may be established as a consequence of the conduct of *Petróleos de Venezuela, S.A.*’s business.

Article 304

All waters are property in the Nation’s public domain, essential to life and development. The necessary provisions shall be established by law to guarantee the protection, utilization, and recuperation thereof, respecting the phases of the hydrological cycle and zoning criteria.

Article 305

The State shall promote sustainable agriculture as the strategic basis for overall rural development with a view to guaranteeing the population a secure food supply, defined as the sufficient and stable availability of food nationwide and timely and uninterrupted access to the same by consumers. A secure food supply shall be achieved by developing and prioritizing domestic agricultural and livestock production, understood as production deriving from agricultural, livestock, fishing and aquaculture activities. Food production is in the national interest and is fundamental to the economic and social development of the Nation. To this end, the State shall promulgate such financial, trade, technology transfer, land tenancy, infrastructure, manpower training and other measures as may be necessary to achieve strategic levels of self-sufficiency. In addition, it shall promote actions in the domestic and international economic context to compensate for the disadvantages inherent to agricultural activity.

The State shall protect the settlements and communities of artisanal fishermen, as well as their fishing grounds in continental waters and those close to the coastline, as defined by law.

Article 306

The State shall promote conditions for overall rural development, for the purpose of generating employment and ensuring the rural population an adequate level of well-being, as well as their inclusion in national development. It shall likewise promote agricultural activity and optimum land use by providing infrastructure works, supplies, loans, training services and technical assistance.

Article 307

The system of large land estates is contrary to the interests of society. Appropriate tax law provisions shall be enacted to tax idle lands and establish the necessary measures to transform them into productive economic units, likewise to recover arable land. Farmers and other agricultural producers are entitled to own land, in the cases and forms specified under the pertinent law. The State shall protect and promote associative and private forms of ownership in order to guarantee agricultural production. The

State shall ensure the sustainable husbandry of arable land to guarantee its food-producing potential.

In exceptional cases, quasi-tax contributions shall be created to provide funds for financing, research, technical assistance, technology transfer and other activities that promote the productivity and competitiveness of the agricultural sector. These matters shall be regulated by law.

Article 308

The State shall protect and promote small and medium-size manufacturers, cooperatives, savings funds, family-owned businesses, micro businesses and any other form of community association for purposes of work, saving and consumption under a collective ownership arrangement, with a view to strengthening the country's economic development based on the initiative of the people. Training, technical assistance and appropriate financing shall be guaranteed.

Article 309

Typical Venezuelan crafts and folk industries shall enjoy the special protection of the State, with a view to preserving their authenticity, and they shall receive credit facilities to promote production and marketing.

Article 310

Tourism is an economic activity in the national interest and a priority for the country in its strategy of diversification and sustainable development. As part of laying the foundations for the socio-economic system contemplated in this Constitution, the State shall promulgate measures to guarantee the development of tourism. The State shall ensure the creation and strengthening of a national tourist industry.

Chapter II **Tax and Monetary System**

Section One: Budget System

Article 311

Fiscal policy shall be governed and implemented based on the principles

of efficiency, solvency, transparency, responsibility and fiscal equilibrium. Fiscal policy shall be balanced within a multi-year budget framework in such a manner that ordinary revenues should be sufficient to cover ordinary expenditures.

The National Executive shall submit for enactment by the National Assembly a multi-year framework for budgeting that establishes the ceilings for expenditures and indebtedness to be contemplated in national budgets. The characteristics of this framework, the requirements for modifying it and the terms for carrying it out shall be established by law.

Any revenues generated by exploiting underground resources and minerals shall be used, in general, to finance real productive investment, education and health.

The principles and provisions established for national economic and financial management shall also govern the national economic and financial management of the States and Municipalities, insofar as applicable.

Article 312

Limits on public indebtedness shall be set by law at a prudent level in terms of the size of the economy, reproductive investment and the capacity to generate revenues to cover public debt service. In order to be valid, public credit transactions shall require a special law authorizing them, with the exceptions established under the pertinent “organic law.” The special law shall indicate the terms and conditions of the transactions and authorize the appropriate budget appropriations in the pertinent budget law.

The annual special indebtedness law shall be submitted to the National Assembly together with the budget law.

The State shall not recognize any obligations other than those assumed by lawful organs of National Government in accordance with law.

Article 313

The economic and financial management of the State shall be governed by

a budget approved annually by law. The National Executive shall submit the budget bill to the National Assembly, at the time prescribed by the “organic law.” If the Executive Branch fails, for any reason, to submit the budget bill within the time limit established by law or the bill is rejected by the National Assembly, the budget for the current fiscal year shall remain in effect.

The National Assembly may alter budget items, but shall not authorize measures leading to a decrease in public revenues or to expenditures that exceed the estimated revenue amounts in the budget bill.

When submitting the multi-year budget framework, the special indebtedness law and the annual budget, the National Executive shall explicitly state the long-term objectives of the fiscal policy and explain how these objectives are to be achieved, in accordance with the principles of responsibility and fiscal equilibrium.

Article 314

No expenditure of any kind that has not been provided for in the budget law shall be made. Supplementary budget appropriations may be ordered to cover essential unforeseen expenditures or items that had not been adequately funded, only if the National Treasury has resources to cover the expenditure concerned; such supplementary appropriations shall require a vote in favor by the Cabinet and authorization by the National Assembly or, in its absence, by the Delegated Committee.

Article 315

The annual public expense budgets, at all levels of government, shall clearly establish the specific objective to which each credit item in the budget is addressed, as well as the concrete results expected and the public officials responsible for achieving those results. Such results shall be established in quantitative terms by means of performance indicators, where this is technically possible. The Executive Branch shall submit to the National Assembly within six months of the close of the fiscal year the annual accounting and the statement on the performance of the budget for such fiscal year.

Section Two: Taxation System

Article 316

The taxation system shall seek a fair distribution of public burdens in accordance with the taxpayer's ability to pay, taking into account the principle of progressive taxation, as well as protection of the national economy and raising the population's standard of living, the foundation therefor being an efficient system for the collection of taxes.

Article 317

No tax, assessment or contribution of any kind may be collected unless it is established by law, and no exemptions, abatements or other types of tax incentives may be granted except as provided for by law. No tax shall have a confiscatory effect.

No tax obligations payable in personal services may be established. Tax evasion may be punished as a criminal offense, without prejudice to other penalties established by law.

In the case of public officials, double penalties shall be established.

Every tax law shall specify the interval that is to lapse before it goes into effect. In the absence of such provision, the period shall be understood to be 60 calendar days. This provision shall not restrict the extraordinary powers that the National Executive may grant in the cases provided for by this Constitution.

The national tax administration agency shall enjoy technical, operational and financial autonomy in accordance with legislation approved by the National Assembly, and its maximum authority shall be designated by the President of the Republic, in accordance with the rules laid down in the pertinent law.

Section Three: National Monetary System

Article 318

The monetary competences of National Government shall necessarily be exercised exclusively by the Central Bank of Venezuela. The fundamental

objective of the Central Bank of Venezuela is to achieve price stability and preserve the domestic and foreign exchange value of the monetary unit. The monetary unit of the Bolivarian Republic of Venezuela is the bolivar. In the event that a common currency is established within the framework of Latin American and Caribbean integration, the currency provided for by a treaty signed by the Republic may be adopted.

The Central Bank of Venezuela is a public-law juristic person with autonomy to formulate and implement policies within its sphere of competence. The Central Bank of Venezuela shall perform its functions in coordination with general economic policy in order to attain the higher objectives of the State and the Nation.

In order to adequately attain its objective, the functions of the Central Bank of Venezuela shall include those of formulating and implementing monetary policy, participating in the design of and implementing foreign exchange policy, regulating the currency, credit and interest rates, administering the international reserves and any other functions established by law.

Article 319

The Central Bank of Venezuela shall be governed by the principle of public responsibility, to which end it shall render an accounting of its actions, goals and the results of its policies to the National Assembly, in accordance with law. It shall also issue periodic reports on the behavior of the country's macroeconomic variables and on any other matters concerning which reports may be requested, including the analyses that will permit their evaluation. Failure to meet the objective and goals, without justifiable cause, shall result in the removal of the Board of Directors and the imposition of administrative penalties, in accordance with law.

The Central Bank of Venezuela shall be subject to oversight after the fact by the Office of the Comptroller General of the Republic and inspection and supervision by the public entity that supervises banking, which shall send reports on the inspections it conducts to the National Assembly. The Central Bank of Venezuela's operating expenditures budget shall require

discussion and approval by the National Assembly, and its accounts and balance sheets shall be subject to independent audits on such terms as may be established by law.

Section Four: Macroeconomic Coordination

Article 320

The State shall promote and defend economic stability, prevent the vulnerability of the economy and see to monetary and price stability, in order to ensure the well-being of society.

The ministry responsible for finance and the Central Bank of Venezuela shall contribute to the harmonization of fiscal and monetary policy, thereby facilitating the attainment of macroeconomic objectives. In performing its functions, the Central Bank of Venezuela shall not be subject to directives from the Executive Branch and shall not be permitted to endorse or finance fiscal policies that allow for a deficit.

The coordinated actions of the Executive Branch and the Central Bank of Venezuela shall be achieved through an annual policy agreement that shall establish the final growth objectives and their repercussions on society, the external balance of payments and inflation as regards fiscal, foreign exchange and monetary policy; as well as the levels of intermediate and instrumental variables required in order to achieve the aforementioned final objectives. This agreement shall be signed by the President of the Central Bank of Venezuela and the head of the ministry responsible for finance, and shall be made public at the time of the budget's approval by the National Assembly. It is the responsibility of the institutions that sign the agreement to see that policy actions are consistent with objectives. The aforementioned agreement shall specify the results expected and the policies and actions designed to achieve the same. The characteristics of the annual economic policy agreement and the mechanisms for rendering an accounting shall be established by law.

Article 321

A macroeconomic stabilization fund shall be established by law for the purpose of guaranteeing the stability of the State's expenditures at the national, regional and municipal levels in the face of fluctuations in ordinary revenues.

The operating rules for this fund shall observe as basic principles efficiency, equity and nondiscrimination among the public entities contributing resources to the fund.

TITLE VII
NATIONAL SECURITY

Chapter I
General Provisions

Article 322

National security is an essential competence and responsibility of the State based on the overall development of the Nation, and its defense is the responsibility of all Venezuelans, and also of all public law and private law natural and juristic persons within the Nation's geographical limits.

Article 323

The National Defense Council is the highest consultative organ for planning and advising Government on matters relating to the overall defense of the Nation, its sovereignty and the integrity of its geographical space. To this end, it is also charged with establishing the strategic concept of the Nation. Chaired by the President of the Republic, it also includes the Executive Vice President, the President of the National Assembly, the Chief Justice of the Supreme Tribunal of Justice, the Chairperson of the Republican Ethics Council and the Ministers of Defense, Homeland Security, Foreign Affairs and Planning, and any others whose participation may be deemed appropriate. The pertinent organic statute shall determine the organization and powers of the National Defense Council.

Article 324

Only the State may possess and use weapons of war. All such weapons

that now exist or are manufactured in or imported into the country shall become the property of the Republic, without compensation or proceedings. The National Armed Force shall be the institution with competence to regulate and control, in accordance with the pertinent legislation, the manufacture, importing, exporting, storage, transit, registration, control, inspection, marketing, possession and use of other weapons, munitions and explosives.

Article 325

The National Executive reserves the right to classify and control disclosure of matters directly relating to the planning and execution of operations concerning national security, on such terms as may be established by law.

Chapter II

Principles of National Security

Article 326

National security is based on shared responsibility between the State and civil society in order to implement the principles of independence, democracy, equality, peace, freedom, justice, solidarity, promotion and conservation of the environment and affirmation of human rights, as well as to progressively meet the individual and collective needs of Venezuelans, based on sustainable and productive development that provides full coverage for the national community. The principle of shared responsibility applies to the economic, social, political, cultural, geographical, environmental and military spheres.

Article 327

Attention to borders is a priority matter in the enforcement and application of national security principles. To this end, a border security belt is established, whose width, special economic and social regimes, settlement and utilization shall be regulated by law, with protection being expressly given to national parks, the habitat of the indigenous peoples settled in those areas and other areas under special administrative regimes.

Chapter III

The National Armed Force

Article 328

The National Armed Force is an essentially professional institution, with no political orientation, organized by the State to guarantee the independence and sovereignty of the Nation and ensure the integrity of its geographical space through military defense, cooperation in maintaining internal order and active participation in national development, in accordance with this Constitution and the law. In performing its functions, it is at the exclusive service of the Nation, and in no case at the service of any person or political group. The pillars on which it is founded are discipline, obedience and subordination. The National Armed Force consists of the Army, the Navy, the Air Force and the National Guard, which function in an integrated manner within their sphere of competence to fulfill their mission, having its own comprehensive social security system, as established under the pertinent “organic law.”

Article 329

The Army, Navy and Air Force have as their essential responsibility the planning, execution and control of military operations required to ensure the defense of the Nation. The National Guard shall cooperate in carrying out these operations, and its basic responsibility shall be to conduct the operations required to maintain internal order within the country. The National Armed Force may carry out such administrative policing and criminal investigation activities as may be vested in it by law.

Article 330

Members of the National Armed Force on active duty have the right to vote in accordance with law, but are not permitted to run for any office filled by popular vote or to participate in acts of political advertising, militancy or proselytizing.

Article 331

Military promotions shall be in accordance with merit, hierarchy and vacancies. They are the exclusive prerogative of the National Armed Force and shall be regulated by the pertinent law.

Chapter IV

Civilian Safety Bodies

Article 332

The National Executive, in order to maintain and restore public order, protect citizens, homes and families, support the decisions of the competent authorities, and ensure the peaceful enjoyment of constitutional guarantees and rights shall, in accordance with law, organize:

1. A uniformed national police force.
2. A scientific, criminal and criminological investigation corps.
3. A civilian fire department and emergency management corps.
4. A civil defense and disaster management organization.

Civilian safety bodies are of a civil nature and shall respect human dignity and human rights, without discrimination of any kind.

The functions of the civilian safety bodies constitute a concurrent competence with those of the States and Municipalities, on the terms established in this Constitution and the law.

TITLE VIII

PROTECTION OF THIS CONSTITUTION

Chapter I

Guarantee of this Constitution

Article 333

This Constitution shall not cease to be in effect if it ceases to be observed due to acts of force or because of repeal in any manner other than as provided for herein.

In such eventuality, every citizen, whether or not vested with official authority, shall have a duty to assist in bringing it back into actual effect.

Article 334

All the judges of the Republic, within their respective spheres of competence and in accordance with the provisions of this Constitution and the law, are obligated to ensure the integrity of this Constitution.

In the event of incompatibility between this Constitution and a law or other legal rule, the provisions of this Constitution shall apply, it being the responsibility of the courts to rule accordingly in any case, even *ex officio*.

The Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice, as the court of constitutional competence, shall have the exclusive power to declare the nullity of laws and other acts of organs exercising the powers of Government that are issued by way of direct and immediate implementation of this Constitution or have the status of law, when they are in conflict with the former.

Article 335

The Supreme Tribunal of Justice shall guarantee the supremacy and efficacy of constitutional rules and principles; it shall be the supreme and ultimate interpreter of this Constitution and shall see to its uniform interpretation and application.

Interpretations established by the Constitutional Chamber concerning the content or scope of constitutional rules and principles are binding on the other chambers of the Supreme Tribunal of Justice and on all other courts of the Republic.

Article 336

The following are functions of the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice:

1. To declare the nullity, in whole or in part, of national laws and other acts of the National Assembly with the rank of law that are in conflict with this Constitution.
2. To declare the nullity, in whole or in part, of state Constitutions and laws, municipal ordinances and other acts of the deliberating bodies of the States and Municipalities that are issued by way of direct and immediate implementation of this Constitution and are in conflict with the same.
3. To declare the nullity, in whole or in part, of acts of the National Executive with the rank of law that are in conflict with this Constitution.

4. To declare the nullity, in whole or in part, of acts issued by way of direct and immediate implementation of this Constitution by any other state body exercising the powers of Government when they are in conflict with this Constitution.
5. To verify, at the request of the President of the Republic or the National Assembly, the constitutionality of international treaties signed by the Republic, prior to their ratification.
6. To review in all cases, even *ex officio*, the constitutionality of decrees declaring states of exception issued by the President of the Republic.
7. To declare the unconstitutionality of omissions on the part of the municipal, state, national or legislatures when they fail to promulgate rules or measures essential to guaranteeing compliance with this Constitution or promulgate such rules or measures in an incomplete manner; and to establish the time limit and, where necessary, guidelines for correcting the deficiencies.
8. To resolve any conflicts existing between different provisions of law, and declare which should prevail.
9. To settle constitutional disputes that may arise between any of the organs of Government.
10. To review final judgments ordering the protection of constitutional rights or ensuring the constitutionality of laws or legal rules handed down by the courts of the Republic, on the terms established by the pertinent “organic law.”
11. Any other functions established by this Constitution or by law.

Chapter II

States of Exception

Article 337

The President of the Republic, at a meeting of the Cabinet, may decree states of exception. Expressly defined as such are circumstances of a social, economic, political, natural or ecological nature that seriously affect the security of the Nation, institutions and citizens, in the face of which the powers available to cope with such events are insufficient. In such case, the guarantees contained in this Constitution may be temporarily restricted, with the exception of those relating to the right to life, the prohibition on holding persons incommunicado or subjecting them to torture, the

right to due process, the right to information and other intangible human rights.

Article 338

A state of alarm may be declared when catastrophes, public calamities or other similar events seriously endanger the security of the Nation or its citizens. Such state of exception shall last for up to 30 days and may be extended for up to a further 30 days.

A state of economic emergency may be declared when extraordinary economic circumstances arise such as to seriously affect the economic life of the Nation. Such state of emergency shall last for up to 60 days, with the possibility of it being extended for a further 60-day period.

A state of internal or external commotion may be declared in the event of an internal or external conflict that seriously endangers the security of the Nation, its citizens or its institutions. Such state of commotion shall last for up to 90 days and may be extended for up to a further 90 days.

The National Assembly has the responsibility to approve the extension of the states of exception. An organic law shall regulate states of exception and determine the measures that may be adopted based on them.

Article 339

The decree declaring a state of exception, which shall provide for regulating the exercise of the right whose guarantee is restricted, shall be submitted, within eight days of being issued, to the National Assembly, or Delegated Committee, for its consideration and approval and to the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice for a ruling on its constitutionality. The decree shall comply with the requirements, principles and guarantees established in the International Covenant on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights. The President of the Republic may request its extension for a similar period, and the decree shall be revoked by the National Executive or by the National Assembly, or the latter's Delegated Committee, prior to the indicated date of expiration upon cessation of the conditions that gave rise to it.

The declaration of a state of exception does not interrupt the functioning of the organs of Government.

TITLE IX CONSTITUTIONAL REFORMS

Chapter I Amendments

Article 340

The purpose of an amendment is to add to or modify one or more articles of this Constitution, without altering its fundamental structure.

Article 341

The procedure for adopting amendments to this Constitution shall be as follows:

1. The initiative may emanate from fifteen percent of the citizens registered with the Civil and Electoral Registry, from thirty-nine percent of the members of the National Assembly or from the President of the Republic, sitting with the Cabinet.
2. When the initiative emanates from the National Assembly, the amendment shall require approval by a majority of its members and shall be debated in accordance with the procedure established in this Constitution for the enactment of laws.
3. Electoral Branch shall submit the amendments to a referendum within 30 days of them being formally received.
4. Amendments shall be deemed approved in accordance with the provisions of this Constitution and the law on approval referenda.
5. Amendments shall be numbered consecutively and shall be published beneath this Constitution without altering the text of the latter, but with an annotation at the bottom of the amended article(s) giving the number and date of the amendment modifying the same.

Chapter II Constitutional Reform

Article 342

The purpose of constitutional reform is to effect a partial revision of this

Constitution and replacement of one or more of the provisions hereof, without modifying the fundamental principles and structure of the text of the Constitution.

The initiative for a constitutional reform emanates from the National Assembly by means of a resolution approved by a majority vote of its members, from the President of the Republic sitting with the Cabinet, or at the request of registered voters constituting no fewer than fifteen percent of the total number registered with the Civil and Electoral Registry.

Article 343

The initiative for a constitutional reform shall be processed by the National Assembly as follows:

1. The draft constitutional reform shall be debated for the first time during the legislative session during which it is submitted.
2. A second debate title by title or chapter by chapter, as applicable.
3. A third and last debate article by article.
4. The National Assembly shall approve the draft constitutional reform within a period of no more than two years from the date on which the request for the reform was submitted and approved.
5. The draft constitutional reform shall be approved by a two-thirds vote of the National Assembly.

Article 344

Once approved by the National Assembly, the draft constitutional reform shall be submitted to a referendum within 30 days of its approval. The referendum shall pass on the reform as a whole, but up to one third of the reform may be voted on separately, if at least one third of the National Assembly so agrees or, if in the initiative for the reform, the President of the Republic or a number of registered voters equivalent to no fewer than five percent of the total registered with the Civil and Electoral Registry has so requested.

Article 345

The constitutional reform shall be declared approved if the number of affirmative votes is greater than the number of negative votes. A

constitutional reform initiative that was not approved may not be resubmitted to the National Assembly during the same constitutional term of office.

Article 346

The President of the Republic shall be obligated to promulgate the amendments or reforms within ten days of their approval. If he/she fails to do so, the applicable provisions of this Constitution shall be applied.

Chapter III **National Constituent Assembly**

Article 347

Originary constituent power rests with the people of Venezuela. This power may be exercised by calling a National Constituent Assembly for the purposes of transforming the State, creating a new legal order and drafting a new Constitution.

Article 348

The initiative for calling a National Constituent Assembly may be taken by the President of the Republic sitting with the Cabinet; by the National Assembly, with a two-thirds vote of its members; by the Municipal Councils in open session, with a two-thirds vote of their members; or by fifteen percent of the voters registered with the Civil and Electoral Registry.

Article 349

The President of the Republic may not object to the new Constitution.

The existing constituted authorities may not obstruct the decisions of the Constituent Assembly in any way.

Once promulgated, the new Constitution shall be published in the Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela or in the Gazette of the National Constituent Assembly.

Article 350

The people of Venezuela, true to their republican tradition and their struggle for independence, peace and freedom, shall disown any regime,

legislation or authority that infringes democratic values, principles and guarantees or encroaches upon human rights.

SOLE DEROGATION PROVISION

The Constitution of the Republic of Venezuela decreed on January 23, 1961, is hereby derogated. The remainder of the legal order shall remain in effect to the extent that it is not in conflict with this Constitution.

TRANSITIONAL PROVISIONS

One

The special law on the regime for the Capital District provided for under Article 18 hereof shall be approved by the National Constituent Assembly and shall preserve the territorial integrity of Miranda State. Pending approval of the special law, the regime provided for in the Organic Statute on the Federal District and the Organic Statute on the Municipal Regime shall remain in effect.

Two

Pending enactment of the law provided for in Article 38 hereof concerning the acquisition, election, renunciation and recovery of nationality, foreigners who, having entered and remained within the national territory legally, have declared their intention of establishing their domicile in Venezuela, have a lawful means of earning a living and have resided continuously in Venezuela for two years shall be regarded as domiciled in Venezuela.

Residence shall be understood as meaning continuing presence in the country with the intention of remaining. Declarations of intent as provided for in Articles 32, 33 and 36 hereof shall be made in the form of an authentic instrument by the interested party, when he/she is of legal age, or by his/her legal representative, if he/she has not yet reached the age of 21.

Three

The National Assembly, within six months of its opening session, shall pass:

1. A partial reform of the Penal Code to include the crime of forced disappearance of persons, as provided for in Article 45 hereof. Pending enactment of this reform, the Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons shall apply insofar as possible.
2. An “organic law” on states of exception.
3. A special law to establish the conditions and characteristics of a special regime for Jose Antonio Páez and Rómulo Gallegos Municipalities in Apure State. In the process of formulating this law, the opinions of the President of the Republic, the National Armed Force, such representation as may be designated by the State in question and other institutions involved in border problems shall be heard.

Four

Within one year of its opening session, the National Assembly shall approve:

1. Legislation on penalties for torture, either in the form of a special law or by reforming the Penal Code.
2. An “organic law” on refugees and asylees consistent with the terms of this Constitution and the international treaties on the matter ratified by Venezuela.
3. By reforming the “Organic” Labor Law, a new system for the right to severance and longevity benefits recognized in Article 92 hereof, which shall include the payment of such benefits calculated in proportion to length of service and based on the last wage earned, establishing a statute of limitations for this right of ten years. During that ten-year period, until such reformed law goes into effect, the system of longevity benefits established in the “Organic” Labor Law currently in force shall continue to apply temporarily. Likewise a complete set of standards regulating the work day and that aim to progressively reduce it shall be included, on the terms contemplated in the agreements and conventions of the International Labour Organization signed by the Republic.
4. An “organic” labor procedure law that guarantees the functioning of an autonomous specialized labor jurisdiction and protection for workers on the terms provided for in this Constitution and the law.

The organic labor procedure law shall be guided by the principles of gratuitous service, expeditiousness, oral proceedings, immediacy, giving priority to the reality of the facts, equity and guiding authority of the judge in the proceedings.

5. Legislation relating to the Judicial System, National Public Administration, the Citizen Branch, and the Electoral Branch, and legislation on taxation, the budget system and public credit.

An organic law on public defense: Until this law is passed, the Commission on the Functioning and Restructuring of the Judicial System shall be in charge of the setting up and effective functioning of the Autonomous Public Defender System for the purpose of guaranteeing the right to a defense.

6. A law that institutes the States' public finance system, establishing, in a manner consistent with the principles and rules of this Constitution, the taxes included in such public finance system, the mechanisms for their application and the provisions regulating them.
7. Legislation that implements the constitutional principles concerning the municipal regime. In accordance with such legislation, the legislative bodies of the States shall proceed to pass the normative instruments appropriate to the organizational powers assigned to them with respect to the Municipalities and other local entities and to the territorial political divisions in each jurisdiction. The existing Municipalities and parishes shall continue to be maintained until they have been adapted to the new regime provided for in such legislation.
8. The law to which the Central Bank of Venezuela shall conform: Among other matters, this law shall establish the scope of the functions and manner of organization of the Central Bank; the functions, term of office, manner of election, removal, provisions regarding incompatibilities and requirements for the designation of its President and Directors; the accounting rules for establishing its reserves and the manner in which its profits are to be applied; the annual independent audit of accounts and balances by firms of specialists selected by the National Executive; and the subsequent control by the Office of the Comptroller General of the Republic regarding the legality, sincerity, opportuneness, efficacy and efficiency of the administrative management of the Central Bank of Venezuela.

The law shall provide that the President and other Board members of the Central Bank of Venezuela shall represent exclusively the national interest, to which end it shall provide for public proceedings to evaluate the merits and credentials of the persons nominated to the aforementioned positions.

The law shall provide that the Executive Branch shall have the power to designate the President of the Central Bank of Venezuela and at least half of its Board members, and shall establish the terms for participation by the National Legislative Branch in the designation and ratification of these authorities.

9. National police force law: This law shall establish the mechanism for integrating the Technical Traffic and Overland Transport Inspection Corps into the national police force.

Five

Within no more than one year from the entry into force of this Constitution, the National Assembly shall enact a reformed “Organic” Tax Code establishing, among other matters:

1. Strict interpretation of tax laws and rules, bearing in mind their purpose and their economic significance, for the purpose of eliminating ambiguities.
2. The elimination of exceptions to the principle of non-retroactivity of the law.
3. Expansion of the concept of presumed income, for the purpose of providing the tax administration agency with better instruments.
4. Elimination of the statute of limitations for serious tax offenses, which must be defined in the “Organic” Tax Code.
5. Increasing penalties for advisors, law firms, independent auditors and other professionals who act in complicity for the purpose of committing tax offenses, including periods of suspension from practicing their professions.
6. Increasing penalties and the severity of the sanctions for tax evasion crimes, increasing the periods for the statute of limitations.
7. Revision of mitigating and aggravating circumstances considered in imposing penalties, in order to make them stricter.

8. Extending the audit powers of the tax administration agency.
9. Increasing the rate of default interest in order to discourage tax evasion.
10. Extending the principle of solidarity so that directors or advisors may be made answerable, with their assets, in the event that they sanction tax offenses.
11. Introduction of more expeditious administrative procedures.

Six

Within two years, the National Assembly shall pass legislation on all matters relating to this Constitution. Priority shall be given to the “organic laws” on indigenous peoples, education and borders.

Seven

For purposes of the provisions of Article 125 hereof, pending approval of the pertinent “organic law,” the election of indigenous representatives to the National Assembly and the State and Municipal Legislative Councils shall be governed by the following nomination requirements and mechanisms:

All indigenous organizations or communities may nominate candidates who are natives.

Speaking the pertinent indigenous language and meeting at least one of the following conditions are prerequisites for being a candidate:

1. Have exercised a position of traditional authority in the community in question.
2. Have an acknowledge track record in the social struggle for recognition of that community’s cultural identity.
3. Have taken action benefiting indigenous peoples and communities.
4. Belong to a legally constituted indigenous organization that has been functioning for at least three years.

Three regions are to be established: Western Region, consisting of Zulia, Mérida and Trujillo States; Southern Region, consisting of Amazonas and Apure States; and Eastern Region, consisting of Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui and Sucre States.

Each of the States comprising these regions shall elect one representative. The National Electoral Council shall declare elected the candidate who obtains the majority of valid votes in his/her region or constituency.

The indigenous candidates shall appear on the ballot in their State or constituency, and all voters in that State may vote for them.

For purposes of indigenous representation on the State Legislative Council and on the Municipal Councils in the States and Municipalities with an indigenous population, the 1992 official census by the Central Statistics and Informatics Office shall be used as a reference. The elections shall be conducted in accordance with the rules and requirements established herein.

The National Electoral Council shall guarantee compliance with the requirements set forth herein, with support from experts in indigenous affairs and indigenous organizations.

Eight

Pending promulgation of the new electoral laws contemplated in this Constitution, electoral processes shall be called, organized, directed and supervised by the National Electoral Council.

For the first term of office of the National Electoral Council provided for under this Constitution, all its members shall be designated simultaneously. Halfway through the term, two of the members shall be replaced, in accordance with the provisions of the pertinent organic statute.

Nine

Pending enactment of the laws pertaining to Title V, Chapter IV hereof, the Organic Statute on the Office of Public Prosecutions and the Organic Statute on the Office of the Comptroller General of the Republic shall remain in effect. The head of the Ombudsperson's Office shall be designated provisionally by the National Constituent Assembly. The Ombudsperson shall move ahead with matters relating to setting up the organizational structure, staffing, budget and physical infrastructure, based on the powers vested in him/her by this Constitution.

Ten

The provisions of Article 167, Section 4 hereof concerning the obligation of the States to apply at least fifty percent of the funds received under the constitutional revenue sharing arrangement to investment shall be effective beginning January 1, 2001.

Eleven

Pending enactment of national legislation relating to the legal regime for vacant lands, said lands shall continue to be administered by National Government, in accordance with existing legislation.

Twelve

The demarcation of indigenous habitat referred to in Article 119 hereof shall be carried out within two years of the effective date of this Constitution.

Thirteen

Until the States assume under State law the powers referred to under Article 164, Section 7 hereof, the existing regime shall remain in effect.

Fourteen

Pending enactment of the legislation implementing the principles embodied in this Constitution concerning the municipal regime, the ordinances and other normative instruments concerning municipalities as to the matters within their competence and the separate tax competence they possessed under the system of laws applicable prior to adoption of this Constitution shall remain in full effect.

Fifteen

Pending passage of the legislation referred to in Article 105 hereof, the system of laws applicable prior to adoption of this Constitution shall remain in effect.

Sixteen

In order to enrich the nation's historical heritage, the Chronicler of the National Constituent Assembly shall coordinate all necessary mechanisms to safeguard written documents, videos, digital and audio recordings,

photographs, periodicals, and any other forms of documentation prepared during the sessions and activities of the National Constituent Assembly.

All these documents shall remain under the protection of the General Archives of the Nation.

Seventeen

Once this Constitution has been approved, the name of the Republic shall be “Bolivarian Republic of Venezuela,” as provided for under Article 1 hereof. It is the obligation of authorities and institutions, both public and private, that are required to issue records, certificates or any other documents, to use the name “Bolivarian Republic of Venezuela” effective immediately.

For routine matters, administrative offices shall use up their existing stationery. Said existing stationery shall be progressively replaced with stationery bearing the aforementioned name within a period of no more than five years.

The circulation of coins minted and banknotes issued with the name “Republic of Venezuela” shall be regulated by the reform of the Central Bank of Venezuela Act contemplated in the Fourth Transitional Provision hereof, with a view to making the transition to the name “Bolivarian Republic of Venezuela.”

Eighteen

In order to ensure the application of the principles established in Article 113 hereof, the National Assembly shall pass a law that provides, among other things, for an entity to supervise, control and verify the effective application of those principles and the provisions and rules implementing them.

The person presiding over or directing this entity shall be appointed by the majority vote of the National Assembly, with the favorable report of a special commission designated from within the National Assembly for such purpose.

The law shall establish that the Public Administration officers and the judges called upon to hear and decide disputes relating to the matters referred to in Article 113 hereof shall observe, as a matter of priority and exclusively, the principles regulated therein and that they shall refrain from applying any provision that may cause the opposite effect.

In concessions for public services, the law shall regulate the profits for the concessionaire and the financing of investments strictly related to the provision of the public service, including upgrades and expansions considered reasonable and approved by the competent authority, in each case.

FINAL PROVISION

Sole provision

This Constitution shall go into force the same day of its publication in the Official Gazette of the Republic of Venezuela, after its approval by the people of Venezuela by way of referendum.

Approved by the people of Venezuela by way of referendum on December 15, 1999, and proclaimed by the National Constituent Assembly in Caracas on December 20, 1999; 189th Year of Independence and 140th of Federation.

PRESIDENT

LUIS MIQUILENA

FIRST VICE PRESIDENT

ISAÍAS RODRÍGUEZ

SECOND VICE PRESIDENT

ARISTÓBULO ISTÚRIZ

MEMBERS OF THE NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY,**NATIONAL MEMBERS**

ALFREDO PEÑA
ALLAN BREWER CARÍAS
ÁNGELA ZAGO
EARLE HERRERA
EDMUNDO CHIRINOS
EUSTOQUIO CONTRERAS
GUILLERMO GARCÍA PONCE
HERMÁNN ESCARRÁ
JESÚS RAFAEL SULBARÁN
LEOPOLDO PUCHI
LUIS VALLENILLA
MANUEL QUIJADA
MARISABEL DE CHÁVEZ
PABLO MEDINA
PEDRO ORTEGA DÍAZ
REYNA ROMERO GARCÍA
RICARDO COMBELLAS
TAREK WILLIAM SAAB
VINICIO ROMERO MARTÍNEZ

MEMBERS FOR THE FEDERAL DISTRICT

DESIRÉE SANTOS AMARAL
ELIÉZER REINALDO OTAIZA CASTILLO
ERNESTO ALVARENGA
FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES
JULIO CÉSAR ALVIÁREZ
NICOLÁS MADURO MOROS
SEGUNDO MELÉNDEZ
VLADIMIR VILLEGAS

MEMBERS FOR AMAZONAS

LIBORIO GUARULLA GARRIDO
NELSON SILVA

MEMBERS FOR ANZOÁTEGUI

ÁNGEL RODRÍGUEZ
DAVID DE LIMA SALAS
DAVID FIGUEROA
ELÍAS LÓPEZ PORTILLO
GUSTAVO PEREIRA

MEMBERS FOR APURE

CRISTÓBAL JIMÉNEZ
RAFAEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

MEMBERS FOR ARAGUA

ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ
ANTONIO DI GIAMPAOLO BOTTINI
CARLOS TABLANTE
HUMBERTO PRIETO
OSCAR FEO

MEMBERS FOR BARINAS

FRANCISCO EFRAÍN VISCONTI OSORIO
JOSÉ LEÓN TAPIA CONTRERAS

MEMBERS FOR BOLÍVAR

ALEJANDRO DE JESÚS SILVA MARCANO
ANTONIO BRICEÑO
DANIEL DÍAZ
LEONEL JIMÉNEZ CARUPE
VICTORIA MATA

MEMBERS FOR CARABOBO

ELIO GÓMEZ GRILLO
MANUEL VADELL GRATEROL
AMÉRICO DÍAZ NÚÑEZ
BLANCANIEVE PORTOCARRERO
DIEGO SALAZAR
FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA

JUAN JOSÉ MARÍN LAYA
OSCAR NAVAS TORTOLERO
SAÚL ORTEGA

MEMBERS FOR COJEDES

HAYDÉE DE FRANCO
JUAN BAUTISTA PÉREZ

MEMBERS FOR DELTA AMACURO

CÉSAR PÉREZ MARCANO
RAMÓN ANTONIO YÁNEZ

MEMBERS FOR FALCÓN

JESÚS MONTILLA APONTE
SOL MUSSETT DE PRIMERA
YOEL ACOSTA CHIRINOS

MEMBERS FOR GUÁRICO

ÁNGEL EUGENIO LANDAETA
PEDRO SOLANO PERDOMO
RUBÉN ALFREDO ÁVILA ÁVILA

MEMBERS FOR LARA

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
ENRIQUE PERAZA
HENRI FALCÓN
LENÍN ROMERO
LUIS REYES REYES
MIRNA TERESA VIES DE ÁLVAREZ
REINALDO ROJAS

MEMBERS FOR MÉRIDA

ADÁN CHÁVEZ FRÍAS
FLORENCIO ANTONIO PORRAS ECHEZURÍA
PAUSIDES SEGUNDO REYES GÓMEZ

MEMBERS FOR MIRANDA

ELÍAS JAUA MILANO
FREDDY GUTIÉRREZ
HAYDÉE MACHÍN
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
JOSÉ VICENTE RANGEL ÁVALOS
LUIS GAMARGO
MIGUEL MADRIZ
RAÚL ESTÉ
RODOLFO SANZ
WILLIAM LARA
WILLIAM OJEDA

MEMBERS FOR MONAGAS

JOSÉ GREGORIO BRICEÑO TORREALBA
MARELIS PÉREZ MARCANO
NUMA ROJAS VELÁSQUEZ

MEMBERS FOR NUEVA ESPARTA

ALEXIS NAVARRO ROJAS
VIRGILIO ÁVILA VIVAS

MEMBERS FOR PORTUGUESA

ANTONIA MUÑOZ
MIGUEL A. GARRANCHÁN VELÁSQUEZ
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO

MEMBERS FOR SUCRE

JESÚS MOLINA VILLEGAS
JOSÉ LUIS MEZA
LUIS AUGUSTO ACUÑA CEDEÑO

MEMBERS FOR TÁCHIRA

MARÍA IRIS VARELA RANGEL
RANGEL RONALD BLANCO LA CRUZ
SAMUEL LÓPEZ
TEMÍSTOCLES SALAZAR

MEMBERS FOR TRUJILLO

GERARDO MÁRQUEZ

GILMER VILORIA

MEMBERS FOR VARGAS

ANTONIO RODRÍGUEZ

JAIME BARRIOS

MEMBERS FOR YARACUY

BRAULIO ÁLVAREZ

NÉSTOR LEÓN HEREDIA

MEMBERS FOR ZULIA

ALBERTO URDANETA

ATALA URIANA

FROILÁN BARRIOS NIEVES

GASTÓN PARRA LUZARDO

GEOVANY DARÍO FINOL FERNÁNDEZ

JORGE LUIS DURÁN CENTENO

LEVY ARRON ALTER VALERO

MARÍA DE QUEIPO

MARIO ISEA BOHÓRQUEZ

RAFAEL COLMENÁREZ

ROBERTO JIMÉNEZ MAGGIOLO

SILVESTRE VILLALOBOS

YLDEFONSO FINOL

MEMBERS FOR THE INDIGENOUS COMMUNITIES

GUILLERMO GUEVARA

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

NOELÍ POCATERRA DE OBERTO

THE SECRETARIES

ELVIS AMOROSO

ALEJANDRO ANDRADE

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

DECREES

the following,

AMENDMENT N°1 OF THE CONSTITUTION OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

Article 1.

The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela is hereby amended by amending Articles 160, 162, 174, 192 and 230, as follows:

Article 160.

The government and administration of each State is vested in a Governor. To be a Governor, a person must be Venezuelan, over twenty-five years of age and of secular status.

The Governor shall be elected for a term of four years by a majority of those voting. The Governor shall be eligible for reelection.

Article 162.

The Legislative Power will be exercised in each State by a Legislative Council made up of no more than fifteen nor less than seven members, who will proportionally represent the population of the State and the Municipalities. The Legislative Council shall have the following powers:

1. To legislate on matters of state competence.
2. Pass the State Budget Law.
3. Those other than those established by this Constitution and the law.

The requirements to be a member of the Legislative Council, the obligation to render annual accounts and the immunity in its territorial jurisdiction shall be governed by the rules established by this Constitution for deputies to the National Assembly, insofar as they are applicable to them. State legislators

shall be elected for a period of four years and may be reelected. The national law shall regulate the organization and functioning of the Legislative Council.

Article 174.

The government and administration of the Municipality shall be vested in the Mayor or Mayoress, who will also be the first civil authority. To be Mayor or Mayoress it is required to be Venezuelan, over twenty-five years of age and of secular status. The Mayor shall be elected for a term of four years by a majority of the people voting, and may be reelected.

Article 192.

Deputies to the National Assembly shall serve for a term of five years, and may be reelected.

Article 230.

The presidential term is six years. The President of the Republic may be reelected.

Article 2.

The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela shall be printed in its entirety, and the Amendment shall be published after this Constitution and the reference number and date of this Amendment shall be noted at the foot of Articles 160, 162, 174, 192 and 230 of the constitutional text.

Sanctioned by the National Assembly on the fourteenth day of January of the year two thousand nine and approved by the sovereign people of the Bolivarian Republic of Venezuela, by means of constitutional referendum, on the fifteenth day of February of the year two thousand nine. Year 198th of the Independence and 149th of the Federation.

PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY
CILIA FLORES

FIRST VICE-PRESIDENT
SAÚL ORTEGA CAMPOS

SECOND VICE-PRESIDENT

JOSÉ ALBORNOZ URBANO

THE CONSTITUENTS:**AMAZONAS**

MONTENEGRO NÚÑEZ, JUAN ANTONIO

PALAU PATIÑO, DIÓGENES EDGILDO

YGARZA, JULIO HARON

ANZOÁTEGUI

TACHINAMO GARCÍA, HENRY JOSÉ

ARÓNICA CARREYO, EDUARDO

RODRÍGUEZ RAUSEO, CARMEN ANTONIA

SÁNCHEZ CHACÓN, LUIS EDUARDO

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, HUGO RAFAEL

RODRÍGUEZ GAMBOA, ÁNGEL LUIS

HERRERA SILVA, EARLE JOSÉ

RODRÍGUEZ LONGART, VICENTE JOSÉ

APURE

EL GATRIFF, MIZHER FAHD

ESPINOZA LEÓN, CARLOS ROQUE

GONZÁLEZ, WILFREDO

DELGADO CAMEJO, RAFAEL ANTONIO

JIMÉNEZ, CRISTÓBAL LEOBARDO

ARAGUA

GÓMEZ ABREU, EDIS EMILIO

QUERALES RODRÍGUEZ, WILLIAM ANTONIO

NIEVES COLMENARES, ELEAZAR

FIGUERA GONZÁLEZ, OSCAR RAMÓN

AMOROSO, ELVIS EDUARDO

GARCÍA, ISMAEL CONCEPCIÓN

BASTIDAS MARTÍNEZ, PEDRO ANTONIO

DAZA ROY, ALBERTO

ESCARRÁ MALAVÉ, CARLOS

BARINAS

PÉREZ BETANCOURT, WILMER RAFAEL

GUALDRÓN, GONZALO JOSÉ

GRATEROL CAMACHO, JESÚS ERNESTO

PEÑA GONZÁLEZ, GEOVANNI JOSÉ
AZUAJE CORDERO, WILMER JOSÉ

BOLÍVAR

GIL BARRIOS, RAFAEL DARÍO
MARCANO CASTILLO, ÁNGEL BAUTISTA
CABELLO ROJAS, DILUVINA DE JESÚS
RÍOS BOLÍVAR, RAFAEL ÁNGEL
EL ZABAYAR, SAMARA ADEL
SOLÍS SORRENTINO, BERKIS CLARET
MOLINA, JUAN JOSÉ
MEDINA CARRASCO, PASTORA COROMOTO

CARABOBO

MONTILLA ORTEGA, CARMEN SARITA
ISRAEL ISRAEL, ANTONIO SOTILLO INFANTE
GÓMEZ, DENIS OSMAR ENRIQUE
GARCÍA PRADO, ORLANDO FEDOR
ÁLVAREZ BRACAMONTE, RAÚL JESÚS
AMELIACH ORTA, FRANCISCO JOSÉ
GÓMEZ LÓPEZ, DOUGLAS EDUARDO
VÁSQUEZ GUZMÁN, FERNANDO ANTONIO
BRIZUELA, LAURA MARÍA

COJEDES

PIRELA SÁNCHEZ, HAYDEN OVANDO
PÉREZ, JUAN BAUTISTA
SALAZAR, ASDRÚBAL COROMOTO
MILANO RODRÍGUEZ, JHONNY OWE

DELTA AMACURO

MARCANO RODRÍGUEZ, OMAR
TAMARONIS LOA DEL VALLE
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, HENRY JOSÉ
GONZÁLEZ CAMEJO, ENRIQUE JOSÉ

CAPITAL DISTRICT

SANTOS AMARAL, DESIRÉE
GARCÍA BRAVO, REINALDO ALFREDO
MEDINA ROJAS, CARLOS ALFREDO
DUGARTE PADRÓN, JUAN CARLOS
BLANCO, LUIS BELTRÁN
VIVAS VELAZCO, DARÍO
SILVA MAGALLANES, TIRSO DEL VALLE
LANDER MORENO, PEDRO TOMÁS
RÍOS, FLOR MARÍA

FALCÓN

MÉNDEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS ELOY
MANAURE REYES, ALEYDYS ARGELIA
DAAL, ULISES RAMÓN
BALDAYO LÓPEZ, HENRY RAFAEL
EIZAGA RUJANO, MARIS NOHEMÍ
CASTELLAR PADILLA, ALBERTO EFRAÍN

GUÁRICO

CONTRERAS DÍAZ, EUSTOQUIO
MARÍN LAYA, JUAN JOSÉ
OROPEZA SUÁREZ, MARÍA ANTONIA
ROJAS ROJAS, MIGUEL RAFAEL

LARA

ESCALONA COLINA, JOSÉ RAFAEL
GONZÁLEZ PASTOR, PAUCIDES
LUGO RODRÍGUEZ, IVÁN JOSÉ
PERAZA ROJAS, DENIS ALBERTO
CONTRERAS HERNÁNDEZ, LUIS ANTONIO
URDANETA PEREIRA, BRICCIO JOSÉ
MORA, JOSÉ DAVID
FERRER, GERMÁN DARÍO
CALZADILLA PERAZA, JOSÉ SIMÓN

MERIDA

BRICEÑO MÉNDEZ, MANUEL JOSÉ
CAMACHO ARAUJO, OBDULIO JOSÉ
ÁVILA ÁVILA, MARÍA ALEJANDRA
RAMÍREZ ROSALES, JOSÉ OSCAR
CARMONA RODRÍGUEZ, OSMAR
IGLESIAS PINO, WILMER ARQUÍMEDES

MIRANDA

RUÍZ ESPINOZA, MODESTO ANTONIO
LEONETT CANALES, FÉLIX
MONTIEL MEDINA, AUGUSTO VLADIMIR
BARRERA MORALES, MAIGUALIDA ESTHER
MATUTE GUAYAMO, ROMELIA CELESTINA
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, TULIO AMADO
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JESÚS ALBERTO
CABELLO PALMA, GIRARDOT JOSÉ
FIGUEROA CHACÍN, SANTANA
DOMÍNGUEZ VALDERRAMA, JESÚS ENRIQUE
PÉREZ MARCANO, MARELIS JOSEFINA

NUEVA ESPARTA

MILLÁN MARÍN, JUAN JOSÉ
GARCÍA HERNÁNDEZ, JUAN SALVADOR
MORALES, AURORA JOSEFINA
BRAVO QUEVEDO, IROSHIMA JENNIFER
ECHEZURÍA RODRÍGUEZ, CARLOS FRANCISCO
MACHÍN FERRER, HAYDÉE JOSEFINA
CAMARGO LAGONELL, LUIS ALFREDO
ÁLVAREZ ALFONSO, CARMEN TRINIDAD

MONAGAS

VILLALBA SÁNCHEZ, MANUEL ENRIQUE
DÍAZ SALAZAR, LUIS ÁNGEL

HERNÁNDEZ CEDEÑO, RÉGULO FELIPE
PACHECO OSORIO, MARÍA DEL ROSARIO

PORTUGUESA

HERNÁNDEZ PARRA, PORFIRIO DE JESÚS
MURGA RIVAS, ALFREDO
RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ ERNESTO
LARA BARRIOS, ZARK ALFREDO
TORREALBA OJEDA, FRANCISCO ALEJANDRO
GUTIÉRREZ BRICEÑO, RICARDO ANTONIO

SUCRE

JIMÉNEZ ÁLVAREZ, BERNARDO JOSÉ
GARCÍA FONT, HERMES GREGORIO
VALLENILLA MENDOZA, YARITZA MARGARIT
RODRÍGUEZ, JOSÉ DEL CARMEN
REGNAULT ROJAS, JOSÉ RAMÓN
MARCANO GONZÁLEZ, ERASMO ARISTALCO

TÁCHIRA

GARCÍA JARPA, JULIO FERNANDO
MOGOLLÓN DE GUERRERO, SANTA XIOMARA
TASCÓN GUTIÉRREZ, LUIS
SANGUINO CÁRDENAS, JOSÉ RICARDO
VARELA RANGEL, MARÍA IRIS
LUCENA GONZÁLEZ, EDGAR DE JESÚS
PACHECO ALVIÁREZ, HERNÁN

TRUJILLO

MORENO VILORIA, JULIO BERNARDO
PÉREZ CRISTANCHO, OSCAR FRANCISCO
MENDOZA, JUAN JOSÉ
LEAL BRICEÑO, ORÉSTEDES JESÚS
GIL RODRÍGUEZ, MALAQUIAS

YARACUY

GAMARRA MANZABEL, CARLOS ALBERTO

CAPELLA, MATEO RICARDO

ÁLVAREZ, BRAULIO JOSÉ

SÁEZ BORDONES, CARMEN LISETH

SÁNCHEZ LÓPEZ, TOMÁS RAFAEL

VARGAS

ESCALONA PRADO, SIMÓN ENRIQUE

VERA ROJAS, OSWALDO EMILIO

D' AMELIO CARDIET, TANIA

DE FREITAS RODRÍGUEZ, JOSÉ GUIDO

ZULIA

ORTEGA RÍOS, CALIXTO ANTONIO

RÍOS BECERRA, EDIS ALFONSO

BRICEÑO DE QUEIPO, MARÍA DE LA PAZ

CEDEÑO MÁRQUEZ, JENNY ELINA

ISEA BOHÓRQUEZ, MARIO RICARDO

CABELLO LISANDRO, JOSÉ

SAAB SAAB, IMAD

OSORIO LÓPEZ, OMAR JESÚS

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LIBES DE JESÚS

QUINTERO VALENCIA, ROBERTO ANTONIO

SOUKT RINCÓN, RAFIC

PEÑA PINEDA, ELISEO RAMÓN

MONTIEL, ARCADIO JOSÉ

PALOMARES VERDE, ENDER DE JESÚS

LÓPEZ ALMAO, FRANCISCO

INDIGENOUS REPRESENTATION

POCATERRA DE OBERTO, NOELÍ

PÉREZ RAMOS, ARGELIO

POYO CASCANTE, JOSÉ AMADOR

The Secretary

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretary

VÍCTOR CLARK BOSCAÍN

Assistant Secretary

Plaza Pérez Bonalde de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Libertador, in Caracas, on the nineteenth day of the month of February of two thousand nine. 198th anniversary of the Independence, 149th anniversary of the Federation and 11th anniversary of the Bolivarian Revolution.

Execute, (L.S.)

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Endorsed

The Executive Vice President,
RAMÓN ALONZO CARRIZÁLEZ RENGIFO

The Minister of the People's Power of the Office of the Presidency,
LUIS RAMÓN REYES REYES

The Minister of People's Power for Internal Relations and Justice,
TARECK EL AISSAMI

The Minister of People's Power for Foreign Affairs,
NICOLÁS MADURO MOROS

The Minister of the People's Power for Economy and Finance,
ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

The Minister of the People's Power for Defense,
GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO

The Minister of the People's Power for Light Industries and Commerce,
WILLIAN ANTONIO CONTRERAS

The Minister of the People's Power for Basic Industries and Mining,
RODOLFO EDUARDO SANZ

The Minister of People's Power for Tourism,
LGA CECILIA AZUAJE

The Minister of People's Power for Agriculture and Lands,
ELÍAS JAUA MILANO

The Minister of the People's Power for Higher Education,
LUIS ACUÑA CEDEÑO

The Minister of the People's Power for Education,
HÉCTOR NAVARRO

The Minister of the People's Power for Health,
JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS

The Minister of the People's Power for Labor and Social Security,
ROBERTO MANUEL HERNÁNDEZ

The Minister of the People's Power for Infrastructure,
DIOSDADO CABELLO RONDÓN

The Minister of the People's Power for Energy and Petroleum,
RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

The Minister of People's Power for the Environment,
YUVIRÍ ORTEGA LOVERA

The Minister of People's Power for Planning and Development,
HAIMAN EL TROUDI

The Minister of People's Power for Science and Technology,
NURIS ORIHUELA GUEVARA

The Minister of People's Power for Communication and Information,
JESSE CHACON ESCAMILLO

The Minister of People's Power for the Communal Economy,
PEDRO MOREJÓN CARRILLO

The Minister of the People's Power for Food,
FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN

The Minister of People's Power for Culture,
HÉCTOR ENRIQUE SOTO CASTELLANOS

The People's Ministry of Housing and Habitat,
FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS

The Minister of the People's Power for Social Participation and Protection,
ÉRIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

The Minister of the People's Power for Sports,
VICTORIA MERCEDES MATA GARCÍA

The Minister of the People's Power for Telecommunications and Informatics,
SOCORRO ELIZABETH HERNÁNDEZ

The Minister of People's Power for Indigenous Peoples,
NICIA MALDONADO MALDONADO

The Minister of State for Women's Affairs,
MARÍA LEÓN

TABLE OF CONTENTS

STATEMENT OF REASONS OF THE CONSTITUTION
OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA _____ 265

TITLE I
FUNDAMENTAL PRINCIPLES _____ 265

TITLE II
OF THE GEOGRAPHIC SPACE AND POLITICAL DIVISION _____ 268

 Chapter I
 Of the Territory and other Geographic Spaces _____ 268

 Chapter II _____ 269

 On Political Division _____ 269

TITLE III

On Human Rights and Guarantees, and on Duties _____ 270

 Chapter I

 General Provisions _____ 270

 Chapter II

 On Nationality and Citizenship _____ 273

 Section One: On Nationality _____ 273

 Section Two: On Citizenship _____ 274

 Chapter III

 On Civil Rights _____ 275

 Chapter IV

 On Political Rights and the Popular Referendum _____ 277

 Section One: On Political Rights _____ 277

 Section Two: On the Popular Referendum _____ 280

 Chapter V

 On Social Rights and Families _____ 280

 Chapter VI

 On Cultural and Educational Rights _____ 282

 Chapter VII

 Of Economic Rights _____ 287

 Chapter VIII

 Of the Rights of Indigenous Peoples _____ 287

Chapter IX	
Of Environmental Rights _____	291
Chapter X	
Of Duties _____	293
 TITLE IV	
OF THE PUBLIC POWER _____	295
Chapter I	
Of the Fundamental Provisions _____	295
Section One: General Provisions _____	295
Section Two: On Public Administration _____	296
Section Three: On Public Service _____	297
Section Four: On Public Interest Contracts _____	300
Section Five: International Relations _____	300
Chapter II	
Of the Competence of the National Public Power _____	301
Chapter III	
Of the State Public Power _____	302
Chapter IV	
Of the Municipal Public Power _____	303
Chapter V	
Of the Federal Government Council _____	305
 TITLE V	
OF THE ORGANIZATION OF NATIONAL PUBLIC POWER _____	305
Chapter I	
Of the National Legislative Power _____	305
Section One: General Provisions _____	305
Chapter II	
Of the National Executive Power _____	310
Chapter III	
Of the Judiciary and the Justice System _____	314
Chapter IV	
Of Citizen Power _____	317
Chapter V	
Of the Electoral Power _____	319
 TITLE VI	
OF THE SOCIOECONOMIC SYSTEM _____	322

Chapter I	
Of the Socioeconomic Regime and the Function of the State in the Economy _____	322
Chapter II	
Of the Fiscal and Monetary Regime _____	323
Section One: The Budgetary Regime _____	323
Section Two: The Tax System _____	324
Section Three: Of the National Monetary System _____	325
Section Four: On Macroeconomic Coordination _____	326
 TITLE VII	
OF NATIONAL SECURITY _____	327
Chapter I	
General Provisions _____	327
Chapter II	
Of the Principles of National Security _____	328
Chapter III	
Of the National Armed Forces _____	329
Chapter IV	
Of the Citizen Security Agencies _____	330
 TITLE VIII	
OF THE PROTECTION OF THIS CONSTITUTION _____	330
Chapter I	
Of the Guarantee of this Constitution _____	330
Chapter II	
On States of Exception _____	340
 TITLE IX	
ON CONSTITUTIONAL AMENDMENT _____	341
 PREAMBLE _____	347
 CONSTITUTION _____	347
 TITLE I	
FUNDAMENTAL PRINCIPLES _____	347
 TITLE II	
GEOGRAPHICAL SPACES AND POLITICAL DIVISION _____	349

Chapter I	
Territory and Other Geographical Spaces _____	349
Chapter II	
Political Division _____	352
 TITLE III	
DUTIES AND HUMAN RIGHTS AND GUARANTEES _____	353
Chapter I	
General Provisions _____	353
Chapter II	
Nationality and Citizenship _____	357
Section One: Nationality _____	357
Section Two: Citizenship _____	359
Chapter III	
Civil Rights _____	360
Chapter IV	
Political Rights and Popular Referenda _____	366
Section One: Political Rights _____	366
Section Two: Popular Referenda _____	368
Chapter V	
Social and Family Rights _____	371
Chapter VI	
Cultural and Educational Rights _____	378
Chapter VII	
Economic Rights _____	383
Chapter VIII	
Rights of Indigenous Peoples _____	385
Chapter IX	
Environmental Rights _____	387
Chapter X	
Duties _____	388
 TITLE IV	
GOVERNMENT _____	389
Chapter I	
Fundamental Provisions _____	389
Section One: General Provisions _____	389
Section Two: Public Administration _____	390
Section Three: Public Functions _____	391

Section Four: Contracts in the Public Interest	392
Section Five: International Relations	393
Chapter II	
Spheres of Competence of National Government	394
Chapter III	
State Government	397
Chapter IV	
Municipal Government	402
Chapter V	
Federal Council of Government	409
 TITLE V	
ORGANIZATION OF NATIONAL GOVERNMENT	410
Chapter I	
National Legislative Branch	410
Section One: General Provisions	410
Section Two: Organization of the National Assembly	413
Section Three: Deputies of the National Assembly	414
Section Four: Passage of Laws	416
Section Five: Procedures	420
Chapter II	
National Executive Branch	422
Section One: President of the Republic	422
Section Two: The powers of the President of the Republic	424
Section Three: Executive Vice President	426
Section Four: Ministers and the Cabinet	428
Section Five: Attorney General of the Republic	429
Section Six: Council of State	430
Chapter III	
Judicial Branch and Justice System	430
Section One: General Provisions	430
Section Two: Supreme Tribunal of Justice	433
Section Three: Governance and Administration of the Judicial Branch	436
Chapter IV	
Citizen Branch	438
Section One: General Provisions	438
Section Two: Ombudsperson's Office	440
Section Three: Office of Public Prosecutions	442
Section Four: Office of the Comptroller General of the Republic	444

Chapter V	
Electoral Branch _____	445
 TITLE VI	
SOCIO-ECONOMIC SYSTEM _____	448
Chapter I	
Socio-economic Order and the Function of the State in the Economy _____	448
Chapter II	
Tax and Monetary System _____	451
Section One: Budget System _____	451
Section Two: Taxation System _____	454
Section Three: National Monetary System _____	454
Section Four: Macroeconomic Coordination _____	456
 TITLE VII	
NATIONAL SECURITY _____	457
Chapter I	
General Provisions _____	457
Chapter II	
Principles of National Security _____	458
Chapter III	
The National Armed Force _____	459
Chapter IV	
Civilian Safety Bodies _____	460
 TITLE VIII	
PROTECTION OF THIS CONSTITUTION _____	460
Chapter I	
Guarantee of this Constitution _____	460
Chapter II	
States of Exception _____	462
 TITLE IX	
CONSTITUTIONAL REFORMS _____	464
Chapter I	
Amendments _____	464
Chapter II	
Constitutional Reform _____	464

Chapter III	
National Constituent Assembly	466
SOLE DEROGATION PROVISION	467
TRANSITIONAL PROVISIONS	467
FINAL PROVISION	475
AMENDMENT N°1 OF THE CONSTITUTION OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA	481

Se imprimió en el
Tribunal Supremo de Justicia
de la República Bolivariana de Venezuela
en junio de 2025
en Caracas, Venezuela